Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador
Departamento Antropología, Historia y Humanidades
Convocatoria 2018-2020

Tesis para obtener el título de Maestría de Investigación en Historia

EL PARO DEL PUEBLO, OCTUBRE DE 1982

Ogaz Oviedo Martín Felipe

Asesora: Torres Proaño Alicia Del Carmen

Lectores: Ortiz Crespo Santiago Eugenio, Ibarra Crespo Hernan Eduardo

Quito, mayo de 2025

Dedicatoria

Para Toa y para todos los que pueden encontrar en el pasado las razones para continuar luchando.

A la memoria de:

Bélgica Torres

René Córdova Romo

Eusebio Obando García

Humberto Vera Navarrete

Luis Altamirano Vaca

Marlon Castillo Goya

Luciano Córdova Guerra

Quienes perdieron la vida en diferentes circunstancias en el marco de la movilización social cuyo punto más alto fue el Paro Nacional del Pueblo del 21 de octubre de 1982.

Isabel Robalino Bolle y Emilio Velasco históricos dirigentes sindicales a quienes entreviste para enriquecer este preciso trabajo y poder también conservar sus voces, fallecieron antes de que este pudiera estar terminado. Va también en su memoria.

Y en la memoria de mi hermano Xavier y de mi gran amigo Benito, dos seres muy queridos y muy cercanos que fallecieron durante el tiempo en que realizaba la maestría que dio como resultado este trabajo que ahora tienen en sus manos.

Epígrafe

Octubre de 1982 es el ingreso de las clases populares en la escena política en medio de su acción directa.

—Hernán Ibarra.

Días después los viejitos de la Plaza de la Independencia comparaban lo acaecido aquel jueves con la guerra de los cuatro días, cuyo 50 aniversario habían apenas celebrado y con el 28 de mayo del 44, la famosa gloriosa. Las pedradas, las llantas quemadas, las ráfagas de metralla, los carros quemados, los tres, cuatro u ocho muertos (nunca se sabría con precisión), los camiones militares, los presos; pero sobre todo la furia de la gente contra “este gobierno de mierda de la Democracia Cristiana”, fueron escenas comunes hasta el anochecer del día. Los manifestantes llegaron más de una vez a los pies del palacio y los gritos e insultos llenaron de miedo y espanto a quienes permanecieron en él. Alguien recuerda aún los gritos de un asesor que anunciaba a gritos la proximidad de la toma del palacio por las fuerzas del FUT, cuando una piedra dio de lleno en la ventana de su oficina.

—Manuel Chiriboga.

Índice de contenidos

Resumen	9
Agradecimientos	11
Introducción.....	12
Capítulo 1. Literatura sobre el Paro Nacional del Pueblo: un estado del arte.....	16
1.1. Artículos académicos	17
1.2. Las tesis	22
1.3. Literatura militante	24
1.4. Consideraciones finales.....	31
Capítulo 2. Los conceptos, los debates y las teorías	33
2.1. Conceptos básicos	33
2.2. Conceptos generales.....	38
2.2.1. Acción colectiva.....	39
2.2.2. Poder.....	40
2.3. Huelga	41
2.4. Autonomía obrera y clasismo.....	43
2.5. Entre la insurrección obrera y la intermediación del conflicto	45
2.6. Estado.....	48
2.7. Identidad de los obreros	50
2.8. Gestión de la política.....	51
Capítulo 3. Contextos.....	54
3.1. Contexto internacional	54
3.2. La crisis de la deuda latinoamericana y la subida de los intereses por deuda.....	59
3.3. Contexto económico local.....	61
3.4. Modelo de industrialización	65
3.5. Deuda externa y crisis	66
3.6. Sector agropecuario y sector financiero	68
3.7. Contexto político nacional	69
Capítulo 4. Actores sociales del Paro.....	82
4.1. Las organizaciones que conformaban el FUT al momento del Paro.....	82
4.1.1. Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC).....	83

4.2.1. La Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE)	88
4.3.1. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) ...	92
4.2. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT)	97
4.3. Las huelgas nacionales unitarias	102
4.4. La <i>politización</i> de los trabajadores	106
4.5. Aliados y otros actores del conflicto	110
Capítulo 5. Una mirada más cercana a los trabajadores que hicieron el Paro	117
5.1. La data	117
5.2. Testimonios	124
5.2.1. César	125
5.2.2. Washington	132
Capítulo 6. 1982 y las plataformas de lucha	139
6.1. Enero y febrero	139
6.2. Marzo	141
6.3. Abril	144
6.4. Mayo	145
6.5. La plataforma de lucha de mayo	148
6.6. Junio	150
6.7. Julio	151
6.8. Agosto	152
6.9. Septiembre	155
6.9.1. La plataforma de lucha de 9 puntos	156
6.9.2. Y todavía no acaba septiembre	159
6.9.3. Antecedentes y pronunciamientos frente a la Quinta Huelga Unitaria de septiembre	162
Capítulo 7. El Estallido	167
7.1. Quinta Huelga Nacional Unitaria, 22 y 23 de septiembre 1982	167
7.2. El paro de los transportistas	185
7.3. Finales de septiembre de 1982	189
7.4. Octubre Negro	190
7.5. Las medidas dramáticas	194
7.6. La semana del Paro	212
7.7. Lunes 18 de octubre	220

7.8. El incidente en el Congreso.....	225
7.9. Martes 19 de octubre	227
7.10. Miércoles 20 de octubre, un día antes del Paro.....	232
7.11. 21 de octubre de 1982, Paro Nacional del Pueblo.....	243
7.12. Reflexiones y evaluaciones sobre el Paro	257
7.12.1. Muertos y heridos.....	260
7.12.2. El repliegue	264
Conclusiones	266
Así se apagó el estallido	267
¿Por qué el FUT no realizó la huelga indefinida?	276
El fantasma del golpe	277
Reflexiones finales	279
Referencias.....	288

Lista de ilustraciones

Tablas

Tabla 3.1. Ecuador: Precios de las exportaciones de petróleo crudo expresado en dólares americanos por barril.....	59
Tabla 3.2. Ecuador: PIB per cápita 1980-1983 en dólares americanos.....	63
Tabla 3.3. Ecuador: Tasas de crecimiento de indicadores per cápita 1980-1983	64
Tabla 3.4. Ecuador: Tasa promedio anual de inflación.....	64
Tabla 3.5. Ecuador: Salario mínimo vital (Promedio mensual en sucres)	64
Tabla 3.6. Tasa de sindicalización – Industria Manufacturera. Provincias Guayas, Pichincha y Azuay 1980	121

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesis

Esta tesis se registra en el repositorio institucional en cumplimiento del artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior que regula la entrega de los trabajos de titulación en formato digital para integrarse al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y del artículo 166 del Reglamento General Interno de Docencia de la Sede, que reserva para FLACSO Ecuador el derecho exclusivo de publicación sobre los trabajos de titulación durante un lapso de dos (2) años posteriores a su aprobación.

Quito, mayo de 2025.

Resumen

El Paro Nacional del Pueblo, llevado a cabo el 21 de octubre de 1982, constituye el clímax de un ciclo de agitación y explosión social que se extendió por poco más de un mes en Ecuador. Este ciclo se manifestó a través de una multiplicidad de acciones de protesta y formas innovadoras de democracia directa, mediante las cuales diversos sectores de la sociedad ecuatoriana respondieron a la profunda crisis económica provocada, entre otros factores, por la modificación unilateral de las tasas de interés de la deuda externa latinoamericana, ejecutada por entidades financieras privadas. En ese contexto, el gobierno de Osvaldo Hurtado, tras la controvertida muerte del presidente Jaime Roldós, inició la implementación de políticas neoliberales asociadas al ajuste estructural promovido por el Fondo Monetario Internacional. Ante esta coyuntura, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que actuaba como instancia de coordinación de las principales centrales sindicales del país, articuló una respuesta colectiva de amplio alcance, que integró a diversos movimientos sociales y organizaciones populares.

El presente trabajo aborda el punto culminante de la acción colectiva y la movilización social protagonizada por el movimiento sindical ecuatoriano, resultado de un proceso acumulación de fuerza organizativas y legitimidad social, en un contexto caracterizado por intensas disputas políticas e institucionales. El período de estudio se enmarca en las oscilaciones dictatoriales de la década de 1970 y los inicios de la transición democrática en la década de 1980.

La investigación se sustentó en una metodología basada en una extensa revisión hemerográfica y bibliográfica, complementada con entrevistas a profundidad realizadas a dirigentes sindicales, trabajadores protagonistas del paro, funcionarios públicos y académicos con vínculos analíticos o experienciales respecto al hecho. El objetivo principal fue abordar un conjunto de interrogantes emergentes en el transcurso del proceso investigativo: ¿En qué consistió el Paro Nacional del Pueblo? ¿Cuál fue su impacto real? ¿Por qué no derivó en la anunciada huelga indefinida capaz de revertir las medidas económicas impuestas? En otras palabras, ¿por qué una movilización de tal magnitud y con amplio respaldo popular no logró modificar las políticas contra las que se alzó? Y finalmente ¿Estuvo el movimiento sindical ecuatoriano a punto de derrocar al gobierno de Hurtado?

Una vez superadas los apartados sobre el estado del arte, la delimitación del marco teórico, la revisión de los más significativos testimonios y el análisis de los distintos contextos

socioeconómicos y políticos que explican el surgimiento de esta acción colectiva, este estudio adopta una estrategia narrativa cronológica. Este enfoque busca recrear la intensidad, complejidad y emocionalidad del acontecimiento histórico, permitiendo al lector aproximarse a las vivencias de los actores sociales, y a la vez comprender las razones de su valoración, angustia y frustración frente a los resultados del proceso de lucha.

Agradecimientos

Debo agradecer primero al caos y a la coincidencia que han permitido sea yo quien haga la primera aproximación desde la academia sobre este hecho histórico y sobre los asombrosos sindicatos, comités de empresa, asambleas populares, asambleas de huelga, huelgas solidarias, comités ampliados de huelga y tantas otras formas de organización popular que sostuvieron el largo estallido social de 1982.

Este trabajo —literalmente— no habría sido posible sin el tipo de acompañamiento y comprensión que me dio mi tutora Alicia Torres, a quien debo agradecer inmensamente.

Sobre todo, por la calidez, dedicación y paciencia con la que acompañó este proceso. A ella también le debo haberme vinculado al maestro Hernán Ibarra. Ha sido un honor haber sido guiado con tanto rigor crítico por una de las personas que más ha estudiado a los trabajadores y a los sectores populares de este país. Esta carrera no hubiera podido ser completada sin el impulso y el apoyo que me dio Isabel Ramos precisamente para iniciarla.

También es preciso agradecer a mi amigo Nico Barese, tanto como a Ana María Goetschel y Eduardo Kingman por la motivación y preocupación permanente en favor de que termine este trabajo y la carrera.

Es preciso también valorar el aporte que dieron a este trabajo los esclarecedores testimonios de Washington Espín y Carlos López, dos de los trabajadores que hicieron el Paro del Pueblo y que siguen hoy dedicados a fortalecer el movimiento obrero.

Agradezco en especial a mi madre Sara Oviedo y a mi compañera Carmen Bolívar quienes me dieron la oportunidad material de dedicarme durante varios meses por entero a este trabajo.

También a Toa y Bruna, quienes también sufrieron con la gran cantidad de tiempo que tuve que dedicarle. Gracias también al impulso y apoyo de mi Padre, de mi hermano Sebastián y de Elena Buitrón de igual manera a mi hermana Carolina y a mi sobrina Micaela.

Introducción

Cuando la perspectiva histórica permita observar —al margen de apasionamientos contingentes y de intereses políticos— la evolución del Ecuador en la década de los 80, con total seguridad los eventos de octubre y noviembre de 1982 tendrán un lugar destacado.

—*Revista Nueva* 1982

Esta tesis, enteramente motivada por la curiosidad, es decir, por el deseo de conocer y entender un proceso histórico concreto, tiene como objetivo responder a dos preguntas. Una surgida a partir de la otra: ¿en qué consistió el Paro Nacional del Pueblo de octubre de 1982? o dicho de otra manera ¿qué fue el Paro del Pueblo de 1982? Es así que una vez que se avanzaba en la fascinante revisión de las fuentes hemerográficas que —cabe decirlo— son el núcleo de esta investigación, surgió otra pregunta ¿por qué el Paro del Pueblo no se convirtió en —la tan anunciada— huelga indefinida capaz de revertir las medidas económicas que la provocaron? O dicho en otras palabras ¿por qué una huelga general con tanto apoyo popular no logró su objetivo de revertir las medidas económicas? Incluso, habiendo desatado tanta movilización social ¿por qué los movilizados no fueron más allá?

Paro Nacional del Pueblo, ese es el nombre completo que se le dio en la Cuarta Convención Nacional del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) a la Sexta Huelga Nacional Unitaria realizada el jueves 21 de octubre de 1982 que se convirtió “en el mayor acto de protesta popular registrado en los últimos treinta o cuarenta años” según diría a solo unos días del evento Manuel Chiriboga (1982, 32). Y que, según todas las fuentes consultadas logró efectivamente paralizar el país. El Paro del Pueblo, como comúnmente se lo llamaba, fue el clímax de un ciclo de estallido social que se extendió durante más de un mes en buena parte del territorio ecuatoriano y que —pese a su magnitud— no había sido estudiado desde una mirada académica.

Es importante decir que resulta lógico que este hecho histórico, estudiado aquí como un proceso de estallido social, haya sido posteriormente opacado y olvidado, entre otras razones, dada la atención que ha merecido la portentosa acción colectiva del movimiento indígena ecuatoriano que superó cualquier expectativa de movilización social. Llegando a ser el actor social fundamental para la caída de varios gobiernos y por tanto el movimiento social que marco el devenir político desde la década de 1990 en adelante. En este marco, debo sustentar la necesidad de incorporar dentro de la historia de las luchas sociales de esta sociedad, a la

constante acción colectiva de los sectores populares y especialmente de los obreros industriales y demás trabajadores durante la década de 1980. Década en la que empezó y se consolidó un *ajuste estructural* de la economía, motivado por la cruel revitalización del liberalismo económico. Este movimiento social, repleto de contradicciones e inconsistencias, fue un eje fundamental de resistencia social ante el naciente modelo neoliberal y merece ser recordado así, al menos, durante las décadas de 1970 y 1980. Merece por tanto ser incorporado en la memoria de la lucha social de la sociedad ecuatoriana.

Desde una aproximación y un método que intenta acercarse a la historia centrándose en las formas de democracia y organización que espontáneamente fueron creando los sectores populares para sostener este largo proceso de movilización, pensando —además— en que esta toma de posición puede ser una forma permanente para aproximarse a la acción colectiva, han sido tres las áreas que se ha querido privilegiar en este estudio. Por un lado, la explosión social como tal, por otro, su contexto, tanto político como económico y finalmente la dinámica social dentro y fuera de las organizaciones que se aglutinaron en torno al movimiento sindical. Entendiendo a estas organizaciones como las articuladoras de la movilización, las entidades que lograron desatar la explosión social. Es importante tener en cuenta que se consideran aquí como un mismo proceso de movilización social a aquella prolongada, consistente e ininterrumpida acción colectiva de masas que condujo al estallido social, es decir, a lo que se tradicionalmente se ha denominado como la Quinta y Sexta huelgas nacionales de septiembre y octubre de 1982.

Las fuentes principales de esta investigación han sido hemerográficas, mismas que han sido complementadas con toda clase de fuentes bibliográficas y un grupo de entrevistas a informantes claves en tres categorías. Primero un grupo de trabajadores miembros del movimiento sindical que participaron en el paro. Seguidos de los dos máximos dirigentes de dicho movimiento, quienes ejercían la presidencia de su central al momento del paro, uno de ellos además era el presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). Por último, se entrevistó a académicos que produjeron la información más relevante sobre el Paro, durante la década de 1980.

Se analizaron para este trabajo todos los ejemplares de 1981 y 1982 de las Revistas Vistazo y Nueva, así como los números correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 1982 del diario El Comercio. Así mismo, se realizó una minuciosa revisión de los textos —académicos y provenientes de la militancia sindical— que hacen referencia al Paro Nacional del Pueblo y al

estallido social de finales de 1982. Cabe destacar que la Revista Ecuador Debate fue un insumo fundamental para la investigación desarrollada.

Un sujeto social particular concitó mi atención por sus constantes menciones y evocaciones, durante el desarrollo de la investigación, los obreros industriales, quienes para la época que se estudia, eran un grupo de trabajadores definitivamente privilegiados, en contraste con una inmensa mayoría de personas que sobrevivían a través del subempleo o el empleo informal. Los obreros de la incipiente industria ecuatoriana contaban con todas las protecciones de la ley, además de una serie de conquistas laborales que se reflejaban en bonos, descuentos, vacaciones y otras formas de reconocimiento. A pesar de —o gracias a— su privilegio, los obreros industriales fueron quienes, en un despliegue impresionante de organización y acción política, lograron sostener y direccionar —temporalmente— un movimiento sindical que incorporando sin cesar a otros sectores sociales, “logró encabezar a protesta popular y pasar de representar a los sectores asalariados a la representación del pueblo” (Ibarra 1983, 80).

Para entrar a la Maestría de Investigación en Historia, sin saber lo rigurosa que era esta disciplina y lo estrictos que eran sus maestros, propuse redundar en el estudio de las dos más famosas rebeliones populares del siglo XX. Nunca imaginé que iba a ser yo quien acabe cumpliendo la *profecía* que apareció en el número 92 de la desaparecida Revista Nueva misma que da inicio a este apartado.

La coincidencia hizo que me empiece a interesar en los temas obreros de la actualidad, pues la organización en la que militaba en ese momento acompañaba a una huelga —que resultó ser la primera huelga que lograba triunfar en los últimos 10 años en Ecuador— y eso hacía que mi curiosidad sobre el sindicalismo y el movimiento obrero aumentasen día a día. Fue gracias a la influencia y sobre todo a las respuestas de mi compañera de aulas, Nataly Maya, que finalmente pude tener un tema de tesis tan fascinante y —debo decirlo— complicado de abordar.

Debo confesar también que me quedé impregnado —como se verá a lo largo de este trabajo— con la frustración que recogía de cada una de las entrevistas que desarrollé para este trabajo, presente también en la mayoría de las lecturas sobre esta temática, me refiero a la evocación de una *huelga indefinida* capaz de transformar nuestra realidad, un paso hacia la revolución que nunca se realizó. Así como, la constante mención al Paro Nacional del Pueblo siempre asociada con la mencionada frustración de lo que podía haber sido, sobre lo que podía haberse convertido. Esto fue lo que me motivó a intentar responder algunas preguntas que aquí

enuncio ¿por qué nunca concretó? ¿por qué se detuvo? ¿en qué momento se detuvo? Una vez que pude comprender la magnitud del estallido social, ya no pude dejar de buscar las razones por las cuales no se avanzó más allá y es así que, motivada por la incesante curiosidad, que tomó su empuje esta tesis.

Asumo aquí, desde mis humildes posibilidades, el hermoso reto que algún día nos propuso Walter Benjamin, su invitación a “cepillar a contrapelo el pelaje demasiado brillante de la historia” (Benjamin 1991, 343). Así, uniendo fragmentos, cociendo retazos, encontrando indicios, escarbando, desenterrando, en fin, haciendo el trabajo de un trapero que logra darles nueva vida a los trozos que han sido desechados, todo esto con el objetivo de “asumir y preservar el principio activo contenido en las vidas y en la opresión de los ancestros” (Gilly 2006, 47). Pero al ser los agentes de este periodo al que me aproximo, unos ancestros más bien cercanos y una opresión más bien vigente, asumo también voluntariamente otro rol, pues considero prudente también dejar intencionalmente indicios, para que otros los encuentren. Retazos un tanto ordenados y reflexionados, para otros artesanos-narradores que después vendrán. Las entrevistas que para este trabajo he recogido, la viva voz de los y las que se extinguen quedan a su disposición como otra forma de fragmento.

La contradicción capital-trabajo sigue siendo central en la actualidad de todas las sociedades que viven bajo la opresión del modo de producción capitalista y las experiencias de otros humanos que la enfrentaron de maneras muy creativas puede ayudarnos a construir estrategias para algún día resolverla. El tiempo de ellos se va con ellos, y podemos con nuestra acción consciente conservar (a modo de cápsulas del tiempo) algunas de las voces que también se van, como se irá pronto la nuestra junto con nuestra experiencia.

Capítulo 1. Literatura sobre el Paro Nacional del Pueblo: un estado del arte

En la medida en que iba conociendo con verdadera fascinación las luchas de los trabajadores organizados en la década de 1980, me encontraba con una serie interminable de descripciones inconexas que señalaban al Paro Nacional del Pueblo, como su punto más alto. En ese sentido fue importante recopilar y analizar estos textos que, a su vez y como es lógico, conducían hacia otros que fueron alimentando la necesidad de conocer a fondo éste hecho histórico.

En este capítulo se revisan los textos que, de una u otra manera, son relevantes para el objeto de estudio de esta tesis: El Paro Nacional del Pueblo del 21 de octubre de 1982, entendido este como el momento cúspide de un ciclo de protestas que ocurrieron en Ecuador desde mediados de septiembre del mismo año. Es decir, se revisarán aquellos textos que contienen información valiosa sobre dicho evento histórico ocurrido durante el gobierno de Oswaldo Hurtado, quien conducía después de la controvertida muerte de Jaime Roldós, el primer periodo democrático constitucional al salir de la larga dictadura militar que abarcó casi toda la década de 1970.

Aunque no existen tesis o publicaciones académicas específicas sobre la Sexta Huelga Nacional Unitaria convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), existen tres artículos o ensayos académicos que sin explicitarlo en su título o en sus objetivos, se enfocan parcialmente en dicho evento o al menos le dan un énfasis importante.

De la misma manera, es importante revisar un grupo de libros especializados y tesis de maestría que, aunque tampoco se concentran específicamente en dicho acontecimiento, permiten ver un acentuado interés en los estudios sobre el movimiento sindical y los trabajadores de la época, pero sobre todo conocer a profundidad el contexto y las dinámicas sociales en las que estaban inmiscuidos dichos trabajadores. Llama la atención que todos estos estudios —a excepción de uno producido por la Universidad Católica— tienen algún tipo de relación con FLACSO Sede Ecuador y su equipo de docentes.

Además, encontramos publicaciones cortas (folletos), provenientes de las organizaciones políticas y militancias de la época, que abordan también el Paro del Pueblo. De igual forma, se encuentran libros, rezagos de lo que —siguiendo a Hernán Ibarra— podría denominarse historia institucional. Estos documentos abarcan enormes periodos de tiempo y, aun así, hacen destacados énfasis en el acontecimiento histórico que nos ocupa; al menos dos de ellos abordan las huelgas nacionales como su centro de atención.

En este orden, se hará una revisión de los textos mencionados, así como una breve lectura de sus posiciones.

1.1. Artículos académicos

Se debe partir —por su especificidad y valía— con el texto del fallecido académico Manuel Chiriboga de nombre: *Crisis de acumulación, Democracia y Explosión Social*; escrito apenas semanas después del Paro y que, publicado en el primer número de la revista *Ecuador Debate* de diciembre de 1982, recoge y analiza meticulosamente las razones que —acumulándose unas con otras— llevaron al estallido social. Aquí Chiriboga, después de describir la profundidad del hecho histórico y la intranquilidad del improvisado presidente Hurtado frente al Paro —en un relato novelesco introductorio— pasará a hacer una lectura argumentada de la crisis desde tres aristas. La primera está enfocada en el debilitamiento del joven sistema político y la incapacidad de los partidos políticos para procesar el conflicto, pasando por una amplia mirada de la crisis económica que a su juicio “revela problemas profundos del patrón de acumulación vigente” (Chiriboga 1982, 10). Además, propone un enfoque de la sociedad centrado en las organizaciones populares y más específicamente en la acción y discurso de las grandes centrales sindicales. Sobre el Paro, dice en concreto “El jueves 21 la huelga con seguridad se convirtió en el mayor acto de protesta popular registrado en los últimos treinta o cuarenta años, paralizando el país” (Chiriboga 1982, 31-32).

Chiriboga, partiendo de la afirmación de que existía una especie consenso interclases sobre la presencia de una crisis, revisa —incluso— los discursos y propuestas para superarla, provenientes de los actores políticos y sociales, así como de las fuerzas económicas vigentes. Y los divide de la siguiente manera: a) actores ligados al Gobierno; b) Cámaras y partidos de derecha; c) partidos de izquierda y sectores medios; y d) Centrales sindicales, campesinos y organizaciones populares, lo que nos deja ver la importancia que se les daba en el análisis a las centrales sindicales.

El año de 1982 marca un hito importante para la sociedad ecuatoriana. La combinación de una aguda crisis económica, que cuestiona las bases mismas del modelo de acumulación hasta ahora vigente, con una crisis política significativa que restó representatividad al grueso del sistema político y una agudización de las luchas sociales, que dio al FUT la posibilidad de aglutinar tras de sí al conjunto de los sectores populares, marcan con seguridad el inicio de un período de redefinición de la correlación de fuerzas sociales, cuyas posiciones relativas tenderán a modificarse y de cambio en el modelo de acumulación de capitales vigente hasta ahora en el país y obviamente en la reconstitución del sistema político de cara a 1984. El

problema fundamental parece ser en definitiva la capacidad del proceso político de absorber o conducir la crisis económica y la nueva correlación de fuerzas sociales, sin que se genere una ruptura entre economía y política. En la resolución de este problema se encuentra la posibilidad de mantenimiento del sistema democrático (Chiriboga 1982, 9).

Posteriormente, Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz publicaron un portentoso ensayo comentado por Hernán Ibarra, que lleva por nombre: Crisis y movimiento sindical en Ecuador: Las huelgas nacionales del FUT (1981-1983). El documento fue producido para un seminario de la United Nations University (UNU) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), por el Centro de Investigaciones CIUDAD en Quito, en enero de 1985. Después, el ensayo fue publicado en un libro por la misma CLACSO, en conjunción con el Centro Andino de Acción Popular (CAAP), el Centro para el Desarrollo e Investigación sobre Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME), el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), el Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES), el Centro de Investigaciones de Urbanismo, Arquitectura y Diseño CIUDAD (CIUDAD) y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). El trabajo da cuenta de un llamativo esfuerzo conjunto de los principales centros de investigación de la época que llevó el nombre de *Movimientos Sociales en Ecuador*.

En su artículo León y Pérez Sáinz, con el objetivo de “ofrecer un análisis del papel jugado por el movimiento laboral” (León & Pérez Sáinz 1986, 97) en la crisis que inició en los años 80 del siglo pasado en Ecuador, reconstruyen y analizan cinco huelgas unitarias que es como se conoce a las huelgas convocadas por el FUT, conformado en aquel momento por la CEDOC-Socialista, la CTE y la CEOSL. Más adelante se analiza *in extenso* a este sujeto social. El ensayo empieza con la tercera huelga del 13 de mayo de 1981 y termina con la séptima huelga del 23 y 24 de marzo de 1983 con un postfacio, agregado posteriormente, que trabaja brevemente las huelgas de octubre de 1984 y de enero de 1985. Esta dupla de académicos hace su análisis desde cuatro ámbitos o cuatro preguntas que articulan todo el texto: 1. Modalidades de respuesta del FUT ante las medidas del gobierno; 2. Relaciones entre el FUT, el legislativo y el ejecutivo; 3. Política de alianzas; y, 4. Dinámicas internas dentro de proceso de unidad (León y Pérez Sáinz 1986, 97). Además, observan las visiones de las centrales sindicales aliadas con respecto a la crisis económica y social. Describieron al Paro en cuestión de 1982 así:

El segundo momento cubre casi todo 1982 y supuso no sólo la recuperación del movimiento laboral del mencionado fracaso sino su fortalecimiento hasta alcanzar su punto más alto en

octubre, coyuntura en que se dio un auge de luchas populares sin parangón en los últimos tiempos en Ecuador (León y Pérez Sáinz 1986, 97).

Una de las principales hipótesis del texto de León y Pérez Sáinz, la cual ha sido retomada en lo posterior por varios otros autores, es que el FUT se convirtió —al menos temporalmente— en el “portavoz del descontento popular” (León & Pérez Sáinz 1986, 97). Además, coinciden con Manuel Chiriboga en el hecho de que “...la lucha popular desbordó el marco impuesto por el régimen democrático al conflicto social, erosionándose la legitimidad del régimen representativo” (León & Pérez Sáinz 1986 119). Los académicos, sin dejar de reconocer el carácter *inmediatista* y por lo tanto *corporativista* de la posición del FUT que —aunque incorpora ciertas demandas de otros sectores— no intenta volverlas concretas pues solo las enuncia, dirán:

En resumen, nos parece que el FUT disputó, fundamentalmente, lo popular, intentando que se minimizasen los efectos sociales de la crisis. La preponderancia que adquirió el movimiento laboral en esta lucha le llevó a disputar, en mucho menor medida, lo nacional y lo democrático. De esta manera, intentó aglutinar a los más amplios sectores de la sociedad contra el gobierno, aunque su interpelación privilegió a los trabajadores (León y Pérez Sáinz 1986, 128).

Uno de los puntos fundamentales en la búsqueda de estos autores pasa por determinar momento en el que el *movimiento laboral*, los sectores burgueses y el gobierno toman conciencia de la crisis, así como ubicar cuando estos lograron elaborar una estrategia global de respuesta. Sosteniendo que el movimiento sindical y sus sectores aliados solo lograron desarrollar una conciencia y un discurso con respecto a dicha crisis, más no una respuesta de carácter global. León y Pérez Sáinz afirmaron que el “protagonismo estatal se vio favorecido por la incapacidad tanto de los trabajadores como de los distintos sectores burgueses, en ofrecer una salida global y no corporativista a la crisis” (León y Pérez Sáinz 1985, 110).

De una manera amplia y al mismo tiempo sistemática, muy ligada a la comprobación de datos y al análisis de posiciones y discursos, estos autores logran responder a cada de una de las grandes interrogantes que se habían planteado. Su lectura —a ratos— denota una ligera ilusión sobre la posibilidad de que las huelgas podrían haber producido una dinámica capaz de generar un cambio estructural ligado al fortalecimiento de la recién recuperada democracia representativa. Este texto en su conjunto se considera central para este estudio.

Cabe decir que el académico Luis Verdesoto (1986) en un artículo titulado Los movimientos sociales, la crisis y la democracia en el Ecuador, que es parte también de la compilación Movimientos Sociales en Ecuador antes mencionada, trata el tema de las huelgas nacionales basándose en el ensayo de León y Pérez Sáinz.

El historiador Hernán Ibarra —por su parte— logra, en la Revista Nueva, a principios de 1983 realizar “un balance, tanto para superar las visiones triunfales que miran sucesiones de éxitos como las visiones que se pierden en problemas domésticos de las centrales sindicales o de la izquierda” (Ibarra 1983, 78). Ibarra, uno de los historiadores que más y mejor ha trabajado el tema de los trabajadores en el país, probablemente influido por el *deber ser* de la época, afirma que la clase obrera “Políticamente no es todavía una clase con vocación hegemónica en la medida en que no es la dirección moral e intelectual de las clases populares” (Ibarra, 1983: 81), admitiendo tácitamente que en algún momento podría o debería serlo. Así, después de un breve pero acertado recorrido tanto por el proceso de industrialización ecuatoriano como por la situación de ese momento preciso de los trabajadores —especialmente de los obreros industriales y sus sindicatos— hace una evaluación de cada una de las huelgas nacionales que se habían sucedido. Valora —coincidiendo con León y Pérez Sáinz— el paro del pueblo de la manera que sigue:

Intensas movilizaciones de respuesta en todo el país concluyeron en el paro nacional del pueblo el 21 de Octubre, convirtiendo al FUT en una fuerza social y política. Quizá desde 1944 no se ha visto en el país una movilización popular como la del mes de Octubre, cuando el movimiento sindical logró encabezar a protesta popular y pasar de representar a los sectores asalariados a la representación del pueblo (Ibarra 1983, 80).

Con una necesaria perspectiva crítica que deja ver claramente la situación del movimiento popular, cuyo centro temporal fueron las centrales sindicales y, en esa medida, deja ver también sus alcances, sus contradicciones internas y sus limitaciones:

Los conflictos colectivos y huelgas realizadas en los dos últimos años son un récord en la historia del país, pero han sido respuestas ante paros patronales, amenazas de liquidación de empresas o búsqueda de alzas mínimas de salarios. En muchos casos inclusive se ha privilegiado la defensa del empleo, aunque fuera en condiciones ventajosas (Ibarra 1983, 80).

Esta rotunda conclusión —como se verá más adelante— coincide con una de las hipótesis que logra demostrar Juan Pablo Pérez Sáinz en un trabajo posterior.

Como complemento de estos artículos académicos se revisan algunas publicaciones que deben ser contempladas dentro de este compendio pues, si bien no están enfocadas ni en las huelgas y menos en aquella que ocupa este trabajo, dos de ellos, nos permiten conocer con notable certeza a los trabajadores y el mercado de trabajo en aquel momento. Otro permite ver las relaciones entre el movimiento sindical, la estructura económica, la política y el Estado.

Precisamente, Hernán Ibarra me diría en 2021 que el único estudio riguroso que se había hecho sobre la sindicalización en el país es aquel publicado en 1982 por Gilda Farrell, de nombre *Mercado de trabajo urbano y movimiento sindical* del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el ILDIS. Farrell realiza un amplio estudio sobre los trabajadores tanto del estrato industrial, como del sector público, así como el sector de comercio y servicios. Este afortunado estudio que se centra en la estructura del empleo hace un especial énfasis en la organización de los trabajadores. Un hallazgo verdaderamente valioso para la base de conocimientos de la que se alimentó este trabajo.

Así mismo, Editorial El Conejo publica en 1985 y 1986 dos investigaciones de Juan Pablo Pérez Sáinz. Aquí se las describe en orden de pertinencia y no cronológico. Así, el libro *Entre la ciudad y la fábrica* de 1986 permite ver con claridad la construcción social, económica e identitaria de los trabajadores, especialmente de los trabajadores quiteños para la época. De igual manera y —aquí sí con constantes referencias al Paro que es motivo de este trabajo— se encuentra *Clase Obrera y Democracia en el Ecuador de 1985*. Donde se traza una relación entre el desarrollo del capitalismo y la *democratización*; es decir entre el proyecto de construcción de ciudadanía que las élites y los partidos políticos proponían para el Ecuador en ese momento, en contraste con la acción del movimiento sindical que parecía esbozar otro modelo de sociedad. Pérez Sáinz concluye que *el sindicalismo* se enfocaba especialmente en su interacción con el sistema representativo, en el marco del proceso de industrialización y desnuda como esta relación aporta a la construcción de la versión específica de clase obrera que estas y otras tantas interacciones y proveniencias van construyendo. Es así que podemos encontrar excepcionalmente en estos textos una versión no idealizada de la clase obrera ecuatoriana.

Sobre el Paro del Pueblo, el académico español radicado ese momento en Quito, dijo:

La no satisfacción, una vez más, de las reivindicaciones planteadas por el FUT y el paquete de medidas que tomó el gobierno en octubre llevaron a otra huelga nacional y desencadenaron un

auge sin precedentes en la lucha de los trabajadores. Esta coyuntura, de gran significación en el proceso actual de la lucha de clases en Ecuador (Pérez Sáinz 1985, 112).

Otro de los temas que llamaron la atención de este académico, interés que compartirá —como se verá más adelante— con Marco Velasco, es la distancia que hay entre la fuerza y constancia de la movilización de los trabajadores y los sectores populares, en oposición a los pobres resultados que los partidos de izquierda —que se creía los dirigían o condicionaban— obtenían en los sufragios.

1.2. Las tesis

En la misma época, podría ubicarse una especie de mini auge, es decir, un momento de interés particular sobre un ámbito de estudio que le compete de sobremano a este trabajo, a saber, los *estudios obreros* o los estudios sobre los trabajadores; esto sucedió específicamente en los primeros años de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Quito. Ahí, Pérez Sáinz dirigió varias de las tesis de maestría que se recogen en este capítulo. La primera, de agosto de 1983, de nombre *La reproducción de la fuerza de trabajo en la industrial fabril: La rama de alimentos, bebidas y tabaco, en la provincia de Pichincha*, de la académica costarricense Mayra Achío Tascan que analiza la reproducción de la fuerza de trabajo en un grupo de empresas específicas. En esta tesis se refuerza lo ya demostrado por Pérez Sáinz sobre una superposición de estrategias de reproducción para garantizar la supervivencia de los obreros, estrategias que al provenir de distintos ámbitos, configuraban a los sujetos de distintas maneras. Lo cual hace que la identidad de los obreros no se corresponda, ni exista únicamente motivada por su relación con la fábrica.

La segunda tesis de este grupo, *Pobreza urbana y relaciones de dominación en Quito*, también de 1983, realizada por la académica norteamericana Mishy Lesser, deja ver —en el mismo sentido que los trabajos de Achío y Pérez Sáinz— la configuración social en la que existían los trabajadores objeto de este estudio para la época en cuestión. Enfocada —la tesis— en lo que ella denomina neoclientelismo a través de un estudio de caso específico: la constitución o creación de un barrio popular de Quito. Lesser se aproxima a uno de los aspectos más importantes de la vida de los trabajadores en dicha época, su lugar de vivienda.

Una tercera tesis aparecida en el mismo año 1983 fue realizada por un renombrado militante de la CEOSL. Efraín Redrován Zúñiga, quien aporta a este campo de conocimiento con su tesis, cuyo título es *La formación del Frente Unitario de los Trabajadores (1960-1975) (El papel de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres – CEOSL)*. Este

trabajo deja ver la interrelación entre el proceso de industrialización en el país y la conformación de la CEOSL. Esta mirada interna, a ratos hasta íntima, permite proyectar, en buena medida, la dinámica interior del FUT para el momento que atañe a este estudio. Redrován Zúñiga define los límites de lo que él llama movimiento sindical ecuatoriano, desde tres ámbitos: límites estructurales, límites institucionales y límites ideológicos.

En julio de 1980, Marco Vinicio Velasco, dirigido por Rafael Quintero y Jaime Durán Barba, asesorado además por Alejandro Moreano y Ayrton Fausto, publica *El proletariado industrial en la Provincia de Pichincha, condiciones objetivas, organización sindical y conflicto (Periodo 1972-1978)*. Tal como el trabajo de Gilda Farrell, este también se centra en la organización sindical, haciendo rigurosos cálculos sobre las tasas de sindicalización. Velasco logra una rica discusión basada en la detallada descripción del sistema de fábrica, sus conflictos y la organización de los trabajadores. Este trabajo tiene además la virtud de estar apoyado en una revisión exhaustiva de las cifras producidas por distintas instituciones además de una encuesta realizada específicamente para dicho estudio.

Este autor publica también, en 1987, un artículo en el número 13 de la revista Ecuador Debate, en el cual reflexiona sobre lo ya elaborado en su tesis, criticando fuertemente la “...disociación analítica del movimiento obrero y sindical, como sujeto del proceso político, por un lado, y como sujeto del proceso productivo por otro” (Velasco 1987, 25). Coincidiendo con otros autores que aquí se han citado, dice: “Los intereses particulares, el Sindicato, la vida intrafábrica, la vida cotidiana, resultan excluidos de lo político” (Velasco 1987, 26).

Para poder explicar la disociación que se había planteado, Velasco encuentra imperante —y así lo hace en su trabajo— el estudio:

(...) puramente cuantitativo y descriptivo del número de trabajadores y su distribución por ramas de producción, actividades económicas, regiones, provincias, características y tipo de organización, analiza también las reivindicaciones obreras en los conflictos colectivos y finalmente invita a establecer las tendencias en la reducción de las organizaciones sindicales, intentando prever sus patrones de desarrollo (Velasco 1982, 27).

Carlos Chamorro quien había obtenido su tesis de maestría en FLACSO México en 1980, con la tesis *La clase obrera ecuatoriana y la acción sindical en los años setenta*, dirigió el trabajo de grado de la académica argentina Margarita Llambías, *El Movimiento Sindical en el Ecuador: una etapa de su conformación 1971 y 1975*, presentada en septiembre de 1983. Donde, desde una interesante reconfiguración de las lecturas marxistas del sindicalismo,

revisa dos huelgas del FUT, discutiendo largamente con varios autores, pero sin acabar de separarse de lo que Hernán Ibarra denominó con tanto acierto como el mito de clase obrera (Ibarra 2007, 61).

La última tesis que se revisa a continuación es la única que no corresponde a la primera mitad de los años 80 del siglo pasado. *Desarticulación del movimiento obrero: caso ruptura de la CEDOC*, de María Isabel Miño Avilés, fue dirigida en 2013, por Santiago Ortiz. Este trabajo, con algunas omisiones históricas importantes, compila una serie de valiosas entrevistas, que muestran la dinámica interna y los conflictos de la CEDOC, hasta llegar a su ruptura definitiva en 1976.

Para cerrar con el apartado sobre los aportes de la academia sobre el objeto de este estudio, es ineludible mencionar el apasionado debate entre Patricio Ycaza y Felipe Burbano de Lara que entre argumentaciones y contraargumentaciones ocupó un importante espacio al inicio de de la Revista Ecuador Debate número 9 de septiembre de 1985. Esta interacción permite ver con claridad el choque y las distancias entre dos tipos de análisis. Por un lado, aquellos ligados a las militancias políticas —es decir a intenciones políticas— y otro proveniente de posiciones más bien cercanas a la academia y su pretensión de objetividad. Así, mientras Burbano pone en cuestión varios de los postulados —populares para la época— que colocan a los obreros industriales como sujetos ineludibles de la revolución. Ycaza, por su parte, defiende ferozmente esta visión y expone su certeza de que una revolución puede ser encabezada por ellos en el contexto de un grupo de condiciones específicas. Este debate no solo impulsó la realización de este trabajo, sino que en su momento resultaba ya refrescante, frente al anquilosamiento de los estudios sobre la clase obrera. Cabe decir, además, que este apasionado intercambio fue alimentado, en buena parte, por los estudios de Juan Pablo Pérez Sainz que problematizaron eficazmente la visión que se tenía sobre los trabajadores durante la década de 1980.

1.3. Literatura militante

Aquí empieza, la revisión de los textos y folletos producidos por organizaciones políticas o militantes de organizaciones políticas que, en la misma lógica del apartado anterior, tuvieron diferentes formas de aproximarse a la temática. Y que por ello han sido definidos como relevantes para este trabajo. Algunos centran su atención en el Paro que da sentido a este estudio y otros abordan temáticas que enriquecen esta investigación por su pertinencia.

Es preciso antes de entrar en el análisis, aclarar algunos conceptos que permitirán entender los textos y sus posiciones. Así, a mediados de la década de 1970 se puede distinguir una especie de apogeo en las ciencias sociales con respecto a los estudios sobre los sectores y movimientos populares. Este fenómeno estuvo ligado a un impulso en las acciones de los diferentes movimientos sociales, bajo el cual ganaron interés y legitimidad dichos estudios. Aunque lo agrario fue fundamental durante ese periodo, los estudios obreros encontraron un espacio: “Se conocieron mejor algunos procesos de desarrollo organizativo, algunas fuentes documentales de difícil acceso fueron reeditadas y puestas al alcance de mayor público y se produjo cierta divulgación hacia los mismos sectores sindicales” (Ibarra 2007, 69).

Inclusive hasta entrada la década de 1980, el movimiento obrero ecuatoriano fue abordado desde una perspectiva a la que Hernán Ibarra denomina como historia institucional (2007, 65). Esto fue provocado, probablemente, por la vinculación política de quienes hacían esa historia con los movimientos obreros, los cuales, a su vez estaban alineados con proyectos políticos que asumían al proletario como sujeto innegable de la revolución. En palabras de Ibarra “la historia laboral era un terreno de intervención de quienes estaban vinculados políticamente a los movimientos laborales como voces autorizadas” (2007, 61). Y, por otro lado, fue provocado también por los marcos conceptuales que, lejanos a la academia y cualquier posibilidad crítica, ordenaban la investigación histórica y la instrumentalizaban.

Si se describen algunos eventos (huelgas nacionales, conflictos laborales relevantes), no existe una visión de los cambios organizativos y, la ausencia de estudios consistentes sobre la industrialización hace que las apreciaciones sobre el crecimiento de la clase obrera sean sólo una constatación (Ibarra 2007, 69).

Muy relacionado con esta forma de hacer historia, durante los 70 y 80, existía una especie particular de doctrina que empezaba a ser cuestionada: el mito de la clase obrera, que Ibarra logra definir acertadamente de esta manera:

Uno de los mayores obstáculos al desarrollo de un conocimiento adecuado del mundo laboral, fue el mito de la clase obrera. Este radicaba en atribuir a los trabajadores una determinada conducta radical o revolucionaria. Según la izquierda tradicional, esas formaciones políticas eran las que representaban a ese sujeto. Sin dejar de atribuir esa conducta ideal a los trabajadores, la izquierda radical consideraba que la izquierda tradicional había carecido de una voluntad transformadora traducida en prácticas de naturaleza reformista. El mito de la clase obrera originado en la difusión del marxismo vulgar residía en suponer que los trabajadores industriales eran el eje de cualquier proceso liberador. Como mito surgido de una

teoría social tenía una fijación bajo la forma de doctrina con un principio nodal que podría enunciarse así: ‘El proletariado es una clase que tiene como misión la transformación de la sociedad bajo la dirección de su partido de vanguardia que conduce a los explotados’.

Afirmaciones de este tipo, no necesitaban ser probadas ni discutidas (Ibarra 2007, 62).

Es preciso reconocer aquí la coincidencia de enfoque que existe entre este académico ecuatoriano y uno ruso-norteamericano. El historiador, filósofo e investigador Murray Bookchin, uno de los pocos se ha atrevido a sostener una crítica sólida y desde la izquierda tanto al anarquismo como al marxismo. Bookchin señalaba este mito desde principios de la década de 1990 con las siguientes palabras:

El marxismo fracasó a la hora de construir una imagen adecuada del trabajador como ser humano multifacético y, de hecho, ya sea como hombre o como mujer, lo fetichizó hasta el punto de la absurdidad. El marxismo no ve a los trabajadores como algo más que entidades económicas, aunque los dotó de propiedades semimísticas como agentes revolucionarios, poseedores de poderes secretos para entender sus intereses y una sensibilidad extraordinaria para las posibilidades radicales de la sociedad existente (Bookchin [2002] 2019, 257).

Mixturados y mistificados con lo dicho hasta aquí, se ha identificado por lo menos dos consensos que, en la época, se impusieron a modo de verdad. El primero habla de la necesidad de construir una central única bien sea como paso previo para la revolución, o —de forma más realista— para lograr mejores condiciones de vida para los trabajadores. Y, el segundo, que vendría como resultado o fruto de este proceso unitario serían los sindicatos por ramas. Se puede afirmar que estos eran los objetivos máximos de la clase trabajadora para la época mismos que, vistos como condiciones para alcanzar una revolución, dan clara cuenta de una mirada lineal del desarrollo social.

El periodista y politólogo boliviano Cayetano Llobet Tabolara, estudioso del sindicalismo y el movimiento obrero de su país, resume esta problemática de la siguiente manera:

Partiendo de verdades parciales —dicotomía burguesía proletariado— caímos en concepciones maniqueas. Se simplificó a la burguesía y se simplificó al proletariado. Como las cosas se dan de una manera que no es simple se terminó por no entender ni a la burguesía ni al proletariado. Más propiamente, no se entendieron los comportamientos de burguesías concretas ni los comportamientos concretos de proletariados históricos (Llobet Tabolara 1984, 307).

Todos los textos que se revisan a continuación responden de una u otra manera a los postulados que se acaban de mencionar.

Existe, para estudiar el Paro del Pueblo, una publicación específica publicada en 1983: el folleto de 50 carillas del profesor Dalton Burgos: *Octubre 82, El ascenso del movimiento de masas y la encrucijada de la dirección política*, mismo que contiene una explicación altamente *ideologizada* de la huelga, sus orígenes y causas, incluyendo una lectura del mismo tipo sobre la conflictividad política del momento y las perspectivas de la organización. Precisamente, su objetivo es *orientar* la acción del movimiento sindical, los trabajadores y las organizaciones populares en general. Burgos coincide con León, Pérez Sáinz y Chiriboga en el sentido de que “Fue una jornada en la que la clase obrera expresada por sus matrices sindicales se colocó a la cabeza de la población” (Burgos 1983, 28), al tiempo que reclama “mientras la burguesía posee proyectos definidos; en el campo obrero y popular las alternativas no están muy claras, y que su dirección es aún vacilante y tímida” (Burgos 1983, 29). Señala con claridad la responsabilidad de la dirección del movimiento sindical frente al cese de la movilización popular.

Este texto recoge además como anexo, un clarificador pronunciamiento de la FENOC — antecedente de la actual FENOCIN—, la FDTP y la FECLATG, fuertes organizaciones de base pertenecientes a la CEDOC-Socialista. Documentos que permiten inferir la distancia que existía entre los reclamos de las bases —tanto de unidad como de radicalidad— con respecto a lo que hacían o podían hacer las dirigencias. Aquí un fragmento del sentido reclamo que hacen por la realización de la anunciada huelga indefinida:

Tal y como estaba la correlación de fuerzas en la semana comprendida entre el 23 y el 28 de octubre, era posible que tal medida permita un triunfo a las fuerzas populares. No se trababa pues de una huelga indefinida en el tiempo. Tal y como estaban las cosas, esa huelga o paro no podía pasar de 3 o 4 días en que se producía la convocatoria al Congreso extraordinario o el Gobierno rebaja el paquete de medidas (Burgos 1983, 46).

Patricio Ycaza fue el autor de los dos tomos de la vasta obra *Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano*, la cual recorre la formación de las primeras organizaciones y manifestaciones de trabajadores en la colonia, la república y avanza hasta finales de la de 1980. Más allá de sus claras limitaciones teóricas, provenientes de su posición y militancia política, sigue siendo un referente de los estudios en este ámbito. Ycaza está totalmente ligado a lo que nos hemos referido aquí como historia institucional y fue, a su vez, uno de los principales reproductores del mito de clase obrera, pese a esto su compendio no deja de ser una valiosa fuente de referencia sobre el recorrido histórico del movimiento de trabajadores en Ecuador. Así, en 1991, las organizaciones no gubernamentales, CEDIME y CIUDAD, publicaron el segundo

tomo de esta obra, en donde se le dedica dos páginas al paro motivo de este estudio. Dos páginas que dentro de un compendio histórico tan abarcativo resultan significativas. Ycaza se refiere al Paro en estos términos:

Esta paralización que constituye hasta la actualidad la más vigorosa respuesta obrera y popular contra la política económica inscrita en los “programas de ajuste”, determinó que la práctica sindical contestataria del FUT sea un factor decisivo para la reanimación y desarrollo del movimiento de masas (Ycaza 1991, 279).

Al otro lado de la vereda aunque dentro del mismo esquema de historia institucional (y no tan lejana a los otros autores como se podría creer) encontramos las varias ediciones del libro *El sindicalismo en el Ecuador* de la Dra. Isabel Robalino Bolle. En esta tesis se hará siempre referencia a la edición de 1992 que es la que recibimos de las propias manos de la autora. Aquí, las huelgas aparecerán como breves menciones accesorias de su versión de la historia, dividida en el recorrido institucional de cada una de las centrales sindicales. Su énfasis estará en los documentos de fundación, las convenciones, tanto como los avances legales y las cantidades de sindicatos por Central. Aquí podemos ver el tratamiento que ésta autora le da a las huelgas unitarias:

Sin embargo, el deterioro de la situación económica, la aplicación de medidas de enfrentamiento a la crisis, durante los Gobiernos de Jaime Roldós y Oswaldo Hurtado, como también el ambiente democrático que facilitaba las acciones de la clase trabajadora, dieron lugar a nueva búsqueda de unidad. En 1980 la CTE con la CEOSL y la fracción socialista que se desmembró de la CEDOC, restablecen el FUT, conformado originalmente con la CEDOC, cuyo funcionamiento se reglamenta en 1981. En este mismo año se da una huelga unitaria en la que participa también la CEDOC, en el paro de mayo, que luego será seguida de otra, en el mes de diciembre, y de las siguientes en septiembre y octubre de 1982 y marzo de 1983, todas ellas para enfrentar las medidas económicas (Robalino Bolle 1992, 180).

Esta autora se da la licencia de empezar caracterizando el trabajo en la época precolombina, para pasar por los gremios en España, revisar la época colonial y con este nivel de amplitud llegar hasta la conformación de las grandes centrales sindicales; así, cada una de ellas junto a sus facciones tendrá un capítulo propio. Su apego a la CEDOC-CLAT es evidente durante todo el libro, así como un fuerte resentimiento —expresado en explícitos reclamos— por las dos intervenciones que la autora denunció. Aquella connotada del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT) que provocó la ruptura que dio nacimiento a la

CEDOCUT y una segunda “intromisión” —ella usa ese término— de la Democracia Cristiana, dirigida por Oswaldo Hurtado durante los 80.

El libro sobre el Frente Unitario de Trabajadores, *El FUT, trayectoria y perspectivas* de 1995 de Jorge Dávila Loor, contiene todo un subtítulo sobre, lo que él llama, *la alta ofensiva* del movimiento obrero cuya cúspide se encuentra —para el autor— en el Paro del Pueblo. Avanza desde un recorrido histórico que detalla la conformación de las Centrales Sindicales, para después realizar una caracterización del periodo que va entre 1975 y 1991. Con esos antecedentes, hace un balance global del movimiento obrero y particularmente del FUT en dicho periodo, para finalizar con una serie de reflexiones sobre lo que podría hacerse para fortalecer la organización popular.

Sobre el Paro del Pueblo, Dávila Loor dijo:

El paro del 21 de octubre fue el momento más alto de la lucha del pueblo en toda la década. Fue verdaderamente un paro nacional, un paro total. Es más, fue el inicio de un levantamiento popular tanto en la ciudad como en el campo (Dávila Loor 1995, 92).

Aunque publicado por la revista académica Ecuador Debate, se debe considerar como uno más de los textos militantes, una sesuda evaluación sobre el movimiento sindical y sobre el FUT en particular, realizada por quien fuera su secretario general al tiempo que secretario general de la CEDOC. Así el 3 de julio de 1986 solo unas pocas semanas antes de décima Huelga Nacional Unitaria, Fausto Dután hizo una exposición recogida en el texto *Nuestros objetivos políticos, nuestra práctica es reivindicacionista*, publicado por la mencionada revista en mayo de 1987, donde señala con mucha claridad los límites en la visión del movimiento sindical de la época:

En lo que respecta al parlamento, en la huelga nacional del 82 en la época de Hurtado, antes que buscar tener un mediador en el conflicto, fueron ellos los que buscaron cómo solucionar el problema. Fue la actitud que tuvo el parlamento, especialmente la izquierda democrática, el Ing. Baca Carbo como presidente del Parlamento, para mediatizar la lucha del Frente Unitario. El FUT aceptó la mediación y las reuniones que realizamos incluso en medio de la huelga nacional, fueron con ellos para buscar un acuerdo, no para que se concreten las reivindicaciones nuestras sino para parar la represión y para parar el Estado de Emergencia que se dio en esa época. Esto ha sido un mecanismo para plantear una comprensión de la globalidad del Estado. Antes habíamos particularizado nuestra posición, se ha dicho contra el presidente, contra tal ministro, fraccionando al Estado. Cuando planteamos una negociación con el Parlamento fue cuando comenzó a haber una comprensión de la globalidad del Estado y

la idea de englobar en la responsabilidad de la conducción de un gobierno al Parlamento. Hemos levantado una movilización con plataformas concretas, proyectos de ley para el parlamento, a fin de que sean aplicados. Incluso en un momento dado con el propio Baca Carbo se llegó a un acuerdo que nos permitía que trabajemos en comisiones conjuntas, en calidad de miembros natos de las comisiones permanentes del parlamento, para expresar la posición de los trabajadores. Este fue el momento más alto del acuerdo, de la negociación con ellos (Dután 1987, 148).

Dután realiza también, a su manera, una sentida crítica en contra del mito de la clase obrera, eso sí, anterior a las que hicieron Boockchin e Ibarra:

Existe una apreciación incorrecta en muchos dirigentes sindicales, doctrinaria y ortodoxa respecto a pensar que el problema de la conducción de las luchas de nuestro pueblo hacia la revolución es un problema que es fundamentalmente de la clase obrera como tal y que el resto de sectores populares son sectores aliados (Dután 1987, 146).

Es preciso finalizar la revisión de los textos, con dos tesoros de la época: *Un pueblo en lucha, las huelgas nacionales de 1982-83*, es un folleto producido por la CEDOC-Socialista y el Centro de Educación Popular (CEDEP). Este último era un centro de activismo político a través de la comunicación que realizaba talleres con los miembros de las organizaciones sindicales, para después ordenar la información y construir esta clase de textos. En su trabajo se observa un compilado de pertinentes fotos, así como de una gran cantidad de información pasando inclusive por una revisión de lo ocurrido en varios territorios del país durante las huelgas. Esta información, si bien no está totalmente sistematizada u organizada, transmite el sentir de las bases tanto como sus lecturas políticas y sobre todo sus aspiraciones y reclamos.

El 21 de octubre de 1982, día del Paro Nacional del Pueblo, las fuerzas trabajadoras rompieron en los hechos el Estado de Emergencia establecido por el gobierno para impedir la protesta popular. De nada valieron tanquetas, soldados, balas y bombas contra un pueblo que los enfrentó con piedras en la mano. Ese día, el gobierno vio que no solamente se hace oposición desde el Parlamento con la oligarquía la cabeza, sino que un pueblo sufrido y altivo es capaz de poner en primer orden sus demandas (CEDOC-CEDEP 1983, 3).

Con la misma valoración está el texto *Forjando la Unidad, el movimiento popular en Ecuador* que tuvo dos ediciones en 1985, una de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI en Montreal, en febrero; y otra en mayo producida por Comunicare en Quito con la participación del Taller de Comunicación Popular. El trabajo combina un grupo de 12 entrevistas a dirigentes sindicales y populares además de 3 resúmenes hechos por ALAI sobre

los principales movimientos sociales: el movimiento sindical, el movimiento campesino e indígena y la organización barrial además de un resumen, hecho por el Centro de investigaciones CIUDAD, sobre las organizaciones de pobladores de Quito. Estos materiales estaban enriquecidos por una atractiva diagramación y el uso, también pertinente, de llamativas fotos de las movilizaciones y procesos populares. Este folleto de 50 páginas es una especie de evaluación o diagnóstico crítico —libre ya de ilusiones triunfalistas— de las organizaciones y movimientos que iban construyendo un bloque de resistencia al *ajuste estructural* que se iba implementando en el país.

Estos últimos años demuestran que si bien se logrado desarrollar mecanismos de movilización unitarios, llegado el momento de las negociaciones se superponen los intereses parciales de las centrales, cuando de las fuerzas políticas que gravitan en ellas (ALAI 1985, 9).

1.4. Consideraciones finales

De esta manera, en estos tres grandes bloques de fuentes, se conjuga un consolidado importante de información que permite abordar tanto los contextos y coyunturas presentes durante el desarrollo del proceso histórico en estudio, así como las dinámicas internas de las organizaciones mismo que, en numerosas ocasiones permiten encontrar la visión de los propios actores sociales del momento.

De manera general se puede hablar de la existencia de una especie de expectativa generalizada sobre el rol que podrían tener las organizaciones de trabajadores en el desarrollo de la política ecuatoriana. A veces como garantes de la institucionalidad otras como canales para hacer públicas las demandas de la sociedad entera y en no pocas ocasiones, como agentes de una revolución obrera. Esta expectativa fue creciendo sin que nadie se detuviera analizar en concreto quienes eran los trabajadores que sostenían dichas organizaciones y sobre todo sin mirar cuales eran sus aspiraciones reales, de tal manera que se puedan hacer proyecciones sobre su alcance. Esta idealización de las organizaciones de trabajadores —a la larga— fortaleció el esquema centralizado de decisión que empezaba a consolidarse dentro de ellas en la década de 1980. Recién terminando la primera mitad de la década de 1980 aparecen voces críticas a esta forma de gestionar la decisión.

Con la arrasadora emergencia del movimiento indígena como actor social y político, toda la atención de las ciencias sociales en general se enfocó en su estudio por razones que no merecen explicación. A partir de ese momento los estudios sobre el movimiento obrero redujeron su número hasta casi desaparecer, sin que eso signifique que las contradicciones

estructurales del sistema capitalista, mismas que requieren de la respuesta organizada de los trabajadores, hayan desaparecido o —menos— que los estudios sobre las organizaciones y movilizaciones de los obreros y obreras hubieran pasado a ser inútiles, simplemente dejaron de concitar la atención de los académicos.

En esta revisión además se ha podido observar el rol de los autores de los textos en la construcción y fortalecimiento de las organizaciones que fueron gestoras de este auge concreto del movimiento sindical y por tanto del movimiento popular en la década de 1980. Estos autores casi en ningún caso estaban libres de compromisos con las centrales o los sindicatos, lo cual les hace también parte integrante del grupo de contradicciones y tensiones en un momento en el que el *corpus conceptual* y los discursos con los que históricamente se había construido la organización social y sindical en el país entraban en crisis en el marco del ajuste estructural de las economías latinoamericanas. Esa posibilidad de observar en específico esas disputas y tomas de posición ha enriquecido grandemente las lecturas de estos materiales.

En este trabajo se considera que los académicos que aportan con sus conclusiones e investigaciones tenían también un evidente compromiso político mismo que pocos escondían y que permite también situarlos en un campo de fuerzas.

Para finalizar este capítulo, es preciso anunciar que con pretexto de esta tesis se ha realizado la primera compilación específica sobre los materiales producidos tanto sobre el Paro del Pueblo, como sobre el movimiento sindical durante la década de 1980, así como de otros materiales bibliográficos complementarios, mismos que contienen información relevante para el estudio de esta temática. A esto se podrá acceder de la bibliografía de este trabajo.

Capítulo 2. Los conceptos, los debates y las teorías

En este capítulo se recogerán y explicarán —con ánimo crítico— un grupo de conceptos y teorías que permitirán comprender y ordenar la información que se ha recolectado y procesado para este trabajo. Así también esta explicación posibilitará entender los planteamientos y resultados que este esfuerzo ha arrojado. Aquí se logra contrastar efectivamente las teorías vigentes al momento en que sucedió el estallido con otras que han ido apareciendo y que logran —sobre todo— mirar a este campo de conocimiento desde una perspectiva centrada en las contradicciones y disputas misma que permite aproximarse a los hechos históricos con el suficiente rigor y distancia.

Es preciso partir por una definición del objeto de estudio: el Paro Nacional del Pueblo del 21 de octubre de 1982, como hecho histórico y a su vez como acción colectiva, entendida como la cúspide de un extendido estallido social. Acontecimiento que no solo fue convocado sino articulado y puesto en marcha, por una conjunción de centrales sindicales que acordaban, coordinaban y discutían sus respectivas acciones y posiciones al interior del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que fue el organismo concreto que realizó un histórico llamado a la acción colectiva de protesta, mismo que fue acogido por una serie de actores sociales y por una buena parte de la sociedad ecuatoriana. Para entender a este grupo de actores sociales y su acción colectiva, se revisan a continuación varios conceptos como: movimiento obrero, movimiento sindical, sindicalismo, movimientos sociales y movimiento popular. Además, se admiten, se debaten y se proponen un grupo de discusiones y posiciones teóricas que permitirán avanzar más adelante a través del contexto y las dinámicas internas de los actores sociales y organizaciones que sostuvieron el estallido.

2.1. Conceptos básicos

Partiendo por lo esencial, sindicalismo será entendido como “la dimensión institucionalizada que adquiere la agrupación de los trabajadores y sus intereses” (Valle Marega 2015, 11), es decir, su agrupación y principalmente su organización. El sindicalismo será comprendido dentro de “un campo de fuerza societal de múltiples disputas políticas, económicas y simbólicas, de las que participan los trabajadores, los organismos del Estado y las patronales” (Vogelmann 2012, 17). Aquí, se mira al sindicalismo desde un enfoque que se centra en el tipo de organización que produce acción colectiva, es decir, se hace énfasis en la dimensión organizativa además de la institucional.

Siguiendo la tradición de la historiografía crítica ecuatoriana se acoge la categoría movimiento sindical propuesta por Hernán Ibarra en su ponencia “El movimiento sindical ecuatoriano en el período 1972-1977” generada para el Segundo Encuentro de Historia y Realidad Económica y Social del Ecuador publicada en 1978. Categoría que es retomada por Gilda Farrel para analizar su relación con la estructura del mercado laboral en 1982. Misma que también será usada en las tesis de Margarita Llambias y Efraín Redrován Zúñiga en 1983, realizadas bajo la supervisión de Juan Pablo Pérez Sáinz. Quien posteriormente la trabaja en 1986 junto a Jorge León en su artículo “Crisis y movimiento sindical en Ecuador: Las huelgas nacionales del FUT (1981-1983)”. Cabe decir que esta categoría es usada y en grupo grande de publicaciones militantes de la época.

En este trabajo se toma esta categoría y la usa de manera constante pues permite ampliar la mirada sobre un conjunto de acciones colectivas que si bien fueron impulsadas y definidas principalmente por el FUT eran acogidas y llevadas a cabo por varios otros sectores sociales. Es así que, con el fin de entender a este conjunto de acciones como provenientes de un movimiento social más amplio que el FUT, se define movimiento sindical con una perspectiva amplia que permite entender al sujeto social de las dos huelgas unitarias que aquí se analizan de una manera más abarcativa y por lo tanto más compleja. Aunque ninguno de los autores que se ha mencionado la definieron taxativamente, afirmo que esta era su intención por el tipo de tratamiento que le dieron. A saber, definir a un movimiento social cuyo centro articulador son los sindicatos y más concretamente las centrales sindicales *clásicas*, un movimiento social que genera acción colectiva y que tiene su eje en las organizaciones que componen el FUT pero que no se remite solamente a él.

Pese a que, en su momento, las posiciones de Alain Touraine resultaron incómodas para las agendas supuestamente radicalizadas de los partidos políticos de izquierda, mismos que en clara tensión con las dirigencias sindicales y también con las bases sindicales, intentaban conducir a su antojo a los sindicatos, puesto que los entendían como organismos elementales, necesariamente subyugados a su dirección política, en este trabajo se admite buena parte de la propuesta teórica de Touraine para analizar al movimiento sindical. En la práctica —como se intentará demostrar en los capítulos que siguen— estos partidos, y las centrales sindicales incluidas, asumirán, por miedo a la dictadura, por miopía o por cálculo, la férrea defensa de la democracia representativa, una posición que Touraine también impulsó durante su vida. A partir de aquí se analizan críticamente varias de las proposiciones del sociólogo francés, mismas que serán usadas a lo largo de este trabajo.

Touraine define movimiento obrero de la siguiente manera:

Por movimiento obrero se entiende la acción colectiva de quienes aportan su fuerza de trabajo en la organización de la producción industrial y actúan para controlar y orientar el uso social de dicha producción. El movimiento obrero es inseparable de un antagonismo de clases definido en torno a la relación capital-trabajo, antagonismo que tiene como horizonte común el progreso generado por la industrialización (Touraine citado en Sulmont 2011, 28).

Para sustentar esta toma de posición es preciso comprender que la existencia, de lo que se acaba de denominar movimiento obrero “supone algún nivel de organización asociativa de los trabajadores asalariados y la capacidad de uso de medios de presión —en particular la huelga— para la conquista y la defensa de derechos económicos y sociales, así como la participación en las decisiones relativas a las políticas laborales” (Sulmont 2011, 29). En este trabajo, se quiere marcar una diferencia entre movimiento sindical e incluso movimiento obrero con respecto al simple sindicalismo, pues debe quedar claro que “puede haber sindicalismo sin movimiento obrero” (Sulmont 2011, 29). Es así que, el sindicalismo que actúa —en momentos determinados— como movimiento social alimentado por la acción de una buena parte de los trabajadores organizados en distintos sindicatos tanto como por individuos pertenecientes a otros sectores sociales y que, por tal razón, supera las lógicas institucionales y burocráticas hacia la acción colectiva o la protesta, será entendido aquí como movimiento sindical. Es decir, como un espacio que conjuga, a través de la acción, las lógicas institucionales de las dirigencias con las acciones y exigencias de la base.

Para la época en la que se enfoca este trabajo, se conjugaron tanto el descontento de los sectores populares y campesinos, con una versión particular y localizada de lo que hasta aquí se ha denominado sindicalismo. En los momentos de la acción de las masas indiscutiblemente se conjugaron las decisiones de las élites dirigentes con las acciones y decisiones de una base social amplia, que fue generando formas colectivas de decisión y acción, bajo una vertiginosa dinámica de tensión y a ratos de conflicto que se resolvió hacia la protesta generalizada.

El surgimiento de un movimiento obrero —subraya Touraine— solo tiene lugar si las luchas de los trabajadores se despliegan en un “campo de acción histórica” que va más allá de las reivindicaciones inmediatas de los sindicatos y su capacidad de negociación con las empresas y el Estado (Sulmont 2011, 29).

Touraine propone que para hablar de movimiento obrero se debe “reconocer la existencia de un conflicto decisivo de clases en el seno de la sociedad industrial, conflicto inherente a la

relación capital-trabajo” (Touraine citado en Sulmont 2011, 29). Es decir, coincide con Marx al suponer la existencia de actores sociales capaces de reconocer este como uno de los conflictos centrales de la sociedad; reconociendo también su potencial capacidad para actuar en pos de la resolución de este conflicto. Es preciso entonces hacer un paréntesis para determinar cómo se entiende la categoría trabajo de tal manera que quede clara dicha contradicción. Para esto, se usará —otra vez— la coincidencia que existe entre Marx y Touraine. Así, este último, entiende al trabajo como “acción humana sobre el mundo no social y como proceso de transformación del hombre al mismo tiempo que la naturaleza” (Sulmont 2011, 27).

Para Touraine “El obrero constituye el primer movimiento social moderno” (Sulmont 2011, 31). Tratando de apartarse del pensamiento marxista, o más concretamente del marxismo estructuralista, Touraine abre la mirada hacia los sujetos, hacia la cultura y el modo de conocimiento, proponiendo como parte de su sociología de la acción, que:

Un movimiento social es a la vez un conflicto social y un proyecto cultural. Esto es cierto tanto en el caso de los dirigentes como en el de los dirigidos. Un movimiento social aspira siempre a la realización de valores culturales y, al mismo tiempo, a obtener la victoria frente a un adversario social. Una lucha de reivindicación no es en sí misma un movimiento social (Touraine 1994, 237).

Touraine asegura que “Esta concepción de los movimientos sociales, aplicada aquí a la sociedad industrial, rompe con la idea marxista de la lucha de clases, a pesar de que ambas concepciones analizan los mismos fenómenos históricos” (Touraine 1994, 237). Se da entonces una especie de renuncia determinada por el momento histórico (caída del muro de Berlín, crisis del socialismo real, etc.) en la que se deja enunciar el conflicto de clases como el conflicto central de la sociedad, para pasar a enfocarse en la resolución de otros conflictos más específicos. Dicho de otra manera, se enmascara o disimula el conflicto de clases al interior de los movimientos sociales en pos de la concreción de un *proyecto cultural* u objetivo específico que no deja de estar generado o al menos condicionado por el conflicto esencial entre clases antagónicas, lo que da como resultado la emergencia de nuevos y necesarios ámbitos de lucha.

Uno de los más connotados discípulos de Touraine, el peruano Denis Sulmont resumió de la siguiente manera el concepto de su maestro sobre los movimientos sociales: “El concepto de movimiento social está enlazado con el de clase social, o mejor dicho con «relaciones de

clase». Touraine entiende por movimientos sociales la acción conflictiva de clases sociales — dominante y dominada— luchando por el control de un sistema de acción histórica” (Sulmont 2011, 51). Y, se entiende que, es este sistema de acción histórica el que determina el ámbito de lucha de los movimientos sociales. Es en este marco que no se puede dejar de reconocer el esfuerzo de Touraine por romper la explicación simplista que atribuye todo a una lógica dominante/dominado y para ello propuso una mirada más bien centrada en los sujetos, entendidos como creadores y productores del cambio social. Mirada que se valora en este trabajo.

Para que sean visibles los alcances, así como los límites de la acción de protesta, es sumamente importante considerar sus principales interacciones: “el carácter de una institucionalización del descontento, la acción colectiva sindical y el poder político son presa de una dialéctica convergente y contradictoria al mismo tiempo” (Gómez 2009, 162). Este trabajo hace énfasis en el carácter político de la acción colectiva tanto para señalar su *campo de acción histórica*, como para caracterizarlo como una parte constitutiva de la gestión de conflictos en la sociedad moderna, esto siempre en el marco de la reflexión sobre el rol del sindicalismo en las democracias capitalistas, reflexión que se ampliará un poco más adelante. Así:

La capacidad de acción colectiva muta en poder de limitar/controlar el potencial de movilización y en poder de garantizar, por medio de la negociación y el compromiso, la regularidad de la producción a cambio de beneficios que muchas veces son de largo plazo (Gómez 2009, 163).

Daniel Camacho Monje deja claro que los movimientos sociales se constituyen a través del conflicto y su relación esencial con la lucha de clases, todo esto en su ponencia sobre las definiciones conceptuales de los movimientos sociales, el cual:

centra el debate en la afirmación de que los movimientos sociales no pueden entenderse sin una referencia a las clases. Combate tanto el reduccionismo del esquema simplista, que no ve más allá de dos clases fundamentales y rígidas, como el otro reduccionismo, que consiste en concebir los movimientos sociales sin relación alguna con las clases (Camacho Monje 2015, 225).

Cerrando este primer grupo de definiciones, se determina para este trabajo a movimiento popular como una forma de acción colectiva más amplia que incluye a varios sectores populares; movimiento porque implica acción y no porque tenga niveles de organicidad u

objetivos que superen lo coyuntural. Mucho más cercano al concepto de acción colectiva que al de organización pues en su inmensa heterogeneidad, rara vez supera la espontaneidad, la reivindicación específica y —con suerte— la explosión social.

2.2. Conceptos generales

Se deber ser todavía más preciso, en la toma de una postura teórica de carácter general, pues el riesgo de caer en la versión de la mítica de los obreros, lamentablemente sigue vigente, por eso necesario aclarar que:

la historia por sí misma no es portadora de nada, salvo de particularidades, y que el proletariado se constituye en agente de cambio no en el terreno de la historia sino de la política; por un lado, frente a sí mismo (como intento de su propia superación), y por otro, en relación con las clases o grupos a los que se enfrenta. Sólo en esta disputa, en este enfrentamiento en el terreno concreto de la lucha de clases, se crea a sí mismo (Burbano de Lara 1985, 27).

Precisamente uno de los ámbitos que proponía Antonio Gramsci —y que se acoge para este trabajo— para el estudio de los grupos subalternos es observar los niveles de autonomía de una determinada organización o movimiento. Así después de observar sus formaciones objetivas, sus adhesiones o disputas frente a lo hegemónico Gramsci propone mirar:

4) las formaciones propias de los grupos subalternos para reivindicaciones de carácter reducido y parcial; 5) las nuevas formaciones que afirmen la autonomía de los grupos subalternos, pero dentro de los viejos marcos; 6) las formaciones que afirmen la autonomía integral, etcétera (Gramsci 2013, 438).

Teniendo claro que “el conflicto es constitutivo de la acción colectiva” (Barrera 2001, 55), se mira entonces el conflicto como contienda, es decir como enfrentamiento, como extrema contradicción, se miran las relaciones de poder y se mira la clase como identidad y también como conflicto, entendiendo que:

(...) las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por esas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase (Thompson 1979, 37).

Es en la experiencia en donde un individuo logra identificar su posición en el sistema de producción, a esa experiencia se le va colocando nombres y categorías “las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo dirimen” (Marx 2008, 5). Pero también, como dice Adolfo Gilly interpretando a Benjamin “Experiencia es confianza en las propias fuerzas. ‘Ninguna clase puede encarar la acción política sin tener confianza en sí misma’” (Gilly 2006, 141). Para la época que aquí se estudia, existía —tal vez sembrada— en las bases de las organizaciones sindicales y de alguna manera también en las dirigencias, una fascinante forma de confianza en sus propias capacidades basada una especie de fe sobre su rol en la historia. El *mito de la clase obrera* (Ibarra 2007, 61) que antes se ha mencionado, podría, en parte, haberla sustentado. Muchos en aquella época Bentenían la intención de “hacer estallar la continuidad de la historia” (Benjamin 1991, 206), eso nos consta.

Así, el Paro Nacional del Pueblo del 21 de octubre de 1982, será estudiado como una acción colectiva en el marco de una coyuntura histórica concreta y una serie de contradicciones, disputas y tensiones también existentes. Se le dará más atención a esto que a todos los incendiados discursos sobre la clase que inflamaban la boca de las dirigencias de la época.

2.2.1. Acción colectiva

Charles Tilly logró demostrar que la protesta o el comportamiento colectivo violento provenían de una decisión racional ponderada y que no eran “algo anormal, desorganizado o contagioso” (González Calleja 2012, 51). Aquí entendemos a la acción colectiva como una forma de actuar social, concertada y decidida, es decir “un comportamiento deliberado y racional, dirigido hacia el cambio social” (González Calleja 2012, 51).

La definición para acción colectiva de Alberto Melucci que —por cierto— va en la misma línea de los propuesto por Touraine, la entiende como un sistema de acción multipolar y multidimensional (Melucci 1994, 158):

la acción colectiva se considera el resultado de intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones. No puede, por tanto, considerarse exclusivamente como el efecto de las precondiciones estructurales o como la expresión de valores y creencias. Los individuos que actúan colectivamente “construyen” su acción mediante inversiones “organizadas”: esto es, definen en términos cognoscitivos el campo de posibilidades y límites

que perciben, mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones como forma de dotar de sentido a su “estar juntos” y a los objetivos que persiguen (Melucci 1994, 157).

Los actores sociales producen acciones colectivas porque son capaces de definirse a sí mismos y de definir sus relaciones con otros actores, determinar su posición frente a los recursos disponibles y son plenamente capaces de observar y dirimir sobre oportunidades y obstáculos. Definen entonces sus objetivos, determinan los medios para alcanzarlos y hacen lecturas de su entorno (Melucci 1994, 158). Esto sucede en el marco acotado por un contexto social e histórico concreto, que hace que una serie de urgencias les hagan plantearse la acción sobre la coyuntura y no necesariamente sobre la resolución del conflicto de clases, aunque estén actuando en base a este.

En consonancia con lo expuesto hasta aquí, se cierra este apartado con una cita de Antonio Gramsci:

todo acto histórico no puede sino ser realizado por el “hombre colectivo”, es decir presupone el conseguir una unidad “socio-cultural” por la cual una multiplicidad de voluntades disgregadas, con fines heterogéneos, se ensamblan para lograr un mismo fin, sobre la base de una (igual) y común concepción del mundo (Gramsci 2022, 46).

2.2.2. Poder

Es momento de plantearse otra definición sustantiva. Como dijo en 1985 Felipe Burbano de Lara, mientras reflexionaba sobre el poder y el Paro del Pueblo del 1982 que aquí se estudia:

el poder no es algo fijo, dado de una vez para siempre, sino que es algo que circula, se mueve en esta compleja y difícil trama que caracteriza la sociedad ecuatoriana. En octubre de 1982 fue el pueblo que se apropió del poder, aunque en un hecho fugaz y transitorio (Burbano de Lara 1985, 10).

Burbano alcanzó esta brillante conclusión —como él mismo lo admite— basado en lo propuesto por Foucault en su texto *Las Redes del Poder*. El mismo Foucault admite —en ese texto— que realizó su postulado sobre el poder reflexionando sobre lo previamente planteado por Marx, lo que permite hacer otra importante toma de posición:

Aquí un cierto marxismo académico utiliza frecuentemente la oposición clase dominante/clase dominada, discurso dominante/discurso dominado, etc. Ahora, en primer lugar, ese dualismo nunca será encontrado en Marx, en cambio sí puede ser encontrado en pensadores reaccionarios y racistas como Gobineau, que admiten que en una sociedad hay dos clases, una dominada y la otra que domina. Usted va encontrar ello en muchos lugares, pero nunca Marx

porque en efecto Marx es demasiado astuto como para admitir esto, él sabía perfectamente que lo que hacen la solidez de las relaciones de poder es que ellas no terminan jamás, que no hay de un lado algunos y de otro lado muchos, ellas atraviesan en todos lados; la clase obrera retrasmite relaciones de poder, ejerce relaciones de poder (Foucault 1991, 14).

Queda clara la posición que se tiene sobre el poder en este trabajo. Así mismo sobre los movimientos sociales que son constituidos en el seno de conflicto de clases en el marco también de otras conflictividades, por lo que expresan su acción hacia objetivos más concretos y urgentes, aunque no sea raro que se planteen también la derrota, transformación o toma del poder.

2.3. Huelga

Una de las acciones colectivas frecuentes para la época y que constituyó uno de los elementos centrales del Paro en análisis es la huelga. Para la académica argentina Elizabeth Jelin, la huelga es:

el medio central de expresión del poder de la clase obrera. Lo específico de la clase obrera (especialmente pero no únicamente del proletariado industrial) es que no está compuesta por el conjunto de productores de los bienes y servicios en la sociedad capitalista. En consecuencia, en sus manos está la posibilidad de paralizar el proceso productivo, posibilidad que puede ser legal o ilegal, pacífica o violenta, limitada o masiva, y de obedecer a las motivaciones más variadas. De hecho, la huelga es la única expresión del poder de la clase obrera, que deriva directamente de su posición estructural en el proceso productivo (Jelin 1974, 26).

Ernest Mandel por su parte dijo al respecto: “Toda huelga importante contiene en germen la lucha de clases llevada hasta su consecuencia extrema, a saber: poner en discusión el poder del capitalista en la empresa, y de la clase capitalista en la sociedad y en el Estado” (Mandel 1974, 17).

Cuando la huelga, forma radical, consciente y organizada de acción colectiva, es acogida y accionada por grandes franjas de la población, debe ser entendida desde una polémica categoría —tomada, muy a su disgusto, por Rosa Luxemburgo de Bakunin y enarbolada por tantos otros anarquistas— hablamos de la huelga de masas o huelga general. Luxemburgo, hace una sólida defensa de esta herramienta como medio de transformación social, para ella la huelga de masas es “la forma natural y espontánea de toda gran acción revolucionaria” (Luxemburgo 1970, 95). La autora dirá que la huelga es “la forma universal de la lucha de

clases proletaria determinada por el nivel actual del desarrollo capitalista y de las relaciones de clase” (Luxemburgo 1970, 96).

Esta toma de posición provocó —en su época y se debate incluso hoy— un cisma dentro del constante debate sobre la protesta obrera y el sentido político de la acción colectiva. Cisma que creció en magnitud cuando se unió a la valorización que hace Luxemburgo sobre la espontaneidad, la imprevisibilidad del apareamiento de la acción colectiva de masas y el rol de estas dentro del proceso político. De hecho “Lenin criticó en numerosas ocasiones la ‘espontaneidad’” (Jelin 1974, 13). Y es así que se generó un rico debate al respecto. Para este trabajo privilegiamos la posición de la revolucionaria polaca. Ella se preguntará en medio de este debate que —al final— se volvió en profunda crítica a la forma burocrática de organización de los partidos: “¿Creen ustedes que el comité directivo del partido puede hacer la huelga de masas? No, la masa debe arrastrar al comité directivo del partido” (Luxemburgo 1970, 121).

En cierta medida y guardando las respectivas distancias, esto es lo que pasó en el Paro del Pueblo. Las bases arrastraron a sus dirigencias hacia la protesta, y estas —para salvar la democracia— detuvieron la realización o la profundización de la huelga general que en el caso ecuatoriano a inicios de la década de 1980, al parecer tomaba el nombre de *huelga indefinida*.

Luxemburgo fue deliberadamente censurada durante décadas en las organizaciones de izquierda. Tanto que hasta la década de 1970 no se había publicado una sola traducción al español de su potente texto: Huelga de Masas, partido y sindicatos. Pues a partir de la consolidación de la Revolución Rusa, en 1922, se exportó lo que se ha conocido como el manual de Lenin: un método, o más bien una ética de trabajo, que hacía su centro en la necesidad de construir un partido, un conglomerado de revolucionarios profesionales, muchos han entendido a este camino como el único camino capaz de lograr una revolución, la única organización capaz de hacer una revolución es el partido de militantes cuasi perfectos.

En Ecuador, los dirigentes de los partidos “revolucionarios” y a su vez los dirigentes de los sindicatos tomaron este postulado al pie de la letra y por décadas repitieron sin cuestionárselo que “no había las condiciones” (Ponce 2021). Y, por supuesto, ni los militantes ni los dirigentes de izquierdas tuvieron acceso sino hasta mucho después a las críticas de Luxemburgo sobre la burocratización, tanto como su impulso al uso de la huelga de masas,

como forma concreta de transformar las sociedades. Se debe precisar que estos temas en el Ecuador de la década de 1980 se debatían escasamente.

La huelga que va creciendo espontáneamente hacia huelga de masas, plantea también —y de inmediato— el problema de la organización, “Toda lucha conjunta de trabajadores que rebasa los objetivos inmediatos y estrechamente corporativistas, plantea el problema de las formas de organización de la lucha, problema que contiene en germen un desafío al poder capitalista” (Mandel 1974, 11). En el caso del Paro del Pueblo, las centrales sindicales fueron en ese aspecto también rebasadas por formas de democracia directa, comités ampliados de huelga que surgían sin ninguna orden vertical y que permitían poco a poco la incorporación de otros sectores sociales a la vertiginosa dinámica de la acción colectiva. Así precisamente se pasaba de paralización a huelga de masas.

La Rosa Roja, tempranamente y sin ver la deriva burocrática de la Unión Soviética, diría que “habría que enmendar la tendencia a sobrestimar la organización que paulatinamente de un medio con vistas a un fin se convierte en un fin en sí mismo, en un bien supremo al que deben estar subordinados todos los intereses de la lucha” (Luxemburgo 1970, 110).

Elizabeth Jelin, al igual que lo hizo en su momento Mandel, resuelve este debate de la siguiente manera:

De hecho, no se trata de elegir entre una teoría o estrategia de la espontaneidad y otra de la organización. Gran parte de las dificultades con la polémica posterior a los debates entre Lenin y Rosa Luxemburg se basó en una conceptualización de la espontaneidad y la organización como opuestos, cuando en realidad no lo son. No puede haber acción revolucionaria sin la participación de la masa, que necesariamente manifestará elementos de espontaneidad; al mismo tiempo la acción revolucionaria no puede surgir solamente de la masa, sin organización (Jelin 1974, 15).

En el caso ecuatoriano —como se verá en siguientes capítulos— la acción colectiva, en gran medida *espontánea y orgánica*, no tenía una correlación o al menos un diálogo con los objetivos de las centrales sindicales; al punto en que éstas últimas, dejaron que el poder vuelva rápidamente a sus causas institucionales, de hecho, colaboraron para que así suceda, colocando con el bien mayor la defensa de una recién recuperada democracia.

2.4. Autonomía obrera y clasismo

Durante la década de 1980, tampoco se le daba importancia a la posibilidad cierta de hacer una sociedad donde los trabajadores sean los dueños de los medios de producción. No solo

porque no había aquel partido ideal, repleto de militantes perfectos, preparados y dispuestos a morir por la revolución —en fin, porque no había las condiciones—; sino porque, en la práctica, las dirigencias buscaban hacer el rol de intermediadores del conflicto de clases.

Como dice Carmen Rosa Balbi, refiriéndose al caso peruano, “el clasismo como movimiento no pudo pensar en una sociedad autogestionaria; pero ese no era su objetivo” (Balbi 1989, 184).

Jugarán un rol determinante los nuevos partidos de izquierda. Estos llevaron las categorías marxistas al sindicato, pero más allá de hablar de socialismo como meta escatológica y lejana, no inculcarían un planteamiento alternativo de sociedad, donde el proletario tuviera un rol determinante en la gestión de los medios de producción (Balbi 1989, 184).

Para interpretar correctamente estas citas, es necesario recordar que, a partir de 1977, el FUT estaba compuesto por tres centrales sindicales que se habían declarado *clasistas*. A esto se refiere Balbi específicamente con clasismo: “a un discurso ligado a la clase y a una acción ligada a la institucionalización de la resolución del conflicto” (Balbi 1989, 184). Resulta evidente que esta categoría da buena cuenta de las dinámicas de las organizaciones pertenecientes al FUT. En el caso ecuatoriano tanto los partidos nuevos de izquierda (MRT, MIR, etc.), como los viejos (Socialista, Comunista), llevaron los postulados marxistas a los sindicatos.

Se creó así el espejismo de que el movimiento obrero, en sus movilizaciones y medidas de fuerza —que expresaban una nueva conciencia de oposición a la patronal—, era expresión superior de una conciencia socialista. A la asunción de dichas categorías ciertamente se sumaba una vaga denuncia del sistema, pero que no se concretaba en una dimensión de totalidad en tanto portadora de una concepción de sociedad alternativa, una meta hacia la cual la clase se mueve y en la que existe la conciencia de que tiene un rol protagónico en nuevo proyecto social (Balbi 1989, 183).

Quedan por revisar las razones por las cuales hubo tanta receptividad frente a estas tesis clasistas y supuestamente radicalizadas dentro de una especie particular y privilegiada de *clase obrera ecuatoriana*. Pues eran los trabajadores de las fábricas e industrias quienes para la época y de manera general —pese a la cuasi carcelaria disciplina de las fábricas— eran definitivamente “mejor pagados y mejor tratados” (Hobsbawm 1979, 269). En comparación con el resto de los trabajadores, estos contaban con una serie de beneficios consagrados en la ley y los contratos colectivos; sendas conquistas que les colocaban, sin duda, en mejores condiciones que el resto de los trabajadores, sobre todo de aquellos considerados trabajadores

informales. Lo que resulta fascinante es que, precisamente, estos obreros privilegiados eran —en gran medida— los que se tomaban las fábricas, cerraban las calles, alimentaban sus propias huelgas además de realizar huelgas solidarias que respaldaban las huelgas en otros centros de trabajo. Para fortuna de esta tesis, se pueden hacer aproximaciones a las condiciones concretas y hasta a la subjetividad de los obreros industriales gracias a los trabajos de Mayra Achío (1983), Juan Pablo Pérez Sáinz (1985, 1986) y Marco Velasco (1980).

2.5. Entre la insurrección obrera y la intermediación del conflicto

Con esto en mente, se debe reconocer cómo Luxemburgo, mucho antes que Offe y Weisenthal (1992) o Marcelo Gómez (2009) subrayaran “la dinámica específicamente política constitutiva de la acción colectiva sindical” (Gómez 2009, 161). La Rosa Roja había dicho:

No existen dos luchas distintas de la clase obrera, una económica y otra política; existe sólo una única lucha de clase que tiende simultáneamente a limitar la explotación capitalista dentro de la sociedad burguesa y a suprimir la explotación capitalista y al mismo tiempo la sociedad capitalista (Luxemburgo 1970, 102).

Es decir, incluso dentro de la más mínima protesta obrera podremos distinguir esta conexión con la insurrección y al menos un grado mínimo de consciencia de clase desplegadas contra unas condiciones determinadas de explotación y el régimen disciplinario de la fábrica. De allí, puede partir una observación sobre la posible politización, parcial e inestable de los trabajadores fabriles ecuatorianos en la década de los 80. Reflexionando sobre esto y sobre la poca correspondencia entre la movilización popular, frente a los resultados de los partidos de izquierda en elecciones, Marco Velasco, encuentra en nuestra realidad concreta el vínculo que señalaba con tanta claridad —hace ya más de un siglo— Rosa Luxemburgo, y dice en claro tono de reclamo:

Entonces, los conflictos laborales, que enfrentan a un determinado capitalista y a un grupo de trabajadores, pertenecen al ámbito de la sociedad civil, del derecho privado que los regula e institucionaliza, subsumiendo a los reclamos de los trabajadores en la lógica de la dominación capitalista y manteniendo siempre latente su inevitable contenido subversivo. No importa lo elemental de los reclamos siempre hay empresarios rapaces y despóticos, para los cuales atreverse a reclamar es ya subvertir el orden. Para ello restringir el espacio de lo político y despolitizar la “sociedad civil” será objeto permanente de las fuerzas conservadoras. Y esto implica además el por qué las incendiarias huelgas nacionales o las multitudinarias manifestaciones del primero de mayo no se expresan luego en el fortalecimiento, al menos

electoral, de las organizaciones de izquierda marxista que, se supone, representan o expresan los intereses históricos de la clase obrera. Al parecer la oposición al Fondo Monetario Internacional, a los monopolios imperialistas, a la oligarquía, al neoliberalismo, etc.; no se sustenta de manera subjetiva en el cuestionamiento de las masas obreras al orden establecido de la producción, puesto que este pertenece a la esfera de la “sociedad civil”, cuya característica principal es la apoliticidad (Velasco 1987, 26).

El camino para superar al capitalismo sería la conformación de un partido de izquierda que conduciendo a los obreros o conducido por ellos, gane las elecciones e instaure el socialismo. Aunque la organización social era robusta no se correspondía con los resultados electorales de los partidos que se presentaban a sí mismos como bastiones de la *clase trabajadora*. Las aspiraciones de los obreros reales eran otras.

Cabe decir que la relación de los partidos de izquierda fue concentrándose en la proximidad que estos tenían con las dirigencias sindicales cosa que las bases veían con molestia (López 2021). Y pese a que —al parecer— la ética de trabajo prescrita por Lenin dio visibles resultados para la década de 1970 en términos de organización de los trabajadores y cantidad de sindicatos, para la década de 1980, esta distancia con las bases permitió un vacío de referentes en la construcción de identidad política que fue —muy probablemente— llenado por los mismos espacios que generaron referentes de identidad ligados al consumo (Pérez Sáinz 1985) para el resto de los ecuatorianos, la radio, la televisión y los periódicos especialmente. Se construyó tesoneramente organización y una vez que se la creyó consolidada, la decisión se centralizó (todavía más) y apareció una élite de dirigentes sindicales que convivía dentro y con los partidos de la izquierda.

Así, los sindicatos, respaldados por las grandes centrales sindicales, resolvían con bastante éxito y eficacia —a través de la negociación, de la presión y en su caso la protesta— muchas de las necesidades de los obreros de la época. Sus demandas podrían sintetizarse de manera general, citando a Juan Pablo Pérez Sáinz, como: “acceso libre al trabajo, estabilidad del empleo y salarios los más elevados posibles” (1985, 37). Es decir, empezaban a ocupar el rol de intermediarios o “administradores del descontento” (Jelin 1974, 29), el cual conservarán en paradójica tensión con la esporádica movilización y reivindicación política, aún hasta la actualidad.

Cabe observar el hecho de que esta tensión después un gigantesco proceso de movilización se resolvió en favor de este nuevo rol que los sindicatos y las centrales empezaban a asumir con tanta eficiencia. Este fue el rol de *agentes resolutores especializados* en una coyuntura que

incorporaba el novedoso reconocimiento legal de su práctica y la “institucionalización de los canales para la solución de los conflictos” (Jelin 1974, 29). “Con la especialización y formalización surge el árbitro profesional y el líder sindical especializado, los “administradores del descontento”, cuyas tareas consisten en resolver conflictos actuando racional y autónomamente, y manipular protestas” (Jelin 1974, 29).

Tanto para Touraine (citado en Sulmont 2011, 14) como para Balbi (1989, 187), este rol en el marco de una democracia representativa es —desde su visión— un rol sumamente positivo.

En cambio, los historiadores y sociólogos de la acción obrera, como yo mismo, han mostrado que el movimiento obrero estaba guiado por obreros calificados, defensores del trabajo y de la autonomía obrera, y que su acción había sido más positiva que negativa pues inventaban otra sociedad y no se contentaban con criticar el capitalismo y la organización del trabajo (Touraine 1994, 237).

Sin lugar a dudas, el movimiento sindical contribuyó a la creación de una versión específica de la sociedad ecuatoriana, del modo de producción y de modelo de gestión de la política adaptados a la realidad ecuatoriana de ese periodo histórico. Es decir, ayudó a consolidar un proceso de *democratización* específico en el Ecuador en el marco de la democracia liberal-representativa. En este trabajo me remito a señalar este rol, mismo que asumieron deliberadamente las dirigencias, como árbitros del conflicto capital-trabajo. Esto al tiempo que se les reconoce su innegable papel en la resistencia social, frente a la expansión del neoliberalismo, un rol que asumieron valientemente en los momentos que empezaba el brutal ajuste estructural de la economía latinoamericana, rol que nunca esbozo siquiera un proyecto de nueva sociedad, esto visto como una expresión de sus limitaciones políticas.

Se hace énfasis en la contradicción entre el discurso “radicalizado” de los partidos y sindicatos de la izquierda y el rol de intermediadores del conflicto que, con el tiempo, acabó resolviéndose en favor de su total integración a la dinámica capitalista; pero que —paradójicamente— mantuvo y mantiene, un discurso ligado a la lucha de clases.

Pérez Sáinz, quien hace un manejo virtuoso de los postulados de Carlos Marx, permite ver con claridad la configuración específica que se buscaba en la época, para la que las centrales sindicales aportaron y que en cierta medida lograron alcanzar:

La constitución de un modo de producción específicamente capitalista, que implica que la producción de plusvalor relativo devenga [en la] modalidad predominante de valorización, {pues esta} permite no solo el desarrollo de la forma sujeto(a) sino también la constitución de

formas políticas. La producción del plusvalor relativo posibilita que el Estado capitalista aparezca como la encarnación del interés general de la sociedad ya que puede garantizar la propiedad privada de todas las mercancías incluida la fuerza de trabajo (Pérez Sáinz 1985, 29).

En la consolidación de este modelo que individualiza al sujeto social y coloca al estado como la encarnación del bien común, participaron las centrales sindicales como mediadores del conflicto. Los resultados a largo plazo fueron la consolidación de lo que Pérez Sáinz denominaba la *forma sujeto*, es decir, tanto el individuo integrado al sistema democrático a través del consumo como la consolidación de las estructuras burocráticas sindicales como mediadoras de los conflictos laborales.

Ernest Mandel ofrece elementos para comprender porque el Paro del Pueblo a pesar del inmenso despliegue de movilización y energía social no logró impugnar seriamente a los poderes establecidos como tantos soñaban:

si bien toda huelga amplia, duradera y combativa contiene en germen la creación de semejante poder de impugnación al poder capital, son muchas las exigencias requeridas para que este germen se desarrolle. Dicho en otras palabras: normalmente, este germen no tendrá desarrollo alguno. Y es que entre la impugnación potencial y la impugnación efectiva del régimen capitalista no sólo existe una diferencia de grado, una diferencia de amplitud del movimiento, de número de huelguistas, del impacto que produce la huelga sobre la economía capitalista nacional. La diferencia que existe entre una impugnación potencial y una impugnación efectiva es un determinado *nivel de conciencia* de lo trabajadores: si no se toma toda una serie de decisiones conscientes, ninguna huelga puede poner en discusión el régimen capitalista, ningún comité de huelga puede transformarse en soviét (Mandel 1974, 14).

En el caso histórico que aquí se analiza, no hubo ni la voluntad ni la intención por parte de las dirigencias sindicales para tomar este tipo de decisiones, esto además de que las ambiciones de la mayoría de los sectores movilizados ni se acercaban a soñar con esta impugnación tan profunda pues estaban ligadas a la búsqueda de soluciones inmediatas a los problemas económicos que les asfixiaban. Esto no significa que no hayan existido sectores que presionaban hacía una *huelga indefinida* como herramienta para cambiar las relaciones de fuerza dentro y fuera del Estado. Prueba de ésto son las convenciones obreras posteriores al Paro en las que la CEOSL específicamente embandero esta posición. Las razones por las cuales esta central asumió tal posición podrían construir un nuevo y fascinante campo de investigación.

2.6. Estado

Juan Pablo Pérez Sáinz dijo en una entrevista para este trabajo que, durante la década de 1980, todas las perspectivas —incluidas las de las dirigencias de los sectores populares— estaban ligadas al rol del Estado; es decir, “eran estatistas” (2021). Lo dicho por Pérez Sáinz coincide plenamente con lo que ya se ha citado, por parte de Carmen Rosa Balbi para el caso peruano, en términos de que no eran poseedores de un proyecto diferente de sociedad. Es decir, no pensaban a la sociedad sin un Estado. De igual manera, juntos Pérez Sáinz y León dirán que “la visión del FUT sobre un nuevo orden nos parece redistributivista y estatista” (León y Pérez Sáinz 1986, 133).

En relación al Estado, es preciso también realizar algunas definiciones. Elizabeth Jelin afirma —como resulta lógico— que el centro de la disputa del movimiento sindical se limita a los derechos. Pues hasta allí llega el horizonte de los sindicalistas de la época, o sea en el Estado, ya que:

Cualquiera que sea el modelo de relación sindicato-partidos, la intervención del Estado es central en todos los países. El Estado interviene directamente, presionando a las partes en conflicto. Las decisiones que afectan a las condiciones de vida de la clase obrera están en mayor medida en manos del Estado que de la empresa individual o grupo de empresas con los cuales negocia el sindicato (Jelin 1974, 33).

A esto habría que agregarle que, es desde la presión al Estado que se puede —efectivamente— conseguir una serie de servicios y recursos que permiten completar lo que se necesita para garantizar la reproducción de la vida de los trabajadores.

Esta centralidad del Estado es casi universal en la segunda mitad del siglo XX. Los grupos de poder, en vez de trata de ganar más poder limitando las áreas de acción del Estado y ampliando el control sobre las áreas de acción libradas al juego de grupos privados, se convierten en grupos de presión sobre el Estado cada vez más poderoso. Los métodos y canales de la acción estatal pueden variar de un país a otro, puede haber diferencias en el grado de centralización de las decisiones, en la eficacia del aparato estatal o en la amplitud de las áreas cubiertas por legislación especializada, pero en todos los países el conflicto industrial necesariamente se traduce y se transforma en un conflicto político en el seno del Estado (Jelin 1974, 34).

Si bien, de manera general, se entiende al Estado desde la forma tradicional marxista, es decir como un instrumento de dominación de clase, no se lo entiende de una manera estática, pues como sostiene Jelin, contiene en su interior el conflicto. Se debe entonces entender al Estado

también como campo de lucha, o campo de fuerzas en disputa por la reproducción o reforma del orden social (García Linera 2010).

El Estado ecuatoriano, disputado además por distintas élites en la década de 1980, pretendía producir una configuración específica de ciudadano que estaría ligada indefectiblemente al consumo y a la participación política a través de las urnas. En palabras de Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz “esta reafirmación de los trabajadores como ciudadanos implicaba el reforzamiento de las tendencias hacia su atomización y a su constitución como agentes sociales inmersos en relaciones fetichizadas” (León y Pérez Sáinz 1985, 125).

2.7. Identidad de los obreros

Para abordar esta temática:

Necesitamos concebir al hombre como una serie de relaciones activas (un proceso) en el que, si bien la individualidad tiene la máxima importancia, no es, sin embargo, el único elemento en consideración. La humanidad que se refleja en cada individualidad está compuesta de diferentes elementos: 1) el individuo; 2) los demás hombres; 3) la naturaleza (Gramsci 2022, 27).

Con base en los trabajos de Mayra Achío (1983), Juan Pablo Pérez Sáinz (1985, 1986) y Marco Velasco (1980) encontramos otra tensión entre la construcción de esta “forma-sujeto” (Pérez Sáinz 1985) ciudadano y la *forma proletario* que —probablemente— nunca se concretó en los términos que buscaban y rebuscaban los marxistas ecuatorianos. Pues, los obreros industriales, al no ver totalmente satisfechas en el salario sus medios de reproducción y los de su familia, se aferraron a formas no mercantiles de reproducción ligadas más bien a otros modos de producción todavía presentes especialmente en los sectores rurales. Lo cual tuvo —por supuesto— un efecto en su identidad, en su relación con la fábrica y —por supuesto— con la ciudad.

Ciudadanía política o *forma sujeto* individuo, que entra en conflicto con una comprensión más amplia e inclusiva de la ciudadanía; como puede ser la ciudadanía social (Marshall 1997) configurada por un grupo de *derechos sociales* que incorpora los derechos civiles, los políticos, los económicos, los comunitarios y culturales, en su comprensión. Todos estos derechos incorporados en un solo aparato de comprensión pueden ser también considerados como derechos colectivos.

Los trabajos de Pérez Sáinz (1985, 1986) permiten observar la tensión entre lo colectivo y lo individual esto en el marco de un esfuerzo para consolidar la *forma-sujeto*; esfuerzo visible e

intencional de las élites políticas y económicas, entre las que se incluye la dirigencia del movimiento sindical, que se concretó a través del uso y manipulación —no siempre con éxito— del sistema representativo. De todas maneras, esta forma se fue consolidando sobre todo a través del acceso de la sociedad al consumo capitalista. Estas dos publicaciones analizan una serie de acciones que dan cuenta de las tensiones y conflictos entre los fragmentos de una identidad más bien compleja, algunos de ellos ligados al consumo y a la participación política individualizada-intermediada frente a otras formas colectivas de integración en la sociedad, algunas de ellas ligadas a la clase y otras a orígenes sociales o étnicos.

2.8. Gestión de la política

En la siguiente cita se puede observar una contradicción descrita por Elizabeth Jelin, que permite un marco explicativo para el hecho histórico que se abordará en próximos capítulos:

La posición estructural de la clase obrera en las sociedades capitalistas, que constituye la base objetiva para el surgimiento de la protesta obrera, ya sea como demanda reivindicativa o como cuestionamiento de la estructura social; y el proceso de burocratización social y sindical, que lleva a una creciente integración de las organizaciones obreras y de las relaciones entre clases en la estructura social y política dominante (Jelin 1974, 9).

Para el final del periodo de dictaduras militares, el movimiento sindical gestionaba una parte importante de *lo político* dentro de la sociedad ecuatoriana, entendido lo político como la posibilidad directa de influir en la toma de decisiones. Antonio Gramsci reconoce que en momentos excepcionales puede “suceder que la dirección política y moral del país en una determinada coyuntura no la ejerza el gobierno, sino una organización «privada», e incluso un partido revolucionario.” (Gramsci 2022, 97). No se afirma que el FUT haya sido algo siquiera cercano a un partido revolucionario, pero sí que ejercía un alto grado de representación política, y para el momento del Paro del Pueblo, incluso más que la misma Cámara Nacional de Representantes. De hecho, este era el objetivo real de la dirigencia sindical durante el estallido: de alguna manera suplantar a la cámara de representantes como —parcialmente— lo habían hecho durante el régimen autoritario de los años setenta:

(...) (dada la incapacidad de representación de los partidos políticos por su no reconocimiento legal, entre otras causas) que el FUT se erigiese en el principal interlocutor de los trabajadores. De esta manera, durante el período autoritario, el movimiento sindical tuvo, ineludiblemente, una importante presencia política (León y Pérez Sáinz 1986, 96).

Se cumple entonces a cabalidad —nuevamente— lo propuesto por Elizabeth Jelin:

El sindicalismo también está altamente politizado cuando no existen partidos políticos u otras organizaciones que expresen los intereses obreros. En estos casos, el movimiento sindical asume casi automáticamente las funciones de partido político como único canal de representación de los intereses de una parte importante de la población (Jelin 1974, 35).

Esto sucedió como producto de lo que Juan Pablo Pérez Sainz señala como la “gran insensibilidad del sistema representativo ante los problemas de los sectores populares” (Pérez Sainz 1985, 9). Pero también de lo que señala Elizabeth Jelin en términos de que:

La ampliación del campo de acción del Estado y su importancia para el conflicto industrial hacen asumir al movimiento sindical un papel político mucho más amplio que el que tendría en el conflicto industrial definido estrictamente (Jelin 1974, 33).

Para finales de octubre de 1982 el Frente Unitario de Trabajadores tenía más representación que la Cámara Nacional de Representantes y que el presidente mismo. Le faltaron la voluntad y la claridad para mandar a nombre del pueblo desde ese poder que habían obtenido en la movilización social.

Avanzando desde las definiciones primordiales sobre sindicalismo, movimiento obrero, movimiento sindical, movimientos sociales, movimiento popular y autonomía, se ha sustentado que la clase obrera y el movimiento social se crean a sí mismos a través de las disputas provocadas, principalmente, por el conflicto entre clases. Es decir, se conforman a sí mismos a través de la acción colectiva. En otras palabras, pese a existir los conflictos de clase como hechos objetivos, la conciencia de clase se adquiere a través de la vivencia y procesamiento consciente de aquello que se conoce como explotación entendida esta como una forma extrema de sometimiento. Esta conciencia incluso puede reconocer la capacidad de los obreros para transformar la sociedad y sus relaciones.

El poder se ha entendido como un interminable entramado de relaciones que atraviesa a toda la sociedad, de tal manera que según como estén colocadas las fuerzas en un campo (campo de fuerzas) su configuración y por tanto las posibilidades de análisis varían.

Se ha propuesto una forma de comprensión para la huelga y también para la huelga general, entendidas como herramientas de transformación social, o al menos como expresión de la capacidad de acción de la clase obrera, considerando su potencial en relación con el proceso de producción y la posibilidad de paralizarlo. También se acoge la tesis de la complementariedad, que deviene de la combinación efectiva del trabajo de construcción de

organización política con respecto a la espontaneidad e imprevisibilidad de la acción colectiva de masas.

Se ha incluido la categoría clasismo, que a su vez nos deja ver los límites y alcances del movimiento sindical, así como los espejismos que se han sido creados a su alrededor. Se ha puesto atención a la paradoja que hace que un grupo de obreros, con mejores condiciones que el resto de los trabajadores, hayan sostenido en aquella época buena parte de los procesos de protesta obrera. Y que a través de la fuerza de la acción de sus organizaciones se hayan convertido —perentoriamente— en portavoces del descontento generalizado.

Se deja también demostrado el vínculo que existe entre la acción reivindicativa (económica) y la política y como en cada acto de protesta se puede encontrar grados de consciencia que, a su vez pueden ser considerados desde la mirada de la insurrección ante el modo de producción y su disciplina en la fábrica o en la ciudad.

Se ha visto el rol *democratizador* y sobre todo de intermediador de conflictos que, en el marco de la sociedad capitalista, los sindicatos y sus grandes centrales fueron asumiendo. Lo que, además, da cuenta de una perenne contradicción entre discursos radicalizados y su acción concreta. En este marco, se ha explicado también la centralidad del Estado dentro de la movilización obrera.

Finalmente, se ha logrado volver explícita la tensión y convivencia de varias formas de explicar y construir la existencia del sujeto, o, dicho de otra manera, las variadas vertientes con las que se configuraba al individuo en tanto trabajador y ciudadano para la época.

Capítulo 3. Contextos

Este capítulo contiene un conjunto de información general que permite comprender y analizar el marco político, social y económico en el que se desarrolló el paro que se estudia en esta tesis. Esto tanto a nivel local como internacional. Coyunturas, procesos, dinámicas, hechos y entornos que de varias maneras lo condicionaron, dieron forma y lo propiciaron de maneras directas e indirectas. Antes de seguir es necesario dejar sentado que no es posible ensayar una explicación unívoca sobre el hecho. Lo que sí se puede afirmar es que, una serie interminable de fuerzas, entrecruzamientos e interacciones, tanto locales como globales, tuvieron efectos concretos en la sociedad ecuatoriana de principios de la década de los 80 del siglo XX.

Aquí se ha dividido, con propósitos meramente explicativos, dicho contexto en tres apartados complementarios entre sí, mismos que por obvia necesidad adoptan una forma de presentación y orden diacrónico. Un primer apartado que muestra el entorno internacional, fundamental para entender tanto lo político como lo económico, especialmente en el caso de una sociedad y una economía tan dependiente como la ecuatoriana. Luego, se analiza el contexto económico local, dividido a su vez, en algunas temáticas importantes para la comprensión de panorama ecuatoriano. Para finalizar con una lectura del contexto político local. En conjunto, estos dos últimos apartados dan elementos para acercarse a la realidad social concreta que enmarca y por tanto condiciona al Paro Nacional del Pueblo.

3.1. Contexto internacional

El mundo vivía en vilo a raíz de una división entre dos grandes bloques políticos y económicos, división que devino de un enfrentamiento, no siempre pasivo, entre dos *superpotencias* que se disputaban los recursos y el control del planeta entero. Esta inusual forma de contienda fue conocida como la Guerra Fría. Si bien no hubo una confrontación militar directa entre estos dos gigantes estados federativos, varios fueron los conflictos de todo tipo en los que sus intereses, armas e influencias se vieron inmiscuidos.

Por un lado, un bloque occidental y capitalista, encabezado por Estados Unidos de América, y respaldado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) además de una serie de países allegados o subyugados en todos los continentes. Por otro lado, un bloque oriental y *comunista* (socialismo de Estado) encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que, a inicios de la década de 1980, retomaba recién sus relaciones diplomáticas y de cooperación con la República Popular China (El País 1984). La URSS tenía, además, desde 1955 el *respaldo* de los países miembros del Pacto de Varsovia y otro

grupo grande de países allegados o también subyugados en varios continentes; especialmente en África, el Sudeste de Asia y América Latina (Velarde Rosso, 2017).

Después de breves períodos de relativo acercamiento, distensión y —en algunos casos— hasta cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, al finalizar —maltrecho— en 1981, el periodo del presidente demócrata James Carter, se agudizaron tensiones entre estas dos *superpotencias*. Esta situación fue provocada —especialmente— por la agresiva política armamentista, desafiante a nivel diplomático del republicano Ronald Reagan. *Jimmy Carter*, por su parte, había sostenido una política —al menos nominal— de respeto a los derechos humanos. Lo que significó una serie de acercamientos a sociedades donde se daban procesos sociales respaldados por la *esfera soviética*, así como alejamientos frente a dictaduras y formas *no democráticas* de ejercer el poder.

Se ha hecho un lugar común hablar de la crisis tanto política como económica que conmueve al sistema internacional. Y ello porque es un hecho fácilmente comprobable en la multiplicación de los conflictos bélicos locales, en el endurecimiento del diálogo entre las grandes potencias, en el congelamiento del dispositivo de distensión trabajosamente construido, y, en definitiva, en un recalentamiento diplomático general que cuestiona seriamente la eficacia de la estructura institucional del sistema para generar procesos integradores y atemperar las tensiones internacionales (Escobar 1982, 60).

Debe llamar la atención como la tensión por una posible conflagración nuclear era algo que preocupaba mucho a las poblaciones humanas en aquella época. La siguiente cita, del número 93 de la Revista Nueva, de título “Entre la distensión y el holocausto”, así lo demuestra:

Hasta hace poco, el aspecto básico de la relación entre Estados Unidos y la URSS lo constituía la disuasión mutua por el equilibrio del terror, codificada en los tratados SALT y basada en el concepto de Destrucción Mutua Asegurada (MAD). Era la constatación de que el poder nuclear de ambas potencias estaba lo suficientemente desarrollado para garantizarles una respuesta de contragolpe con una intensidad tal que aseguraba su mutua destrucción. La posición de Reagan ha cambiado ostensiblemente los supuestos de la relación, rebajando a un nivel crítico el llamado “umbral nuclear” (Escobar 1982, 61).

Este clima de tensión se puede sentir también en la última edición del año 1982 de la Revista Vistazo, que al analizar lo que denominan “una batalla legislativa” (Vistazo 1982, 24) sobre el empeño de Ronald Reagan por financiar una serie de 100 misiles MX con un valor de 25 mil millones de dólares, los cuales:

localizados en un área de aproximadamente 15 millas cuadradas podrían sobrevivir al ataque de los misiles intercontinentales de la Unión Soviética y lo podrían hacer, según esta teoría porque, la primera cabeza nuclear soviética explotaría en este reducto cerrado lanzando al aire una inmensa nube de polvo y radiación que a su vez detonaría otras cabezas de los misiles soviéticos (efecto fratricida) mientras los misiles MX permanecería intactos y podrían ser lanzados para un contraataque devastador (*Vistazo* 1982, 24).

Así, las tensiones sociales en América Latina recrudecieron para inicios de la década de 1980, especialmente en Centroamérica, a raíz de la Revolución Sandinista de Nicaragua en 1979. La gesta en Nicaragua, impulsada por un modelo de *frente popular* con varias fuerzas en su interior, se vio hegemonizada para inicios de la década de 1980, por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FLN). El FLN se acercó tibiamente a la Unión Soviética, lo que generó una reacción internacional, sobre todo, para impedir que el modelo político *socialista* se expanda por el continente. Esto volvió la atención y la presión internacional sobre la guerra civil, que se desarrollaba esos momentos en El Salvador, la cual se vio especialmente afectada por el cambio en la política internacional propuesto por el nuevo presidente norteamericano. Pues, en lo que se conocería después como la Doctrina Reagan, misma que se planteaba contener la expansión del *comunismo* por el mundo, y además “abogaba por el derecho de los EE. UU. de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes” (Graebner, Burns y Siracusa 2008, 76). Cosa parecida sucedía en Nicaragua, Guatemala, Honduras y —aunque con diferencias notables— también en Colombia, Cuba y Granada que tuvieron sus propios *incidentes* también dentro de una oleada de hechos influidos por la *Guerra Fría* en el continente americano.

En África, varios países estuvieron también en medio de este tipo de disputas, por ello es preciso mencionar a Angola y Mozambique que se habían decidido por proyectos de socialismo (Escobar 1982, 93). Así mismo, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979, seguiría siendo, a inicios de la década de 1980, un intenso espacio de confrontación indirecta entre las potencias, además de otros puntos en el continente asiático, especialmente en el sudeste.

En Europa occidental, las emociones —esperanza por un lado y temor por otro— vendrían de la mano del ascenso, hasta el poder de partidos socialistas o de partidos o movimientos políticos —de alguna forma— relacionados a la izquierda:

Cuando ocho millones de electores españoles confirmaron los pronósticos que otorgaban al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el triunfo en las elecciones octubrinas, en algo de

sus hilos escondidos, debe haberse movido el ordenamiento político mundial (Khalife 1982, 56).

La victoria “socialista” se añade en Europa al giro político ya impreso por la llegada de Francois Mitterrand al gobierno de París, la de Andreas Papandreu en Grecia, la de Olof Palme en Suecia y a la tendencia similar expresada por el gobierno Spadolini en Italia (Khalife 1982, 56). Finalmente, con el pasar del tiempo, estos regímenes no significarían ninguna amenaza para la estabilidad del modelo de acumulación capitalista en dichos países y más bien impulsaría el modelo socialdemócrata de *Estado de Bienestar* como una de sus fórmulas para aliviar tensiones sociales.

Mención aparte merece lo que ocurría en Polonia y que poco después se convertiría en la primera gran grieta en aquello que se conocía como el *telón de acero*, metáfora usada para graficar la drástica separación entre los países de la OTAN y aquellos signatarios del Pacto de Varsovia. En Polonia, un sindicato gigantesco de obreros industriales cuestionaba con huelgas y paros las ineficientes y anquilosadas acciones del Partido Comunista polaco frente a la crisis económica global. Crisis que afectó particularmente a este país, pues había contraído créditos con los dos grandes bloques económicos. El hecho de que los que protestaban y paralizaban el país fueran obreros industriales, significó una importante contradicción, tanto en el discurso como en la apreciación que se tenía en aquel momento sobre el socialismo real, especialmente para los sectores de izquierda (Linares 1981; *Revista Nueva* 1982; *Vistazo* 1981, 1982).

Este incremento de las tensiones militares y políticas estuvo acompañado por una brusca desaceleración del comercio internacional, así como de una pronunciada reducción del precio en las materias primas que exportaban —especialmente— los países pobres. Baja que afectó particularmente a la Unión Soviética y a los países del tercer mundo. A continuación, se exponen, de manera muy breve, los fenómenos que la provocaron.

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la reconstrucción de las sociedades devastadas por el conflicto armado y las repercusiones de aquella intencionada y dirigida reconstitución en la economía global, se da lugar a una “creciente intervencionalización de las economías y mercados nacionales” (Cobarrubia y Quirós citados en CIEM 2004, 5). Y allí encontramos el antecedente más inmediato de lo que hoy se conoce como *globalización*:

que se expresa, entre otras cosas, en la expansión del comercio internacional a tasas superiores a la de la producción global, frenado a principios de los años ochenta a causa de la violenta

crisis económica capitalista que sacudió al mundo de 1981-1982. El volumen del intercambio mundial cayó 11,3% entre 1980 y 1983 (Cobarrubia y Quirós citados en CIEM 2004, 5).

La notable disminución de la participación de los productos primarios en las exportaciones de mercancías, del grupo de países en *vías de desarrollo*, tuvo una tendencia que —si bien— siempre fue decreciente, tenía un carácter estable e incluso previsible. Al menos hasta el decenio de 1980, momento en el que empieza una desaceleración muy pronunciada. Así, las materias primas pasaron del 90% de los ingresos por exportación en estos países en 1955, al 30% en el decenio de 1991 (OMC 2002, 20).

Esta brusca desaceleración del comercio internacional responde a un grupo grande de procesos y hechos económicos. Entre los cuales se debe señalar, siguiendo el informe sobre la evolución del comercio mundial de Faustino Cobarrubia y Jonathan Quirós del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, que:

el derrumbe del sistema monetario internacional establecido en Bretton Woods y el abandono de las tasas de cambio fijas, los dos aumentos masivos del precio de la energía mundial en 1973-1974 y 1979-1980, la importancia cada vez mayor de la Comunidad Económica Europea y del comercio intracomunitario, la declinación de la hegemonía económica de Estados Unidos y la irrupción de un novedoso fenómeno de “estanflación” global —la combinación de una baja tasa de crecimiento económico, desempleo masivo y una inflación de dos dígitos. Juntos, estos acontecimientos hicieron más lento y comenzaron a revertir el movimiento hacia una liberalización comercial (Cobarrubia y Quirós citados en CIEM 2004, 5).

Los países desarrollados logran una baja en los precios de las materias primas provenientes de los países pobres, a través de un gran conjunto de cambios estructurales, como el control político y militar estable de territorios ricos en recursos naturales, especialmente en combustibles fósiles. A estos cambios los acompañan transformaciones en sus matrices energéticas e industriales y un marco del incremento masivo de su participación en el comercio exterior. Entre las materias, se incluye excepcionalmente el petróleo, principal recurso de exportación para el Ecuador, en la década que se estudia.

Tabla 3.1. Ecuador: precios de las exportaciones de petróleo crudo expresado en dólares americanos por barril

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
35,2	34,4	32,5	27,6	27,4	25,8	12,8

Fuente: Falconí, León y Marconi (1990).

Así mismo, después del estrepitoso fracaso de la primera oleada de liberalismo, descalabre que tuvo su epicentro en Wall Street, EE.UU., a finales de la década de 1920, y que tuvo impactos en todo el globo, se optó —además de controlar férreamente desde el Estado, la actuación de bancos y financieras— por la implementación de lo que se conocerían como *Estados de Bienestar* en varios países del occidente capitalista. Los cuales acabaron acogiendo, por sugerencia de John Maynard Keynes varias políticas sociales que anteriormente se habían aplicado en el bloque *comunista*. Para las décadas de 1970 y 1980, este modelo será ampliamente cuestionado, por lo que se empezó a promocionar y a exigir la aplicación de una nueva versión del liberalismo. Sus impulsores conocidos como neoliberales son los seguidores de la Escuela de Economía de Chicago, encabezada por Milton Friedman. Casualmente estos *Chicago-Boys* empezaron a experimentar su modelo de privatizaciones y liberación de la economía en las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur; especialmente en Chile y en —menor medida— Argentina, Uruguay y Brasil en la década de 1970. Poco después, a inicios de la década de 1980, con la llegada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a los gobiernos de EEUU y de Gran Bretaña, se aplicará el neoliberalismo en dichos países, para después expandirse por el *mundo libre* (Muiños Juncal 1999).

3.2. La crisis de la deuda latinoamericana y la subida de los intereses por deuda

Este proceso de reconfiguración de la economía mundial afectó de una manera muy particular a los países de América Latina, que pasaron a desempeñar un rol distinto dentro de la nueva configuración geopolítica:

En esos años la región latinoamericana fue obligada a limitar su consumo interno para convertirse en exportadora neta de recursos financieros. Una vez postergada la industrialización sustitutiva de importaciones se reasumió la especialización productiva en materias primas, según la teoría de las ventajas comparativas, y se gestionó el retroceso de los avances sociales logrados en el periodo previo. En este proceso de readaptación al capitalismo

mundial, América Latina vio retroceder la producción, el consumo y la inversión, y la pobreza se expandió hasta alcanzar 41% de los hogares de la región (Oleas 2017, 211).

Es necesario en este punto, abordar la llamada *Crisis de la Deuda en Latinoamérica* y el súbito aumento de intereses sobre dicha deuda. De hecho, “La crisis de la deuda que se propagó por América Latina y el Caribe a comienzos de la década de 1980 fue una de las características especiales de la recesión mundial de 1980-83” (Altimir y Devlin 1992, 20). Para abordarla, es importante entender que —en el marco de la economía global— “la descarga de la crisis sobre los países del Tercer Mundo se convirtió en un mecanismo fundamental de contención del conjunto de desajustes de la economía mundial y el endeudamiento externo jugó un importante papel en este proceso” (Borja 1990, 85). No se puede entender esto como un simple traslado mecánico del peso de la crisis a los países periféricos, sino en medio de un conjunto de “nuevos entrelazamientos e interrelacionamientos que se generaron en la totalidad del sistema” (Borja 1990, 85). Así, como resultado de este proceso intencionado “Se fortalecieron los lazos del capital monopolista internacional y los capitales criollos, se impulsó el aperturismo y liberalización de las economías subdesarrolladas al mercado internacional y se profundizó el carácter de exportadoras netas de recursos” (Borja 1990, 85).

A la crisis del dólar de 1968, que llegó incluso a poner en tela de duda la estabilidad del sistema financiero internacional acordado en Bretton Woods, le sucedió la desmonetización del oro en 1971, con lo que se dio curso al dólar sin respaldo de ningún género. Aquello acentuó la tendencia de los créditos internacionales como medio para fomentar las exportaciones de los países desarrollados, dar uso rentable al capital-dinero represado por la caída de la inversión en esos países y activar, de manera fácil, la liquidez de los países subdesarrollados (Borja 1990, 84).

En 1973, volverían a subir los precios del petróleo, fruto del “embargo petrolero a Estados Unidos, Países Bajos, y otros países amigos de la causa israelí” (Aguilar 1986, 58), generando con ello una cantidad inmensa de los conocidos *petrodólares*. La moneda superó las necesidades de los propios mercados de inversión de los países exportadores de dicho *commodity*, y se acabó reciclando “hacia economías de los países subdesarrollados, convirtiéndolas en lugares de destino de la inversión crediticia” (Borja 1990, 84).

los acontecimientos de la economía internacional entre 1979 y 1982 agravaron la situación vulnerable de los países de la Región. El alza del petróleo de 1979 indujo tanto un nuevo aumento de la liquidez internacional como respuestas de política económica en los países de la

OCDE que controlaron las presiones inflacionarias, sobre todo mediante la restricción de la oferta monetaria. El resultado fue una severa recesión a escala mundial, en que las tasas de interés real se encumbraron a los máximos niveles de la posguerra. La caída consiguiente de los precios de los productos básicos, sumada al alza del petróleo, deprimió aún más las relaciones de intercambio de los países importadores de petróleo, los que llegaron a su nivel más bajo desde el decenio de 1930 (Altimir y Devlin 1992, 22).

Durante la década de 1980, con el pretexto de controlar la inflación, se da un radical y arbitrario incremento en el costo de los intereses por deudas que habían sido adquiridas previamente mismas que incluían compromisos de pagar *intereses flotantes*.

El ajuste de la economía americana motivó el cese de créditos a los países subdesarrollados y desató mecanismos que buscaban el reflujo de recursos financieros hacia los Estados Unidos, por medio, especialmente del incremento de las tasas de interés, el deterioro de los precios de los productos básicos, sobrevaluación de los productos manufacturados y el proteccionismo (Borja 1990, 88).

Es así como, con distintos grados y consecuencias, todas las economías latinoamericanas fueron afectadas por este conjunto de dinámicas provenientes de los cambios estructurales que sufría la economía global y se vieron forzados a dejar de pagar su deuda para poderla renegociar.

3.3. Contexto económico local

En Ecuador, a diferencia de lo ocurrido en los países del Cono Sur, esta forma de “reorganización global de la sociedad” (Garretón citado en López Diets 2016, 83) o, como la nombrarían Bértola y Ocampo (2012, 242), esta “reconstrucción radical de la sociedad civil” se produjo bajo una forma débil de democracia representativa, la cual se fue arraigando con el tiempo y a pesar del *ajuste estructural*. Cuando empezaron estas duras reformas económicas, la sociedad ecuatoriana recién salía de una dictadura militar que duro casi 10 años y fueron, por tanto, partidos y acuerdos políticos, los que, en el marco de la democracia representativa, terminaron abruptamente con las tendencias que en materia de política económica habían predominado en el país durante varias décadas.

El economista Diego Borja hizo, en 1990, un resumen bastante sólido de los profundos cambios ocurridos en las décadas de 1970 y 1980: “En este periodo la acumulación capitalista se amplió y modernizó, se alteró de manera importante la estructura social, y se reordenaron las fuerzas políticas y el Estado” (Borja 1990, 86). Santiago Jaramillo de la Revista Nueva en

abril y mayo de 1982 concluyó que “la estrategia de desarrollo se discute ahora, porque su agotamiento afecta a los intereses de las clases dominantes, poniendo en tela de juicio, a largo o mediano plazo, al modelo de acumulación y con él al llamado orden establecido” (Jaramillo 1982, 32).

De manera general “En los años ochenta la política económica tuvo como objetivo fundamental controlar el persistente déficit fiscal, agravado por el conflicto bélico de 1981” (Oleas 2017, 220). Hablamos por tanto de una política económica que se redujo casi a lo estrictamente monetario, es decir, se abusó de las devaluaciones y controles de cambio.

El Banco Central de Ecuador planteó modificar gradualmente las características del proceso productivo. La Junta Monetaria del Banco Central del Ecuador propuso emprender un amplio programa de estabilización y, a partir de 1982, asumió una posición activa que impulsó el traslado del eje de la política económica hacia la Junta Monetaria, disminuyendo al mismo tiempo la incidencia de la Junta Nacional de Planificación. Al límite de sus funciones institucionales, la Junta Monetaria comenzó a gestionar —desde una posición tecnocrática y sin suficiente legitimación política— la política económica necesaria para concretar el “programa amplio de estabilización económica” (Oleas 2017, 219).

La supuesta imparcialidad del nuevo modelo tecnocrático de corte neoliberal, ampliamente difundida y defendida por los medios de comunicación comerciales no tenía sustento pues “entre 1982 y 1983 presidieron la Junta Monetaria Jaime Acosta Velasco, gerente general del Banco del Pichincha, y José Correa Escobar, el principal del Grupo Corporación Financiera de Ecuador (COFIEC)” (Oleas 2017, 219). Cosa igual sucedería con el Gerente del Banco Central del Ecuador, el economista Abelardo Pachano, quien poco después de dejar su cargo en el banco pasaría a ocupar un cargo directivo en otro banco privado, el Produbanco.

Volviendo a lo general y, con la pretensión de sacar una conclusión, cito a Juan Falconí, Patricio León y Salvador Marconi, economistas y profesores de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito, también a principios de la década de 1990, quienes sostuvieron que:

El conflictivo escenario internacional obligó a la adopción de un conjunto de políticas para la obtención de resultados más bien contradictorios; en efecto, el instrumental de ajuste aplicado tuvo caracteres netamente recesivos, combinados —paradójicamente— con un repunte en la inflación (Falconí, León y Marconi 1990, 51-52).

Para poder comprender en su real dimensión lo que se acaba de anotar, se debe considerar que existía una estructura económica anterior:

En la práctica, la modernización a la que dio lugar la década petrolera fue aparente: la industrialización sustitutiva de exportaciones, proceso estimulado en los años 70, se hizo en medio de un esquema de protección, que desquició aún más la estructura tradicional. También el agro permaneció intocado y con él, la base de una repartición injusta a nivel social, favorecida por la política económica que exigía el funcionamiento del modelo aplicado. Entre otros aspectos que caracterizaron este “estilo de desarrollo” destacan la presencia de un importante nivel de desocupación y subempleo, el analfabetismo, y la pauperización de importantes grupos sociales que no pudieron beneficiarse del auge petrolero (Falconí, León y Marconi 1990, 51-52).

Es importante hacer una ampliación sobre las bases de este modelo para entender la crisis, para ello tomamos las palabras del Historiador Andrés Guerrero entrevistado por la Revista Nueva unos meses antes del Paro del Pueblo:

El fenómeno —sostiene Guerrero— tiene sus raíces en la fuerte transformación de la estructura económica y social ecuatoriana en los años 60. Es el fin del boom bananero, que hace crisis de una manera muy marcada, pero también es el fin de una continuidad en las estructuras agrarias y en la configuración del bloque dominante que se había gestado en el período de la revolución liberal: la alianza entre terratenientes y burguesía. En los años 60 se da esa ruptura. La clase terrateniente serrana y ciertos sectores de la costeña, son desplazadas y tienen que transformarse o desaparecer. Esto —agrega— provocó una crisis que sólo se va a cerrar en 1972. Para ello, el gobierno militar de 1963 fue muy importante, porque si bien no tuvo los medios económicos para llevar adelante una transformación, sí gestó muchos de los instrumentos estatales que posteriormente, con los recursos petroleros, van a posibilitarla. Y el gobierno de Rodríguez Lara es el que va a realizar lo que se había planteado la Junta del 63 (*Revista Nueva* 1982, 22).

Los cuadros que siguen ayudan para comprender la gravedad de la crisis.

Tabla 3.2. Ecuador: PIB per cápita 1980-1983 en dólares americanos

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
1.444	1.668	1.552	1255	1.263	1.268	1.136	960

Fuente: Falconí, León y Marconi (1990).

Tabla 3.3. Ecuador: tasas de crecimiento de indicadores per cápita 1980-1983

	1980	1981	1982	1983	1984
PIB	1,9	1,0	-1,7	-5,6	1,3
Importaciones (M)	7,0	-11,8	3,8	-26,7	-5,2
Consumo final Hogares (Cf. HOG)	4,2	1,9	-1,1	-5,2	-0,2
Total formación bruta de capital (TFBKF)	3,1	-9,9	-2,2	-28,2	-7,2
Exportaciones (X)	-5,1	1,7	-7,7	-0,5	9,4

Fuente: Falconí, León y Marconi (1990).

Tabla 3.4. Ecuador: tasa promedio anual de inflación

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
12,8	14,7	16,4	48,1	30,4	28,0	23,8	30,4

Fuente: Falconí, León y Marconi (1990).

Tabla 3.5. Ecuador: salario mínimo vital (promedio mensual en sucres)

Año	Salario Nominal	Salario Real	Tasa
1980	6.270,0	5.169,0	-
1981	6.450,5	4.746,5	-8,2
1982	6.701,6	4.238,8	-10,7
1983	8.678,2	3.699,1	-12
1984	11.299,5	3.671,0	-0,8

Fuente: Falconí, León y Marconi (1990).

Después de esta revisión con un necesario sentido diacrónico, pasamos a revisar —con el mismo sentido— algunas áreas de la economía que se han definido como determinantes para retratar el contexto económico local.

3.4. Modelo de industrialización

Iván Fernández, en su artículo de nombre “Estado y clases sociales en la década del setenta” que es parte del icónico libro “Ecuador: el mito del desarrollo”. Texto que puso en cuestión de manera integral el modelo de industrialización por sustitución de importaciones al que aquí se hará referencia. Fernández sostiene que a partir del triunfo de la revolución liberal de 1895, la siguiente transformación importante en el lento desarrollo del capitalismo en el Ecuador es aquella que sucedió en la década de 1970:

a partir del ingreso de una significativa masa de capital-dinero proveniente de las exportaciones petroleras, de las inversiones extranjeras y de ciertas condiciones económicas y políticas, que van a permitir un proceso de expansión de las formas de producción propiamente capitalistas, generalizándose las relaciones sociales mercantiles en el conjunto de la formación social, destruyendo y redefiniendo a su vez a las formas de producción precapitalistas que se van subordinando de manera funcional a las necesidades de reproducción del capital (Fernández 1982, 61-62).

Un ambicioso proyecto de sustitución de importaciones, propuesto por la CEPAL y que se aplicó en acuerdo con toda la Comunidad Andina de Naciones, designó una serie de industrias y productos que cada uno de los países miembros debía producir. También se incorporaron los productos e industrias de las nacientes burguesías industriales locales, a través de negociaciones y presiones.

Los datos de esta súbita expansión industrial son realmente sorprendentes. Diego Boja, al empezar la década de 1990, realizó un conjunto de comparaciones que permiten dar cuenta de dicha expansión: “el Ecuador, después de Venezuela fue el país que más elevó la participación del sector industrial en el total del producto, al pasar del 19 por ciento a 35 por ciento, entre 1960 y 1980” (Borja 1990, 86). Otra cita del mismo autor permite ver la magnitud de dicho crecimiento:

Entre 1970 y 1979 el Producto Interno Bruto (PIB) creció (a precios de 1975) a una tasa promedio superior al 9 por ciento por año, la más alta de América Latina. Y si se toma un periodo más largo 1960 a 1978 la tasa de crecimiento anual fue del 4,3 por ciento, superada únicamente por Brasil (4,9 por ciento), y muy superior a los demás países del Pacto Andino

(Perú al 2 por ciento, Colombia al 3 por ciento, Venezuela al 2,7 por ciento y Bolivia al 2,2 por ciento) (Borja 1990, 86).

De la misma manera, el rol y poder del Estado ecuatoriano varió enormemente, no solo porque legalizó y permitió la penetración de capitales extranjeros, sino también porque sus ingresos ya no dependían solo de los impuestos a las exportaciones tradicionales como las de banano, cacao y café. Es así como del asfixiante déficit fiscal que se venía arrastrando durante las décadas anteriores, de pronto, “se convierte en un Estado cuyo poder económico crece más del 900% y que hará del presupuesto fiscal uno de los ejes del crecimiento de la acumulación de capital” (Fernández 1982, 63). Multinacionales como “NESTLÉ (INEDECA), DOW CHEMICAL (LIFE), JOHNSON AND JOHNSON, GENERAL ELECTRIC (DUREX), etc. ingresaron a formar parte de este nuevo sector industrial” (Chiriboga 1982, 20).

Todo este proceso fue impulsado por las enormes cantidades de dinero que ingresaron por la exportación petrolera, pero hay que tener claro que también fue —en buena parte— financiado con la adquisición de deuda externa en un momento en el que el Ecuador lucía como un sujeto de crédito muy confiable. En el siguiente apartado se revisa en específico el tema del endeudamiento.

3.5. Deuda externa y crisis

La década de 1980, en el marco de la crisis que se venido describiendo, empezó para el Ecuador en medio de una serie de condiciones desfavorables para su estructura económica dependiente “con un déficit de 670,1 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos, un déficit público de 4.1149 millones de sucres y una deuda que sobrepasaba de los 4,6 millones de dólares” (Borja 1990, 86). Cargas económicas gigantescas, agrandadas por las demandas de una corta conflagración bélica con el Perú en febrero de 1981, volvieron aún más extremas sus condiciones económicas.

El drástico incremento de los intereses sobre los préstamos fue devastador para la economía ecuatoriana, pues “De un promedio histórico de entre el 6,5 y 7,5 por ciento, las tasas de interés pasaron a 14 por ciento en 1980, 16,7 por ciento en 1981 y 13,6 por ciento 1982” (Borja 1990, 88). Hay que considerar que “el 80 por ciento de la deuda externa se hallaba contratada a tasas de interés flotante” (Borja 1990, 88), lo que significa que los bancos extranjeros podían cambiar la tasa de interés al a su antojo o al de sus países sede, tal como pasó. Así mismo, “El servicio de deuda externa ascendió de 544,3 millones de dólares en 1978 a 1.409,1 millones en 1980, 2.138,7 millones en 1981 y a 1.985,1 millones en 1982” (Borja

1990, 88). Esto lo que quiere decir es que, “Hacia 1982, 8,5 de cada 10 dólares que ingresaban por concepto de exportaciones se destinaban al pago de la deuda externa” (Borja 1990, 88).

Se lograron refinanciamientos de dichas deudas en dos ocasiones. Una en 1983 y otra en 1985, a pesar de que esto permitió continuar con los pagos, hizo que el saldo final en 1990 sea “tres y media veces superior al saldo inicial de 1980, y equivalente a más del 100% del PIB de ese año” (Oleas 2017, 238).

La deuda externa pública también se incrementó debido a una opaca operación financiera conocida como sucretización. Entre 1983 y 1988 el Banco Central del Ecuador, asumió 66 110 millones de sucres (1 476 millones de dólares) de deuda externa privada y fue obligado a asumir el riesgo cambiario de esa operación, lo que le habría costado otros 600 000 millones de sucres. Esta forma de socializar las pérdidas privadas muestra la manera como los grupos de poder se sirvieron del ajuste para evitar el juego del mercado y concentrar su riqueza, incluso contrariando las recomendaciones del FMI (Oleas 2017, 238).

De hecho, Manuel Chiriboga y Andrés Guerrero en dos diferentes publicaciones de 1982, logran demostrar que el boom petrolero y el modelo de industrialización por sustitución de importaciones estuvieron, en realidad, enfocados en favorecer y fortalecer ciertos sectores de la burguesía nacional. Andrés Guerrero lo expondrá en estos términos:

Quando digo que el Estado es el eje de la acumulación, no significa que esté tomando parte en las actividades productivas. Lo que está haciendo es crear una redistribución a través de una serie de mecanismos, fundamentalmente financieros y de políticas arancelarias, favorables al desarrollo de sectores de la burguesía (*Revista Nueva* 1982, 25).

Es importante también concluir este apartado, en la línea de lo propuesto por el economista Julio Oleas Montalvo, quien, retomando, a su vez, lo dicho por Jacqueline Roddick (1990) plantea que la deuda externa también sirvió de presión financiera para interrumpir la industrialización por sustitución de importaciones. Oleas indica que la deuda “obligó a los países latinoamericanos a dismantelar la protección a sus industrias, a disminuir la participación del Estado en la economía, y a reducir la inversión y el gasto social para asegurar el pago de las obligaciones externas” (Oleas 2017, 226).

A saber, no fue ni su ineficiencia, ni su agotamiento, lo que acabó por matar el modelo de industrialización, sino tal, como ya se había anotado por Guerrero, ese modelo pereció porque

así lo decidieron las élites locales y así lo determinó —sin siquiera una evaluación real de su alcance— el mercado internacional.

3.6. Sector agropecuario y sector financiero

Según datos de la época proporcionados por el conocido economista Alberto Acosta: “El auge petrolero en el país no significó un impulso para el sector agropecuario, el cual tuvo un crecimiento real de menos del 4% para la década de 1970-1979” (Acosta 1982, 47). Manuel Chiriboga Vega, haciendo una lectura aún más minuciosa sobre esta área, demuestra que al interno de dicho sector “los rubros en manos de medianos y grandes propietarios (abacá, palma, ganado de leche, banano, etc.) tuvieron igualmente un crecimiento vertiginoso” (Chiriboga 1982, 20).

El modelo de industrialización fue en alguna medida impuesto —como analiza Andrés Guerrero— por los intereses de grupos económicos en su afán de profitar de la renta petrolera. No fue en rigor un producto del “Plan de Transformación y Desarrollo” planteado por la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara. Sería largo analizar aquí las supuestas bondades, las contradicciones y la inspiración de ese Plan, que por lo demás no se cumplió. Sin embargo, hay que recordar que en él se proponía una estrategia integral que tenía su punto de partida en la transformación agraria, como instrumento de ampliación del mercado interno que, a su vez, repercutirá en la creación de una demanda de consumo para la industria “nacional” y los servicios (*Revista Nueva* 1982, 22).

Manuel Chiriboga, por su parte, con datos sobre el sector financiero tomados del artículo Estado y Clases Sociales de Iván Fernández publicado en el icónico libro “Ecuador: el mito del desarrollo”, demuestra como en la década de 1970, se fortaleció el sector financiero:

El caso del sector financiero es el más significativo del gran boom económico de la década petrolera. De los 27 bancos privados 13 fueron creados en la década, lo mismo que las 12 compañías financieras. Tan notable ha sido el crecimiento del capital de los bancos que en diciembre de 1979 era de 2.508,2 millones de sucres; y, el crecimiento de las operaciones bancarias en Abril de 1982 la Cartera de los Bancos (préstamos comerciales e hipotecarios) era de 58.825 millones, y los depósitos a esa misma fecha era de 41.574 millones. La dinamización de las operaciones bancarias y de los buenos negocios se acompañó con un rápido proceso de concentración del capital. Dentro de todas las instituciones bancarias cuatro de ellas: Filanbanco (Grupo Isaías), Pichincha (Acosta—Ribadeneira), Pacífico (Laniado) y Popular representan el 40.6 o/o del capital bancario. Diez accionistas controlan la mayor parte

del capital de estos cuatro bancos y 52 accionistas controlan el 46 o/o de todo el capital bancario del país (Chiriboga 1982, 20).

Complementando esta información, es importante anotar, lo que dice Andrés Guerrero sobre este mismo sector:

Sus ganancias —indicó— son del orden del 37 por ciento anual”. El investigador de FLACSO destacó, igualmente, que este sector se ha consolidado en el sistema de acumulación “petrolerista”. Con ello, “surge por primera vez en el Ecuador un capital financiero en el sentido más estricto”, ligado a la asociación bancaria y simultáneamente a la industria, como “mecanismo de relación entre el capital internacional y el capital industrial local que surge (*Revista Nueva* 1982, 28).

Sobre el grado de concentración de capitales en la banca privada Alberto Acosta dirá:

El grado de concentración en la banca privada es sumamente elevado, puesto que, según datos de la Superintendencia de Bancos en la Memoria de 1979, sólo 52 personas poseen 46% del capital de la banca privada. Además, el 40% del capital bancario privado se concentra en solo cuatro bancos nacionales (Acosta 1982, 58).

Concluyendo, como diría Raúl Andrade, editorialista histórico de la revista *Vistazo* “La dispersión de los recursos petroleros, el ingreso calculado en miles de millones de dólares, sinuosamente canalizados hacia bolsillos privilegiados, no resolvió ni intentó resolver el creciente problema de la pobreza popular agudizado por la inflación” (Andrade 1982, 27). Aquí se puede concluir, cuáles fueron —al menos en parte— esos bolsillos.

Todo lo anteriormente señalado, leído como un conjunto, hizo que la capacidad de reacción y maniobra de la economía ecuatoriana sea muy limitada, frente a un conjunto de presiones internas y externas que desencadenaron una serie importante de desequilibrios, crisis y contracciones. La única respuesta que alcanzaron a dar los gobiernos de turno fue obedecer, sin chistar, los mandatos del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, para poder, en el marco del renovado esquema económico liberal, reordenar la economía y la sociedad en torno a sus preceptos.

3.7. Contexto político nacional

Al empezar la década de 1980, intentaba consolidarse en el Ecuador el *Gobierno del Cambio*, como se había autodenominado el proyecto político con el que el país volvía a la democracia representativa después de una larga dictadura militar que tuvo dos claros momentos: el primero, cuyo gobernante —inspirado en parte por el cambio profundo de estructuras que

realizaba en ese momento el General Velasco Alvarado en Perú— se autodefinió como *Nacionalista y Revolucionario* y fue el gestor del proceso de industrialización que ya se ha descrito en secciones anteriores. Un segundo momento, la dictadura se reconvierte en una dictadura militar más acorde a lo que sucedía en otros países de América Latina. Este triunvirato será el designado para realizar un *ordenado regreso a la Democracia*, el cual se extendió mucho más de lo que se tenía previsto y que:

precipitó sobre el país una calculada marea de sangre y violencia, concretada primero en la matanza de trabajadores en el ingenio azucarero estatal “Aztra” y culminada luego, en el asesinato fríamente ejecutado en Guayaquil en la persona del dirigente del FRA, Abdón Calderón Muñoz, mismo que debía ser endosado a los civiles (Andrade 1982, 29).

Estos dos hechos son trascendentales para entender el periodo de transición y las presiones que se venían acumulando. La masacre a los trabajadores del ingenio azucarero ocurrida del 18 de octubre 1977, sacudió especialmente a las organizaciones sociales y a una buena parte de la sociedad, pues daba cuenta total del carácter represivo y cruel de esta fase de la dictadura.

Como se deja ver en la importancia que la Revista *Vistazo* le da al segundo incidente mencionado por Andrade en *Vistazo*: el magnicidio al *fiscal del pueblo*, ofendió y conmovió a las élites locales. Asesinato “que debía ser endosado a los civiles, probablemente al sector buccaramista, como punto de partida para la prolongación y endurecimiento de la dictadura” (Andrade 1982, 29). Uno de los pretextos para instaurar la dictadura que empezó en el *carnavalazo* de 1972, fue —precisamente— detener al *peligro buccaramista*. Es decir, evitar que Bucaram sea quien administre los gigantescos recursos económicos que —se sabía— pronto vendrían de la explotación de petróleo.

Este supuesto *peligro* continuó vigente, casi 10 años después, cuando se empezaron a colocar las bases para el retorno a la democracia y se prohibió que puedan ser candidatos a la presidencia personas que no hayan nacido en el Ecuador o que no sean hijos de padre o madre de dicha nacionalidad (Flores Aguirre 2016). Esto pese a que Bucaram ya había ocupado cargos de elección popular y que tenía un certificado de nacimiento ecuatoriano. De manera arbitraria fue impedido de participar en la elección, en la que muchos sectores preveían que él sería el ganador (*Vistazo* 1982, 8-9). Ante este impedimento se candidatizó al esposo de su sobrina, el joven abogado guayaquileño Jaime Roldós Aguilera del CFP. Quien formó una extraña dupla con la configuración local de la Democracia Cristiana, conocida como Unión

Demócrata Cristiana-Democracia Popular (UDC-DP), representada por otro abogado, el Doctor Osvaldo Hurtado Larrea, oriundo de la provincia del Chimborazo. Ambos llevaron el lema oficial de “La fuerza del cambio” mismo que, se complementaba con otro, menos oficial pero tal vez más extendido, que decía "Roldós presidente, Bucaram al poder" (Flores Aguirre 2016).

Roldós y Hurtado se enfrentaron a la dupla de derecha conservadora conformada por Sixto Durán Ballén y José Icaza Roldós, que fue fruto de la alianza de los partidos Social-Cristiano, Conservador Ecuatoriano, Coalición Institucionalista Democrática, Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, Partido Nacionalista Revolucionario, Federación Nacional Velasquista, y la organización filofascista Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana (Wikipedia 2014).

La primera vuelta se realizó el domingo 16 de julio de 1978. Hubo varios aplazamientos fruto de las intencionales demoras que hiciera la dictadura, además de la muerte de Abdón Calderón Muñoz que sacudió al país. La clara victoria de la dupla del populismo y los demócratas cristianos causó desasosiego en las élites, cuando en la primera vuelta alcanzó el 27.7% de los votos en oposición al 23.86% de la dupla Sixto Durán Ballén- José Icaza Roldós (Wikipedia 2014). La segunda vuelta se realizó recién el 29 de abril de 1979, 10 meses después de la primera. Los candidatos impulsados por el CFP alcanzaron la arrasadora cifra de 1.025.148 votos, sus contradictores alcanzaron menos de la mitad de esa cifra con 471.657 votos (Wikipedia 2014). Jaime Roldós asumió la presidencia de la república, el 10 de agosto de 1979.

Una de las primeras acciones del gobierno de Roldós sería anular una serie de decretos emitidos por la Junta Militar que le precedió. Los cuales eran conocidos dentro de los sindicatos y las organizaciones sociales como *decretos anti obreros*, pues atentaban contra distintos derechos de los trabajadores, especialmente en temas de derecho a la organización y compensaciones.

Así fue como el conjunto de los decretos calificados por los trabajadores como anti-obreros fueron derogados al poco tiempo de iniciarse el régimen democrático, el 10 de agosto de 1979 —la derogatoria de los mismos fue aprobada por el congreso el 29 de agosto, fue ratificada por la presidencia el 18 de septiembre y fue publicada en el registro oficial el 25 de septiembre— (Dávila Loor 1995, 68).

Está dinámica de reconocimiento a los derechos, necesidades y realidades de los trabajadores se vio reforzada con dos decisiones de trascendental importancia. Por un lado, la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas y, por otro la duplicación de los sueldos, esto acompañado de una serie de medidas complementarias que se describen a continuación:

Igualmente, para el 1 de enero de 1980, se duplicó el salario mínimo vital general, de S./ 2.000 a S./ 4.000 lo que significó mejorar realmente las condiciones de vida de los trabajadores — nunca después los trabajadores han tenido una capacidad adquisitiva más alta—; se elevaron los salarios sin aplicar ninguna imputabilidad a los aumentos convenidos con anterioridad entre trabajadores y empresarios; se prohibió por el lapso de un año la elevación de los precios de los productos vitales de primera necesidad y por el lapso de tres años del aumento de las tarifas de los servicios de agua potable alcantarillado, electricidad, correos como a comunicaciones en cuanto afectaren a las clases populares; se protegió la estabilidad de los trabajadores elevando la indemnización por despido intempestivo a un año de sueldos o salarios, aparte de lo establecido en el Código de Trabajo. Finalmente, la reducción de la jornada de trabajo semanal de 44 a 40 horas fue aprobada por el congreso el 12 de diciembre de 1979, fue ratificada por la presidencia el 14 de marzo de 1980 y está vigente desde el 1 de octubre de 1980 (Dávila Loor 1995, 68).

Roldós murió en un inexplicable accidente de aviación el 24 de mayo de 1981. Durante el año y nueve meses que gobernó el Ecuador, tuvo que sobrellevar —entre otros acontecimientos— la ruptura con su poderoso tío político, *Don Buca*, en el episodio que se conoció como la Pugna de Poderes. Este impase se solucionó —como es tradición en el Ecuador— con la intervención de un grupo de *notables*, que hicieron que el presidente Roldós abandoné su intención de disolver la Cámara Nacional de Representantes. Roldós amenazó con llamar a una consulta popular sobre los temas que se encontraban bloqueados en dicho recinto (Dávila Loor 1995, 69), presidido por el tío de su esposa Martha Bucaram Ortiz, el ya varias veces mencionado, Assad Bucaram Elmhahlin.

Convocada por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) originada en la CEDOC y la Ecuarunari, una de las vertientes que después formaría la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el 16 de octubre de 1980 se realiza en Quito, la “Gran Marcha Nacional Campesino-Indígena ‘Mártires de Aztra’ al palacio de Gobierno” (Dávila Loor 1995, 252). Donde se exigía, entre otras cosas “la salida del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), el esclarecimiento de los hechos de la azucarera y la reparación y condena de

los culpables. Roldós aceptará la expulsión del ILV pocos días antes de su muerte” (Ortiz y Meriguet 2021).

De igual manera, el 5 de enero de 1981, el Gobierno tuvo que enfrentar una llamativa huelga de policías pues cada navidad la Policía Nacional compraba, con fondos del Estado, regalos para los hijos de los miembros de dicha institución; la navidad de 1980 fue distinta porque “Alguien se tomó el trabajo de sustituir los buenos juguetes por bagatelas que arrojaron por un promedio (regalo per cápita) de 100 sucres” (*Vistazo* 1981, 10). Así, “La crisis se hizo evidente en Quito y Guayaquil durante 14 horas hubo violencia en ambas ciudades donde ni siquiera el ejecutivo provincial, como en el caso de Guayaquil, fue escuchado por los huelguistas” (*Vistazo* 1981, 12). En una reunión de emergencia entre el ministro de Gobierno, Carlos Feraud Blum, el presidente Hurtado y el alto mando policial, se solucionó el conflicto, pues acabaron cediendo —según *Vistazo*— a la mayoría de las demandas de los uniformados. Como si esto fuera poco, entre el 22 de enero y el 21 de febrero una serie de enfrentamientos armados con el Perú por la ubicación de una serie de posiciones militares en la frontera sur oriente, pusieron a los dos países al borde de una guerra total (*Revista Nueva* 1981, 6) y (*Vistazo* 1981, 4), en una justificable pero poco frecuente coincidencia, señalan como culpable al Perú en lo que consideran otro intento de invasión, fruto de “una profunda crisis interna, en lo económico y social, producto —fundamentalmente— de los cuantiosos gastos armamentistas del vecino país” (*Revista Nueva* 1981, 6). Alineándose así también con la explicación que el presidente Jaime Roldós daba para dicho conflicto:

Belaúnde Terry, fue precisamente depuesto por un golpe militar debido a una gestión de gobierno inmoral e ineficaz, volvió al poder luego de 12 años de regímenes de hecho. Se posiciona el julio de 1980 y, apenas a 6 meses de esta posesión, el deterioro de su imagen gubernamental —dentro de su país— alcanza una vertiginosa aceleración que promete arrastrarlo al descalabro total. Esta cruel encrucijada, que tiene sumido al pueblo peruano en una situación desesperante de la cual su presidente de incapaz de sacarlo, es la que — aparentemente— llevó a Belaúnde a la macabra decisión de agredir al Ecuador (*Vistazo* 1981, 20).

A la luz de los hechos parecería que los militares peruanos crearon, a pesar de Belaúnde Terry, el escenario de guerra pues apenas 45 días antes de la conflagración armada, los presidentes Roldós y Belaúnde Terry habían estado departiendo juntos en la ciudad colombiana de Santa Marta con la presencia de varios otros presidentes y delegados gubernamentales, para rendir honores al Libertador Simón Bolívar al cumplirse 150 años de

su muerte. Encuentro en el cual Roldós confrontó a José Napoleón Duarte representante de *Junta Revolucionaria* que gobernada *de facto* El Salvador, por las constantes masacres que ocurrían en dicho país, en medio de la guerra civil que se libraba. *Vistazo*, en su número 321 del 9 de enero de 1981, dedica 5 páginas a todo color a la gira del presidente Roldós por México y Colombia, siendo la foto más grande de este reportaje, aquella en la que los presidentes de Ecuador y Perú conversan afablemente.

En Perú —en cambio— el conflicto se justificó por la supuesta colocación intencional del ejército ecuatoriano de varios puestos militares dentro de lo que ellos consideraban territorio peruano, usando los nombres de otros puestos militares que se encontraban anteriormente en territorio ecuatoriano (Ministerio de Defensa Perú s/f). Este conflicto, que cobró en total 31 vidas y “cuatro días en términos de fuego” (*Revista Vistazo* #324 1981, 19), se resolvió militarmente con un eficaz ataque militar peruano a dichos puestos. Esta ofensiva obligó a la retirada de las tropas ecuatorianas y su posterior posesión por parte del ejército peruano (Agurto 1996). Después casi dos meses de negociaciones los dos países sellaron un confuso acuerdo de paz.

Jaime Roldós desplegó una forma de política internacional no tradicional, centrada en la defensa de los derechos humanos. Por lo que recibió en nuestro país a grandes cantidades de exiliados de los regímenes autoritarios que ese momento abundaban en el continente. Así mismo se esforzó para respaldar los procesos democráticos en la región, confrontando directamente con las dictaduras. Al punto que el 12 de septiembre de 1980, los presidentes de los países andinos firmaron en la pequeña ciudad ecuatoriana de Riobamba un documento que se conoció como la Carta de Conducta.

En esta materia la Carta de Conducta establece un concepto vanguardista que causó polémica en ese entonces y aún sigue haciéndolo: “el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituye norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención” (*Revista Plan V* 2015).

Con este antecedente, es importante señalar que, en el marco de las negociaciones por el conflicto armado, toma lugar un extraño incidente por el que el Ecuador acaba rompiendo relaciones diplomáticas con Cuba. Esto debido a la irrupción armada de elementos cubanos antigubernamentales en la sede diplomática del Ecuador en la Habana o como dijo Patricio Ycaza a nombre del Comité por la Defensa de los Derechos Democráticos de los Trabajadores

y el Pueblo: “la ‘toma’ de la Embajada de nuestro país en la República de Cuba, por elementos desafectos y enemigos de la Revolución Socialista” (Ycaza 1981, 4). De igual manera, poco tiempo después, en una maniobra puramente militar, que al parecer no contó con el respaldo del gobierno civil, se detuvo en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a un grupo de guerrilleros militantes de la organización subversiva M19, quienes —según se denuncia— pidieron asilo político en Ecuador. En palabras de Alejandro Carrión, editorialista de *Vistazo*, los militares “los capturaron y regresaron a Colombia en menos de lo que canta un gallo” (Carrión 1981, 22). Acción que molestó a muchos sectores de la sociedad civil, pues se contradecía con los principios que el presidente Roldós había estado impulsando.

El conflicto armado afectó grandemente a una economía nacional que además empezaba ya a sentir los efectos de la crisis internacional.

Durante los días de la crisis, el sistema bancario se vio afectado con un retiro de fondo del orden del 17 por ciento sobre los depósitos los totales, lo cual lo obligó al Banco Central a una emisión de 4000 millones de sucres punto con el fin de regularizar la situación, por el impacto que significa una inyección de esta magnitud en la masa monetaria del país, la Junta Monetaria tomó medidas de índole perentoria y temporal (*Vistazo* 1981, 19).

Es así que, a partir de 17 de febrero de 1981, el gobierno nacional tomó una serie de medidas económicas, recogidas en apenas una página en la Revista *Vistazo* que tibiamente reclama sobre su “tremendo costo” (Revista *Vistazo* #324 1981, 19). Mientras que la Revista Nueva se toma un reportaje entero de 4 páginas para su airado reclamo. Para concluir se pregunta “¿Pero, un objetivo sano, tenía que canalizarse por el tortuoso camino de una violenta alza de la gasolina de más del 200 por ciento con los efectos sociales que ello acarrea?” (*Revista Nueva* 1981, 25). Mientras tanto, *Vistazo* se concentra en el nivel de ahorro que el alza de la gasolina conlleva: “Por su parte el ministro de Recursos Naturales y Energéticos procedió anunciar el alza del precio de la gasolina que representará un ahorro de 30 mil millones de sucres anuales al fisco” (*Vistazo* 1981, 19). Sin más mención pasa a analizar el resto de medidas, así como el recorte de 600 millones al presupuesto de la Cámara Nacional de Representantes, la reconducción de los recursos del “Fondo Nacional de Participaciones que financia los proyectos de desarrollo de los organismos seccionales de toda la república” (*Vistazo* 1981, 19) y la ejecución efectiva de la libre exportación de café.

El paquetazo empezó —como tal— unos días antes con las decisiones tomadas por la Junta Monetaria que decidió una serie de medidas administrativas para reducir las “importaciones superfluas” (*Vistazo* 1981, 19). Y:

El lunes 16, en una suerte de anticipo benévolo del "paquetazo", el Frente Económico gubernamental resolvía la congelación en los precios de 18 artículos de primera necesidad sujetos a control. La nómina, que incorporaba los alimentos de mayor consumo popular (arroz, azúcar, soya, leche, sal con aceite de mantecas comestibles comestibles), incluía también a los repuestos de automotores (*Revista Nueva* 1981, 23).

La respuesta de la población, especialmente de los estudiantes, ante las medidas fue inmediata, no así la respuesta de las centrales sindicales, que dejaron pasar casi dos meses para declarar una movilización. El reclamo de las bases ante esta demora se deja ver en el siguiente extracto, tomado del valioso texto ¡Viva la Huelga! publicado el año 1981 por el Centro de Educación Popular (CEDEP).

Al Frente Unitario de Trabajadores —FUT—, le tocó responder ante el paquete de medidas dictadas del 17 febrero de 1981. Inmediatamente de expedidas se produjeron una serie de movilizaciones estudiantiles con gran respaldo popular e incluso de sectores medios como lo demuestra la movilización de estudiantes y colegios particulares de Quito. El estudiante del colegio Montúfar, Iván Meza fue asesinado por las fuerzas represivas. La indignación general no era para menos: Roldós y su gobierno se habían aprovechado del respaldo popular que obtuviera para responder al peligro en la frontera. El FUT protestó por las alzas de los combustibles y el transporte, pero cuando todo el mundo esperaba la declaratoria inmediata de huelga general única forma de echar abajo el paquetazo el FUT SE PARALIZÓ iniciando diálogos con el gobierno (CEDEP 1981, 27-28).

Pese a este diálogo sostenido sobre la condición que impuso el Gobierno de no derogar las medidas y la confusión e incomodidad que esto generaba en las bases, estas se empezaron a movilizar:

A pesar de la confusión reinante, los obreros y los campesinos por todos lados reiniciaron la lucha. Decenas de huelgas obreras estallaron por todo el país y en todas exigía el fin del diálogo y la aplicación de fecha para la huelga nacional. Organizaciones tan importantes como La Internacional, Botar, Aymesa, junto con la propaganda por sus reivindicaciones durante sus huelgas parciales de exigían la realización de la huelga nacional. Las Federaciones provinciales obreras se pronunciaban en igual sentido. Los campesinos recuperaban sus tierras como en Quinchuqui que agrupa a cerca de 1.600 personas. Las federaciones nacionales campesinas FENOC y ECUARUNARI públicamente llamaron a los dirigentes del FUT al

realizar la jornada de lucha necesaria. El congreso de la CEOSL prohibió a su presidente la continuación del diálogo y exigió la declaratoria inmediata de la huelga; el punto culminante fue cuando centenares de miles de trabajadores de la ciudad y del campo en los desfiles del Primero de Mayo expresaron su voluntad de ir a la huelga nacional contra el gobierno antipopular (CEDEP 1981, 30-31).

La huelga del 13 de mayo, a pesar de la demora, resulta, según las organizaciones sindicales, en un éxito: “Los trabajadores del campo y la ciudad demostramos que somos capaces de paralizar el país porque sin nuestra participación no se puede producir ninguna riqueza. A pesar de todo esto, los trabajadores somos el sector más empobrecido de la sociedad” (CEDEP 1981, 39). El gobierno declaró que la huelga fue un fracaso, sin embargo, cambió de ministro de finanzas, así como de ministro de agricultura al tiempo que firmó el decreto de expulsión del Instituto Lingüístico de Verano. *Vistazo* en su edición del 22 de mayo hablaría de un “Deslucido cero a cero” (*Vistazo* 1981, 5), un escenario que —según ellos— no dejó ganadores.

La crónica que deja el CEDEP sobre el Paro, es impresionante por su calidad y detalle, pues deja ver —entre otras tantas cosas— el nivel de disciplina para cerrar las fábricas y las calles, la resistencia frente a la represión y la cantidad enorme de detenidos. Lo que —a su vez— da cuenta de un momento de acción colectiva importante. Cabe destacar que hubo distintos niveles de movilización, al menos en 14 provincias del país, siendo Quito el lugar donde más intensidad cobró la protesta.

Al grito de ¡Viva la Huelga!, miles de trabajadores del campo y la ciudad inician su protesta. Los obreros ocupan sus fábricas y los dirigentes dan las primeras instrucciones. Los campesinos ocupan puntos claves de las carreteras bloqueándolas con árboles, piedras o con lo que encuentran a mano. Son las seis de la mañana. Por la radio se escuchan las primeras informaciones: todo está en calma, no circulan vehículos y las fachadas de las fábricas empiezan a adornarse con banderas, telas y carteles con las consignas de la Huelga: ¡ABAJO LAS MEDIDAS ECONÓMICAS! ¡FUERA LOS MINISTROS HAMBREADORES DEL PUEBLO! ¡ABAJO LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL! ¡ABAJO LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO! ¡VIVA LA UNIDAD OBRERO CAMPESINO Y POPULAR! (CEDEP 1981, 33, [las mayúsculas al original]).

Además de la unidad con sectores campesinos, es importante destacar la presencia de los moradores de barrios populares que acompañan la huelga en diferentes niveles. Es la primera

movilización unitaria después del regreso a la democracia y las organizaciones sindicales la celebraron así:

PERO LO MAS IMPORTANTE DE TODO ES QUE PUDIMOS COMPROBAR QUE HEMOS AVANZADO EN NUMERO, CONCIENCIA Y ORGANIZACIÓN. Antes eran los estudiantes los únicos que se enfrentaban a la Policía, ahora fueron los obreros quienes estuvieron a la cabeza de toda la lucha popular enfrentándose en las calles con la represión (CEDEP 1981, 40, [las mayúsculas al original]).

Jorge Dávila Loor en su libro sobre el FUT recoge, a su vez, datos de la organización Informática Social (INFOC) y dice que “de un total de 99 industrias entrevistadas, 53 (53,5 %) si participaron, lo cual es alto si consideramos que en las entrevistas incluyen fábricas que no tienen organización sindical” (Dávila Loor 1995, 72). Esto es más de la mitad de las fábricas entrevistadas.

Once días después de realizado el paro, el 24 de mayo de 1981 y justamente después de una prolongada silbatina por parte de los asistentes, en contra de Jaime Roldós, en el Estadio Olímpico Atahualpa, que se habían convocado para conmemorar la Batalla de Pichincha, el presidente Roldós pronunciaba el que sería su último discurso. Pues el joven mandatario moriría, después de abandonar el estadio, en un accidente de aviación sobre el que hasta la fecha quedan dudas.

Dudas incrementadas a los pocos días con el percance aéreo en que falleció el general de división Rafael Hoyos Rubio, titular de las Fuerzas Armadas del Perú y que alcanzaron su grado máximo desde el 31 de Julio con la muerte del líder panameño, general Omar Torrijos. En menos de 70 días, desaparecieron, en circunstancias muy similares tres personalidades claves de la política latinoamericana, que sustentaban posiciones en mayor o menor grado discrepantes con las del gobierno de Estados Unidos (*Revista Nueva* 1982, 8).

Oswaldo Hurtado ya en el poder, seguía acompañado de una débil y cambiante mayoría en el Congreso Nacional misma que eligió —en un giro novelesco— al hermano del fallecido presidente como su Vicepresidente. Así, León Roldós que ya antes había ocupado un alto cargo en el Gobierno de su hermano, sería el compañero de fórmula del joven Hurtado. Los términos cordiales de esta alianza durarían muy poco.

En septiembre de 1981, “La acuciosa investigación del Representante Febres Cordero dejó al Gobierno sin el Ministro más representativo” (*Vistazo* 1981, 15). Así describió la Revista *Vistazo* la caída del Ministro de Gobierno, Carlos Feraud Blum, que le permitió al diputado

del Partido Socialcristiano alcanzar una exposición, desde ese momento, permanente en la revista citada y en otros medios de comunicación controlados por las élites. Es menester decir que esta destitución solo se menciona de manera indirecta en la Revista Nueva. El golpe para el gobierno, en efecto, fue grave porque se diluía, en la Cámara Nacional de Representantes, una mayoría que ya había salvado previamente a Feraud Blum en mayo de 1980.

El primo en segundo grado de Feraud Blum, Galo García Feraud, que hasta ese momento había ocupado el Ministerio de Educación, lo reemplazó, siendo uno de los pocos funcionarios de importancia que sobrevivieron de entre los nombrados por Roldós. Desde ese mismo momento García Feraud usó, según confesó en una entrevista para este trabajo, sus relaciones sociales para proveerle al gobierno de una nueva mayoría legislativa.

El 28 de octubre de 1981, el gobierno decidió incrementar en un 40% el precio del azúcar. Esto va a desatar una serie de disturbios callejeros que en palabras del ministro Galo García Feraud, estuvieron a muy poco de derrocar al Gobierno. No puede ser leído como una casualidad el hecho de que ni el documento del CEDEP, ni tampoco la Revista Nueva, hayan recogido mayormente estos incidentes espontáneos que se desbordaron por todo el país, pues su lectura se concentra en la organización sindical y no reconoce la espontaneidad sino como un valor secundario. La revista *Vistazo* por su parte expresa su preocupación en su primera página del segundo número de noviembre con estas líneas:

Aspiraciones que contienen un fondo de justicia, se encaminan para su reivindicación por los caminos que traza el extremismo rampante sin que las autoridades logren situarse por encima de los sucesos, resignándose a marchar al paso que le marcan los otros. Provincias enteras, gremios, estudiantes, han alterado la paz colectiva, mientras se enreda en la bandera de los reclamos la serpiente de la consigna extremista que sabe perfectamente hacia dónde se dirige a despecho de la ingenua ceguera de los que gustan hacer novenas a Dios y al diablo (*Vistazo* 1981, 5).

Así mismo, el Ministro de Gobierno Galo García Feraud habló de la existencia de un grupo de guerrilla urbana en el país. *Vistazo* lo recoge de la siguiente manera:

A raíz de los graves disturbios callejeros en Quito y otras ciudades del país como en los que no se produjeron saldos trágicos pero sí se evidenció un despliegue de manifestantes usando tácticas nuevas, el ministro de gobierno informó al país que varios de los involucrados en los incidentes habían declarado que estaba en formación una guerrilla urbana capaz de combatir en la misma forma conocida en otros países latinoamericanos en los que la violencia más atrabiliario a manchado de sangre los territorios (*Vistazo* 1981, 6).

A esta afirmación, Revista Nueva sí responderá, de manera larga y acuciosa durante varios números, desestimándola desde todos los ángulos y hasta burlándose de ella.

El FUT, nuevamente dubitativo y embebido en diálogos con el gobierno, convoca después de más de un mes de iniciados los disturbios callejeros, a la cuarta huelga nacional unitaria. La que, incluso las propias organizaciones sindicales reconocen como un fracaso, pues no sólo se acepta el hecho de que se quedaron aislados de otros sectores sociales (FUT Pichincha 1982), sino que se perdió además continuidad en la lucha (CEDEP 1981, 48).

La huelga Nacional del 9 de diciembre se cumplió parcialmente por parte de los obreros y de los choferes la participación Popular en los barrios fue mínima y lo mismo la participación campesina en las carreteras. El gobierno aprovechó del revés sufrido por el movimiento obrero para hablar de una derrota. La encuesta relativa a la participación de las fábricas industriales en la huelga realizada por INEFOS en Quito estableció que, de 64 empresas entrevistadas, participaron en la huelga 26 es decir el 40,6%, esto es un descenso de 13 puntos en el porcentaje de participación en relación con la huelga del 13 de mayo. No fue una derrota, pero sí un gran revés (Dávila Loor 1995, 74).

Cabe destacar que, previo a este paro, se inaugura un innovativo sistema de democracia interna dentro del movimiento sindical. Pues el 3 de diciembre de 1981 se realizó la Primera Convención Unitaria del FUT, en la cual las bases hacen fuertes críticas sobre todo frente a la lentitud de la decisión sobre la huelga nacional y sobre los recurrentes diálogos con el Gobierno (CEDEP 1981, 47-48).

Para ilustrar el contexto político de la época cabe recordar el desalojo violento por parte del ejército a los trabajadores en huelga en el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), organismo encargado del sistema de telefonía del país. Una huelga de *brazos caídos* a nivel nacional, iniciada el 25 de noviembre de 1981 terminó el 9 de diciembre, día de la Huelga Nacional del FUT. Todo después de una envalentonada intervención en vivo del Presidente Hurtado en cadena de radio y televisión en donde diría que “no toleraría más ‘tempestades’” (Vistazo 1981) acto seguido los trabajadores eran violentamente desalojados por militares de los centros de trabajo que habían tomado.

En el contexto de lo que empezaba a configurarse como una forma de enfrentamiento global entre superpotencias, se desarrolló una grave crisis económica del capitalismo, misma que abrió las puertas de grandes programas de ajuste de la economía y que le dio nueva vida al aperturismo económico liberal. Los países desarrollados consiguen su objetivo de bajar los

precios de las materias primas provenientes de los países pobres lo que afecta también al bloque socialista.

Los países latinoamericanos fueron convertidos por la fuerza en exportadores de recursos financieros para resolver la crisis económica, también artificial, de los países centrales. La crisis de la deuda latinoamericana ocurre en función a la necesidad de liquidez de los bancos norteamericanos, gracias a que los confiados gobiernos de la región que habían aceptado intereses flotantes sobre su deuda, creyendo que los altos precios del petróleo iban a durar para siempre.

Así en Ecuador, la destrucción del modelo de sustitución de importaciones no se dio por un tema estrictamente económico —pues sus números más bien eran relativamente positivos a pesar de la inmensa deuda— sino por una decisión de las élites locales obedientes al mandato de las élites norteamericanas.

Cabe resaltar que en Ecuador esta brutal reorganización neoliberal de la economía no sucedió en dictadura sino en una débil democracia representativa que buscaba consolidarse. Roldós al empezar su gobierno, reconoció una serie de demandas de los trabajadores y de la sociedad en general, además de que impulsó una importante política de respeto a los derechos humanos para el continente. Pero al enfrentar un conato de guerra con el Perú y ante la incesante presión de las élites económicas acaba poniendo el peso de una crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores, fruto de ello, el 13 de mayo de 1981 le toca enfrentar una potente huelga, esto pocos días antes de morir en un inexplicable accidente.

Pese a que la Huelga 9 de diciembre 1981, provocada por un nuevo *paquetazo*, fue un evidente fracaso, ese mismo mes se inaugura la dinámica de las convenciones unitarias del FUT. Hurtado ya en el Gobierno, además de la negociación con grupos políticos y con las élites recurre a la represión para sostener su gobierno, tal como se ve en el violento desalojo a los trabajadores del IETEL.

Así resumidos, este capítulo ofrece los elementos suficientes para comprender las características generales y las dinámicas sociales que determinaron e influenciaron el acontecimiento histórico que esta tesis se ha propuesto analizar. Desde un contexto internacional que en el plano político y económico determinó en buena medida lo sucedido en la región, hasta sus implicaciones locales, ligadas a las decisiones tomadas por actores sociales concretos y situados. Así mismo el contexto local ha requerido un especial énfasis que permitirá abordar *in extenso*, los próximos capítulos.

Capítulo 4. Actores sociales del Paro

En este capítulo se abordan las características generales y un poco de la historia de los actores sociales que impulsaron y sostuvieron el Paro Nacional del Pueblo, lo que permite, a su vez, adentrarse en sus dinámicas internas. Acogiendo la tesis de Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz quienes, en su emblemático trabajo *Crisis y Movimiento Sindical en Ecuador: Las Huelgas Nacionales del FUT (1981-1983)*, calificaron al movimiento sindical encabezado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), como el “portavoz del descontento popular” (León y Pérez Sáinz 1986, 97). Por ello, la atención de este capítulo se concentra en este espacio de coordinación entre centrales sindicales, definiéndolo como el principal actor del paro, pues, en esa ocasión, supo conectarse a tiempo con las exigencias de los sectores populares y movimientos sociales de la época y conducir —hasta cierto punto— la protesta.

Para lograrlo, se revisan primero las organizaciones que lo conforman, esto sin dejar de lado las formas de interacción, las disputas, los momentos de unión o coordinación y sobre todo, las formas de acción colectiva conjunta que van conformando y consolidando a este organismo. Para finalmente mirar de manera breve a un grupo de organizaciones que como aliadas o no al FUT, también participaron en la paralización y las protestas de septiembre y octubre de 1982.

4.1. Las organizaciones que conformaban el FUT al momento del Paro

Para empezar este apartado será fundamental recordar que el forzado proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que se describió en el capítulo anterior, no sólo sirvió como estrategia para transferir grandes cantidades de recursos a ciertas capas de la burguesía nacional que se convirtieron, en este proceso, en actores fuertes de la coyuntura política. Sino que también este proceso generó —es importante resaltarlo— una incipiente clase obrera industrial y una clase media. Así lo resume el historiador Andrés Guerrero:

El centro de lo que se está jugando es el problema de los nuevos industriales, de esta industria que ahora aparece como irracional. Pero estos sectores son muy fuertes y crean una situación muy compleja. Porque con ellos surgió una clase obrera nueva, y surgieron, asimismo, estimuladas por el Estado, capas medias que de hecho estaban viviendo de la redistribución de la renta petrolera. Entonces, la reestructuración del modelo económico no golpea solamente a los industriales, sino que tiene una repercusión vertical en toda la sociedad (*Revista Nueva* 1982, 30).

En ese contexto se dan una serie de reconfiguraciones en el movimiento sindical, el cual, en este contexto, se consolida como tal. Este conjunto de cambios también influyó en la conformación de las centrales sindicales, de los sindicatos, de las asociaciones y los comités de empresa, que pasaron también a reflejar esa “estructura heterogénea del mercado laboral urbano” (Chamorro citado en León y Pérez Sáinz 1986, 95).

es el contexto, en el cual surge el sindicalismo el factor determinante de las características que éste tiene. Así, el desarrollo de ciertas actividades, como la explotación del petróleo (1957 y 1972), los servicios de infraestructura (obras públicas, municipales y fiscales) y la manufactura han dado lugar al tipo de sindicalismo que tenemos. De todos modos, ahora tenemos un proletariado industrial, reducido en número, pero combativo que, apoyado por campesinos, estudiantes y especialmente por intelectuales, ha ganado un lugar en la escena política (Redrován Zúñiga 1983, 9).

Cabe anotar que las centrales sindicales, además, tenían organizaciones *filiales*. O dicho de una manera más exacta, sostenían y apoyaban a organizaciones de campesinos e indígenas que a la larga sentaron las bases de una potente forma de autonomía organizativa que marcaría el desarrollo de las luchas sociales en décadas posteriores. Estos actores junto a las organizaciones de estudiantes y maestros configuran el panorama de los movimientos sociales para la época.

4.1.1. Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC)

La más antigua de las centrales sindicales del país, es aquella que nació con el nombre de Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC). Según algunos de sus miembros la CEDOC se funda porque: “Preocupada la jerarquía de la Iglesia Católica por la creciente influencia que sobre los trabajadores adquirirían los partidos de izquierda, resolvió, fundar una central sindical en 1938” (CEDOC-CEDEP 1981, 9). Cabe añadir que, en su congreso fundacional, los *obreros católicos* nombraron como su presidente a Pedro F. Velasco Ibarra (Robalino 1992, 125), hermano del personaje que marcaría durante 40 años la vida política en Ecuador, el cinco veces presidente José María Velasco Ibarra.

No se puede desconocer el trabajo que las organizaciones e intelectuales religiosos aportaron para la formación y consolidación de gremios y asociaciones de trabajo artesanal. Por ejemplo “a inicios de siglo XX en Pichincha se crea el primer Centro Católico de Obreros en 1906” (Miño Avilés 2013, 24). Pese a esto, la supuesta motivación señalada por los trabajadores clasistas organizados, puede ser tomada como cierta, pues la influencia de las posiciones de

izquierda entre los trabajadores había crecido globalmente a principios del siglo XX. Además, de las condiciones objetivas de explotación reinantes, se debe mencionar la Primera Guerra Mundial con su brutalidad y sus efectos en los países dependientes, además del *Big Crash*, entendido aquí como fruto del tardío fracaso de la ola de capitalismo liberal de finales del siglo XIX; y, especialmente la influencia de la Revolución Rusa. Lo cual hacía necesario para las élites locales de adscripción católica, la existencia de una corriente sindical que proponga una posible colaboración entre obreros y patronos, superando así —supuestamente— la contradicción entre capital y trabajo.

La CEDOC se crea como Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, en 1938, en el Congreso celebrado del 27 de septiembre al 2 de octubre, que reúne a las sociedades existentes en ese momento, gremios, sociedades, mutualistas, hermandades, sociedades culturales. El Congreso se desarrolla durante 11 sesiones que cuentan con delegados del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja (Robalino 1992, 125).

Desde su fundación, la CEDOC “estableció como principio la unión de sindicatos católicos, con otros de diferentes tendencias para patrocinar causas justas” (Robalino 1992, 126). Así mismo, aunque siempre guardando prudente distancia con la política, reconocieron el derecho a la huelga y al boicot en su temprano congreso de conformación: “en defensa de sus asociados pueden hacer uso de todos los medios lícitos, incluyendo como tales la huelga y el boicoteo, cuando se hubieran agotado los medios conciliatorios” (Robalino 1992, 126).

En la década de 1970, la CEDOC vivió un proceso de redefinición interna, que respondía a un largo ciclo de transformación, que tiene como resultado una ruptura, visible —sobre todo— en tajantes y ampulosas definiciones ideológicas, que no corresponden, necesariamente, a diferencias reales en la acción política, especialmente si se mira con detalle su acción sindical concreta. Este hecho, que está precedido por varias transformaciones y rearticulaciones, es recogido con especial detalle por la Dra. Isabel Robalino, en su texto “El Sindicalismo en el Ecuador” (1992). También por Juan Paz y Miño (2013) en una publicación de nombre “La CEDOC en la Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano” de 1988 y, más recientemente, por María Soledad Miño Avilés en su tesis “Desarticulación del Movimiento Obrero: Caso ruptura de la CEDOC”.

Así, hasta 1975, la CEDOC se encontraba dirigida por fracciones conservadoras en pugna con otras pertenecientes a la Democracia Cristiana, “sector (...) proveniente del Partido Social Cristiano (a su vez aparecido como escisión del Partido Conservador)” (Rodas 2004, 102). Es

así como ese año en su IX Congreso se produjo el triunfo de las posiciones *clasistas* que impulsaron una forma relativa de unidad de acción con otras facciones del movimiento obrero que también se habían declarado clasista más o menos por la misma época.

Artífice de este cambio de conducta en la CEDOC fue su filial campesina la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOC, en cuyo interior fundamentalmente, y hacia finales de la década de los años sesenta, se integró una corriente política de extracción cristiana, que luego se definió como marxista y que conformó el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT). Este grupo alcanzará una influencia mayoritaria al comprometerse con la radicalización de las luchas campesinas a nivel nacional, pero sobre todo de la costa. El MRT se constituyó, entonces, en un grupo de izquierda con una importante influencia en el conjunto de la CEDOC, y en el pilar que sostuvo la CEDOC, (que en los años ochenta devendría hacia posiciones socialistas) en la división que a su interior ocurrió en 1976 y en la cual surgieron dos sectores: el uno, que representaba los intereses de la clase trabajadora y que como tal fue reconocido por la CEOSL y la CTE, en tanto el otro sector (identificado como CEDOC-CLAT) se conformó en una “central sindical” ligada a los intereses políticos de la Democracia Cristiana (Rodas 2004, 102-103).

Es importante ampliar esta lectura en dos sentidos: en primer término, no solamente el MRT influyó con su trabajo de base en este cambio de posición. Otros movimientos y organizaciones como el Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana (MRIC), fueron promotores de dicha transformación y acompañaron cercanamente a los trabajadores en sus huelgas y movilizaciones. En segundo lugar, “los problemas entre 1974 y 1976 no estuvieron motivados por razones exclusivamente políticas e ideológicas, sino por evidentes cuestiones de liderazgo (incluidas motivaciones muy personales)” (Paz y Miño 1988, 85).

La doctora Robalino Bolle denuncia, en el libro al que ya se ha hecho referencia, una serie de presiones y formas de intromisión también por parte de la Democracia Popular, que derivarían finalmente en la cooptación —al menos temporal— de la CEDOC. La larga cita que sigue tiene la pretensión de poner en cuestión la extendida idea entre los miembros del movimiento sindical y los expertos en el tema, de que las posiciones conservadoras y de derecha dentro de la CEDOC actuaron siempre como un solo bloque desligados de intereses particulares, es decir, debate con quienes afirman que el control de la CEDOC se dio sin disputas y sin contradicciones internas:

Durante este periodo que va de 1982 a 1986, se intensificaron los esfuerzos de la Democracia Popular por lograr un control de la CEDOC, esfuerzos a los que ya nos vemos referido, y que

fueron muy visibles en el congreso de 1982. La CLAT también se vinculaba más la Democracia Cristiana Internacional. Entre nosotros se dieron, a pesar de todo, las acciones autónomas mencionadas. La CEDOC todavía durante el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, con la ayuda de este, adquirió otra casa para el funcionamiento de la comisión ejecutiva nacional y algunos otros movimientos. Esta intromisión del partido motivo que para el congreso de 1986 surgiera dentro de la CEDOC una fórmula para llevar a la directiva a trabajadores que, viniendo de las bases sindicales, proclamaban la autonomía de la sede de todo partido político, según la postura tradicional de la central. En el 14 congreso de 1986, ante el rechazo por parte de quienes apoyaron la candidatura de Germán Barragán, a la entrada al local del Congreso de las federaciones que postulaban a Rodrigo Muñoz, se eligieron dos directivas, encabezadas por los nombrados. Aun siendo la presidida por Rodrigo Muñoz, fruto de una asamblea mayoritaria, el gobierno registró la encabezada por Germán Barragán, quien ocupó por segunda vez la presidencia subordinado al partido de la Democracia Popular (Robalino 1992, 156).

Justo durante los días de la Quinta Huelga Nacional Unitaria, Osvaldo Hurtado condecoró con la orden nacional *Al Merito* en el grado de Gran Oficial a la Dra. Robalino Bolle (*El Comercio* 1982, 3).

Manteniendo la intención de dejar en claro las etapas en la transformación de esta central, se toma una cita del libro del historiador Juan Paz y Miño, “La CEDOC en la Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano”:

Si se admite una simplificación esquemática (y aún a riesgo de abstraer la complejidad sociopolítica de la historia sindical de la Central), podría decirse que entre 1938-55 la **orientación ideológica** de la CEDOC-CLAT fue “católica”; en la etapa de transición (1955-1965) fue “cristiana” y entre 1965 y 1986 fue “demócrata-cristiana”, en dos fases sucesivas: preparación (1965-1975) y afirmación (1975 -hoy), paralelamente a la orientación “socialista” de la otra fracción, a partir de 1975. Es un error confundir tales orientaciones con la directa subordinación a un determinado partido. Carente, más bien, de **dirección política** partidista, (solo en los primeros años hay un evidente control eclesiástico), aquellos partidos que se le acercaron confiaban, precisamente, en la mentalidad de los trabajadores y dirigentes de la central para obtener respuestas o para incidir, de algún modo, sobre la conciencia espontánea del movimiento de los trabajadores (Paz y Miño 1988, 84, [las negritas pertenecen al original]).

En medio de esta disputa se encuentra este sector de los trabajadores al momento del Paro del Pueblo. A saber, disputa entre la central que en ese momento se conocía con el nombre de

CEDOC-Socialista, que fue comandada hasta 1982 por Emilio Velasco, misma que además no había obtenido todavía su reconocimiento legal. Y por el otro lado, la CEDOC-CLAT dirigida por Germán Barragán, reconocida desde 1978 por el Ministro de Trabajo de la fase final de la dictadura. A partir del triunfo electoral del Concentración de Fuerzas Populares en alianza con la Democracia Popular en 1979, la CEDOC-CLAT contó con el apoyo del Ejecutivo, sobre todo, en la política de acoso y persecución hacia la otra facción.

Así, en noviembre de 1979, el famoso local de la calle Flores 846, que se disputaban las dos facciones pero que estaba en posesión de la facción socialista desde 1976 (Robalino 1992, 150), sufrió un intento de desalojo. “A las 4 de la madrugada, cuando en un inusitado operativo policial 300 efectivos uniformados y 50 agentes ocuparon el inmueble, recuperado 24 horas después por las bases trabajadoras de esa matriz sindical” (*Revista Nueva* 1981, 25). Desalojo, sobre el cual el Estado no logró dar mayores explicaciones ni siquiera supo reconocer quién y bajo qué pretexto fue ordenado. Así describía la *Revista Nueva* este hecho: “Y el radio de sorpresas se incrementa luego de que, en días posteriores, los máximos responsables de la Subsecretaría de Gobierno y del Ministerio de Trabajo aclararon que esas reparticiones no ordenaron el operativo” (*Revista Nueva* 1981, 26). Dos días después Emilio Velasco, Presidente de la CEDOC-Socialista sería detenido cerca de Quinindé, en compañía de otros dirigentes, para ser después trasladado a Quito, sin que tampoco se logre ubicar el origen de dicha orden (*Revista Nueva* 1981, 25).

Es preciso señalar el énfasis que esta organización le dio, en la época, al trabajo con sectores campesinos, así como su naturaleza artesanal:

En el caso de la CEDOC, su estructura de corte artesanal tenía una gran importancia y, no empezó a organizar a trabajadores industriales con alguna intensidad sino a mediados de los años sesenta, privilegiando también en ese momento a la organización del campesinado. Una ideología de conciliación predominante se expresaba en un comportamiento reivindicativo parecido al de la CEOSL (Ibarra 1983, 79).

El sucesor de Emilio Velasco, elegido precisamente en el congreso realizado en 1982, Froilán Asanza dice en una entrevista publicada por la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) en 1985, que la CEDOC contaba para ese momento “aproximadamente con un 10% de los obreros sindicalizados en el país. La presencia de nuestra central se da más bien en el sector campesino y, en estos últimos años, se ha ido extendiendo hacia un sector sub-urbano”

(Asanza citado en ALAI 1985, 24). En cuanto a la constitución interna de la organización dice que:

en nuestra central hay trabajadores que están identificados con las corrientes liberales, con la propia Democracia Cristiana y hasta con los conservadores. Y es por eso que mantiene una ideología un tanto pluralista, aunque sus dirigentes principales tienen una clara tendencia hacia el socialismo sin que esto se traduzca en una imposición a sus bases (Asanza citado en ALAI 1985, 25).

Y finalmente sobre el problema de su reconocimiento legal dijo:

La nuestra, con legalización o sin ella, es la CEDOC reconocida en cada una de las bases y eso nos fortalece. Tenemos además el reconocimiento de las otras centrales sindicales y de todas las organizaciones populares del país. Y nuestra política, reconocida por nuestras bases, está claramente definida: somos una CEDOC clasista, socialista, democrática y revolucionaria (*Revista Nueva* 1982, 17).

En el marco de las formas de disputa que se han descrito y de estas pomposas tomas de posición ideológica, dentro de la CEDOC se afianzaba el triunfo de las fuerzas de izquierda. A través de una nueva directiva que seguía la línea que había ya trazado aquella encabezada por Emilio Velasco continuaría el proceso de trabajo conjunto con las otras dos centrales sindicales clasistas, pero —como se verá más adelante— sin dar pasos reales hacia la concreción de una central única.

4.2.1. La Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE)

Se pueden rastrear organizaciones obreras de posiciones cercanas a la izquierda desde aquellas que alimentaron la corriente liberal de 1895, algunas que después se alinearon con el anarquismo y después con el socialismo y el comunismo. Sin embargo, recién en julio 1944, después de haber resistido intensos periodos de represión y persecución, y a raíz de La Gloriosa —una insurrección popular de gran alcance contra el gobierno de Arroyo de Río—, pudo ser fundada la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). En la CTE entraban en tensión las posiciones tanto de comunistas como de socialistas, que se disputaban tradicionalmente su dirección. Es así como su “primera directiva, elegida el 9 de ese mes, estuvo presidida por el comunista Pedro Saad, siendo su vicepresidente el socialista Juan Isaac Lovato” (Rodas 2000, 53). La *gloriosa* CTE fue fundada el 9 de julio de 1944.

Sobre esta central se pueden encontrar sendos y halagüeños tratados provenientes, en su mayoría, de sus propios. Aquí se hará mención por su trascendencia a tres publicaciones: “La

CTE y su papel histórico” de Pedro Saad publicada sin editorial en 1979; “Formación y pensamiento de la CTE” de los compiladores, Jorge León, Hernán Ibarra y Patricio Ycaza, publicado en 1983 por el Centro de Documentación e Información de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME) y “28 de Mayo y Fundación de la CTE” de varios autores, editado por el INFOC, la Corporación Editora Nacional y el Archivo Social de Historia Contemporánea en 1984.

En un texto de su propia autoría, Edgar Ponce —elegido a mediados de 1982 como presidente de la CTE en reemplazo de Juan Vásquez Bastidas— usando un grupo importante de lugares comunes provenientes del *sociolecto* de la izquierda de época, considera el rol de la CTE frente a la clase trabajadora:

Desde su creación en 1944 hasta el presente año, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, ha acogido en su interior a los sectores obreros más politizados del país. Organizaciones sindicales que encausaron su actividad sindical dentro de los lineamientos políticos de la clase obrera. La lucha por las reivindicaciones sindicales se inscribió en una lucha política que ha marcado el paso de la actividad política de toda la clase obrera del Ecuador. Sus limitaciones y proyecciones parten de allí; de las proyecciones y limitaciones que la Confederación de Trabajadores del Ecuador ha tenido para orientar y conducir la lucha por las transformaciones revolucionarias en el país (Ponce 1985, 28).

Su posición geográfica y temas coyunturales de economía y política pusieron al Ecuador del siglo XX, bajo la esfera de control del *imperialismo norteamericano*. Al punto que, en 1941, una invasión peruana a territorio ecuatoriano fue resuelta *al apuro* en una ponderación que consideró menor al conflicto entre países sudamericanos en comparación con la Segunda Guerra Mundial. Así, para mantener la estabilidad interna en el marco de la guerra, la acción y propaganda anticomunista hizo que los obreros organizados en la CTE, así como los militantes comunistas y de izquierda, en general, sean víctimas de constantes procesos de represión y persecución. Dinámicas que recrudecían su acción bajo los regímenes de derecha y especialmente bajo las dictaduras. Esto se incrementó aún más después de la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo de la denominada *guerra fría*. Se toma una cita de Agustín Cueva, que aborda la dictadura militar que gobernó este país entre 1963 y 1966, que permite ver la dinámica a la que acabamos de hacer referencia:

En realidad, este golpe fue una típica medida “contrainsurreccional” acordada por el Pentágono y los monopolios en defensa de los intereses de imperiales. Como la estrategia comprendía, además de las medidas específicamente represivas, ciertas acciones de carácter

económico y social, imprimió a la nueva dictadura no solo una orientación anticomunista, sino también una tónica reformista conforme a los planes de la Alianza para el Progreso. Por ello, al mismo tiempo que encarcelaba, desterraba o torturaba a los hombres de izquierda y clausuraba universidades y sindicatos, la junta militar anunció una serie de reformas “estructurales” que, para marcar el tono de esta tragicomedia empezaron por la nacionalización de las altas cumbres andinas (Cueva 1991, 156).

Una década después, el Ecuador se encontrará en una situación parecida, durante la segunda fase de la dictadura militar dirigida por el Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, General Guillermo Durán Arcentales y General de División Luis Leoro Franco, tal como se puede comprobar en el primero de los Cuadernos de Nueva:

durante la década de dictaduras donde las violaciones de los reivindicados Derechos Humanos fueron a la vez el testimonio de la frustración y el aliciente para una respuesta electoral de las mayorías defraudadas por una “siembra del petróleo” cuya cosecha nunca les llegó (Cuadernos de Nueva 1980, 6).

Para la época que se desarrolla en esta investigación, la cual deviene de las elecciones que permitieron que el país regrese a la democracia después de una larga dictadura militar, cuya primera vuelta se realizó el 16 de julio de 1978 y la segunda vuelta el 29 de abril de 1979, el Partido Comunista controlaba casi integralmente la CTE. Pues los socialistas se habrán ido paulatinamente instalando en la CEDOC y en la CEOSL. Así la CTE y los comunistas sostuvieron el proceso de organización sindical y política de manera clandestina, durante la última fase de la dictadura, inclusive a riesgo de la *integridad personal*.¹ Resulta paradójico observar que durante los periodos de democracia —tal como ocurrió con respecto al Paro del Pueblo— la posición tanto del partido como de su central sindical, sea la defensa de la institucionalidad y la democracia. En el plano estrictamente sindical, más allá de sus incendiados discursos, ocuparon con poca eficiencia, pero cada vez más cómodamente la posición de mediadores del conflicto, en los términos propuestos por Elizabeth Jelin. Es decir, haciendo posible la existencia de la explotación fruto de la contradicción existente entre el capital y el trabajo. Y —definitivamente— generando mejores condiciones para los trabajadores en el marco de esta cruel relación. Esta constatación se complementa con la constante acusación proveniente de militantes de la izquierda hacia todos los organismos

¹ Como vivamente recordó el militante comunista Washington Espín en una de las más completas entrevistas realizadas para este trabajo, y como lo confirma constantemente en su tesis Efraín Redrován Zúñiga.

vinculados al Partido Comunista sobre su carácter sumiso ante los mandatos provenientes de la Unión Soviética.

Cuestionado por la Revista Nueva sobre la supuesta colaboración del Partido Comunista Argentino con la dictadura militar de ese país, así respondió René Maugé, quien asumía como nuevo secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano por decisión de su décimo congreso realizado en Guayaquil en noviembre de 1981. Acto en el que se desplazaba al histórico dirigente Pedro Saad Niyaim de dicho cargo, el cual ocupaba desde 1952:

¿Cómo evalúa usted las persistentes críticas que se han hecho al movimiento comunista internacional en el sentido de que por subordinarse a los intereses tácticos de la Unión Soviética se ha alejado muchas ocasiones de una política propia acorde con su realidad nacional? Yo creo que es una falsedad esa de acusar a los partidos comunistas de una subordinación. Existe un quehacer propio de los partidos comunistas. Yo, por ejemplo, le he dado una opinión de lo que conozco de la línea del partido argentino, y respeto su decisión. Es el partido argentino el que resuelve sus problemas como somos los comunistas ecuatorianos los que resolvemos los nuestros, sin admitir que otras fuerzas políticas de otros países interfieran en la acción y la decisión de nuestro partido. El último congreso, por ejemplo, se han debatido abierta y libremente todas las tesis políticas y las decisiones que se han tomado han sido soberanas. Sin interferencias de nadie. Estoy convencido de que así actúan todos los partidos comunistas (*Revista Nueva* 1981, 46).

Los editores de Revista Nueva, hicieron a inicios de 1982, en el preámbulo de la entrevista que acabamos de citar, la siguiente reflexión sobre dicho partido. “Un partido que para los publicistas de los grupos dominantes es la quintaesencia del ‘extremismo’. Que en la óptica de otras agrupaciones de izquierda recibe, al revés, calificativos de ‘reformista’, ‘burocrático’, ‘revisionista’ y hasta ‘estalinista’” (*Revista Nueva* 1981, 42). Por su parte Gonzalo Ortiz Crespo que en ese momento escribía editoriales en el diario Hoy, expresó sobre el mismo tema:

Como es sabido, el liderato del Partido Comunista, fuerza “conservadora” dentro de la izquierda ecuatoriana, se ha erosionado continuamente en los últimos años, permitiendo el surgimiento de grupos y grupúsculos de todos los tamaños y colores. Pero ello no lleva necesariamente al ultrismo. Al revés: aunque la crítica de la izquierda al “PeCé” es que se ha anquilosado, los grupos se han configurado a su imagen y semejanza, y añoran un poder movilización y una organización tan eficiente como los de su grupo madre (¡chuta madre!) (Ortiz Crespo 1982, 8).

Para el momento del Paro, el Partido Comunista se encontraba embebido en una batalla jurídica para que le sea permitido participar en las elecciones de 1984. Pues al no haber cumplido con el 5% del total de los votos en las elecciones que arrasó el Frente Radical Alfarista (FRA), a finales de 1980, esta capacidad le había sido retirada. Edgar Ponce aclara las razones para su participación en la política electoral:

Sin descuidar su directa participación en la vida nacional en salvaguarda de los intereses de obreros y populares, manteniendo directamente la conducción de la lucha política y sindical, la CTE condujo a grandes sectores de trabajadores a entregar su voto por las candidaturas del Frente Amplio de Izquierda en base a dos presupuestos de indiscutible validez histórica: el internacionalismo proletario y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. El reconocimiento de estos principios por parte de la clase obrera, le dio al FADI su razón histórica de vanguardia revolucionaria de nuestra clase, de nuestro pueblo. La CTE no se podrá alejar nunca de sus principios. Deberá reconocer en ellos su razón de ser organizado y combativo y el único camino de vinculación e inserción de los intereses proletarios en la vida de nuestro pueblo. Por la liberación nacional y un futuro socialista (Ponce 1985, 29).

Con esta cita se demuestra que la acción de la CTE estaba —en buena medida— subordinada a las decisiones del Partido Comunista, cuya ala en la política electoral era el Frente Amplio de Izquierda (FADI). Y es precisamente en esta interrelación en donde se explican las limitaciones y posiciones de la central sindical. José Chávez dirigente emblemático de la CEOSL describe este proceso de deterioro, de la siguiente manera: “indiscutiblemente era una central muy poderosa, pero con el paso del tiempo se convirtió más en un movimiento político que en una central sindical; no hay que dejar de lado las reivindicaciones económicas de los trabajadores” (Chávez citado en ALAI 1985, 21).

4.3.1. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL)

Según Efraín Redrován Zuñiga,² el antecedente para la formación en Ecuador de una corriente ligada al sindicalismo libre, fue “La renovada preocupación del aparato político de los EE.UU. sobre América Latina, a raíz de la Revolución Cubana, motivó que la embajada de dicho país en Ecuador haya creado una escuela sindical (Redrován Zúñiga 1983, 40).

² Quien a principios de la década de 1980 era dirigente de la CEOSL y además autor de una tesis en FLACSO sobre el papel de dicha central en la formación del FUT, valiosa —sobre todo— por su carácter testimonial, como se podrá mirar a continuación.

El propósito de la creación de la escuela sindical fue infiltrarse en la CTE, considerada por éstos (los norteamericanos) como un centro de “comunistas” y provocar desde su interior una “democratización”, para lo cual se debía impulsar una extensa campaña de educación sindical, dirigida fundamentalmente a dirigentes sindicales medios y de organizaciones de base (Redrován Zúñiga 1983, 40).

Según expone el dirigente, “Ciento ochenta dirigentes sindicales de base, intermedios y afiliados de la CTE fueron enviados entre 1960-1962, al centro de estudios sindicales de Washington” con la expectativa de que se convencieran sobre “las bondades de la sociedad norteamericana y su sindicalismo” (Redrován Zúñiga 1983, 40).

Los resultados fueron totalmente contrarios, solo veinte de ellos se separaron de la CTE, los restantes en vez de convertirse en promotores, criticaron las contradicciones del sistema capitalista norteamericano. El proyecto de este modo fracasó, y la escuela sindical fue disuelta después de dos años de intentos vanos de producir un cambio en la CTE (Redrován Zúñiga 1983, 40).

Estas serían —según Redrován Zúñiga— las primeras acciones en búsqueda de formar una corriente sindical *apolítica* que, además de debilitar a la CTE, podría servir a sus propósitos políticos en el plano nacional. Esto es, sustentando la posibilidad de encontrar mecanismos *armónicos* de gestionar la contradicción capital/trabajo. En rigor, mecanismos de conciliación. Este grupo de disidentes, junto a otros salidos de la CEDOC e incluso antiguos dirigentes de la CTE, empezaron a presionar por la conformación de una organización de sindicalismo libre.

José Chávez, líder histórico de la CEOSL, consultado sobre este particular, relató en 1985 otra versión sobre el origen de la central en referencia:

Creo que es indispensable referirse al hecho de que antes de que se constituyera las CEOSL, hubo varias organizaciones sindicales que se desafilieron de la CTE y también de la CEDOC y que tenían, en el primer caso, discrepancias por la creciente influencia de la Federación Sindical Mundial (FSM), y en el segundo caso, por la creciente influencia de la Iglesia. Varias de estas bases sindicales coincidieron en la necesidad de crear una nueva Central Sindical con una tendencia socialista, y recurrieron precisamente a la Internacional Socialista en búsqueda del apoyo necesario para que pudieran construir está central. La IS vínculo inmediatamente este pedido de organizaciones de trabajadores ecuatorianos a la CIOSL, con quién tenía relaciones estrechas y la CIOSL a su vez de encargo esta tarea a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), para que fuera ella quién se encargará de prestar la

colaboración necesaria para la constitución de esta nueva central sindical en el Ecuador (eso hacia mediados de la década de los 50) (ALAI 1985, 19).

Sea de cualquiera de las dos formas ya mencionadas, la ORIT lanzó el primero de mayo de 1959 un manifiesto que bajo los principios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en el que “daba a conocer sus fines y objetivos de su acción sindical, y llamaba a engrosar las filas de esta matriz regional a las organizaciones de Latinoamérica” (Redrován Zúñiga 1983, 43). Como consecuencia de dicho llamado se “lanzó una campaña de organización sindical principalmente en los países más subdesarrollados de la región” (Redrován Zúñiga 1983, 43).

En el caso del Ecuador, hizo su primer contacto con la C.O.G.-JP (Confederación Obrera del Guayas – Junta Provincial), quienes invitaron a la ORIT, a prestarles ayuda para la campaña que habían iniciado, para eliminar la hegemonía de la CTE, en la elección de la Senaduría Funcional, que concluyó después de la elección de Adalberto Miranda Girón como Senador de los trabajadores del Litoral (Redrován Zúñiga 1983, 40).

Esta colaboración llegó a tal punto que la ORIT designa, en enero de 1960 a Julio Echeverry Spíndola, para ejecutar acciones con respecto a lo solicitado y además se dedica a “crear las condiciones necesarias, dentro de la incipiente clase obrera de esa época y del sector artesanal, sobre las cuales se constituiría el ‘movimiento sindical libre’ en el Ecuador” (Redrován Zúñiga 1983, 43). Echeverry también utilizaría, con este propósito, la educación sindical, de manera tal, que sus esfuerzos dieron como resultado la fundación en 1960 de las primeras organizaciones de la corriente de Sindicalismo Libre en Guayas y Pichincha. El 5 de agosto de 1961 además se formaría la reconocida Federación de Trabajadores Sindicales Libres de Pichincha, la famosa FETRALPI.

La Central —finalmente— se conformó en su primer congreso realizado los días “28, 29, 30 de abril y 1° de mayo de 1962, con la presencia de 135 organizaciones entre las cuales se contaron sindicatos de obreros, gremios de artesanos, asociaciones culturales y clubes sociales y deportivos, que sumaban 261 delegados” (Redrován Zúñiga 1983, 44). Chávez se referirá a ese momento de la siguiente manera: “se crea la central, con una posición ideológica eminentemente liberal, con mucha influencia del Instituto Americano y de la ORIT y evidentemente también de la AFL-CIO. Y las organizaciones y los dirigentes de posición socialista fueron definitivamente marginados” (ALAI 1985, 19). Según este dirigente, aunque marginados desde ese momento, este grupo de personas fue el que sembró formación política y sindicalista, a través de un trabajo “tesonero, cuidadoso y comprometido con los intereses

de los trabajadores y de los sectores populares” (ALAI 1985, 20), que haría visibles su resultado en la llamativa transformación que haría una década después la organización.

Así, con el paso de los años, la CEOSL logra expandirse especialmente entre los trabajadores de las ciudades que, según este emblemático dirigente, estaba conformada por más de 1800 organizaciones sindicales, en 1985 (ALAI 1985, 23). Así mismo —según Chávez— el 80% de sus miembros provenían del sector industrial, comercio, servicios, la construcción, la agroindustria; en general, trabajadores en relación de dependencia (ALAI 1985, 19). Un notable alcance que se logró usando una estrategia que combinaba tres tipos de acción: “educación sindical, organización sindical y asesoría en materia de conflictos y contratación colectiva” (Redrován Zúñiga 1983, 44). Esto, en su conjunto, configuró una forma de sindicalismo meramente centrado en las reivindicaciones más inmediatas de los trabajadores, con un elemento adicional que no puede ser soslayado:

conviene señalar que la CEOSL, utilizó muy bien la coyuntura política que se le presentó con el advenimiento de la Alianza para el Progreso y la Junta Militar de Gobierno, especialmente debido al vacío dejado por la persecución de que fueron objeto los dirigentes sindicales de la CTE (Redrován Zúñiga 1983, 44).

Una vez que la CEOSL consolidó su eficiente estrategia sindicalista, una verdadera competencia se desató entre las centrales por la captación y generación de organizaciones sindicales, la cual favoreció a la CEOSL, por mostrar esta gran dosis de dinamismo, practicidad y sobre todo una capacidad innegable para generar resultados.

En la CEOSL se concentraron una visión y una estrategia dirigida al sector de asalariados por medio de un aparato sindical eficiente que pudo captar en los años sesenta influencia en los trabajadores a través de una ideología de conciliación con los empresarios que no vieron mayor peligro en sindicatos que pedían poco, cuando la CTE había perdido dinamismo en la acción sindical con la ilegalización a la que fue sometida por la dictadura militar de 1963, y por la presencia de un proletariado con fuertes raíces campesinas, carente de tradición y politización (Ibarra 1983, 78-79).

Por su naturaleza y origen, la confrontación entre centrales sindicales a la que se ha hecho referencia fue más intensa entre la CTE y la CEOSL y más sosegada entre CTE y CEDOC. Con la que, según parece, en algún momento hubo incluso un intento de fusión.

Una nueva cita de Redrován Zúñiga sirve para dejar claro que:

La lucha por la captación y/o retención de los pocos sindicatos existentes motivó la confrontación de las tres Centrales Sindicales. De hecho, la CTE y la CEDOC, reaccionaron negativamente frente a la CEOSL, esto se entiende por la visión que estas centrales tenían del “sindicalismo libre” al cual consideraban como una manipulación del “imperialismo” en favor de los "empleadores y el "Gobierno". Los hechos nos prueban que, en este sentido, se han cometido algunas equivocaciones. Si bien la CEOSL aparece como un fruto del trabajo intenso de la ORIT, no es menos cierto que, esto se debió también a los propios errores de la CEDOC y la CTE, en la conducción del movimiento sindical (Redrován Zúñiga 1983, 54).

En su momento, la CEOSL hace un viraje similar al que había hecho la CEDOC, pero —hay que reconocerlo— lo hace con un origen distinto. La central abanderada del sindicalismo libre en Ecuador abandona estos principios, a mediados de la década de 1970 y se define también como una organización socialista. En este trabajo se la entenderá siguiendo a Carmen Rosa Balbi, como una organización clasista. Cabe resaltar que, en el caso de la CEOSL, este cambio debe ser entendido como una transformación autónoma, es decir, no se ha detectado o denunciado seriamente una intervención o infiltración de alguna organización externa como sucedió en el caso de la CEDOC.

A saber, esta transformación llevada a cabo por un grupo de dirigentes jóvenes dirigidos por José Chávez y Julio Chang, se generó dentro su propio proceso interno de formación y organización. Patricio Ycaza lo explica “como consecuencia del incremento de su militancia, especialmente de la de elementos de procedencia obrera, quienes respaldaban un real proceso de unidad de los trabajadores lo que se explica por la homogenización de las demandas de los asalariados.” (Ycaza 1991, 251). Mientas que —como ya se dijo— José Chávez habla de un grupo de pacientes socialistas que fueron madurando dicha transformación.

Así, en 1974 durante el VI Congreso Ordinario de la CEOSL reunido en Manta, se resuelve expulsar a la directiva encabezada por Luis Villacrés Arandi. Un testimonio de Julio Chang Crespo, dirigente de la Federación de Trabajadores Libres del Guayas (FETLIG) —recogido por Efraín Redrován Zúñiga, en su tesis— deja ver las motivaciones por las cuales el entonces presidente de la CEOSL, promovido precisamente por la FETLIG, era separado de su cargo:

La división de la FETLIG, se debió a que un grupo de dirigentes sindicales, cansados por las componendas con el gobierno dictatorial, preocupados con la forma de llevar la dirigencia sindical, alarmados por las guerras intestinas entre trabajadores de las centrales, que nos llevaban a nada, creímos que había que hacer un cambio y porque también la corrupción dentro de las filas de la dirigencia de la CEOSL, campeaba; se negociaban y se hacían

negociados con los intereses de los trabajadores y sin poder hacer nada. Fue cuando nació la idea de unirnos un grupo de dirigentes sindicales en el Guayas y auspiciar una candidatura de un elemento joven, que en esa época vislumbraba con muchas perspectivas, a través de la FETRALPI, como era el compañero José Chávez, que era Secretario de Organización de la CEOSL (Redrován Zúñiga 1983, 86).

De esta cita, se puede discernir que la carismática figura del joven *Pepe* Chávez fue clave al momento de la decisión. Sobre el congreso de 1974, Chávez —en entrevista con ALAI— diría en 1985:

En este congreso se enfrentan dos tendencias perfectamente claras: el sector corrupto pro-imperialista, defensor de los intereses de la burguesía y el capitalismo y el sector de clara tendencia socialista, aunque en esos momentos este sector se identificaba con la necesidad de cambiar a los dirigentes corruptos por otros comprometidos con las bases y con los intereses nacionales y que habían demostrado en la práctica y en la lucha una honestidad indiscutible. Estos compañeros en el Congreso triunfan en las elecciones, logran derrotar a los que habían venido dirigiendo la Central, se aprueban resoluciones sumamente importantes entre las cuales se encontraba la de impulsar la unidad con las otras Centrales Sindicales (ALAI 1985, 20).

Lo que primero fue una aparente división, acabó siendo una transformación que alcanzó a toda la organización. Ya en 1975, en el siguiente congreso de la CEOSL, presionados por vertientes aparentemente independientes, los dos sectores en disputa fueron —si se quiere— obligados a participar en dicho espacio deliberativo realizado en la ciudad de Cuenca. En el evento se ratificó la elección de Chávez como presidente de dicha central, con lo cual el Ministerio de Trabajo, no pudo sino reconocer esta directiva. La cual, como sostiene Efraín Redrován Zúñiga, aportó grandemente a la configuración del proceso de unidad del FUT, que llevaría —a su vez— al Paro que se estudia en este trabajo.

Queda como anécdota el hecho de que ni la CTE, ni la CEDOC quisieron reconocer en primera instancia a la directiva encabezada por Chávez, posición que poco después rectificaron (ALAI 1985; Ycaza 1991).

4.2. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT)

Sin que sea el objetivo central de esta investigación resulta inevitable relacionar al FUT con las huelgas nacionales unitarias; esto desde sus antecedentes, así como para los momentos previos al periodo histórico que aquí se investiga. Es por esto que en este capítulo se abordará siguiendo esta tradición de la historiografía militante pero sin darle al FUT un carácter épico y —por supuesto— sin entenderlo como el sujeto de la revolución socialista. Se tendrá además

en cuenta que hubo siempre una tensión entre los límites concretos de las centrales sindicales, los deseos de sus dirigentes y los deseos de las bases sindicales o de los sectores populares. Tensiones que incluían un tira y afloja para ampliar la coordinación y la acción. Así mismo, se encontraron constantes referencias sobre los pedidos de avanzar hacia la construcción de una central única de trabajadores que nunca se concretó.

El antecedente inmediato de lo que después sería el FUT habría que buscarlo en la fugaz Fuerza Laboral Ecuatoriana (FLE), que fue el mecanismo que, para mayo de 1971, acordaron dos de las tres mayores centrales sindicales, la CTE y la CEOSL, además de los empleados públicos, cuyos sindicatos y organizaciones habían sido ilegalizadas. La FLE buscaba impulsar una Plataforma de Lucha —aquí también se encuentra el antecedente de este instrumento— es decir, se consensuó para promover o exigir, una lista de demandas a través de las cuales dichas organizaciones se articularon. Esta plataforma incluía —además de una serie de puntos que confrontaban abierta y valientemente a la política del periodo dictatorial que daría fin a los velasquismos— un llamado a instaurar un *gobierno nacionalista*. Del cual —según recoge Patricio Ycaza en el segundo tomo de su Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano— debían también ser parte las Fuerzas Armadas. Este pedido fue inspirado — muy probablemente— en el proceso nacionalista que vivía el Perú a través de la dictadura de Velasco Alvarado (Ycaza 1991, 243).

Es así que surgidas dentro de este proceso discrepancias entre la CTE y la CEOSL surgió un nuevo intento de conformar un espacio de coordinación, esta vez entre la CTE y la CEDOC:

El 16 de junio de 1971 en Quito, y una vez fracasada la Constitución de la Fuerza Laboral Ecuatoriana, la CTE, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Cristianas —como hasta entonces se denominaba la CEDOC—, la Fuerza Pública pasiva (militares retirados) y la Confederación de Empleados Bancarios y Entidades Semipúblicas (CESBANDOR), acuerdan constituir el FUT, con el propósito de alcanzar la unidad de todos los trabajadores ecuatorianos, encuadrando su función en el “rescate de la dignidad del hombre y la sociedad” (Ycaza 1991, 244).

Poco tiempo después se sumó a esta forma primigenia de FUT, la inmensa Federación Unitaria de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador (FEDELEC). Para conducir el proceso de unidad, se crearon dos organismos de dirección: un Consejo Nacional y una Dirección Ejecutiva para el nuevo organismo. Así la primera dirección ejecutiva nacional, estuvo conformada por Jacinto Figueroa Vera, presidente de la CEDOC, Leonidas Córdova, presidente de la CTE y el teniente coronel en retiro Sergio Enrique Girón por los militares

retirados. Según Ycaza “El FUT se formó como un frente reivindicativo-clasista, que privilegia una práctica de confrontación sindical y no de concertación, ‘con independencia absoluta de todo partido político’” (Ycaza 1991, 244).

Sobre el nombre FUT, se debe señalar una coincidencia en el nombre con otro organismo similar, otro FUT, que existía en Chile durante la misma época (López Dietz 2016, 92).

Bajo este esquema de unidad primigenia entre dos sindicatos de corrientes opuestas — comunistas, socialistas y católicos, militares retirados y empleados públicos— se lanza una huelga nacional el 28 y 29 de julio de 1971 todavía bajo la dictadura de Velasco Ibarra. El entonces Presidente de Ecuador se refirió a ella como “paro subversivo que obedece a consignas foráneas” (Ycaza 1991, 245). Coincidiendo con el dirigente de la CEOSL, Luis Villacrés Arandi, quien diría que el FUT es solamente una fachada del Partido Comunista: “Unidad si reclama el FUT, pero para cumplir ciegamente consignas foráneas y que nada tienen que ver con los verdaderos intereses de los trabajadores” (Ycaza 1991, 245).

La huelga se realizó de todas maneras:

planteando un programa expresado en 17 puntos entre los que se incluyen: mejoras salariales para los trabajadores, oposición a la elevación del precio de los artículos de primera necesidad, rechazo a un código de Seguridad Social y defensa de la autonomía del Seguro, ejecución de una reforma agraria democrática y radical, derogatoria y modificaciones de las leyes anti obreras y anti campesinas, solución de los conflictos de trabajo pendientes, rechazo a la represión estatal y patronal, derogatoria de la ley de educación superior atentatoria los principios de autonomía, cogobierno y democratización de la enseñanza superior, oposición a una nueva devaluación monetaria; además contiene también una declaratoria de oposición a la dominación de “las oligarquías, los feudales, los monopolios imperialistas y la dictadura (Ycaza 1991, 244-245).

El ejército participó activamente en la represión asediando las fábricas que plegaron a la paralización. Los patrones pidieron y tuvieron autorización del gobierno para despedir a los dirigentes que supieron identificar como líderes de la protesta, tanto como los trabajadores que participaron en ella. Se amplió la prohibición del derecho a la organización para los empleados públicos, al punto que el propio Velasco Ibarra encabezó el desalojo de los trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que participaban de la paralización. Y —para colmo— al día siguiente —por decreto supremo— les suspendió el derecho a crear sindicatos (Ycaza 1991, 245).

El Frente Unitario de los Trabajadores se presentó como una fuerza que despertaba expectativas, bajo el supuesto de una gran capacidad de movilización que en el momento de actuar se encasquillo... En efecto, la huelga de 48 horas convocada para el 28 y 29 de julio de 1971, terminó rápidamente con el sacrificio de los trabajadores: el ejército asedió las fábricas paralizadas, se despidió a los dirigentes de los sindicatos que plegaron a la huelga y se suspendieron los derechos de organización de los empleados públicos. Una medida de fuerza y represión legal bastó para desarmar el intento de huelga, a pesar de que en las cúpulas directivas se tenía previsto para esos días el estallido de una insurrección general para acabar con Velasco Ibarra y gestar un gobierno civil-militar progresista (Ibarra 1983, 79).

Según Hernán Ibarra, la inesperada alianza entre la CTE y la CEDOC se explica precisamente en esta expectativa de insurrección pues “los Partido Comunista y Democracia Cristiana, que influían en la CTE y la CEDOC respectivamente, se encontraban en un plan conspirativo tendiente a formar una alianza civil-militar que acabó plasmándose en el Gobierno de Rodríguez Lara” (Ibarra 1983, 79).

Bajo la luz de la evidencia debe revisarse este último análisis pues el acto valiente de unirse y desafiar a una violenta dictadura no debe ser juzgado solo en los resultados en cuanto a número de movilizados, pues una cosa es movilizarse en dictadura y otra movilizarse en *democracia*. Así mismo, aunque sin la contundencia que se esperaba por parte del movimiento popular, la larga historia de las presidencias y dictaduras de Velasco Ibarra llegó a su fin. Algún mérito puede tener en este acontecimiento la movilización de los trabajadores. Esta primigenia *huelga* no es considerada, ni por los miembros del movimiento sindical, ni por los especialistas en el tema, como la primera huelga unitaria, sino como un ineludible antecedente de estas, debido —probablemente— a que no se enunció un carácter clasista que condujeran a la revolución proletaria pues contó con la presencia de la CEDOC Católica y una diversidad de organismos que no elevan este discurso. Al parecer, la paralización, tanto como lo impulsado por la FLE, tuvieron como objetivo enfrentarse al errático dictador y convocar a una reacción de las fuerzas armadas. Cosa que así ocurrió durante el feriado de carnaval de 1972, el cual dio su nombre a este sosegado golpe militar. El *carnavalazo* acabó con el periodo dominado por los gobiernos de Velasco Ibarra y por su figura política, y dio inicio a la dictadura que se ha trabajado a profundidad en el capítulo anterior.

Para dimensionar el alcance represivo de la dictadura de Velasco Ibarra, es necesario mencionar que fueron asesinados durante este corto periodo connotados dirigentes populares y militantes políticos como Milton Reyes, presidente de la Federación de Estudiantes

Universitarios del Ecuador (FEUE) filial de Quito, René Pinto del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Rafael Brito Mendoza, presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, quien era militante del Partido Socialista Revolucionario del Ecuador (PSRE) (Ycaza 1991, 242). Las clausuras de medios de comunicación, la reducción de derechos y los ataques personales fueron la tónica. Velasco Ibarra actuó brutalmente, al punto de “clausurar la Universidad Central, cuya imprenta ordenó dinamitar” (Ycaza 1991, 241). También mandó a capturar a su rector Manuel Agustín Aguirre junto a otros directivos entre los que se encontraban Telmo Hidalgo del PSRE y Bayardo Tobar del MIR (Ycaza 1991, 241).

Con respecto a los periodos militares de la dictadura militar que abarcó casi toda la década de 1970 en Ecuador, se debe decir que aunque el primero —el periodo regentado por Guillermo Rodríguez Lara— redujo la carga represiva directa, perjudicó grandemente a los trabajadores. Pues, para privilegiar el modelo de acumulación basado en el desarrollo industrial, generó varios decretos que atentaban contra sus derechos y especialmente a su derecho de organización, reclamo y huelga. Este proyecto *Nacionalista y Revolucionario* contó con el *apoyo crítico* del Partido Comunista Ecuatoriano y por lo tanto de la CTE. La segunda fase de la dictadura —la del triunvirato— retomó sin ambages la tradicional lógica represiva, llegando a perpetrar —como ya se había mencionado— una masacre de obreros en el ingenio azucarero Aztra en octubre de 1977, así como el torpe asesinato del reputado dirigente político Abdón Calderón Muñoz en noviembre de 1978. Entre tantos otros actos de represión, acoso y persecución política.

Es preciso remarcar que estos dos primeros intentos de unidad entre las centrales sindicales se dan en momentos en los que todavía ni la CEDOC, ni la CEOSL se habían definido como socialistas o clasistas. Estos primeros pasos juntos, tanto como sus discrepancias, pero sobre todo sus resultados, dejan ver la necesidad de toda la sociedad y de los trabajadores —en particular— de expresarse a través de movimientos sociales y organizaciones —sobre todo— cuando los partidos políticos habían sido ilegalizados.

No debe olvidarse que ya en 1966 la CEDOC, la CTE y el Sindicato Único de Choferes de Pichincha protagonizaron una huelga que enfrentó a otra cruenta dictadura militar (Robalino 1992, 214). Cosa parecida ocurrió cuando, en 1961, la CTE convocó a un paro “para lograr la caída de Velasco Ibarra” (Ibarra 1983, 79). Tampoco debe olvidarse la huelga general convocada por la CTE en 1949 (Robalino 1992, 133).

Queda claro también que las definiciones ocurridas a mediados de la década de 1970 tanto en la CEDOC como en la CEOSL, se dan en buena medida por presiones de las bases exigiendo posiciones más claras y *combativas* por parte de sus dirigencias, presiones exacerbadas por los ataques en contra de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general, tanto de la dictadura civil de Velasco Ibarra como de la dictadura militar en sus dos fases. Es también importante considerar que, entre estos tres periodos de dictadura, transcurrió más de una década, en la que los sindicatos y las centrales sindicales se fortalecieron como gestores de la política y —sobre todo— como canales de exigencia y transmisión de las necesidades de los sectores populares.

A estos dos elementos, más peso creciente del proletariado industrial y cambios en la orientación de algunas de las organizaciones sindicales, hay que añadir un tercero. Está conformación tuvo lugar durante la década de los 70, en el marco de un régimen autoritario. Este hecho supuso (dada la limitada capacidad de representación de los partidos políticos por su no reconocimiento legal, entre otras causas) que el FUT se erigiese en el principal interlocutor de los trabajadores. De esta manera, durante el período autoritario, el movimiento sindical tuvo, ineludiblemente, una importante presencia política (León y Pérez Sáinz 1986, 96).

Es claro que, tanto el FUT como el movimiento sindical, ven su nacimiento en medio de este tipo de configuraciones políticas, fruto de las tensiones y contradicciones propias y particulares de este grupo de regímenes dictatoriales.

4.3. Las huelgas nacionales unitarias

El FUT volvería a llamar a huelga nacional, ahora sí con el acuerdo y la participación de las tres centrales sindicales mayoritarias en lo que se considera, según el movimiento sindical y los expertos, como la primera huelga nacional unitaria. Ya definidas todas las centrales hacia el clasismo, se convoca una paralización nacional para el 13 de noviembre de 1975, después de lo que se conoció como el *golpe de la funeraria* o *el golpe del 32 de agosto*, un serio intento militar para derrocar a Rodríguez Lara, el cual dejó un saldo de 25 muertos y 53 heridos. Pese a que su *plataforma de lucha* tuvo un carácter cercano a las demandas populares, tanto como de los trabajadores en su nueva experiencia industrial, no debe dejarse de lado que “la huelga no dejó de tener un trasfondo político: la defensa del tambaleante gobierno de Rodríguez Lara” (Ycaza 1988, 47). Es decir, fue un intento del movimiento sindical para respaldar un régimen que se preveía iba a caer. En palabras de los propios integrantes del movimiento sindical: tuvo un carácter *antigolpista* (CEDOC-CEDEP 1983, 9).

Se justifica esta posición diciendo que el intento de golpe militar “encabezado por González Alvear el primero de septiembre, llevó a varios dirigentes sindicales a frenar la combatividad de la huelga con la intención y la confianza de consolidar el régimen supuestamente reformista de Rodríguez Lara” (CEDOC-CEDEP 1983, 9).

La constante presión de las bases obreras por alcanzar mejoras salariales, la sistemática oposición a la legislación anti-obrera, en especial al “nefasto” decreto 064, los cambios operados en la conducción de la CEOSL y la CEDOC contribuye a la unidad de las matrices sindicales que formulan una nueva plataforma de lucha de “9 puntos” en base de la cual impulsan una huelga nacional el 13 de noviembre de 1975 fue la primera acción verdaderamente unitaria de la clase obrera y contó con una amplia participación de los sindicatos industriales y del movimiento campesino que vivía un momento de auge. Prácticamente el país se paralizó. Un avance además por cuanto esta vez del movimiento estudiantil, con serias pugnas en su interior, jugó un papel secundario, al contrario de lo que aconteció en la década del sesenta (Ycaza 1988, 46-47).

Antes de seguir, se debe aclarar que el decreto 064 expedido en 1974, es decir, durante la primera fase de la dictadura militar “impedía presentar pliegos de peticiones donde existían Contratos Colectivos para eliminar la posibilidad de que se generaran conflictos colectivos y huelgas” (Ibarra 1983, 80). Este decreto sirve de ejemplo al tipo de relación que tuvo la dictadura con respecto a los trabajadores, dictadura que —como ya se ha dicho— contó con el *respaldo crítico* del Partido Comunista Ecuatoriano.

Una cita de Hernán Ibarra, en su emblemático artículo “Fuerza y debilidad en las huelgas nacionales” publicado en el número 94 de la Revista Nueva, a inicios de 1983, permite comprender mejor el alcance de esta primera huelga unitaria:

Esta huelga marca por primera ocasión una acción unitaria de las tres centrales sindicales. Fue considerada un éxito como movilización, pero no trascendió políticamente. Si se había radicalizado el movimiento obrero y el campesinado se encontraba en un buen nivel organizativo, su capacidad de presión no era de una magnitud capaz de provocar cambios en la lucha política, en un momento en que la política se hacía a través de los gremios (Ibarra 1983, 80).

El 18 de mayo de 1977, el FUT volverá a movilizarse en otro inmenso acto de valentía, solo comprensible en el contexto del momento más represivo de la segunda fase de la dictadura militar, cuando toda forma de oposición era acosada y perseguida. Esta sería la Segunda Huelga Nacional Unitaria:

En definitiva, la dictadura va articulando un andamiaje jurídico-político represivo que hará sentir su peso en la segunda huelga nacional que coaligada materializan CTE, CEDOC y CEOSL el 18 de mayo de 1977. A esta se sumó la Unión Nacional de Educadores (UNE), que no obstante ser ilegalizada por la dictadura mantiene un paro nacional de maestros por espacio de un mes. A pesar de no alcanzar la consistencia y trascendencia de la primera, toda vez que la paralización no alcanzó a ser total, esta huelga constituye un importante avance unitario, sin embargo de la polarización de posiciones de las dirigencias sindicales en torno al “retorno constitucional” y por el maridaje que se da entre los gremios de patronos y el gobierno, este último, incluso desconociendo la jerarquía judicial mediante acciones sumarias, instituye la prisión para los dirigentes provinciales y nacionales que participan en la huelga; varios de ellos llegan a ser encarcelados, mientras otros buscan exilio. (Ycaza 1988, 48).

Tal como ocurrió ya en 1966, la huelga nacional contribuyó a debilitar la legitimidad de una dictadura que se había extendido más allá de los límites del periodo temporal autoimpuesto y —sobre todo— de las atribuciones de un gobierno con respecto a sus ciudadanos. En oposición al optimismo de Ycaza, los sindicalistas valoran esta huelga como un fracaso.

La instalación del Triunvirato Militar y la escalada represiva contra el pueblo, junto con el Proceso de Retorno, persiguen debilitar políticamente al movimiento popular que había demostrado su fuerza a todos de estos años. La falta de un frente político que recoja la lucha del pueblo contra la Dictadura, la fuerza de las expectativas creadas por la burguesía con la "vuelta a la democracia" y la confusión creada por los medios de comunicación, y los divisionistas y los "chinos", debilita la huelga, que se produce tardíamente, cuando ya los sectores más avanzados de la clase obrera se encontraban aislados. La debilidad de la Huelga demostró la fragilidad de la unidad sindical y el atraso de su dirección. El Gobierno aprovechó esta situación para incrementar la represión, llegando a la brutal masacre de AZTRA (CEDOC-CEDEP 1983, 9).

En una entrevista para este trabajo a José Chávez dirigente de la CEOSL relató como tuvo que escapar, literalmente por los techos, para escapar de una detención ordenada por los militares en este periodo. Así mismo, Emilio Velasco dirigente de la CEDOC, en otra entrevista pocos meses antes de su fallecimiento, relató cómo fue detenido y posteriormente puesto en libertad.

Otro hecho social que debilitó a la dictadura y que —de hecho— la doblegó, fue el aumento de tarifas del transporte urbano, que derivó en lo que se conoció como la *Guerra de los cuatro reales*. La junta militar accedió, sin más, a un incremento del 40% en el precio de los pasajes a nivel urbano, reclamado por la *sufrida clase del volante*, es decir, por las organizaciones de choferes. Esta decisión despertó una gigantesca movilización popular especialmente en

Quito, que es escenario entre el 3 y el 22 de abril de una serie de disturbios y movilizaciones populares masivas.

Las "jornadas de abril", que cobraron la vida del obrero Luis Naranjo cuando el ejército atacó una multitudinaria concentración en la zona industrial del sur de la capital, obligaron a la dictadura a establecer un subsidio al transporte. También con el propósito de paliar las altas tasas inflacionarias y la disminución del poder adquisitivo de la moneda, el consejo supremo de gobierno creó en abril de 1979 el décimo quinto sueldo (Ycaza 1991, 267).

La tercera huelga unitaria ocurre —como se había visto en el capítulo anterior— después de emitidas un grupo de medidas económicas con las cuales el gobierno de Roldós intenta controlar a nivel local, los efectos de una reestructuración económica global, que hacía ya sentir sus presiones sobre las economías dependientes. Además, de un importante *desbalance* económico producido por la breve conflagración armada con el Perú y que devino en una especie de patética carrera armamentista entre los dos países.

Como ya había pasado antes, en el episodio conocido como la pugna de poderes, Roldós no se atreve a desafiar a las élites. Y, en este caso, no osa poner en riesgo sus lógicas de acumulación, por lo que acaba poniendo el peso de la crisis sobre las espaldas de las clases populares. El FUT demora su declaración de huelga en largas e infructuosas conversaciones con un gobierno del cual Pedro Saad (*Vistazo* 1982, 10) y Pepe Chávez fueron asesores. Según lo relató este último, orgulloso, en una entrevista realizada para esta investigación.

Así, aun cuando las medidas fueron dictadas en febrero, recién en mayo y solo bajo la presión de los airados reclamos de diferentes sectores, una serie de protestas y disturbios autónomos —además de las siempre presentes huelgas en centros de trabajo— finalmente el FUT declara la huelga nacional para el 13 de mayo de 1981.

El FUT luego de una inicial actitud tolerante hacia el régimen de Roldós, que hábilmente supo aprovechar la disputa fronteriza con el Perú a comienzo de 1981 llamando a la “Unidad Nacional”, para expedir un paquete de medidas económicas que implicaron el recorte de subsidios y alza de precios, paulatinamente irá radicalizando sus luchas ante la exigencia de las bases sindicales obreras y campesinas que reclamando sus reivindicaciones realizaron huelgas parciales. De este modo el FUT pasó a jugar un papel protagónico en la vida nacional al frente de la protesta popular que se ha multiplicado enfrentando a la más aguda crisis registrada por la economía ecuatoriana en el presente siglo (Ycaza 1988, 49-51).

Se considera que esta huelga fue una victoria, de hecho, fue la más grande y con más participación que se había realizado hasta ese momento, esto pese a la alianza con “la

impopular Federación de Choferes” (Ibarra 1983, 80). Es importante tener en mente que solamente once días después, Jaime Roldós, su esposa y otras ocho personas más morirían en un accidente aéreo.

La cuarta huelga nacional unitaria convocada por el FUT para el 9 de diciembre de 1981 llega muy tarde pues varios sectores populares, provincias, cantones y —especialmente— estudiantes habían empezado a generar disturbios, tomas y paros desde principios de noviembre. Mientras tanto, los dirigentes del FUT se mantenían en diálogos con el Gobierno.

El aumento del azúcar como la represión contra los trabajadores de IETEL, Palmera de los Andes, o, y en general la derechización del Gobierno, llevó a las bases de exigir la Huelga Nacional en Octubre. La dirección del FUT no hizo caso y prefirió mantener la vía del diálogo. Cuando este diálogo falló, el FUT convoca tardíamente a la huelga. Las bases obreras aceptaron con poco entusiasmo la inoportuna convocatoria del FUT, las más conscientes combatieron, pero el movimiento huelguístico queda aislado. El Gobierno de Hurtado aprovechó para desprestigiar la lucha popular y sobre todo para profundizar la política antipopular y derechista cuyos efectos hemos venido sufriendo este año (CEDOC-CEDEP 1983, 10).

Según el académico Hernán Ibarra, “La huelga del 9 de diciembre, respondía a destiempo a nuevas alzas de precios, entre ellas el alza del azúcar, y concretamente obedeció a una presión de la CTE reflejando una pugna interna por su dirección” (Ibarra 1983,9). Hasta aquí, revisamos sus acciones conjuntas, pues las huelgas quinta y sexta, serán analizadas en el capítulo que sigue.

4.4. La *politización* de los trabajadores

Los acercamientos y las formas concretas de cooperación entre las centrales sindicales se afianzaron a través de la acción colectiva conjunta. Y, como ya se ha demostrado, a través de las transformaciones hacia posiciones clasistas de las centrales. Antes de avanzar, es importante problematizar un tanto estas tomas de posición, que a su vez nos permitirá tener claridades sobre la dinámica interna, tanto de las centrales como del FUT.

Reflexionando en específico sobre la CEDOC, Juan Paz y Miño e Isabel Robalino coinciden en afirmar que la “politización de los dirigentes no arrastra a las ‘bases’” (Paz y Miño 1988, 69). En este trabajo se sostiene que esta valoración cabe de forma extendida a todas las centrales sindicales de la época. Además, que esta visión fue recogida aún como reclamo, en las entrevistas que se realizó a dos dirigentes de base, uno de la CTE y otro de la CEOSL.

Sí, como se ha dicho, la politización de los dirigentes no significa la politización de sus bases, se asume que los trabajadores buscaban principalmente resolver sus necesidades urgentes e inmediatas. Para lo cual buscan el cobijo y el acompañamiento de los sindicatos primero y después de sus centrales de ser necesario. De manera tal que serán los dirigentes a quienes “les tocará resolver la vinculación de las orientaciones ‘revolucionarias’ con mecanismos prácticos de acción, que los trabajadores buscan espontáneamente en su vida laboral inmediata y cotidiana” (Paz y Miño 1988, 69).

El historiador Juan Paz y Miño afirma que esta distancia tan notable entre los discursos y la práctica sindical aflora debido a que:

Surgen las contradicciones cuando se intenta el “control” directo y en este caso específico en razón de que los propios movimientos de izquierda todavía privilegian discusiones sobre asuntos teóricos y doctrinarios con los que pretenden resolver la práctica de las organizaciones populares usualmente sin advertir las limitaciones políticas que de ello se derivan (Paz y Miño 1988, 69).

En ese mismo sentido Isabel Robalino pregunta “¿Responde a la realidad esos principios? ¿Se trata solamente de afirmaciones de las que toman conciencia pocos dirigentes o de principios conocidos y aceptados por la base?” (1992, 143). Con base a los resultados de una investigación realizada en 1973 por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Sociales (CELADIS) y el Instituto Ecuatoriano para el Desarrollo Social (INEDES) sobre actitudes ideológicas y niveles de conciencia de clase sobre una muestra de trabajadores ecuatorianos, responde:

La posición doctrinal, la afirmación revolucionaria o transformadora son patrimonio de unos pocos dirigentes, frente a una masa de trabajadores que permanecen en sus intereses reivindicacionistas inmediatos. Ello también nos explicaría cierta movilidad en la afiliación entre las diversas centrales, según una u otra aparezca en el momento con más capacidad de satisfacer a los intereses inmediatos de los grupos de trabajadores (Robalino 1992, 144).

Las conclusiones del fascinante estudio al que se hace referencia concluyen que “no se encontró relación significativa entre la conciencia de clase y la participación sindical” (Robalino 1992, 143). Así mismo, resulta lógico encontrar que una “relación positiva, significativa y fuerte se da con las variables ‘status social’ y ‘movilidad social’” (Robalino 1992, 144). Esto en total consonancia con los resultados de un estudio realizado poco más de una década después, por Juan Pablo Pérez Sáinz, quien en su libro “La ciudad y la fábrica” plantea, por su parte, la pregunta “¿qué tipo de clase obrera existe realmente en la sociedad

ecuatoriana?” (1986, 9). Y, después de constatar que la “fuerza de trabajo tiende a ser remunerada por debajo de su valor de cambio” (Pérez Sáinz 1986, 11). Es decir que el salario familiar no alcanza para cubrir las necesidades de reproducción de una familia y que, por tanto, no existe tal cosa como un salario familiar, justifica su investigación en los siguientes términos:

Esta clase obrera no puede ser caracterizada a partir de esquemas interpretativos <<clásicos>> ya que su naturaleza viene condicionada no solo por formas conocidas de la relación capital que se expresan en los momentos del intercambio y del uso de la fuerza de trabajo o, sino también por otros elementos que se materializan en la esfera reproductiva (Pérez Sáinz 1986, 11).

Una de las afirmaciones de este estudio, en su momento, motivó una acalorada discusión entre Felipe Burbano de Lara y Patricio Ycaza recogida en el número 9 de la Revista Ecuador Debate (1985, 10-32). La discusión inspiró en parte la realización del presente trabajo. A saber, con un irrefutable sustento, Pérez Sáinz sostiene que “la discontinuidad en los momentos de existencia de la capacidad laboral asalariada sugiere que la clase obrera ecuatoriana no tiene una identidad única” (Pérez Sáinz 1986, 78). Así —complementando lo que ya había dicho en 1985— “ciertos comportamientos y orientaciones de la clase obrera ecuatoriana (como los políticos) están bien determinados por la ciudad (entendida, en un sentido amplio, como espacio de la reproducción) que por la fábrica y el mundo de la reproducción” (Pérez Sáinz 1985, 190). Con estas premisas, llega a una potente conclusión: “La inserción de los obreros en distintas esferas, que no se corresponden, supone que la definición de este conjunto de agentes sociales es necesariamente múltiple” (Pérez Sáinz 1986, 78).

Es decir, en la esfera reproductiva los obreros pueden constituir diversas identidades que, de hecho, juegan un papel compensador respecto de los fenómenos de insuficiencia salarial y proletarización parcial que son manifestaciones de exclusión económica. Esto sugiere la necesidad de redefinir el concepto de clase obrera en el sentido de incorporar estas identidades surgidas de las prácticas reproductivas (Pérez Sáinz 1986, 78).

Esta crítica profunda a lo que él denomina *obrerismo*, es decir, a la definición “que adjudica apriorísticamente, un papel hegemónico a la clase obrera, subordinando a otros sectores de trabajadores y populares, en general” (1986, 10), no fue bien recibida por los dirigentes del movimiento sindical, según lo comentó el autor durante una entrevista realizada para este trabajo. Esto pese a su clara intención de problematizar dicho aspecto, de tal manera que los

dirigentes puedan tomar mejores decisiones y sobre todo conocer mejor la realidad de los trabajadores con los que contaban sus organizaciones. La *obrerización*, es decir, lo que Hernán Ibarra denominó en su momento —y tal vez de manera más exacta— *el mito de la clase obrera* es para Pérez Sáinz, “una de las dificultades que tiene el FUT en establecer alianzas sólidas y recoger, de manera orgánica, las distintas demandas populares” (Pérez Sáinz 1986, 10).

En esta supuesta *politización* de la clase obrera, a todas luces imaginada por dirigentes estos sí politizados, no solo asumía —según la doctrina soviética— que los obreros industriales son el sujeto inexcrutable de la revolución, sino que se negaba deliberadamente su realidad y sus condiciones.

Se debe agregar otro importante mito, aquel que habla de la necesidad de generar una Central Única de Trabajadores (CUT) como condición *sine qua non* para lograr las transformaciones sociales, necesidad o paso previo que se mencionaban de manera escatológica en los incendiados discursos. En otras palabras, la formación de la CUT era condición ineludible para lograr transformaciones profundas o incluso la misma revolución.

Es fascinante conocer que esta Central aun sin existir tenía hasta un nombre asignado en el deseo de los trabajadores —la CUT—, era importante sobre todo para aquellos trabajadores y militantes pertenecientes a las bases organizadas y, estaba, además presente permanentemente en los discursos de sus dirigentes. Paradójicamente, esta supuesta necesidad, chocaría permanentemente con la interminable repetición —*cuasi mántrica*— que afirmaba que *no existen las condiciones*. De tal manera, que para la época que le compete a este trabajo, no existirían las condiciones ni para construir la Central Única, ni para la Revolución, ni para la toma del Poder. Así, explícitamente ha sido recogido, a modo de frustración y reclamo, en las entrevistas hechas a militantes del movimiento sindical de la época.

Esta supuesta falta de condiciones, desconociendo la realidad, la espontaneidad, las capacidades y las aspiraciones de las bases, estaba totalmente determinada por los imaginarios impuestos por los grandes partidos comunistas de la época. Es decir, las condiciones pasaban indefectiblemente por la construcción de un inmenso y hegemónico partido de masas con la capacidad de decidir los momentos adecuados. Recogemos una discusión que demuestra lo que hasta aquí se ha afirmado al respecto:

en el acta resumida de la segunda Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores, celebrada en el salón de sesiones del sindicato de LIFE, el día 5 de febrero de 1982 y a la que

asistieron José Chávez por la CEOSL, los dirigentes de las otras centrales CTE y CEDOC, así como líderes de CONASEP, FEUE, FENARPE y delegados de ECUARUNARI, se recoge lo siguiente: “En el punto 4, luego de la lectura del Plan de Acción del FUT para 1982, presentado por la Dirección Nacional se presentan varias intervenciones que hacen referencia fundamentalmente a que se debe incluir en el documento que el objetivo de los trabajadores es ir hacia la Constitución de la CUT. Este aspecto es defendido especialmente por la CTE, la CEDOC y la FEUE. La CEOSL considera que no debe incluirse dicho planteamiento ya que ese es un objetivo estratégico y ahora se trata de fortalecer el FUT, además que plantear la CUT en ese año es peligroso ya que se mantendría cuatro centrales, por un lado, el FUT y por otro los divisionistas, Barragán, Villacrés Arandi y el FUOS, razón por la cual es necesario trabajar para liquidar estos grupúsculos y ganar las bases a nuestras centrales” (Paz y Miño 1988, 87).

La disputa de posiciones fue una parte importante en la dinámica interna del FUT. Así, las exigencias de las bases para la época eran —con frecuencia— más radicales que las de sus dirigencias. Y estas, en una dinámica cada vez más vertical y autoritaria, no siempre encontraban caminos de ejecución o resolución dentro del esquema organizativo de los sindicatos, las centrales sindicales y el espacio de coordinación que las unía.

4.5. Aliados y otros actores del conflicto

Procede ahora, en el marco de la revisión de los actores sociales que participaron en el estallido social, caracterizar de manera general a los aliados del FUT. Así como otros actores sociales que participaron y sostuvieron las huelgas cuarta y quinta que se verán —como ya se ha dicho— en el capítulo que sigue.

Así, para la sexta huelga nacional unitaria realizada en octubre de 1982, bajo el nombre de Paro Nacional del Pueblo, encontramos un confuso acuerdo entre el FUT y la Federación Nacional de Choferes o Federación de Choferes Profesionales del Ecuador. Acuerdo que se rompe enseguida por una negociación entre los chóferes y el Gobierno a espaldas de las organizaciones de trabajadores.

A continuación, una descripción que hace la Doctora Isabel Robalino Bolle en su libro *El Sindicalismo en el Ecuador*, sobre esta organización de chóferes surgida en 1945:

La Federación está integrada por los diversos sindicatos provinciales, como también por los cantonales y los parroquiales, constituyendo un caso especial de sindicalización única y obligatoria. La Federación Nacional de Chóferes Profesionales del Ecuador se afilia inicialmente a la CTE, constituyendo su más importante organización táctica. Hacia 1966 se

desafilia de la misma por razones ideológicas y se mantiene independiente, hasta la presente fecha de las 3 centrales sindicales (Robalino 1992, 214).

Esta federación claramente representaba los intereses particulares de un grupo de empresarios, quienes, con una gran capacidad de influencia fruto de la necesidad, presionaban al Gobierno sin considerar los efectos que la concreción de sus exigencias tendría en las clases populares.

Por otra parte, y esta vez sí claramente definidos como aliados, se encuentran varias organizaciones campesinas e indígenas que empezaban a configurarse como un actor social autónomo. Pero que reconociendo la hegemonía del FUT para ese momento, no solo que interactuaban con él, sino que reclamaban espacio dentro de sus aparatos de decisión. Siendo la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) la más fuerte de ellas para la época, junto con una Ecuarunari que se consolidaba.

Así, las dos organizaciones que se acaba de mencionar harán sentir su fuerza el 16 de octubre de 1980 en la Marcha Nacional Campesina Indígena Mártires de Aztra, la cual marca — probablemente— un hito de origen para este movimiento social.

Varios fueron los intentos de los demócratas cristianos y conservadores por recuperar el control de la CEDOC, frente a esto las posiciones de izquierda se fortalecieron especialmente en el sector rural y campesino. Así denunciaban las organizaciones sindicales uno de los esfuerzos por recuperar el control ocurrido en 1975: “Poseedores de inmensos recursos económicos, los utilizaron para aparentar ante la opinión pública una división. En realidad, menos del 2% de las organizaciones urbanas les siguieron y en el campo, la FENOC pudo sostener con orgullo que ni una sola de las organizaciones afiliadas se fuera con los traidores” (CEDOC-CEDEP 1981, 14).

La CEOSL también tendrá también su propia organización campesina: la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE), surgida a fines de la década de 1960 (Negreiros 2009, 125). Organización que, aunque no alcanzará nunca la proporción de la FENOC pero sería también un eje de movilización campesina considerable durante la década de 1980.

Al igual que la CTE, la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) fue fundada en 1944 (López 2020), como uno de los brazos del Partido Comunista, en el marco de *La Gloriosa*. La FEI, para la década de 1980, será otra de las bases organizadas que dan el nacimiento primero a la Ecuarunari y después a la poderosa CONAIE.

La Ecuarunari compone su nombre en base a la apócope de Ecuador Runacunapac Riccharimui, frase que se traduce como *El despertar de los Runas del Ecuador*. Runa —a su vez— puede ser entendido en su sentido literal como humano, o como —en este caso— una forma más digna de dirigirse e identificar a las personas de los pueblos originarios que tradicionalmente habían sido tratados como indios. De ella, cabe resaltar que es una de las primeras organizaciones que siendo compuesta por indígenas alcanzó autonomía con respecto a sindicatos y partidos políticos.

Según la Doctora Robalino:

Es una organización exclusiva de indígenas, fundamentalmente campesinos, establecida el 6 de junio de 1972 a raíz de un congreso que se realizó en la provincia del Chimborazo con la asistencia de 70 delegados de 7 provincias. Fue promovida dicha organización por sacerdotes y religiosas para agrupar a los indígenas de acuerdo a su propia idiosincrasia y a fin de que ellos cuenten con una "organización propia que no sea dirigida por personas de extraño del grupo, ajenas a la comunidad campesina" (Robalino 1992, 225).

Aunque lo afirmado por la Doctora Robalino es relativamente cierto, no se puede desligar el trabajo hecho por una serie de organizaciones de izquierda en la conformación de Ecuarunari.

Tanto las bases de la FENOC como las de Ecuarunari tomarían las principales carreteras del país y las cerrarían durante las huelgas nacionales ocurridas en el año 1982.

Es momento de conocer a organizaciones de maestros y estudiantes que, si bien no pueden ser considerados como aliados, pues las relaciones con el FUT no eran siempre buenas, fueron parte indiscutible del movimiento popular que generó y sostuvo las movilizaciones.

También es preciso aclarar que, si bien los estudiantes fueron, como dice Juan Pablo Pérez Sáinz "los tradicionales desencadenadores de la protesta popular" (Pérez Sáinz 1987,61), el hecho de que a continuación se describa a sus principales organizaciones no significa —al igual que en el caso de los trabajadores— que estas contengan o representen a todo el movimiento estudiantil. De hecho, este trabajo hace centro, como ya se ha visto, en el FUT como el principal actor social del Paro, pues asume como cierta la tesis de Jorge León y Juan Pablo Pérez Sainz en el sentido de que los sectores populares, incluyendo a los estudiantes y maestros "se aglutinaron en torno al FUT que se convirtió en el portavoz del descontento, no sólo de sus bases sindicales, sino de amplios sectores sociales" (Pérez Sáinz 1987, 61).

Con esto claro, es importante comprender como para inicios de la década de 1980, el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE), se había hecho con el control de la

dirección tanto de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), de la poderosa Unión Nacional de Educadores (UNE); así como con varios espacios directivos en las universidades del país. También contaba con un brazo en la política electoral; el famoso Movimiento Popular Democrático (MPD) que conseguía casi sin falta al menos un diputado en el parlamento, durante la década de 1980 y posteriores.

Este partido surge de una escisión, como tantas otras, del Partido Comunista Ecuatoriano (PCE), ocurrida durante el periodo de la junta militar dirigida por Ramón Castro Jijón (1963-1966). El partido nace gracias a “la divergencia chino-soviética surgida a comienzos de los sesenta” (Núñez 1981, 51). El PCMLE se asimiló a la corriente *china* mientras que el PCE seguiría bajo el manto soviético, quienes seguían esta tendencia serían apodados *cabezones* y sus contradictores sería los *chinos*.

Aglutinando a los sectores más radicales del original partido comunista, la nueva organización nació asentada básicamente en grupos intelectuales y estudiantiles y, organizativos, el PCMLE no logró tener una influencia real en el movimiento obrero y su acción quedó circunscrita a los sectores intelectuales y estudiantiles del país en cuyas organizaciones (AEAJE, FEUE, FESE), llegó a tener una presencia significativa (Núñez 1981, 51).

La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), por su parte, nació en una coyuntura en la que “El movimiento estudiantil se destacó en la lucha contra la dictadura militar del 60, de corte anticomunista, que intervino las universidades y reprimió fuertemente a la izquierda y al movimiento popular” (En Marcha 2011). Así, el 5 de octubre de 1966 son invitadas al emblemático colegio Mejía de Quito, varias delegaciones de estudiantes secundarios del país “para discutir la situación política del Ecuador, la situación de la educación y especialmente de la juventud, finalmente se dio paso a la elección de la primera directiva” (En Marcha 2011). Para la década de 1980, si bien era una organización bastante sólida, no se puede afirmar con certeza que haya tenido la capacidad para conducir la lucha de los estudiantes secundarios que usualmente —como ya se mencionó— eran quienes encendían la protesta. Esta tenía una dinámica bastante espontánea.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), nacida también como la CTE y la FEI en el marco de *La Gloriosa*, por impulso de organizaciones de juventudes comunistas y socialistas (FEUE Nacional 2018), llega a la década de 1980 convertida en campo de disputa por parte de varias organizaciones de izquierda, pero con una irrefutable

hegemonía *china*. Esto después de dar fuertes y dignas batallas por el acceso universal a la educación universitaria, a finales de la década de los sesenta, así como por su permanente defensa del cogobierno y la autonomía universitaria.

Así se expresaba la Revista Vistazo en enero de 1982 sobre esta organización en un reportaje sobre los problemas en la Universidad de Guayaquil: “La otrora respetable Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), no ha conseguido tampoco reeditar sus mejores momentos; en su seno, frecuentemente, se producen resquebrajamiento ‘políticos’ y la violencia estalla en estrepitosa discordia” (Vistazo 344 1982, 31). Así mismo Leonardo Vicuña Izquierdo, vicerrector de la referida universidad, diría que hubo acciones “que responden a partidos políticos, a intereses políticos y económicos, que han agredido a la Universidad, como el caso del MPD, o grupo ‘chino’, que nosotros públicamente hemos denunciado” (Vistazo 344 1982, 31). Se denuncia también “actos de violencia y bandolerismo que azotan a la Universidad” (Vistazo 344 1982, 31) que suceden en el marco de una pugna por imponer una forma totalitaria de ejercicio del poder en los espacios controlados por el PCMLE.

En el plano de la política inmediata, la demagogia universitaria impulsada por los organismos estudiantiles “prochinos” (FRIU) permitió que el PCMLE tomara el control del movimiento estudiantil (FEUE, FESE) y, a partir de él, logrará controlar la mayor parte de las universidades nacionales, en las que impuso una indiscutible “dictadura estudiantil”, sostenida luego por la violencia de sus guardias armadas (Núñez 1981, 51).

La Unión Nacional de Educadores (UNE), también fundada al calor de la rebelión popular de 1944, aunque, según Andrés Quishpe, remonta sus orígenes a la Asociación General de Maestros del Ecuador fundada en 1929 (2019). Quishpe, coordinador de la UNE, después de haber pasado por cargos directivos tanto en la FESE como en la FEUE, resalta en su texto *Los maestros, la UNE y su lucha frente al poder*, dos hitos en el proceso de organización de los maestros previos al apareamiento de su configuración actual: el primero ocurrido durante el gobierno del médico Isidro Ayora, siendo ministro de educación Manuel María Sánchez: el Congreso Nacional de Educación Primaria y Normal del cual “nació el Proyecto de Ley de Educación Primaria y Normal; Bases generales para la organización de la escuela rural ecuatoriana y Plan de Organización” (Quishpe 2019).

El segundo hito sucedería durante el periodo gobernado por el General Alberto Enríquez Gallo, que, en 1938, el mismo año en que se emitió el primer Código del Trabajo se firmó el

“el Decreto Supremo N.º 75, por el cual dejaba ‘sin valor alguno los sindicatos de profesores que existen en el país’, establece la sindicalización obligatoria y determina los fines, organización y fondos del Sindicato Nacional de Educadores Ecuatorianos” (Quishpe 2019). Finalmente, el 4 de agosto de 1944 se realiza el “Congreso Nacional de Unificación del Magisterio. El Congreso sesionó en Quito, en el Salón de la Ciudad y concentró a más de cinco mil educadores” (Quishpe 2019) el cual dio nacimiento a la organización de maestros que sobrevive hasta nuestros días.

Durante la década de 1970, la UNE realizó huelgas y paros exigiendo mejores condiciones de trabajo para sus miembros. Así, en 1977, coincidiendo con la segunda huelga nacional unitaria y durante un mes entero, desafiaron a la dictadura militar encabezada por el General Poveda Burbano, con un paro nacional de maestros (Núñez 1982, 52). Ese mismo año se ilegalizó la organización y su presidente Manuel Antón fue condenado a 2 años de prisión, junto a Juan Vásquez Bastidas de la CTE y Froilán Asanza Secretario General de la CEDOC. Se sancionó también con 6 meses de prisión a Emilio Velasco Presidente de la CEDOC y dos meses a Pacho Coro dirigente campesino de la provincia de Chimborazo (CEDOC-CEDEP 1981, 16). Igualmente, en 1981 acompañaron, sin unirse formalmente, la tercera huelga nacional (CEDOC-CEDEP 1981, 16).

Para 1982, tal como ocurría en las anteriores organizaciones que fueron objeto de control del PCMLE, en la UNE se consolidaba su hegemonía, sin que esto signifique la ausencia de distintas formas de disidencia. Así en un artículo publicado en junio de dicho año en la Revista Vistazo bajo el título de *La UNE en el banquillo de los acusados*, se repiten las acusaciones de una dinámica nada democrática sobre esta organización, así como la presencia de varias filiales paralelas. Vistazo resume la situación así “Tal como sucede en la Universidad ecuatoriana también en el magisterio pugnan por vencer ‘cabezones’ y ‘chinos’, o sea los simpatizantes de las líneas comunista de Moscú y de Pekín. Actualmente el MPD (controla) la Unión Nacional de educadores” (Vistazo #354 1982, 89). Disidentes entrevistados en el referido artículo reclaman que “las elecciones de la UNE no son democráticas porque sus representantes han ocupado y monopolizado todas las esferas de decisión” (Vistazo 1982, 89). La UNE será un actor social clave durante el estallido de conflicto social que analizamos a continuación.

A los actores sociales que se han revisado en este capítulo les cabe, sin dejar de lado sus disputas internas tanto las transformaciones que venían ocurriendo en su seno, la categoría del

clasismo, propuesta por Carmen Rosa Balbi. En primer lugar porque dentro de los movimientos sociales quienes producían y difundían el discurso político eran los partidos de izquierda grandemente influidos por los bloques y discursos hegemónicos de la época y como se ha ido demostrando a lo largo de éste trabajo centraban su atención y su acción en los trabajadores, y aunque aquí la contradicción entre el capital y el trabajo fue distinta a la de la Europa del siglo XIX y a la de cualquier otro lugar o época, no se caracterizaba a los trabajadores concretos sino que se idealizaba a un proletariado inexistente. En este error caían—incluso— varios de los autores que nos dejado insumos para este trabajo.

Cabe decir que esta forma de exaltación permeaba tanto a las organizaciones de trabajadores, como en las de campesinos, indígenas y también entre las de estudiantes, poniendo a los escasos obreros industriales como puntales de cualquier posible proceso de transformación social. Esto explica también la dirección que asume el FUT frente al movimiento popular además de sus fortalecidos niveles de organización, frutos de la misma dinámica.

A través de este entusiasmo por fortalecer y elogiar a quienes estaban destinados a ser los actores de la revolución, se enmascaró los objetivos y la acción del clasismo real, acción de negociación y apaciguamiento ejecutada en parte por el grupo de actores que acaban de ser retratados.

Esta paradoja debe ser claramente identificada antes cerrar este capítulo: si bien los partidos de izquierda eran los transmisores legitimados de las verdades políticas tanto hacia los sindicatos como hacia las otras organizaciones aquí descritas, entre esas verdades y casi como profecía estaba aquella que decían que serían los trabajadores industriales los que conducidos por un partido de masas, podrían hacer la revolución. Al mismo tiempo esta forma particular de clasismo no era portadora de una propuesta de sociedad alternativa, ni siquiera aspiraba a tomar los medios de producción para la clase trabajadora o tomarse el Estado sino que buscaba convertirse en el espacio para gestionar y resolver los conflictos sobre todo a nivel laboral, pero para ésta época también políticos.

Capítulo 5. Una mirada más cercana a los trabajadores que hicieron el Paro

Este capítulo tiene como objetivo mostrar, desde dos ángulos, a los trabajadores que, organizados en sindicatos y comités de empresas, conformaban las bases del movimiento sindical en el periodo que se estudia. El primer ángulo tiene que ver con un grupo de estadísticas que enfocadas primero en una caracterización general de los trabajadores y sus organizaciones y después, en la conflictividad laboral, permite conocer desde una perspectiva amplia a los trabajadores de principios de la década de 1980 y los asuntos que propiciaban tanto su organización, como su acción.

El segundo enfoque tiene un carácter testimonial relacionado con la memoria y se centra más bien en las vivencias de dos obreros activos en la época del paro, quienes aportan una serie de experiencias relacionadas con su militancia en los sindicatos y sus visiones sobre el paro y sobre las dinámicas internas del movimiento sindical.

5.1. La data

Para empezar, es importante reconocer que el ámbito de influencia del movimiento sindical “no se ha limitado a los obreros industriales, ni incluso a los trabajadores asalariados en general” (León y Pérez Sáinz 1986, 95). Es decir, se reconoce de partida que la influencia de dicho movimiento permeó la estructura heterogénea de la sociedad ecuatoriana para la época, misma que determinaba un mercado laboral urbano de las mismas características. También se reconoce una vinculación —directa o indirecta— del movimiento sindical y las organizaciones obreras con otros sectores sociales que buscaban un espacio a través del cual reclamar por sus derechos. Se intenta demostrar a lo largo de este trabajo que estos elementos no son contradictorios con el hecho de que las bases que promovieron y sostuvieron en buena medida el paro que aquí se estudia, hayan sido los obreros fabriles residentes en su mayoría en áreas urbanas.

Partiendo de estos postulados, este apartado caracterizará a los trabajadores industriales del Ecuador para principios de la década de 1980. Particularmente a los de Quito, de quienes se ha encontrado una considerable cantidad de información.

Para cumplir con este objetivo es importante tener una idea real de su cantidad, pues pese a que la valoración proveniente de la lectura dogmática de la realidad les daba un papel preponderante, esto no se correspondía en términos de cantidades, sobre todo, frente al grueso de los trabajadores y trabajadoras en el Ecuador de esos años. Y, menos todavía, frente a la

población en general. Así, según los datos que se han podido recopilar, solamente el 15% de la población económicamente activa (PEA) en las Provincias de Azuay, Guayas y Pichincha (Farrell 1982, 11), podía ser catalogada para 1982 como trabajadores de la industria. No se usa el término proletariado industrial, pues como ha demostrado Juan Pablo Pérez Sáinz (1986) su proceso de proletarización no fue total, ya que estuvo siempre permeado por otras actividades e identidades. Así mismo, “amplios sectores populares urbanos calculados en más del 50% se encontraban en el ‘subempleo’” (Ibarra 1983, 78). Es importante también considerar que además de ser un mercado de trabajo absolutamente heterogéneo, el 38% del total de trabajadores en posibilidad de sindicalizarse se había incorporado a los sindicatos de la época (Farrell 1982, 27). Esto quiere decir que una cantidad importante de los trabajadores ecuatorianos de la época se encontraban organizados a través de sindicatos. Cabe considerar que en rubros como alimentos, bebidas y tabaco o minerales no metálicos las cifras de sindicalización —como se verá más adelante— superaban el 45% (Farrell 1982, 27).

El siguiente dato permite ver, cómo las organizaciones de trabajadores se vinculaban, en la época, con las distintas centrales sindicales, con una innegable preponderancia de la CEOSL: “del total de trabajadores industriales sindicalizados, se tiene que la CEOSL representa el 34%, la CTE el 21%, la CEDOC socialista el 12%, la CEDOC-CLAT el 3%, la CEOSL de Villacrés Arandi el 3%, el FUOS el 4% y un sector sin afiliación el 23%” (Ibarra 1983, 78).

Se admite entonces —con cierto grado de fascinación— que los sindicatos industriales constituían “el sector más activo de las centrales sindicales” (Ibarra 1983, 78). Bien sea porque a raíz de la expansión y aceptación del referido *mito de la clase obrera*, las centrales sindicales y en general la izquierda dedicó grandes cantidades de tiempo, energía y recursos al trabajo organizativo en este tipo de espacios, o tal vez porque esos espacios permitían y requerían —por su naturaleza— de más organización por parte de los trabajadores para defender sus derechos. De cualquier manera, estos son los trabajadores que se tomaron las fábricas durante las huelgas de este periodo, hicieron huelgas solidarias, apoyaron económicamente a otros trabajadores y además cerraron importantísimas arterias viales durante las paralizaciones, enfrentándose valientemente contra las fuerzas represivas del estado.

Un editorial del diario El Comercio los caracteriza de la siguiente manera: “una fracción de los 100.000 obreros sindicalizados, con salarios fijos y garantías de seguridad social que contrastan con la población económicamente activa de casi 3 millones de personas, en su

mayor parte sin esos beneficios” (El Comercio 1982m1, A-4). Como ya se ha dicho, llama la atención que sean estos los obreros que se encargaron de volver concreto —en buena medida— el estallido social de 1982.

El mismo periódico recoge unas declaraciones del Ministro de Trabajo, Vladimiro Álvarez, en septiembre de 1982, sobre las huelgas solidarias, como uno de los mecanismos usados durante el periodo y —por supuesto— durante los momentos del estallido:

Al referirse a las huelgas solidarias, el ministro expuso que éstas se encuentran establecidas en la ley, pero que ni los empresarios ni los dirigentes y responsables de ciertos sectores laborales podrán presionar y conseguir que este gobierno actúe contra la ley. La ley, afirmó establece situaciones de huelga solidarias cuando se cumplen los requisitos establecidos en el código del trabajo y es entonces cuando tenemos la obligación de darle trámite. Lo que ocurre, es que también ciertos dirigentes sindicales pretendieron abusar de esta posibilidad intentando huelgas solidarias, sin cumplir los requisitos, en cuyo caso hemos tenido que rechazar aquí en Guayaquil más de 73 pedidos de huelga solidarias que no cumplían los requisitos (*El Comercio* 1982n1, 19).

Una reflexión proveniente de la época, de autoría de Hernán Ibarra, da más luces sobre la actividad y naturaleza de los sindicatos:

Predominan los sindicatos de la pequeña y mediana empresa, atomizados en luchas que deben vencer fuertes resistencias de los empresarios, quienes sustentan sus vinculaciones con los trabajadores en relaciones de corte personal o incluso patriarcal, ya que la dirección de la empresa se encuentra ligada al propietario directamente o a su familia. Mientras que en la gran empresa las relaciones tienden a volverse impersonales, donde la división del trabajo crea un sector intermedio que asume el control y la vigilancia de los procesos de trabajo. Por eso, la constitución de sindicato en las pequeñas y medianas empresas se produce cuando entran en crisis las relaciones personales (Ibarra 1983, 78).

Las cosas son muy distintas cuando se analiza a los sindicatos en empresas más grandes. Lo que, a su vez, podría explicar parcialmente por qué son más activos los sindicatos de las fábricas:

Dos líneas se manifiestan en la organización sindical de la gran empresa. Una que reproduce en el sindicato o comité de empresa la dirección de los intermediarios como supervisores y capataces, lo que conduce a la cooptación o al control de las organizaciones por parte de los empresarios. Otra, que establece la representatividad de la organización por medio de una superación de la división del trabajo en la empresa, autonomizándose del control empresarial.

Normalmente en la gran empresa existe una mayor estabilidad de los sindicatos, así como un mayor poder de negociación (Ibarra 1983, 78).

En un serio estudio sobre la estructura del empleo y el grado de organización en el sector industrial, publicado en marzo de 1982, Gilda Farrell describe —a través de números— la realidad de los trabajadores. Así, la más importante rama de producción industrial es la fabricación de alimentos, después se encuentran los textiles y “en los últimos años la rama metalúrgica presenta un crecimiento sorprendente” (Farrell 1982, 11). Este estudio arroja también cifras sobre el crecimiento del empleo industrial en términos absolutos: “Para 1980 se revelaron 103.949 trabajadores ocupados en 2.660 establecimientos en Guayas, Pichincha y Azuay, que representan aproximadamente el 15 por ciento de la PEA urbana en las tres provincias” (Farrell 1982, 11).

Para entender mejor la composición del sector industrial cabe considerar también que estaba compuesto por una gran cantidad de empresas pequeñas. Es así que el porcentaje de empresas con menos del 15 de trabajadores es sorprendente dentro del rubro industrial. Al interior de todas las ramas, alcanza en promedio el 49% del total de establecimientos. Sin embargo, el empleo generado por estas microestructuras productivas es insignificante, ya que fluctúa entre el 6% en la rama de alimentos y alcanza entre el 15 y 16% en la producción de muebles y maderas, papel, la imprenta y minerales no metálicos. Se trata en su mayor parte, de aserraderos y fábricas de muebles, imprentas y fábricas de bloques y ladrillos (Farrell 1982, 11-12).

Otros aspectos de la composición de la fuerza de trabajo son importantes de observar, así por ejemplo la participación de las mujeres “representa el 21 por ciento del total de la fuerza de trabajo ocupada en el sector” (Farrell 1982, 19). Llama la atención el hecho de que este porcentaje sea inferior al señalado en la encuesta de hogares de 1975, que registra una tasa de participación femenina del 32%, esto puede deberse a una invisible recomposición del mercado laboral. Según concluye la autora, “Evidentemente, son otros sectores de la economía urbana que brindan mayores posibilidades de ocupación a las mujeres” (Farrell 1982, 19).

Para ahondar un poco en el grado de organización, es importante revisar el cuadro que sigue, generado por Farrell en 1982:

Tabla 3.6. Tasa de sindicalización – Industria Manufacturera. Provincias Guayas, Pichincha y Azuay 1980

Rama de Producción	Tasa de Sindicalización
Alimento, bebidas y tabaco (31)	45,9
Textiles, confecciones e industrias de cuero (32)	40,5
Muebles y maderas (33)	33
Papeles e imprentas (34)	33,6
Químicos, plásticos y productos de caucho (35)	36,6
Minerales no metálicos (36)	46,9
Industrias básicas de metal e industrias metalúrgicas	31,7
Promedio Total	38,3

Fuente: Farrell (1982).

Una breve revisión de datos sobre los conflictos colectivos laborales del año 1982, con algunas comparaciones con otros años del mismo período, permitirá una visión todavía más exacta de la situación de los trabajadores y sus exigencias. Como es obvio, los conflictos del trabajo se originan por “contraposición de intereses entre las partes, implicadas en un proceso de producción: empleadores y trabajadores. Los empleadores son los dueños de los medios de producción y los trabajadores aportan la fuerza de trabajo” (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 15). En otras palabras, los conflictos tienen su origen en la contradicción capital-trabajo. Así mismo, esta clase de conflictos pueden ser de naturaleza individual, es decir, una sola persona enfrentando al empleador o de naturaleza colectiva, como los que se procede a revisar. Así:

Conflicto de trabajo es toda alteración de la relación laboral entre sujetos de la misma — empleadores y trabajadores—, o bien, cualquier desacuerdo entre lo que los empleadores dan y lo que los trabajadores quieren. En estos conflictos, los trabajadores promueven la defensa de sus derechos y aspiraciones en los aspectos generales de su relación de trabajo, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del empleador con el propósito de mejorar sus derechos

económicos como sociales y sindicales, y de modificar, suspender o crear condiciones de trabajo más favorables. Estas condiciones pueden estar incluidas en la ley, el contrato colectivo o individual, o en cualquier otra fuente del derecho laboral (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 16).

Un conflicto colectivo es entendido como el proceso de disputa entre lo solicitado por los trabajadores y lo ofrecido por el patrono. Estos conflictos pueden o no contener a la huelga de trabajo como parte del proceso de disputa y resolución.

Según datos del Ministerio de Trabajo compilados en 1995 por investigadores del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), en el periodo entre 1973 y 1995, 1980 es el año con más conflictos colectivos laborales de todo el periodo con 424 registros. Seguido por 1988 con 397 registros; después siguen 1981 con 368, 1989 con 362, 1983 con 326 y 1982 con 325 (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 51).

Con datos de este minucioso informe, con el nombre “Conflictos Colectivos, Huelgas y Paros Nacionales 1973-1994” se concluye que el periodo de Gobierno de Roldós Hurtado, es el que más conflictos de este tipo contiene durante el periodo democrático, con 1734 conflictos, en oposición a 1250 conflictos durante el siguiente gobierno (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 51). Como es lógico, las provincias donde más conflictos se presentaron en general durante el periodo y, de manera particular en el año 1982, son Guayas con 121 conflictos, Pichincha con 102 conflictos, Manabí y Azuay en el tercer lugar con 14 conflictos cada una (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 54).

Al igual que el número de organizaciones sindicales (Farrell 1982, 23) para 1982, los conflictos se concentran en la industria manufacturera (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 56). Así mismo, se presentaron 260 conflictos en el sector privado, 61 conflictos en el sector público y 4 conflictos en el sector comunitario (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 60).

Los pedidos más frecuentes, origen de estos conflictos durante el año 1982, fueron la estabilidad en el trabajo —presentada 188 veces—, el aumento de salarios —presentada en 134 ocasiones—, la suscripción del contrato colectivo —en 125 ocasiones— y el pago de salarios adeudados —en 107—. La estabilidad fue garantizada en 95 casos, el aumento se logró en 69 casos, el contrato colectivo se consiguió en 71 casos y el pago de las deudas en salarios en solo 46 casos (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 72).

En cuanto a las huelgas de trabajo, entendidas estas como parte de los conflictos colectivos que acabamos de revisar, los años que concentran más número de este tipo de medidas,

durante el periodo que va entre 1973 y 1994, son: 1989 con 167 huelgas, 1990 con 140, 1988 con 126, seguidos de 1981 con 99, 1983 con 97, 1984 con 96 y 1982 con 86 huelgas. Será el período de Gobierno de León Febres Cordero en este caso el que más huelgas concentra con 492 seguido del período de Roldós y Hurtado con 449 (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 95).

1980 fue el año en que más trabajadores se involucraron en este tipo de medidas, con un total de 19.065, seguido de 1982 con 15.776 (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 113).

Durante el año 1982, en Pichincha se realizaron 44 huelgas, en Guayas 37, en Manabí 4, en Azuay y Tungurahua 2 (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 98). Como es lógico, estas huelgas estuvieron concentradas también en el sector de la manufactura (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 100). Así mismo fueron 17 las medidas de hecho de este tipo tomadas en el sector público y 69 en el sector privado (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 104). 39 huelgas fueron presentadas por comités de empresa y 47 por un comité especial (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 109). 32 de las 86 huelgas que tuvieron lugar durante ese año duraron entre 11 y 50 días, 21 entre 2 y 10 días, 12 entre 51 y 100 días; solamente 1 duró más de 100 días, al igual que otra que duró menos de 2 días (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 119). Durante este año, la causa más frecuente para desatar una medida de hecho fue que el patrono no contestó el pliego de peticiones o lo negó en tres ocasiones; en veinte ocasiones porque falló la conciliación; en diecinueve ocasiones porque hubo despidos o desahucio de trabajadores; y dieciocho veces fueron huelgas solidarias (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 122). En cuarenta casos, las huelgas terminaron por acuerdo, en trece ocasiones por fallo ejecutoriado y en nueve ocasiones por acuerdo en el tribunal de conciliación (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 129).

Según el artículo 501 del Código de Trabajo vigente en aquella época, en los trámites que deban realizarse cuando se presenta un conflicto colectivo, quien debe representar a los trabajadores es el Comité de Empresa, y si no hubiere este, un comité especial designado por los trabajadores (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 65). Así, en 1982 fueron presentados 139 conflictos por comités de empresa y 186 por comités especiales creados para el efecto (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 65). Es interesante conocer que en los conflictos colectivos del año 1982 fueron representados por esta clase particular de organizaciones 57.913 trabajadores. Mientras que el año anterior, pese a que hubo registro de más conflictos, los trabajadores involucrados en conflictos durante 1981 fueron 56.908 (Chiriboga y Vjekoslav 1995, 69).

Antes de seguir es importante recalcar que las estructuras sindicales de aquel período:

descansan casi exclusivamente en la organización de empresa, la misma que debe afrontar el paralelismo creado por la legislación laboral entre sindicato y comité de empresa, que pueden ser manipulados por los empresarios con relativa facilidad con vista de las distintas atribuciones que tienen estas organizaciones, especialmente el privilegio del comité de empresa para presentar pliegos de peticiones Cómo declarar huelgas y suscribir contratos colectivos (Ibarra 1983, 78).

A todo lo que se ha traído colación hasta aquí en este capítulo es importante suarle lo trabajado en el capítulo anterior en cuanto la multiplicidad de elementos que componían la identidad de los obreros de la época, solo así se entiende su reciente y discontinúa proletarización (Pérez Sáinz 1985, 32) pues estos resolvían una parte de supervivencia e identificación a través de sus relaciones con otras formas de producción no tan determinadas por el capital. Es decir que están ligadas a prácticas cercanas a lo rural, con los vínculos culturales que esto podría significar. Diferencias además atravesadas por la región del país en la que se va asentando dicho proceso. Pérez Sáinz, logra demostrar que en el Ecuador “La esfera reproductiva no es un mero apéndice de la fábrica” (1985, 74). A tal punto que los obreros ecuatorianos han logrado añadir en la esfera reproductiva la producción de valores de uso para contrarrestar la destrucción de valores de cambio que conlleva toda crisis (Pérez Sáinz 1985, 80).

se podría pensar que la diversificación de recursos relativizando el peso del salario como la mayor extensión en el espacio urbano mediante la propiedad de la vivienda y la inclusión en una familia extensa, permitirían estrategias de reproducción más estructuradas. Por el contrario, la dependencia única del salario, la familia nuclear en su inicio y la débil integración urbana, crean un marco frágil y precario para el proceso de reproducción material de la fuerza de trabajo (Pérez Sáinz 1985, 72-73).

5.2. Testimonios

Esta investigación se complementa con los valiosos testimonios de dos obreros que participaron activamente del movimiento sindical y por supuesto del Paro Nacional del Pueblo. Las entrevistas estuvieron centradas precisamente en el objetivo central de la investigación. Pero —como es lógico— los testimonios dejaron ver otras facetas de sus vivencias alrededor de su militancia, mismas que sobre todo transparentan varios aspectos de la dinámica interna de las organizaciones, que es clave para comprender el proceso histórico y que lamentablemente no puede ser estudiada en los archivos de las organizaciones, pues estos resultaron imposibles de conseguir.

Se transcriben a continuación varios fragmentos de dichas entrevistas, con la intención de proveer a este trabajo del contenido de la experiencia de los trabajadores que formaron la base del movimiento sindical. Este ejercicio se pone en diálogo a la historia con la memoria, con dos objetivos; por un lado, recoger la memoria de los actores del paro, pues hasta ahora impera una especie de discurso heroico desprovisto de una mirada sobre las contradicciones, que proviene de los dirigentes sindicales. Que —por cierto— se han perpetuado en dichos espacios, sin que hasta el momento haya una contraparte de parte de los trabajadores de base, quienes, al relatar su versión de los hechos, dejan ver claras tensiones y conflictos como parte de la dinámica interna. Por otro lado, el segundo objetivo es recoger esa memoria para que sea de libre acceso en lo posterior; de tal manera que pueda entrar en diálogo con este presente y otros en el futuro. De no hacerlo, solo quedaría a disposición de las personas interesadas este relato institucional y heroico que impide alimentar tanto la reflexión como la acción.

Es preciso aclarar que, para lograrlo, se acoge la invitación de trabajar esta relación entre historia y memoria, tal como lo ha propuesto Eduardo Kingman (2006, 2014). Es decir, como un proceso que “nos relaciona con personajes vivos, o que estuvieron vivos, con un mundo propio y una historia, y exige del investigador una toma de posición y un compromiso vital” (Kingman 2014, 188). Hablamos de “un tipo de investigación que a la vez que nos remite al pasado nos relaciona con el presente y con el futuro” (Kingman 2006, 367). Pues renunciando a criterios positivistas y evolucionistas “No se orienta a buscar la autenticidad de los hechos, sino a descubrir indicios, momentos estelares, realizar genealogías” (Kingman 2014, 187). Se hace énfasis en esta búsqueda y se recogen precisiones, sensaciones y sobre todo —con el debido respeto— opiniones que alimentan grandemente éste trabajo. Es importante también enfatizar en el hecho de que las conclusiones alcanzadas por los informantes, son consideradas con igual calidad y certeza que aquellas elaboradas por los académicos. Las propias conclusiones de este trabajo, consideran estas fuentes como fundamentales para construir las conclusiones finales de la investigación

5.2.1. César

El primero de los obreros entrevistados es César Fernando López, un hábil pintor automotriz, apasionado de la salud y seguridad en el trabajo. Este obrero empezó su vida laboral como cargador para una empresa aeroportuaria a los 17 años. Nacido en Quito en 1953, ha dedicado la mayor parte de su vida a la actividad sindical, al punto que logró —decepcionado del

accionar de las grandes centrales— crear una pequeña confederación sindical en la cual sigue estando activo.

Visiblemente emocionado ante el interés sobre el tema dice: “qué hermoso, qué hermoso los años 80 del movimiento sindical, duros, complicados, pero con concientización de clase, que hoy no tenemos, que hoy se ha perdido, la solidaridad” (López 2021). Orgulloso expresó: “nosotros parábamos la planta, nos poníamos de acuerdo con la empresa, no vamos a trabajar ‘¡Va la huelga y va la huelga!’” (López 2021). Y agregó algunos detalles: “ya decretado el paro, nosotros ya nos preparábamos. Teníamos preparado con cuatro o cinco días de anticipación, sabíamos quedarnos a soldar los miguelitos³, nosotros mismos fabricábamos los miguelitos y salíamos a botar por todas las calles cercanas a la Panamericana Norte” (López 2021).

Estos recuerdos permiten hacerse una imagen más clara de la acción obrera. Cuando él se convirtió en dirigente de una de las fábricas más importantes de la ciudad capital, la famosa fábrica BOTAR. “Tumbábamos en ese tiempo en la Panamericana norte, todavía había árboles de eucalipto, virábamos los árboles, poníamos obstáculos en la carretera, y salíamos nosotros a la huelga, al Paro Nacional que convocaban” (López 2021).

Feliz comentó que alguna vez con sus compañeros soldadores pusieron *miguelitos* en una plancha metálica, y henchido de orgullo habló de una vez que incendiaron un vehículo blindado de la policía. “Nosotros llegamos al colmo de incendiar un Trucutú. Incendiamos uno, le sacamos a los policías, botamos bombas molotov adentro, salieron disparados los policías y dejaron botando ahí. Para nosotros ¡eso fue una victoria!” (López 2021).

César recuerda también cómo pasaron tres días recogiendo firmas en el año 1978, “de casa en casa” para lograr formar un sindicato en OmnibusBB, el antecedente de la icónica ensambladora BOTAR. Este sindicato se podría oponer al Comité de Empresa ya formado y que era —como sucedía a menudo— servil a la patronal. Resulta fascinante conocer cómo usando la práctica del fútbol, se fueron “infiltrando” en el “comité de empresa patronal”:

Nos empezaron a llamar, a los que más o menos ellos se daban cuenta que jugábamos, teníamos la iniciativa de ser un buen equipo de fútbol. Nos empezaron a llamar a ser parte de

³ Es a forma en la que se conocen a los abrojos en Sudamérica. Arma pequeña pero efectiva que está diseñada para detener la circulación de vehículos o tropas. Es un artefacto de metal que mediante una base sostiene siempre una punta hacia arriba. En el caso de las huelgas y paralización servía para evitar la circulación vehicular pues pinchaba los neumáticos de los automotores.

ese comité de empresa, visto eso empezamos a trabajar, poco a poco nos íbamos infiltrando y poco a poco nos fuimos tomando, también afiliados al comité de empresa, nos tomamos a la brava (López 2021).

A pesar de estos primeros testimonios, su relato en ningún momento se queda en la idealización y, por el contrario, deja ver su crítica y su frustración en cada momento. César fue testigo del proceso de unificación hacia la acción de las tres centrales sindicales mayoritarias la década de 1980. Y contó que, a pesar de existir un proceso de democratización que implicaba el contacto permanente entre los miembros de las distintas centrales, al mismo tiempo se sembraba la desconfianza:

Nos reuníamos todos los secretarios generales en la CEDOCUT. Invitaban a un Comité Ejecutivo o a una Asamblea de Delegados, y decían: “compañeros, vamos a tener una reunión con los compañeros con los que vamos a conformar el Frente Unitario de Trabajadores y tenemos que tener mucho cuidado en esto compañeros, cuidado que ustedes se acerquen a hablar con los compañeros de la CTE o de la CEOSL ¡Cuidado nadie puede conversar! Porque estos son unos vivos, estos les van a traer, les van a llevar”. Entonces íbamos nosotros a las reuniones ya premeditadamente que no hay que hablar con nadie, entonces tú vas a gritar, a decir: “¡Viva el pueblo! ¡Saludo al pueblo!” pero con el que está al lado no puedes hablar. Entonces nos daban esas consignas, que a mi parecer, me parecían totalmente ilógicas ¿sí? Bien poco se decía: obedecíamos lo que el Presidente decía. En el transcurso de ese tiempo íbamos nosotros trabajando en función de buscar una unidad consolidada del Frente Unitario, pero este era un paso importante, que entre las bases no podíamos dialogar, los tres del FUT, los presidentes de este entonces del FUT, sí podían sentarse a dialogar, a conversar, lo que se dice a manejarnos a las bases a su antojo (López 2021).

Así mismo, no existía dentro del movimiento sindical mecanismos de consulta en tiempo real a las bases, más allá de las asambleas y convenciones. Buena parte de las decisiones trascendentales se tomaban arriba:

Nosotros les decíamos a los compañeros: “¡vamos hasta las últimas consecuencias!” veníamos, paralizábamos la planta y todo, y en medio de lo que estaba ya recibíamos un mensaje que alguien decía “¡ya se acabó! ¡se suspendió!” y no sabíamos en qué quedamos, o sea las propuestas, las resoluciones que se sacaba en medio camino entre la cúpula de ese tiempo del FUT, resolvía las cosas y se levantaba: “¡se acabó la cosa! ¡se acabó!” En lo más emocionante nos dejan colgados, porque en definitiva estábamos en el auge de la lucha, de la pelea de las cosas, todo. Cuando nosotros, las bases, pedíamos al presidente de ese entonces “¿qué está pasando?” no respondían, no había nadie (López 2021).

Habitante del Comité del Pueblo, su participación sindical empezó en la CEDOC Socialista y vivió el camino de transformación de ésta hacia la CEDOCUT. De la cual salió con su sindicato decepcionado, hasta alcanzar la Presidencia de la FETRALPI y, por lo tanto, un sitio en el Comité Ejecutivo de la CEOSL. También fue obrero y dirigente sindical de otra ensambladora de nombre MARESA.

Sobre la formación, César expresó en muestra de la constante necesidad de formación y la poca respuesta de las organizaciones:

Nosotros decíamos: “¡vamos a joder!” ¡mentira! Nos reuníamos en la CEDOCUT que venían compañeros de algún sindicato o de alguna organización [y decíamos]: “compañeros, tenemos este problema, tenemos estas cosas, la empresa no nos está cumpliendo en esto, la empresa no nos da esto otro”, entonces eso nos servía a nosotros como insumos en tu aprendizaje. Entonces había compañeros abogados ahí que daban su orientación, daban su asesoría y le decían: “mira, tienes que hacer esto, o mira vamos a hacer esta demanda, o tenemos que hacer esto” ¡esa era nuestra escuela que íbamos aprendiendo! (López 2021).

Su relato también está lleno de momentos de fricciones con los dirigentes, incluido un momento de enfrentamiento con uno de los presidentes de la CEDOCUT, por haber intentado sacar de la sala de reuniones a un grupo de estos trabajadores que pululaban buscando formación por la sede de la central sindical. Así mismo, habló de su frustración al ver las condiciones que tenían los militantes de sindicatos en otras provincias y cómo las carencias les forzaban a construir una unidad de facto con las otras centrales sindicales.

Sobre la represión, contando sobre una ocasión en la que fue detenido, manifestó: “nosotros salimos a la manifestación, a la huelga, y había ya una consigna de la misma policía. Ya el mismo gobierno dijo, hay que meterles presos a los que más se pueda” (López 2021).

Continúa el obrero:

No nos habíamos dado cuenta que también de civil estaban policías y nos aprehenden de la planta OmnibusBB. De la planta grande nos cogieron a unos cuatro o cinco compañeros, de la planta pequeña que estaba más abajo por sector del Kennedy, aprehendieron como a siete compañeros de la misma empresa. Nos cogieron detenidos, nos metieron presos y nos pegaron ¡eso sí! ¡nos pegaron! Al inicio nos metieron conjuntamente con los delincuentes, de robo que han hecho y cosas. Nos mezclaron, a la final, nos mezclaron, nos tuvieron como unas cinco o seis horas a los primeros presos detenidos que nos cogieron ahí y de repente ya creo que prepararon un espacio para nosotros nos dijeron: “¡los huelguistas que están aquí vengan para acá adelante!” y nos sacaron, nos pasaron a otro patio y empezamos a ver que empieza a llegar

un contingente más de compañeros sindicalistas del Sur de Quito, del Centro, de algunos lugares que les habían cogido, estábamos casi como unos 300 detenidos, entonces pasamos 8 días presos, que nos decían que nos iban a cobrar los daños en los vehículos de la policía y todo. Al segundo día nos empezamos a hacer amigos entre los amigos, había compañeros que eran de la CEOSL, de la CTE, de otros gremios pequeños (López 2021).

César insistió en el hecho de que a los primeros que llegaron los policías les agredieron con manoplas en la cintura, en la espalda y en otras partes del cuerpo; evitando golpearles en la cara: “esto perjudicó mucho a algunos compañeros que sí se sintieron mal” (López 2021).

Es importante resaltar “que la organización de base estuvo al frente, el sindicato principalmente no se descuidó. En el caso de los compañeros míos de BOTAR nos venían a dejar desayuno, almuerzo, merienda, tranquilos sin problema alguno” (López 2021). Para salir, tuvieron que pagar una multa de 5000 sucres, monto que también fue cubierto por la organización de base. La reflexión que hizo César sobre lo sucedido al salir de la cárcel revisa varias aristas, una con respecto a sus compañeros de trabajo, otra con respecto a su familia y una última sobre el abandono a los detenidos por parte de las centrales. Su reclamo se amplía incluso hacía el tema de la salud mental.

Cesar contó, con evidente indignación: “salimos de ahí y fue un contraste muy duro, hicimos asamblea y lógicamente había compañeros que, bueno, por suerte no fueron detenidos, pero que te empezaban a criticar: ‘¡por cojudo, por pendejo te dejaste coger!’” (López 2021).

Hace falta al movimiento sindical que también te ayude, te asista. Porque ¿qué pasa? Te puedo contar la realidad, de todos mis compañeros de BOTAR. Quedamos como 11 o 15 compañeros que estábamos detenidos, el único que continuó en la lucha ¡fui yo! mis compañeros dijeron: ‘¡de aquí me multen lo que me multen, me sancionen o me quieran sancionar, no vuelvo a salir a una huelga más! ¡Nunca más!’ Es lógico ¿por qué? porque tu pasaste una semana preso ¿no cierto? con incomodidades en el hogar, en la casa, que lógicamente es un poco desesperante, pero ahí faltó asistencia de quienes provocaron que hagamos el paro. Necesitábamos una ayuda, una asistencia psicológica, un apoyo para decir: “¡a ver, compañeros vamos a hacer un taller con ustedes, estas cosas pasan, motivarte, explicarte!”. El resto de mis compañeros tenían miedo, los otros compañeros que no fueron presos también empezaron a cuidarse. No se prestaban a eso. Ahí yo digo, no es que tú te transformaste en héroe ¡no! ¡totalmente equivocado! El compañero que cayó preso, cayó preso por reclamar sus derechos, pero no te catalogan de héroe (López 2021).

Las consecuencias para los detenidos se extendieron a la familia. La desesperación de la mujer de César, al enterarse por la radio que habían sido detenidos los obreros de la BOTAR. Preocupada, acudió al padre de César que logró ubicar el lugar donde estaba detenido. Cuenta también con mucha vivacidad, la *cuereada* que recibieron por parte de sus familiares, con la creencia de que esa práctica impide que vuelvan a la cárcel:

Nos hicieron fila india, con chilcas, con correas, con ramas, con ortiga, nos cuerearon, [nos dijeron:] ‘¡para que nunca más vuelvan acá!’ y nos pegaron. Familiares de todos los presos que estábamos ahí con las hojas limpiándonos, diciendo que eso era buena limpia para que no vuelvas allí (López 2021).

Al llegar a la casa, “un poco confundido, un poco consternado” (López 2021), tuvo que enfrentar serias críticas por parte de sus familiares. Rememora como su padre le dijo: “ignorante, pendejo ¿a qué te metes? ¿para qué pendejada eso de los sindicatos? ¿es una porquería, ahí está el resultado! ¿quién te viene a ayudar? ¿quién te ha dado un plato de comida acá? ¿es la verdad! ¿es la verdad!” (López 2021). La profunda reflexión se cierra evaluando con desilusión sobre lo que se consiguió, sin encontrar respuesta “cuando preguntamos a las Centrales Sindicales, en este caso al Presidente de la CEDOCUT. A ver ¿ya pasó la huelga! ¿ya pasó el problema! ¿qué conseguimos?” (López 2021). Al mismo tiempo cuenta los momentos cercanos a septiembre de 1982, cuando los trabajadores lograron exigirles cuentas a los dirigentes: “nosotros las bases le exigimos al Frente Unitario que ponga las cosas sobre la mesa, porque, en definitiva, te digo, me empecé a dar cuenta el juego o el manejo político que teníamos nosotros” (López 2021).

También se llena de orgullo porque entre septiembre y octubre de ese año:

nosotros cerramos la planta, hicimos todos los días la huelga, a los días que señalamos todo, trabajamos muy bien y fue un resultado positivo para nosotros, porque estábamos a punto de botar al gobierno y tuvo que el gobierno ceder a las peticiones que nosotros planteamos, entonces ahí dijimos nosotros: “¡esta es la lucha del pueblo! ¡esta es la lucha del pueblo!” Pero no lideraron las cabezas (López 2021).

También denuncia sin ambages y con la clara molestia la influencia de partidos políticos en las Centrales Sindicales:

¿La incursión política en las centrales sindicales? En algún momento dado que pasó esto de lo que nos metieron presos, me vieron que yo continúe dentro de mi organización sindical, no decaí. El único de los que estuvimos presos. Seguí trabajando en el movimiento sindical y de

repente unos, ¿cómo te puedo decir?, compañeros que eran activistas en la CEDOCUT, uno de ellos Oswaldo Gallegos se llama, nosotros de apodo le decíamos *trapito*. Me dice: ‘¡ve, hermano ven! ¡vos eres calidad de gente! ¡ven! ¡yo veo que eres un cuadro importante aquí hermano! ¡ven, vamos! ¡acompañame a la reunión del Partido Socialista Ecuatoriano! ¡Vente hermano, ven! ¡Yo te voy a hacer que te registren allá! ¡Afiliate al partido hermano! ¡Vos, vos tienes un carisma bueno!’ Y bueno, tanto que me jodía y me jodía, me convenció. Fui, asistí yo a una reunión del Partido Socialista Ecuatoriano. El compañero iba a tratar sobre mi afiliación ahí. ¿Qué pasa? Que fui, asistí, y empecé a ver. Por ejemplo, ahí le conocí a Víctor Granda, le conocí a Hernán Rivadeneira ¡en esa reunión! Le conocí a Enrique Ayala, buenos personajes, te digo sinceramente ¡buenos personajes! Yo dije ¡ay que bueno! ¡que chévere! paso seguido, viene, entra Mesías Tatamuez, también ha sido parte del Partido Socialista, entra Fausto Dután del Partido Socialista, entra Pepe Chávez del Partido Socialista, y cuando [me dice]: “¡hola hermano! ¡ñaño! ¿cómo estás camarada? ¿cómo te va?” y toda cosa sabes, entonces ¡se me retrocedió otra vez la grabadora! ¡no hay que conversar con estos hijos de tal, hijos de cuál de la CEOLS! ¡de la CTE! entonces dije bueno ¿Qué pasa? Ahí me doy cuenta que toda la doctrina y todo el manejo político venía desde el Partido Socialista para las organizaciones de base (López 2021).

Otro grupo de consecuencias no siempre visibilizadas, giran en torno a la persecución por su actividad sindical, que les deja literalmente fichados ante los empleadores. En el caso de César le costó el despido de su amada BOTAR en 1984, como parte de un grupo grande de trabajadores. En rechazo a esto, los obreros despedidos lograron mantenerse durante tres meses en huelga. La dinámica de desgaste y división de los obreros por parte del Estado y la patronal, en este caso, es reveladora.

La empresa empezó a pagar a la gente para sacarles de la huelga, a darles 50 sucres a las mujeres de los trabajadores, iban a las casas y decían “¡firmeme aquí, que su marido no está en lista, dígame que no esté ayudando a esos vagos!” (López 2021).

Por otro lado, los propios participantes de la huelga se empezaban a desmovilizar. César cuenta con desazón el caso de un compañero que se fue de la huelga con el pretexto de que quería ver un partido de fútbol. Con el tiempo, la cantidad de huelguistas se redujo hasta 15 personas “porque la gente nos iba dejando” (López 2021). Se cierra este apartado con una escena que podría servir para una película:

Nos preparamos nosotros, teníamos combustibles, teníamos dentro de la planta un tanque de gasolina para los vehículos y empezamos a *tanquear* en los tanques de 50 galones. Llenamos tanques alrededor de la planta, por la parte interior de la planta pusimos en sitios adecuados y

clandestinos esos tanques, algunos llenos y otros vacíos. De repente, ya era cerca de los tres meses, cuando suena el teléfono, nos cortaron la línea telefónica, durante todo el tiempo de la huelga. De repente suena el teléfono ¿qué pasó? [nos dijeron:] “a ver, somos de la empresa, les damos 40 minutos para que recojan sus cosas, caso contrario, el helicóptero que van a ver que va a aparecer este momento, tiene la disposición de desalojarles”. Empezó, vino la policía, nos lanzaron gases lacrimógenos a la planta. ¿qué hicimos nosotros? o sea aguantamos eso, cogíamos las bombas, botábamos afuera, lo que avanzábamos hacíamos, sacábamos, todo, y cuando nosotros ya vimos el helicóptero que empezó a volar bajito por la planta, y cuando vemos que viene otro helicóptero de los militares y vemos que bajan una escalera, nos empezamos a dar cuenta que ya querían bajar los militares. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos: “¡aquí nos sacan muertos! ¡no entregamos la planta!” Dijimos: “¡Fuegooo!” por toda la planta. Ya sabíamos los compañeros qué tanques tenían que virar. Viramos los tanques, y les prendimos fuego y ¡desapareció el helicóptero! Sonó de nuevo el teléfono: “¡Señores tranquilos! ¡No hagan eso! ¡Tranquilos!”. Ahí les dijimos: “¡Sólo muertos nos sacaran de aquí!” (López 2021).

Finalmente, la huelga se debilitó, la patronal esparció el rumor de que más del 50% de los despedidos ya se había rendido, lo cual —de hecho— el día de la liquidación —según César López— se pudo develar como otra más de las mentiras de la patronal. Cuatro años pasó César sin empleo, pues los empleadores de su área le tenían en una lista negra, reproduciendo por doquier su fama de *incendiario*.

Se cierra este apartado con una frase de este trabajador, que se puede y se debe —por supuesto— matizar en torno a lo dicho por él mismo: “El movimiento sindical de ese tiempo, era de convicción de lucha, de convicción de clase” (López 2021).

5.2.2. Washington

Washington Espín, en el momento del Paro Nacional del Pueblo, era trabajador de la Empresa Eléctrica Quito, estaba afiliado al Partido Comunista (PCE) a través de la Juventud Comunista (JCE) y a la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). Además, era dirigente del Frente de Trabajadores del Sector Estatal de la CTE. Dueño de una memoria prodigiosa, el nivel de detalle con el que recordó y, sobre todo su nivel de análisis, no se iguala con ninguna de las entrevistas realizadas durante la fase de investigación. Este obrero militante, define que “el Paro Nacional del Pueblo, fue la más grande lucha, fue la más poderosa, la de mayor participación, la de mayor combatividad. La que se sostuvo, se asentó en la base sindical que estaba luchando” (Espín 2021).

Recuerda cómo tuvo que caminar a su casa el 18 de octubre de 1982 y dice:

Una de esas noches previas al Paro del Pueblo yo regresaba a pie a mi casa porque ya no había transporte. Estaba paralizada la ciudad ¡Quito era una fogata! Yo iba atravesando la 24 de mayo, la plazoleta Victoria, La Hermita, la Colmena me pasaba por un ladito, ya iba bajando para el parque Estone, Los Dos Puentes. En todos estos sitios que le he mencionado había fogatas (Espín 2021).

Describe claramente la composición de esas fogatas: “fundamentalmente jóvenes en grupos grandes de treinta, cuarenta, alrededor de la fogata, gritando consignas, en contra del gobierno, en contra del alza de los pasajes, en contra del alza del trigo, de la azúcar” (Espín 2021). Y evoca un momento, que claramente se marcó en su memoria:

Lo que más recuerdo es la marcha con la que se culminó el paro nacional. Como yo me imaginé ese momento, fue como un río de gente que venía del sur y otro del norte, confluimos del norte, confluimos con los que venían por Panamericana Norte y los que venían de Cotocollao. Nos juntamos a la altura de la Empresa Eléctrica, en la 10 de agosto y Mariana de Jesús. El grupo que venía de Cotocollao se unió en el Ejido, de Cotocollao en donde estaba la fábrica THOMAS. Se había juntado también la gente de la MARESA y de acá de la Panamericana Norte venían los compañeros de la Junta Nacional de la Vivienda, Dormicentro, una fábrica de alfombras, Aerosoles del Ecuador, bueno ahí había una cantidad enorme de fábricas. Escuchábamos RadioNoticia, para saber cómo estaba el paro en el Sur. En la Panamericana Sur, ahí era, ahí la concentración de las fábricas en el Sur. De los compas de La Internacional, AYMESA, Fosforera Ecuatoriana, la fábrica Teresita de textiles, PLASTEC. Entonces queríamos encontrarnos en físico con ellos. Ya nos habíamos conocido, ellos fueron los primeros en constituir lo que se llamó las Coordinadoras Zonales (Espín 2021).

Con admiración a la acción de los trabajadores industriales, se amplió sobre estas Coordinadoras Zonales:

La primera en constituirse fue la Coordinadora del Sur y luego habíamos constituido la Coordinadora Zonal que fue prácticamente con los trabajadores de la Panamericana Norte. Un poco hubo resistencia en los compañeros de Cotocollao, porque las direcciones Nacionales de las Centrales Sindicales nunca aceptaron la constitución de los Comités Zonales. Eso no fue aprobado ni en las convenciones zonales del FUT y a duras penas se aprobó acá en Pichincha, en la Convención Nacional del FUT de Pichincha. Es más, los dirigentes sindicales de la CEOSLS y de la CTE impartían instrucciones a sus sindicatos de base para que no asistan a las Coordinadoras Zonales. Esas coordinadoras se constituyeron a pesar de la dirigencia nacional (Espín 2021).

Recuerda que los compañeros de la BOTAR tomaron la decisión de acatar la dirección de arriba y no formaron parte de la Coordinadora Zonal, que fue conocida —según contó— como la Coordinadora Zonal de la Panamericana Norte.

Espín sostiene que el “El Paro Nacional del Pueblo, ya fue planificado por las Coordinadoras Zonales, ya hubo asambleas en las Coordinadoras Zonales” (Espín 2021). Y recuerda que en 1982 hubo dos grandes convenciones provinciales en Pichincha y en Guayas, como parte de un innegable proceso de democratización, que se comprobará de variadas maneras en el próximo capítulo.

Washington, afirma sin ambages, que

Había un afán predeterminado en las dirigencias sobre todo en la CEOSL y en la CTE para no ir a la constitución de Central Única de Trabajadores, que era un reclamo de la base, era muy sentido, se discutía mucho eso en las Asambleas de delegados, tanto en Guayas como en Pichincha, en Azuay en Esmeraldas, en Tungurahua. Había Asambleas de delegados semanales de las Federaciones Provinciales (Espín 2021).

Espín, incansable impulsor de la organización de los trabajadores, pone el dedo en la llaga: “A mí me parece que ya había alguna concepción de tener su propio espacio, su especie de feudo, donde ellos pudieran afirmarse como una burocracia sindical” (Espín 2021). Reconoce una tensión, entre la base y la dirigencia:

Y eso es lo que fue después esa tensión, es lo que fue creando esa sospecha —diría yo— de la base con respecto a la dirección, porque recuerde que, para la huelga nacional del 82, la anterior la de septiembre, ahí el gobierno de Hurtado lanza una propuesta de constituir unas comisiones del FUT con el Gobierno, esas comisiones eran solo para diluir simplemente la lucha. En unas comisiones que iban a conversar eternamente (Espín 2021).

Para 1982: “ahí hubo un auge de la lucha de los trabajadores, un proceso de politización sostenido” (Espín 2021). Para él “la única posibilidad real, como clase trabajadora, era disputar el poder, o sea no confiar que el Congreso Nacional fuera el portavoz, el que arreglara los problemas del movimiento sindical con el gobierno” (Espín 2021). Dice con una claridad que permite alcanzar conclusiones: “ese problema del poder, nunca se planteó, ni la izquierda ni el FUT ¡jamás! la propuesta de la CEOSL de huelga indefinida era meramente reivindicativa. O sea, la CEOSL nunca supero su política economicista. ¡Jamás! ¡Jamás!” (Espín 2021).

Ellos planteaban la huelga nacional como una medida de presión para conseguir que sea el gobierno o el congreso los que terminaran procesando políticamente el petitorio del FUT, la Plataforma de Lucha del FUT. Eso era, pero jamás la propuesta era la de derrocar al Gobierno. Cuando discutíamos la constitución de los Comités Zonales del FUT, ahí si se discutió el problema del poder, el problema del poder político ¿Qué hacíamos nosotros con una huelga nacional indefinida si los poderes constituidos seguían vigentes y no estaban cuestionados en términos reales? En términos reales me refiero, porque en términos políticos y éticos, no tenían ningún peso hablando en términos hegemónicos, ni la Presidencia de la República ni el Congreso Nacional. Ambos desprestigiados. Ninguno de los dos gozaba de la confianza del pueblo, de los trabajadores. Era un poder que estaba en vilo. Era un poder que se sostenía exclusivamente en la fuerza, nada más, y lo que había que definir ese momento era un nuevo poder que, en ese momento, evidentemente, no se iba a constituir a través del proceso electoral. Un poder que barrera con el poder oligárquico constituido (Espín 2021).

Esto comprueba las afirmaciones de Ibarra (1983) de que la base rebasaba a la dirigencia, no solo en términos de vigor, sino también en términos de lectura política. Recuerda con claridad los acontecimientos. Espín es rotundo e irrefutable: “en esa época mismo, yo pensaba ya así, jamás se plantearon en términos de poder político, sino como especulación política” (Espín 2021). Se pregunta: “¿con qué poder real les íbamos a obligar después a ellos?” (Espín 2021). Es capaz de caracterizar el proyecto del movimiento sindical que lo extiende hasta la izquierda: “Decir que no hubo proyecto sería exagerado, pero yo creo que el proyecto estaba definido de manera abstracta, había una definición abstracta porque no se respaldaba en una estrategia de lucha por el poder” (Espín 2021).

Por ejemplo, al tal golpe de Estado de Piñero o de cualquier otro militar, no eran sino fantasmas, no eran sino una carencia fundamental, la carencia de una política de disputa de poder, que no se plantearon jamás. Toda la estrategia y la táctica de la izquierda gira en torno a su participación dentro del orden establecido, nunca se plantea rebasar ese orden. Nunca se plantea destruir ese orden constituido. Eso le convierte en un aparato que, en vez de potenciar la lucha de los trabajadores, la debilita (Espín 2021).

Pese a estas duras críticas, es capaz de reconocer un auge del movimiento sindical, al que recuerda a través de las luchas específicas de los sindicatos.

Cuando yo hablo de un auge, también estoy pensando en el proceso huelguístico de cada sindicato de cada fábrica. Son reclamos específicos en cada fábrica. No solo que hubo un auge político, un proceso de politización y de lucha política, también una lucha reivindicativa particular (Espín 2021).

Espín afirma —y esto es importante— que la fuerza que se desplegó en el Paro del Pueblo “va a ser la que se prolongue en el tiempo” (Espín 2021). Es la que después permite enfrentar la estrategia de las burguesías “de quiebra de empresas, de negación al cumplimiento de los contratos colectivos y actas transaccionales, a la lucha contra los reglamentos internos de las empresas” (Espín 2021).

Además de darle matices a los datos que revisábamos en la primera parte de este capítulo, Espín se adentra en la búsqueda de los obreros por generarse mejores condiciones de trabajo. Y llega a una conclusión que explica, en parte, el fenómeno de la politización de los obreros:

Esta rebelión interna contra el dominio directo del capital, fue otro de los elementos que permitió la politización, la receptividad al discurso de la izquierda radical, al discurso contra la explotación, al discurso de barrer el poder de la burguesía, porque es un proletariado, una clase obrera joven, que recién se fue formando en los años ‘60 y ‘70 (Espín 2021).

Rompe de raíz con las visiones derrotistas que invisibilizan la capacidad de negociación y de conseguir beneficios en las empresas que se fue perdiendo con el tiempo. Revisa también los procesos autónomos de formación.

Había grupos de todas las organizaciones políticas: Partido Comunista, Partido Socialista, el MIR. Se hacía trabajo en la base, un trabajo intenso, inclusive de leer El Capital. Se constituyeron círculos de estudio de El Capital. Yo participé en algunos, más de diez círculos que estudiábamos a Lenin. Se estudiaba la formación de cuadros (Espín 2021).

Contó este experimentado sindicalista, con detalle el aporte que hacían estudiantes y comerciantes para sostener las huelgas. Salían a las universidades y mercados, se subían a los buses y procedían a contar sobre el conflicto laboral y de esa manera sostenían operativamente el conflicto laboral. Reivindicó la solidaridad de los sectores populares con las huelgas, que algunas veces dejaban incluso sobrantes en dinero y recursos después de terminadas las huelgas. Así mismo destaca, desde su visión, el valor de las asambleas extraordinarias para generar las huelgas: “yo creo que al menos 80% de los sindicatos hacía Asamblea Extraordinaria para resolver su huelga” (Espín 2021).

Washington describe —y esto tampoco es menor— la consolidación de la dinámica autoritaria en el movimiento sindical a través de la delegación que se hace al dirigente para que negocie con el patrono. Ese es uno de los orígenes de la centralización del poder. Considerando además que la negociación es parte del ordenamiento jurídico del Estado, se convierte entonces en una representación burocrática alejada de la base, que no tenía que

rendir cuentas, ni tenía que rendir informes. “Y lo que es peor, se convierten en parte del engranaje estatal. Es decir, son parte de la administración del Estado y no una representación de los trabajadores” (Espín 2021). La capacidad de negociación les da poder y prestigio dentro de la política clientelar, “estos dirigentes burocratizados podían conceder una serie de favores” (Espín 2021). Espín afirma que esto ayudó a consolidar la burocracia sindical junto a la histórica persecución política que, a su vez, no permitió que se desarrolle una democracia al interior del movimiento sindical. Lo cual creó cierta estructura y cierta manera de funcionar que facilitó la consolidación de burocracias al interior del movimiento sindical.

Espín señala que otra forma a través de la que se debilitó al movimiento sindical fue el desprestigio, que sucedió a través de las bonificaciones, bonificaciones por cumpleaños, por el primogénito, por fiestas de Quito, un subsidio para visita de familiares en el caso de los petroleros. “Eso que fue una estrategia para evitar el alza sustancial de la masa salarial” (Espín 2021). Finalmente, en negociaciones particulares se resolvió el problema de las reclamaciones salariales.

Espín, al igual que López, confirmó sus constantes roces con los dirigentes y ha desarrollado también su vida en torno a la construcción de una alternativa organizativa a las prácticas a las que permanentemente se enfrentó. Hoy milita en el Frente de Trabajadores de Pichincha, en donde está constantemente dedicado a la educación sindical, aun cuando ya se encuentra jubilado.

El presente capítulo, incorpora como central el campo de la experiencia de los trabajadores y pretende complementar y ampliar la mirada sobre aquel *rígido determinismo del factor económico* (Luna 1989, 18) con el que muchos hacen historia. Al intentar recoger la experiencia de estos trabajadores —acción claramente determinada por lo propuesto por E. P. Thompson en la lectura que hizo de él Joan Scott (1991)— se ha puesto en evidencia uno de los vínculos conflictivos entre la estructura social y la conciencia social. Los dirigentes ligados ya en ese temprano a momento a las funciones que la estructura requería de ellos, entran en tensión con una forma de conciencia social situada en la base, misma que con mayores aspiraciones y pasiones exigía acciones y resoluciones a la dirigencia. Se debe decir que durante el proceso de investigación se halló una forma de conciencia social mucho más clara, elaborada y precisa de lo que se esperaba. Sobre todo en lo referente a la búsqueda de formas de democracia más profundas.

Además de conseguir un relato del hecho histórico, basado en la experiencia de estos informantes privilegiados, especialmente por su propia agencia (Scott 1991, 56) dentro de los hechos que se estudian, hemos buscado momentos relevantes, que hayan marcado la vivencia y también la agencia (acción) de los informantes siempre con respecto a su militancia y al sindicalismo en general, lo que arrojó una cantidad de información muy valiosa que, a su vez, nos condujo hacia otros ámbitos de conversación que complementaron este recurso.

Considerando que los testimonios son una expresión válida de la *experiencia*, aplicamos este método, comprendiendo a la experiencia en base a lo expuesto por Joan Scott (1986), es decir, como una interpretación de lo real, esto impide sobrevalorar el testimonio y dar como naturales o ciertas las conclusiones o valoraciones de quienes son entrevistados. Por ello se ejecutó también un proceso de comprobación con respecto a la gran cantidad de información de contexto que se pudo compilar y analizar para éste trabajo, tal como Scott determina: dentro de la investigación histórica y social, debe existir un tipo de procesamiento y validación de dicha *experiencia*, en la ésta pasa por filtros de objetividad y de comprobación, esto se hace —como aquí se ha hecho— enunciando la posición del sujeto emisor de la experiencia para así hacer visibles las tramas de poder y de relación desde donde actúa, así como su agencia y sus intereses, de tal manera que los valores de quien emite la historia no pasen a ser aceptados como válidos *per se* sino que sean historizados, fundamentalmente a través de un análisis de contextos, mismos que son ampliados sobre todo en los dos capítulos que siguen.

Este proceso de pesquisa académica tuvo la fortuna de contar como insumos, para tal comprobación, especialmente la información que se tenía sobre la construcción de los trabajadores como sujetos en la década de 1980 provistos por las investigaciones de Juan Pablo Pérez Sáinz y las lecturas críticas de Hernán Ibarra sobre el proceso de conformación del movimiento sindical como actor político. Esto enriqueció grandemente la recolección de los testimonios en este proceso de comprobación.

A pesar de algunas confusiones con respecto a fechas y eventos totalmente comprensibles, al haber pasado 40 años del acontecimiento, el proceso de *historización* aplicado sobre éstos testimonios supera, a nuestro juicio, la prueba de la comprobación, enriqueciendo grandemente las conclusiones de éste trabajo.

Capítulo 6. 1982 y las plataformas de lucha

Aquí se hará una revisión en orden cronológico de la intensa conflictividad social local que tuvo lugar durante el año 1982, desde enero hasta los primeros días de septiembre. Pues al final de este mes ya se encontrará el primer momento de un mismo ciclo de acumulación de tensiones que se ha venido alimentado desde que se provocó intencionadamente la crisis del modelo de sustitución de importaciones (ISI). Además, se revisarán brevemente varios hechos de relevancia para el análisis general. Así mismo se hará con algunos eventos internacionales que —de alguna u otra manera— marcaron este agitado año.

También se analizan, en el orden cronológico, es decir, según su apareamiento las plataformas de lucha, que son un compilado de las demandas y exigencias con las que el movimiento obrero justificaba su acción política colectiva en varios sentidos, hacia el Estado, hacia la sociedad y también hacia sus bases. Y que —en estos casos concretos— después de permitir y mostrar su capacidad de movilización, sirvieron como base de la negociación con el con el Estado. Las bases del movimiento sindical empezaron a aprobar estos documentos en las convenciones nacionales del FUT, a principios de la década de 1980. Y a partir de ello, desplegaron distintas estrategias de presión siempre dirigidas al Ejecutivo y —en menor grado— también al Legislativo. El hecho de que el Estado no diese oídos a sus demandas —recogidas en las plataformas de lucha— justificaba las medidas de hecho y garantizaba una plataforma para el consiguiente espacio de negociación con el Estado. Aquí se analizan dos emblemáticas plataformas de lucha insertas en una línea de tiempo, repleta de acontecimientos que brindan un mejor contexto.

6.1. Enero y febrero

Este año mpezó con dos conflictos originados en las más altas cumbres del poder político. El primero es una amarga polémica originada en la sensata búsqueda del gobernante y sus más cercanos colaboradores, para encontrar un consenso nacional que lleve a una solución definitiva del problema limítrofe que constantemente desangraba la economía ecuatoriana y conmocionaba a la sociedad. Después de varios enfrentamientos armados a lo largo de siglo XX “se demarcó la frontera en aproximadamente 1.800 kilómetros quedando apenas 68 kilómetros sin delimitar” (*Vistazo* 1982, 6), este pequeño espacio sin delimitar, permitía la recurrencia de los conflictos en favor de los presupuestos militares de uno y otro lado de la frontera.

Unas tibias declaraciones del Ministro de Defensa, Raúl Sorroza, planteaban que era necesaria una solución definitiva a este conflicto. La élite militar consideró que “los límites de la paciencia de la alta oficialidad del Ejército, seriamente conturbada por los últimos pronunciamientos gubernativos en torno a la ‘solución’ del secular problema limítrofe con nuestro vecino del sur” (*Vistazo* 1982, 6). Solo horas más tarde del discurso con el que Sorroza intentó dar homenaje a las víctimas del breve conflicto armado de 1981, justo un año después de ocurrido, el Consejo de Generales de la Fuerza Terrestre aprobó por unanimidad un comunicado que expresaba su total rechazo al discurso que consideraron “contrario a los intereses de la institución armada” (*Vistazo* 1982, 6); donde, además pedían directamente al Presidente la destitución del Ministro, acción que no fue necesaria, pues Sorroza rápidamente colocó su renuncia.

Este *incidente* dejan ver la inestabilidad política del país y la fragilidad del gobierno de Hurtado frente a las élites que controlaban el poder y, en particular, ante los militares. La aguda sensibilidad de la cúpula militar puede haber sido exacerbada por la “sentencia definitiva en el juicio por el asesinato de Abdón Calderón Muñoz, ratificándose una condena de 12 años de prisión para el ex Ministro de Gobierno general (r) Bolívar Jarrín Cahueñas” (Loyola 1982, 10).

A los pocos días, otra disputa surgió a raíz de un grupo de declaraciones que emitió el Presidente Hurtado en el segundo número de enero de 1982 de la Revista *Vistazo*. Después de hacer una irrefutable exaltación a la figura de Roldós, su amigo y compañero de fórmula, hizo cuatro comentarios que al ser leídos por el *sensible* hermano del fallecido expresidente fueron catalogados como ofensas. Así fue que, Hurtado señaló —con acierto— el origen de Jaime Roldós en el populismo y la debilidad que sufren los partidos de este origen cuando pierden a sus líderes, refiriéndose tanto al CFP como al PCD. Habló también de la poca formación profesional del círculo de asesores del fallecido Presidente y reafirmó —indirectamente— la creencia generalizada de que Roldós se tomaba demasiado tiempo para tomar decisiones, justificándola con su inexperiencia. Finalmente, Hurtado dijo que su gran debilidad era su generosidad y que esta “lo llevaba a valorar más sus afectos que sus obligaciones con el Estado” (*Vistazo* 1982, 17). Aunque, al parecer, las fricciones dentro del gobierno ya estaban presentes con anterioridad, estos comentarios llevaron a una ruptura definitiva entre el Presidente Hurtado y el Vicepresidente Roldós. Y con ello, se dio el quiebre de las relaciones entre la Democracia Popular (DP) y Pueblo Cambio y Democracia (PCD), con la consecuente salida de ministros.

Esta otro incidente deja en claro la débil alianza que se sostenía entre los grupos que llevaron al poder a Roldós, misma que después de su muerte se convertiría en una disputa tanto por su legado político como por el control del gobierno. Osvaldo Hurtado seguiría siendo presidente y el hermano del fallecido Jaime Roldós su vicepresidente en funciones.

En febrero, también se iniciaron una serie de conflictos colectivos en el plano laboral “tal como el de la Federación Municipal, de los jornaleros agrícolas de San Carlos, Inés María, Los Álamos, CONALEC, de la Federación de Trabajadores de CEPE y los de la Fábrica de Cerveza. Febrero 1982” (CEDOC-CEDEP 1983, 5).

6.2. Marzo

El 3 de marzo de 1982, en un intento —algo hipócrita— de actuar sobre la crisis, se realiza una primera y socapada devaluación. Es preciso recordar que desde 1970 no se habían tomado este tipo de medidas en el país. Esta devaluación de cambios múltiples o sistema múltiple de cambios hizo que la moneda pase de “de 25 a 28.50 sucres por dólar para efecto de las importaciones y a 30 sucres para efecto de las exportaciones, lo que representó una devaluación del 14 por ciento” (*Revista Nueva* 1982, 42). Además, se reforma una regulación sobre las tasas de interés, que había sido expedida en enero del mismo año pero que “al descubrirse que habían serias equivocaciones” (*Vistazo* 1982, 6) es definitivamente reformada. Y más decididor aún, pues, resulta un inesperado ataque al poderoso conjunto de los importadores, en el que se emite un grupo de restricciones a las importaciones suntuarias (*Vistazo* 1982, 6).

En su número de marzo, la revista Nueva muestra como la conflictividad social empieza a incrementar debido a la “la crisis económica, la subida incontrolable del dólar, la especulación con los productos de primera necesidad” (Loyola 1982, 6). Esto se desata en paros provinciales y violencia callejera (Loyola 1982, 6). Así, “En varias provincias se realizan manifestaciones obrero-populares exigiendo estabilidad, alza de salarios, congelamiento de precios y rechazando la primera devaluación monetaria” (CEDOC-CEDEP 1983, 5).

El cinismo de la clase política también era calificado por Nueva como uno de los factores que generaba descontento, se recordaba que, desde noviembre de 1981, estaba vigente un grotesco acuerdo político al que popularmente se le denominó *La Troncha*. El pacto recibió este nombre debido a que, a través del tradicional *reparto* de los cargos en el aparato del Estado,

se había conformado una nueva mayoría legislativa. La mayoría incorporaba de nuevo al CFP de *Don Buca* al gobierno, así como al Partido Demócrata, escisión liberal, controlada por Francisco Huerta Montalvo.

Se marca así un claro incremento en la conflictividad social:

La muerte de un estudiante y los violentos enfrentamientos de ciudadanos en Chone con efectivos policiales, adquirieron también proyección en Quito a través de activas movilizaciones callejeras del alumnado secundario. La gestión del Presidente Hurtado tiene ya un muerto en su inventario, en un fenómeno que se ha reproducido con prácticamente todos los gobiernos, ya sean uniformados o civiles (Loyola 1982, 7).

Los enfrentamientos en la ciudad de Chone, en la Provincia de Manabí, merecen su espacio específico pues la población se enfureció ante la muerte de otro joven estudiante en medio de las protestas contra el régimen. Las manifestaciones se habían originado de manera espontánea por la crisis económica, y los ciudadanos procedieron a expulsar de la ciudad, por medio del uso de la fuerza, a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, “cansados de que este pueblo con 83 años de vida cantonal careciera de obras imprescindibles para su desarrollo y la falta de atención del gobierno central” (Vera 2013). Las fuerzas represivas perdieron un helicóptero con todos sus tripulantes en el marco de los enfrentamientos.

El 15 de marzo fue un día de esos muy largos, ya que llegaban los “cowboys de trucutus”, antimotines, volquetes llenos de policías que le declaran la guerra civil al pueblo de Chone. De estos enfrentamientos la población comienza a responder con la fuerza y arrinconan a la Policía hacia la planta de agua potable, ya que huían hacia el cerro Guayas, y es donde se produjo el asesinato de Douglas Octavio Solórzano, que cayó herido de muerte por el disparo de un policía, derramándose sangre chonense por defender a su cantón y sus obras. El pueblo enardecido se fue contra la Policía, pero ya con violencia; un helicóptero turbo del escuadrón de rescate de la FAE quiso retirar los policías heridos, la población le disparó y se precipitó a tierra, falleciendo los 4 tripulantes. El pueblo enardecido corrió hacia el cuartel policial, sacándolos y destruyéndolo en su totalidad, la policía huía en volquetes (Vera 2013 [los errores pertenecen al original]).

De hecho, la provincia de Manabí, será el epicentro social del conflicto social en marzo de 1982. “Dos paros cívicos y una toma de tierras (Manta) mostraron la crisis social de la provincia apenas a tres meses de haberse iniciado la sequía” (*Revista Nueva* 1982, 36). La toma de tierras en el cerro Las Cumbres, merece también un breve apartado, pues se calcula que entre 4.000 y 5.000 personas participaron en un enfrentamiento contra la Policía

Nacional, el Ejército Nacional, la Marina y la Aviación. Quienes lograron desalojar por órdenes del Ministro Galo García Feraud, una invasión de pobladores pobres en la ciudad portuaria de Manta. En el primero de los intentos de desalojo ya habían asesinado a Patricio Mendoza, en el segundo y exitoso intento, falleció el ebanista Feliz Santana.

(...) mil quinientos agentes armados y bien apertrechados, apoyados con equipo pesado (trucutú, camión-cisterna, helicópteros y perros policías), embistieron a las 5:30 de la mañana a los durmientes y comenzaron la quema de sus casitas. La ciudad se sumergió en un caótico enfrentamiento. Los ocupantes de las colinas y los moradores del barrio Jocay, que se les unieron, resistieron a la impresionante maquinaria de terror que se les venía encima, **durante 10 horas**. A pesar de que muchos de ellos jamás habían conocido una bomba lacrimógena (no sabían que era “esa cosa picante que nos ahogaba”), no sabían de perros entrenados para perseguir hombres, ni de máquinas monstruosas que aparecen indestructibles. Al fin, las fuerzas del orden impusieron su rigor. Las víctimas salieron del grupo que el gobierno calificó de “subversivo” (Ramírez y Arboleda 1982, 39, [las negritas pertenecen al original]).

En este agitado mes de marzo de 1982, estalló también un escándalo sobre el sobreprecio encontrado en centenas de miles de planillas eléctricas. “Variaciones correspondientes a elevados porcentajes—entre el 30 y el 70%—” (Bustamante 1982, 83). Vistazo se refería en fuertes términos a dicho incidente, pues se había desatado “La indignación colectiva provocada por la abusiva alza de tarifas por consumo de electricidad” (Revista Vistazo #348 1982, 8). Y en un reportaje sobre el hecho, se señalaba que “La repentina alza en las tarifas de la energía eléctrica ha producido una ola de protestas en todo el país” (Bustamante 1982, 82). Según el Vicepresidente León Roldós “en la Presidencia de Hurtado, entre el 31 de mayo del 81 hasta enero del 82 el incremento fue del 52.76%” (Bustamante 1982, 84). El problema fue todavía mayor en las zonas en las que la empresa privada EMELEC proveía el servicio. De hecho, este fue uno de los sustentos para destituir unos meses después a través de juicio político al Ministro de Recursos Naturales Eduardo Ortega Gómez.

Otro Ministro, Jaime Morillo, parte de la cuota del Partido Demócrata en el gobierno, viajó durante este mes a Londres, “donde negoció en pésimas condiciones con bancos de 5ta” (Chiriboga 1982, 24) “una línea de crédito (...) [que] tuvo un efecto muy esporádico sobre las cotizaciones cambiarias” (Jaramillo 1982b, 14), esto motivado por:

las serias dificultades de los sectores empresariales en atender el servicio de sus deudas en dólares, las quiebras de varias empresas industriales y comerciales, las serias dificultades de la mayor parte de sectores capitalistas ante el cierre de las operaciones bancadas y en especial la

falta de créditos de corto plazo eran síntomas evidentes de las dificultades de la acumulación capitalista (Chiriboga 1982, 10).

Terminando este conflictivo mes, el 27 de marzo las oficinas de la Revista Nueva fueron atacadas. Al respecto los editores de la revista dijeron “¡Nos allanaron” (Revista Nueva #86 1982, 6), pues no se logró encontrar ningún *leitmotiv* de tipo delincencial para el hecho. Lo único que sustrajeron los atacantes son documentos relacionados con la muerte de Jaime Roldós. La revista denunció, que no era el único evento de estas características, pues “Hechos similares se han producido en la Cámara Nacional de Representantes y en las oficinas del abogado Abdalá Bucaram en Guayaquil” (Revista Nueva 1982, 6).

Por otro lado, y como parte de un vibrante proceso de democratización que se vivía dentro del FUT, se realizó —por primera— vez el 31 marzo de 1982 la Convención Provincial del FUT de Pichincha. Espacio en el cual logran reunirse los delegados de la mayoría de los sindicatos de la provincia (Dávila Loor 1995, 78).

6.3. Abril

En abril, buena parte de la atención del continente se concentraba en la disputa militar que ocurría en El Salvador que concernía también a intereses de las dos grandes potencias mundiales de la época. No obstante, el 2 de abril de 1982, la dictadura argentina, encabezada por el general Leopoldo Galtieri, empieza un atrevido e inesperado desembarco en las Islas Malvinas o Islas Falkland, territorios en posesión del Estado inglés, desde 1833. En Ecuador, hubo distintas reacciones sobre el hecho, entre quienes lo denunciaban como un acto desesperado de la dictadura militar hasta otros que, como Manuel Aguirre, llamaban en Vistazo a olvidarse de quienes gobiernan y a pensar en la soberanía de los latinoamericanos. “Para entender cuál es la verdadera estatura del problema de las Malvinas hay que comenzar por olvidarse de la dictadura Argentina; luego, hay que olvidarse de la Argentina misma y pensar solamente en América Latina” (Aguirre 1982, 70). Hay muchos de estos *detalles* que los editores de Revista Nueva resuelven no pasar por alto:

A fines de marzo, sin embargo, en medio de la galopante crisis económica de Argentina con el movimiento sindical salió a las calles. Manifestaciones multitudinarias en Buenos Aires con cerca de 2000 detenidos, testimoniaron la existencia de una situación explosiva para Galtieri y su gobierno militar. De ahí, a la decisión de desviar el eje de las preocupaciones del pueblo argentino a la reivindicación nacionalista, con la “operación Rosario”, mediaron solo 3 días (González 1982, 32).

Mientras tanto y como parte del proceso de maduración de las organizaciones indígenas y campesinas se realiza los días 16 y 17 de abril “el Primer Encuentro campesino-indígena” (CEDOC-CEDEP 1983, 6).

6.4. Mayo

Después de cierto sosiego durante el mes de abril, en mayo volverá a encenderse desde el primero de sus días el conflicto social, “La preparación y realización del Primero de Mayo demuestra la fuerza del movimiento sindical. Hay una activa respuesta popular a las medidas del Gobierno” (CEDOC-CEDEP 1983, 6). Fue un primero de mayo especialmente importante en términos de número y de protesta.

Esto con la importante variación de que el reclamo al gobierno —esta vez— no provino únicamente de los sectores sociales. Los sectores empresariales, cámaras de comerciantes, industriales y de agricultores, pocos días después de la masiva movilización de los trabajadores, publican el “Manifiesto a los Ecuatorianos” que —según el editorial de la Revista Nueva— fue “Un libelo plagado de acusaciones al régimen, y especialmente a Hurtado, que incorporó alcances de peligrosa dimensión política al advertir que ‘todo mandato [es] esencialmente revocable’” (*Revista Nueva* 1982b, 15). Amenazaban los empresarios directamente al gobierno y particularmente a Hurtado.

Las movilizaciones y las huelgas siguen en aumento, “se extiende la lucha a todo el sector de la salud y a varios sindicatos eléctricos” (CEDOC-CEDEP 1983, 6). Según datos del Ministerio del Trabajo hay treinta conflictos laborales este mes (CEDOC-CEDEP 1983, 6). La UNE “se apodera de 5 Direcciones Provinciales de Educación, para exigir aplicación de los acuerdos logrados en la Huelga de los maestros” (CEDOC-CEDEP 1983, 6). Los pequeños comerciantes de la Bahía en Guayaquil y de la Federación de Autónomos de Pichincha también se integran a los sectores en conflicto: “luchan por su puesto de trabajo” (CEDOC-CEDEP 1983, 6).

El 13 de mayo de 1982, finalmente se concretó la devaluación de la moneda de manera oficial. “De 25 a 33 sucres lo que representa una devaluación del 32 por ciento” (*Revista Nueva* #88 1982, 42). Santiago Jaramillo, en la Revista Nueva, resumió este asunto de la siguiente manera: “La devaluación disfrazada de marzo se convirtió en devaluación legalizada en mayo” (1982b, 12). Vistazo dijo, por su parte, en grandes titulares, que el gobierno y en particular el Frente Económico, está “jugando con la Economía” (*Vistazo* 1982, 6) y “Otra devaluación: ‘Muy poco, muy tarde’” (*Vistazo* 1982,7). Es importante considerar que además

de la devaluación “se da una olímpica ‘marcha atrás’, derogando las restricciones decretadas anteriormente a la importación suntuaria” (Jaramillo 1982b, 16).

Chiriboga dijo al respecto:

La precipitada caída de la reserva monetaria, la que fue drenada constantemente para satisfacer el valor de las importaciones y el servicio de la deuda externa, ante la incapacidad de hacerlo con las divisas provenientes de la exportación, llevó finalmente a una medida heroica, pero de múltiples consecuencias: la prohibición y suspensión de la importación de un conjunto importantísimo de bienes, que significará según cálculos oficiales un ahorro de 600 millones de dólares, tendiente a recomponer la crítica situación de la balanza de pagos, la caída de la reserva y a evadir las presiones del FMI para dejar flotar el sucre en relación al dólar (Chiriboga 1982, 25-26).

Conocer algunas cifras sobre el cuasi colapso económico que llevó a tomar esta medida oficialmente, después de tantos años de estabilidad en la moneda se hace importante:

La causa inmediata para que se decida devaluar un jueves 13 de mayo, al costo de paralizar el país al día siguiente, se debe a que la reserva monetaria había llegado a la irrisoria cifra de 60 millones de dólares, equivalente apenas a una semana de importaciones de bienes y servicios del país con un nivel de reserva monetaria apropiado para un Ecuador de hace 20 años. Simultáneamente el Banco Central acumulaba sobregiros sin precedentes en sus cuentas bancarias en el exterior del orden de los 150 millones de dólares, que se hicieron patentes con el recientemente publicado protesto de cheques del Banco Central por parte del Morgan Guaranty Bank de Nueva York (*Vistazo* 1982, 6-7).

El Banco Central sería también uno de los responsables de la imparable subida en los precios del dólar, pues sus directivos habían decidido intervenir con grandes cantidades de dinero en el mercado de libre de cambios para intentar controlarlo (Chiriboga 1982, 10).

Como señalaba Juan Pablo Pérez Sáinz (1986), a raíz de esta primera devaluación, las organizaciones de trabajadores empezaron a interpelar de manera integral el modelo de acumulación:

Entonces, sí se plantea que uno de los factores gravitantes en la devaluación ha sido el del endeudamiento externo, cabe concluir que ese fenómeno es producto a su vez de las fallas profundas del modelo de acumulación. En otras palabras, representa "la bancarrota estructural del sistema", como apuntó acertadamente un comentario difundido por la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos (CTE) (Jaramillo 1982, 15).

También, el *pueblo* de manera espontánea empieza nuevamente a generar una serie de disturbios callejeros. “Se reinicia la lucha en las calles, protagonizada por estudiantes y pobladores. Una manifestación incendia la Gobernación del Carchi” (CEDOC-CEDEP 1983, 6).

Esta devaluación y sus efectos, serán uno de los principales motivos para las movilizaciones que vendrían en lo posterior. Esta vez el FUT logra responder a tiempo y articularse con los reclamos de los sectores populares que seguirían aumentando hasta alcanzar en octubre su punto máximo.

Como habían advertido los expertos en economía de la Revista Nueva —y en su momento el académico Manuel Chiriboga— la devaluación no logró, como era su objetivo, reactivar el comercio exterior, así en mayo “las ventas fueron por 202’498,00 dólares y en julio por 174’255,000” (Neira 1982, 1).

Es importante resaltar que, para el mes de mayo, el gobierno intentó ya encarar la crisis de una manera global a través de su *Programa de estabilización económica-social*; mediante el cual se propugnaba la reorientación del excedente hacia un nuevo eje de acumulación. En dicho programa se identificaba como “la principal causa de los desequilibrios que afectaban a la economía ecuatoriana el modelo de desarrollo seguido en décadas pasadas basado en la industrialización sustitutiva de importaciones” (León y Pérez Sáinz 1986, 109). Como alternativa se proponía una estrategia de desarrollo orientada hacia la exportación basada en la agroindustria. Para lograrlo se propuso una política de reasignación de recursos, “buscando, por un lado, desmontar la protección arancelaria que había posibilitado a la industria sustitutiva de importaciones y, por otro lado, fomentar actividades agroindustriales y exportadoras” (León y Pérez Sáinz 1986, 109-110).

En esta reacción, el gobierno también reconocía que la devaluación traía consigo una escalada de inflación. Para ello se proponían tres medidas, para alcanzar una más justa política de remuneraciones que pueda enfrentar dicha escalada: “la dinamización de las comisiones sectoriales de salarios; el control de precios para evitar la especulación y una aplicación más dinámica de los programas gubernamentales en favor de los sectores marginados” (León y Pérez Sáinz 1986, 110).

El análisis de León y Pérez Sáinz sobre la reacción estatal resulta esclarecedor, pues —como dicen— aborda la manifestación fetichizada del Estado, que parece funcionar en el claro intento estatal de mostrarse como el espacio en el que se puede solucionar la crisis.

“Apareciendo como un tercer actor en la escena social, junto a las distintas fracciones de la

burguesía y a los trabajadores” (León & Pérez Sáinz 1986, 110). A través de esta intervención, el Estado “intentaba responder, no a presiones corporativistas de ciertos sectores burgueses, sino a los intereses globales del capital” (León y Pérez Sáinz 1986, 110). Es importante saber que, esta aparente iniciativa estatal fue en realidad forzada por las presiones del FMI. La conclusión de estos académicos sobre este aspecto es irrefutable: “este protagonismo estatal se vio favorecido por la incapacidad tanto de los trabajadores como de los distintos sectores burgueses, en ofrecer una salida global y no corporativista a la crisis” (León y Pérez Sáinz 1986, 110).

Por otra parte, el 20 y 21 de mayo se reunió la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Quito en donde “se acordó mantener la estrategia defensiva de la Organización” (Revista Nueva #87 1982, 11). Es decir, “ratificar un precio internacional de 34 dólares por barril, junto a la mantención de un techo productivo de 17.5 millones diarios de barriles” (Revista Nueva #87 1982, 11). También se designó al Ministro de Recursos Naturales del Ecuador, como presidente de dicha organización (*Revista Nueva* 1982, 11). Sobre este aspecto Alejandro Carrión en Vistazo, haciendo un recuento de la historia de la organización en contraste con la situación de ese momento, dijo —con mucha sorna— que “La OPEP ya no es la dueña del mercado” (Carrión 1982, 34).

No se puede dejar de lado que, con pretexto de haberse cumplido un año de la trágica muerte del Presidente Roldós —ocurrida el 24 de mayo de 1981—, las dudas sobre su fallecimiento generaban toda clase de controversias. Las cuales fueron ampliamente recogidas por la Revista Vistazo y especialmente por la Revista Nueva en sendos reportajes.

6.5. La plataforma de lucha de mayo

El 26 mayo de 1982, el FUT presentó una plataforma de diez puntos. Pocos días después se llevó a cabo una reunión entre los dirigentes del movimiento sindical y el presidente Hurtado, donde se le entregó directamente la mencionada plataforma de lucha. El documento contenía varias de las demandas que ya se habían presentado en diciembre del año anterior.

La plataforma suscrita por la CEOSL, la CTE y la CEDOC-Socialista empezaba por exigir, lo que sería su máxima bandera de lucha durante 1982: “Alza general de sueldos y salarios partiendo del salario mínimo vital de siete mil sucres hasta doce mil con el incremento del 50%, el establecimiento de la escala móvil contemplada en el Decreto 068 del 19 de noviembre de 1979” (en Dávila Loor 1995, 219). Esto acompañado de una política pública de control de precios de los artículos de primera necesidad que castigue con multa y cárcel a los

especuladores. Estos dos primeros puntos tienen un alcance general hacia los trabajadores y la sociedad en pleno.

Como tercer punto, exigía la aplicación de la Reforma Agraria, la derogatoria de la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, y el rechazo total al Código y Reglamento Agrario, con la clara intención de ceder a las —que ellos, los dirigentes del FUT, creían eran— demandas de los sectores campesinos e indígenas. Este ejercicio buscaba que el FUT se convierta en una alternativa de exigencia política para toda la sociedad, frente a la entrega innegable de gobierno a los sectores empresariales, también en este ámbito.

Con el cuarto, quinto y sexto punto de la famosa plataforma de los diez puntos vuelven a demandas específicas de los trabajadores sobre las relaciones de dependencia pues exigen que se cree un “Decreto que frene las liquidaciones en las empresas” (Dávila Loor 1995, 219). Y otro decreto “que establezca estabilidad permanente para todos los trabajadores” (Dávila Loor 1995, 219); así mismo, insisten en un “Correcto aumento de la compensación salarial” (Dávila Loor 1995, 219).

Entrando en el plano de la disputa política: rechazaron “las medidas complementarias propuestas por la Cámara de la Producción que atentan a la economía popular” (Dávila Loor 1995, 219). El punto octavo —en esta rara y desordenada ponderación sobre la importancia de cada exigencia— vuelven al tema laboral, incorporando una necesidad concreta de los trabajadores del sector público, al demandar la “Ratificación y vigencia del Convenio 151 de OIT y aplicación de la recomendación 159 de la OIT, irrestricto cumplimiento del Art. 125 de la Constitución vigente que hace relación con la sindicalización de los empleados públicos” (Dávila Loor 1995, 219). En el penúltimo punto exigían “Respeto a la autonomía del IESS” (Dávila Loor 1995, 219) que según su lectura estaba seriamente amenazada. Finalmente reclamaban por aplicación de la Ley de Defensa de los Artistas Profesionales.

Como se puede ver, esta es una plataforma de lucha claramente coyuntural, supuestamente enfocada en cubrir las demandas de varios sectores populares además de los trabajadores. No es un programa político en sí mismo. Pues al no establecer responsabilidades propias, quien tendría que haber resuelto todas estas demandas, o a través de quien se debían resuelto, sería siempre el Estado y más específicamente el Ejecutivo. Se puede inferir, además, que ninguna de las exigencias tiene un potencial de cambio estructural, sino que se enmarca —como máximo— en su lucha por el pleno cumplimiento de derechos. No piden una ampliación de

sus derechos sino que restringen a exigir su cumplimiento en el límite de la institucionalidad política vigente.

6.6. Junio

El 6 de junio de 1982, a raíz del intento de asesinato de su embajador en Londres, Israel invade Líbano con intención de expulsar a la Organización Para la Liberación de Palestina (OLP) que tenía presencia en dicho territorio y que —según Israel— dirigía ataques en contra de su territorio desde allí. Según Revista Vistazo, Israel invade el Líbano “buscando propinar una lección a los guerrilleros palestinos que constantemente acechan sus fronteras” (*Vistazo* 1982, 10) repitiendo así lo que ya había hecho en 1978 en la zona de Litani. Así mismo, en junio de 1981, Israel ya había bombardeado Beirut, matando a 300 civiles como forma de presión para que se desmantelen un “varios misiles que apuntaban contra su territorio” (*Vistazo* 1982, 11). Lo que tiempo después se conocería como guerra del Líbano, duraría hasta junio de 1985 y significaría una victoria táctica para Israel. Pero que —según expertos— en el balance general sería una victoria política para Siria, quien aumentaría su influencia sobre el Líbano, en momentos en que los dos ejércitos ocupaban distintas zonas de dicho país. Líbano se encontraba en medio de una guerra civil “que se complicaría con la masiva migración de palestinos, a raíz de su expulsión de Jordania en 1970” (*Vistazo* 1982, 10). De hecho, la guerra civil libanesa se extendió por quince años, desde 1975 hasta 1990.

El 11 de junio de 1982, el FUT realiza simultáneamente en varias provincias una movilización que se denominó la Marcha contra el Hambre o Marcha del Hambre. En Quito esta convocatoria logró movilizar a varios miles de personas, superando las expectativas generales, al punto que fue comparada con la tradicional marcha del 1 de mayo, día del trabajador (CEDOC-CEDEP 1983, 6). En palabras del académico Manuel Chiriboga, este día “miles de trabajadores desfilaron por las calles pidiendo alza de salarios y estatización de la banca y del petróleo” (Chiriboga 1982, 12). Es curioso considerar que solo un par de meses después, el 19 de agosto del mismo año, se realizaría en Chile una marcha que, con el mismo nombre, se atrevió a enfrentar también a la tiranía y es considerada como un referente de la movilización contra la dictadura (Osorio Reyes 2019).

El 14 de junio de 1982, se da por concluido el conflicto de las Malvinas con una innegable derrota militar y política de la dictadura argentina. En palabras de Vistazo “Argentina recibe una lección inglesa” (Plaff 1982, 30). Los ambiciosos cálculos de Galtieri y la cúpula militar argentina fallaron estrepitosamente, pues para Ronald Reagan, empeñado en hacer florecer la

industria de armas de su país, era prioritaria la escalada del conflicto con la URSS. Y en este marco debía cuidar las relaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Después se supo que el triunfo inglés fue respaldado en las sombras por la dictadura chilena (Lucero 2019).

Durante el mes de junio en Ecuador, los estudiantes realizaron mítines y manifestaciones en todo el país. “La movilización popular y obrera mantiene su ritmo planteando la realización de una nueva huelga nacional” (CEDOC-CEDEP 1983, 6). Así, “Se anima la lucha en los sectores estatales, particularmente la de los 10.000 trabajadores de la Salud, los de la Federación de Obras Públicas, de FENO-IERAC y de los Ferroviarios” (CEDOC-CEDEP 1983, 6). Mientras “El número de conflictos laborales asciende a 41 según el Ministerio de Trabajo, destacándose la lucha de Tabla Rey, Ecuatoriana de Cerámica, Ecuametal y Portuarios” (CEDOC-CEDEP 1983, 6).

El 23 de junio de 1982, “mediante el decreto 1211 se genera una línea especial de crédito para compensar los efectos devaluatorios a importadores y otros empresarios que desde mayo de 1981 hasta el 12 de mayo último habían contratado operaciones al cambio de 24.95” (Jaramillo 1982c, 12). Así empiezan una serie de explícitos beneficios que tendría el Gobierno para con los empresarios.

6.7. Julio

El mes de julio de 1982, estuvo marcado por la realización de los congresos nacionales, tanto de la CEDOC como de la CTE. Donde se genera un decidido impulso, por parte de las organizaciones de base, a la realización de la Huelga Nacional. Revista Nueva festejaría estas elecciones con un titular: “Nuevos líderes sindicales ¡¡La huelga va!!” (*Revista Nueva* 1982, 12).

Así, el 1, 2 y 3 de julio se realizó, en palabras de militantes de la facción socialista: el exitoso XIV Congreso de la CEDOC-Socialista “que establece las bases de unidad y democracia para una reactivación de nuestra Central” (CEDOC-CEDEP 1983, 7). En este evento se designó a Froilán Asanza como su nuevo dirigente en reemplazo de Emilio Velasco. Es preciso anotar que, durante el mismo año, la CEDOC-CLAT realizó también su congreso descrito de la siguiente manera por la Doctora Isabel Robalino:

En 1982, en medio de un ambiente de descontento y decepción popular dado al surgimiento de “nuevo de explotadores, la burguesía financiera industrial, que se robustecieron con el dinero que produjo la explotación petrolera y que han impuesto su proyecto económico político en

convenio con el Fondo Monetario Internacional” se realiza el XIII Congreso Nacional de la CEDOC, con la concurrencia de 1500 organizaciones de base. Reafirman los objetivos planteados del año anterior. Elige como presidente a David Tenesaca Trujillo (Robalino 1992, 155).

Dos datos son fascinantes, para la CEDOC-Socialista, el de 1982 sería su XIV congreso, mientras que para la *facción confesional* sería solamente el XIII. Además de que está última, al tiempo que toma una posición radical en contra del gobierno, reconoce con orgullo su afiliación a la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), una “regional obrera de origen socialcristiano” (Scodeller 2020, 493) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), nacida como a Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) (Scodeller 2020, 495). Y en esa clara ambigüedad, hacía este tipo de declaraciones:

La CEDOC, con sus 44 años de lucha por los intereses y aspiraciones de los trabajadores y que, siendo la pionera del movimiento sindical, ha representado siempre a los más amplios sectores laborales en una línea de autonomía, pluralismo partidista y humanismo. En búsqueda indeclinable de una SOCIEDAD SOCIALISTA impulsada democráticamente por los trabajadores rechazando los extremismos, el sectarismo y la explotación capitalista estatal o individual (*El Comercio* 1982g, 2, [las mayúsculas pertenecen al original]).

De igual manera, los días 8, 9 y 10 de Julio se realiza en Portoviejo, provincia de Manabí, el Congreso Nacional de la CTE, en el cual se designó a Edgar Ponce Iturriaga como Presidente de dicha central en reemplazo de Juan Vásquez Bastidas (Ponce 2021). La designación forma parte de una renovación de liderazgos dentro del Partido Comunista y sus organizaciones cercanas pero que no entraña ningún cambio en su línea política. Ponce, en una entrevista con *Revista Nueva* sobre su cargo y la próxima convocatoria a huelga nacional dijo:

El presidente Hurtado pide paciencia entre lo que él denomina la "*tempestad económica*", que no es otra cosa que su total entrega a los sectores que enfrentó discursivamente en la campaña electoral, sectores que no lo reconocen pero que le exigen cada vez más una entrega ilimitada, ante lo cual ha decidido desproporcionalmente. En estas circunstancias la huelga nacional constituye una necesidad para la clase obrera y los trabajadores de la ciudad y del campo y eso hace imprescindible el mejoramiento de nuestros niveles de organización como manifestaba anteriormente. (*Revista Nueva* 1982, 13, [las cursivas pertenecen al original]).

6.8. Agosto

El 10 de agosto de 1982, Oswaldo Hurtado realizó normalmente su informe a la nación en la Cámara Nacional de Representantes. En la *Revista Nueva* se alertaba que “la visión

medianamente optimista que entregó Hurtado en su mensaje, incorpora implícitamente un catálogo de dificultades en los meses venideros, que seguirán teniendo como eje la crisis económica” (Loyola 1982c, 6).

Al momento de la elección de las dignidades del Congreso que daba inicio a su tercer periodo ordinario de sesiones, nuevamente se dejó lucir la habilidad negociadora y política del Doctor Galo García Feraud, Ministro de Gobierno. García Feraud, según comentó en una entrevista para este trabajo, utilizó una amistad previa con Rodolfo Baquerizo Nazur, para proponerle que —en el marco de la conciliación que todavía se sostenía entre el gobierno y el partido de Baquerizo Nazur: el CFP— pudiera encabezar una propuesta de gobernabilidad, haciéndose cargo de la Presidencia de la Cámara Nacional de representantes. Así, “La alianza pacienzudamente construida por el Doctor *Galito* García de un golpe favoreció a la derecha política, que logró regresar a la Presidencia de la Cámara al cabo de dos elecciones sucesivas: 80 y 81 en que perdió” (Chiriboga 1982, 13).

Joaquín Loyola de Revista Nueva se adelanta con acierto —tal como era frecuente en dicha revista— a lo que posteriormente pasaría:

La virtual *pax legislativa*, que entre “amarres” previos y meritorias sorpresas de última hora, reinó durante la designación de Rodolfo Baquerizo Nazur y de Gary Esparza como presidente y vicepresidente del Congreso, respectivamente, no tendrá al parecer solución de continuidad. Interpelaciones, polémicos proyectos de leyes y enjuiciamiento de la labor gubernamental, perfilan un panorama conflictivo incrementado por la notoria fragilidad del numeroso bloque parlamentario oficialista (Loyola 1982c, 6).

Al día siguiente, el 11 de agosto, se hizo público un informe elaborado por la comisión multipartidista especial del Parlamento que investigó la muerte de Jaime Roldós. El cual volverá a instalar en la sociedad un debate lleno de dudas sobre el accidente.

De los elementos entregados del 11 de agosto último por Otto Arosemena, presidente de la comisión, se desprende, como el aspecto más espectacular la contradicción entre el estudio elaborado por la Policía Científica de Zurich y el informe de la junta investigadora de accidentes (JIA) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Mientras este último atribuyó la tragedia de Celica a “falla humana”, los expertos suizos concluyeron que, al contrario, la colisión del avión presidencial se debió a fallas mecánicas (*Revista Nueva* 1982, 10).

A pesar de la conmoción, la discusión oficial sobre el *accidente* “fue rápidamente cerrada ante las protestas que hicieron llegar las fuerzas armadas, que amenazaba poner en entredicho su

apoyo al proceso democrático. Los informes pues, fueron a descansar el sueño de los justos en algún juzgado perdido de la provincia de Loja” (Chiriboga 1982, 13).

Durante todo el mes de agosto, la sociedad dejaba ver su agitación de distintas maneras, siendo muy relevantes para el movimiento sindical, la Convención Provincial del FUT del Guayas, realizada el 25 de agosto y —sobre todo— la Tercera Convención Nacional del FUT ocurrida el 28 de agosto (Dávila Loor 1995, 78), que resolvió la convocatoria a la Quinta Huelga Nacional Unitaria.

Cabe decirlo, esta Asamblea se convocó solo después de que fracasó una reunión con el gobierno nacional, llevada a cabo 3 días antes. Esta vez las decisiones de las dirigencias llegarán en concordancia con lo que les exigían las bases y otros sectores populares. Así, “se decidió realizar una huelga de 48 horas para el 22 y 23 de septiembre de 1982 —dando suficiente tiempo para prepararla como era el caso—” (Dávila Loor 1995, 78). Como afirman Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz, el movimiento sindical no llega todavía a este momento con una conciencia integral de la crisis (León y Pérez Sáinz 1986, 111). Lo que se expresa en una respuesta estrictamente circunstancial: “el carácter coyuntural de esta plataforma revelaba que el FUT no había formulado aún una respuesta global a la misma y que se mantenía en una postura defensiva” (León y Pérez Sáinz 1986, 111).

No se puede dejar de observar las persistentes diferencias al interior del FUT, pues se vieron claramente durante la III Convención. En “esta ocasión el litigio fue alrededor de la duración de la huelga: la CEDOC proponía 24 horas mientras la CEOSL propugnaba por la huelga indefinida” (León & Pérez Sáinz 1986, 113). Esta disputa se resolvió “acordándose la celebración de un paro nacional por 48 horas” (León y Pérez Sáinz 1986, 113). Aquí se ve también, como la CEOSL encabezada por Chávez, estuvo constantemente impulsando la postura de paro indefinido, que —según algunas de las personas entrevistadas para este trabajo— podría haber permitido la caída del gobierno.

En agosto se registraron “Movimientos de pobladores en Quito y en Guayaquil motivados por sus luchas de vivienda popular” (CEDOC-CEDEP 1983, 7). De igual forma “Miles de trabajadores del Ministerio de Agricultura se integran a la lucha con el Paro del INIAP y de los ingenieros agrónomos, así como con los conflictos de IERAC y ENAC” (CEDOC-CEDEP 1983, 7). Se realizaron “varios eventos campesinos e indígenas que resuelven apoyar la Huelga. Por ejemplo, el Encuentro Provincial en Chimborazo los días 21, 22 y 23” (CEDOC-CEDEP 1983, 7). Es importante también saber que solamente hasta el “14 de agosto los

conflictos labores ascienden a 49, según el Ministerio de Trabajo” (CEDOC-CEDEP 1983, 7). El porcentaje de aumento de los precios para agosto de 1982 se calculó en 16% (CEDOC-CEDEP 1983, 7).

El último día del mes, el 31 de agosto, el diputado por Esmeraldas Antonio Lara Quiñonez denuncia un atentado contra la vida del ciudadano palestino, Dr. Nabil Sabana. El incidente ocurrió en la Cámara de Representantes, en el marco de la discusión sobre la posibilidad de que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) abriera una oficina de representación diplomática en Ecuador. Proceso que el mencionado ciudadano asesoraba. Según Nueva, el Dr. Sabana recibió un balazo en el abdomen (*Revista Nueva* 1982, 6), *Revista Vistazo* no mencionó este incidente.

La violencia entre palestinos e israelíes tomaría varias vidas en suelo ecuatoriano ese año. Así, en septiembre estalló un artefacto explosivo en un edificio en Quito donde funcionaba una asociación israelí (*El Comercio* 1982j, 2). Y lo más trágico fue que, a finales del año, una bomba estalló en el edificio de la Embajada de Israel en Quito, quitándole la vida a 3 personas, 2 policías que custodiaban el lugar y a una transeúnte en estado de gestación (Padilla Guerra 1982, 98). Este hecho no será recogido por la *Revista Nueva*.

Ese mismo día, en el marco del aumento de la movilización popular en Polonia, tuvo lugar una ola de disturbios que afectaron a treinta y cuatro provincias del país, bajo la responsabilidad del sindicato de obreros industriales Solidaridad (*El Comercio* 1982b, 12). En dichas protestas “fueron arrestadas alrededor de 4.100 personas y varios manifestantes perdieron la vida en las calles de Lubin, Gdansk y Wroclaw” (Morawski 1982).

6.9. Septiembre

Lo que un poco después se conocería como la crisis de la deuda latinoamericana, tiene para muchos expertos su origen en lo que ocurrió el 1 de septiembre de 1982 en México, cuando su presidente saliente José López Portillo, en una desesperada medida para impedir la fuga de capitales, fuga estimada —por él— en 50 mil millones de dólares, nacionalizó la banca privada de ese país (*Revista Nueva* 1982, 69). Como complemento de este acto, en noviembre del mismo año, México decidió suspender sus pagos de deuda externa.

La conmoción que causaron los problemas del servicio de la deuda de México en 1982 se propagó al sistema financiero y provocó una restricción espectacular del crédito. Esto, sumado a la caída de los precios de exportación y a las altas tasas reales de interés, indujo a

prácticamente todos los países de la región a intentar que sus acreedores aliviaran la carga de la deuda (Altimir y Devlin 1992, 13).

A nivel nacional, a inicios de septiembre se dio un reacomodo de las fuerzas políticas en el Parlamento, que puso en aprietos al gobierno. Así en primer lugar, se produjo la renuncia del banquero Jaime Acosta Velasco a la Junta Monetaria, quien sería reemplazado, por el dueño de una de las principales financieras del país, COFIEC, el señor José Antonio Correa Escobar (*Vistazo* 1982, 8). Y más grave aún:

Se ha producido el rompimiento del frágil y discutido pacto de Gobierno-C.F.P. Y es que ello tenía que suscitarse dada la inconsistencia del pretendido entendimiento. No se sustentaba en ninguna base. Su único móvil, por parte del régimen, era disponer de una mayoría parlamentaria y creía poderla conformar apelando a los “compañeritos”. Y el único afán, por parte de estos, era el puro y simple disfrute de la “troncha”, que hubo de traducirse en un par de ministerios —con su respectivo cortejo de posiciones burocráticas— y en la entrega de ciertas entidades como AZTRA y CEDEGE (*Vistazo* 1982, 10).

Al perder su mayoría en la cámara de representantes, el Gobierno no pudo impedir que su ministro de Recursos Naturales, Eduardo Ortega Gómez sea destituido en “una de las más largas interpelaciones de la historia parlamentaria del país” (Chiriboga 1982, 13). Hecho que nuevamente tuvo a Febres Cordero, como pasó con el juicio político a Feraud Blum en 1981, como el más “notorio interpelante”. Después Febres Cordero será presentado por la gran prensa como el responsable de esta destitución, aunque en rigor compartió esa responsabilidad con Hugo Caicedo de la Izquierda Democrática. Febres Cordero se convirtió en el candidato a la presidencia de la derecha que ganó las siguientes elecciones.

Anticipándose a su posible destitución por esta misma vía y en parecidas condiciones, renunció también por esos días el Ministro de Finanzas Jaime Morillo.

6.9.1. La plataforma de lucha de 9 puntos

La incapacidad del Parlamento ecuatoriano para encontrar soluciones en el marco de la democracia representativa para el grave conflicto económico y, más aún, su voluntaria renuncia a este rol, hace que el FUT intente arrogárselo. Así, en septiembre, los dirigentes sindicales “Precedidos de una manifestación llegaron al Parlamento” (*Vistazo* 1982, 9) a presentar sus exigencias, ahora ampliadas en una nueva plataforma de lucha, misma que fue hecha pública el 28 de agosto de 1982. Plataforma “Elaborada por la dirección del FUT el 19 de agosto y aprobada en la 3ra Convención Nacional del FUT” (Dávila Loor 1995, 78).

Nueve puntos, entre los que se ratifican y amplían en cuatro temas de la plataforma anterior, siendo —esta vez— mucho más específicos.

A continuación, se analizan todos estos puntos, partiendo por aquellos que el FUT retoma de las anteriores plataformas de lucha. En un segundo momento, se analizarán las nuevas demandas que el Frente Unitario planteó.

En el primero de los puntos de la nueva plataforma de lucha, el movimiento sindical se reafirmó en exigir el alza de los sueldos hasta 7.000 sucres para quienes ganaban ese momento el salario mínimo. Además de un aumento de 3.000 mil sucres para quienes ganaban entre 4.500 y 12.000 sucres, un incremento de 12.000 a 15.000 o lo que corresponda hasta alcanzar los 15.000 para los que ganaban más de 12.000 sucres. Además, incorporaron, en este punto, la exigencia de que se establezca “una escala de reajuste automático relacionado con la elevación del costo de la vida” (Dávila Loor 1995, 220) e incluso se termina proponiendo el “congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de los servicios de transporte, luz, agua, teléfonos y cánones de arrendamiento” (Dávila Loor 1995, 220).

En el tercer punto, juntan con la solución de los conflictos labores varios de los puntos que ya habían demandado en mayo: impedir las liquidaciones de empresas, respeto a la sindicalización en el sector público y estabilidad garantizada para los trabajadores por el plazo de cinco años. En el sexto punto insisten dando más detalles sobre la “Reliquidación y compensación salarial para remuneraciones hasta de S/. 12.000” (Dávila Loor 1995, 220).

Amplían las demandas sobre los problemas de los campesinos, exigiendo las mismas derogatorias de leyes y reglamentos que ya habían demandando, y haciendo énfasis en la reforma agraria. A lo que incrementan la “estatificación de la comercialización del cacao, café, arroz y banano; consolidación de las deudas de los campesinos a 20 años plazo y condonación de los intereses” (Dávila Loor 1995, 220). Terminan pidiendo que se supriman los Comités Regionales de Apelación, con la correspondiente solución favorable de los conflictos agrarios en favor de los campesinos.

Los puntos 2, 5, 7, 8 y 9 recogen novedosas demandas, mediante las cuales pretenden incorporar —bajo su dirección— a otros sectores de la población, yendo mas allá de las tradicionales reivindicaciones del obrerismo. Así, en el punto 2 se oponen tajantemente a la elevación de los precios del transporte público y exigen su “estatificación o municipalización” (Dávila Loor 1995, 220). Así como la liberación de los derechos para importar vehículos

destinados al servicio público y la creación de almacenes estatales de repuestos (Dávila Loor 1995, 220).

El quinto punto fue dedicado a incorporar las demandas específicas de un nuevo sector social. Aquel que en ese momento se denominaba el *movimiento poblacional* (CEDOC-CEDPEP 1982, 7), es así que pidieron: “Atención inmediata a los barrios pobres entregando lotes para vivienda y proporcionando los servicios de luz y agua y alcantarillado” (en Dávila Loor 1995, 220). Exigieron además que se amplíe el Decreto 2740 de 1978, que previamente permitió legalizar algunos barrios todavía bajo la dictadura militar (Bayón [et al.] 2020, 23). Así mismo, demandaron que se aplique el Decreto 735-A de 1974 cuyo objeto fue el de pasar a la justicia ordinaria los casos que no es encontraban en esta por distintas razones (Bayón [et al.] 2020, 23). Rechazaron la Ley de Organizaciones Barriales y pidieron la “expropiación de los terrenos para vivienda popular, en especial las haciendas San José de Conocoto y Josefina en Guayaquil” (Dávila Loor 1995, 220-221).

Alineándose, con el centro político que en el parlamento procesaba este primer grupo de leyes, exponen, en el punto 7, una demanda dirigida tanto a legisladores como al Ejecutivo. A este último por su capacidad de veto, se le exige la “Expedición de la Ley contra el Enriquecimiento ilícito, de la Ley de Comunas como sanción favorable a la Ley de Defensa del Consumidor” (Dávila Loor 1995, 221). Vuelven a pedir la aplicación integral de la Ley de Defensa del Artista Profesional y reformas a la actual Ley de Universidades y de Escuelas Politécnicas, así como el cumplimiento del Decreto de la Jubilación de la mujer a los 25 años de afiliación (Dávila Loor 1995, 221). Con esto sugerían que buena parte de las soluciones podrían provenir de la Asamblea.

El punto ocho recoge demandas ligadas a los derechos humanos y laborales, pues exige “Sanción a los responsables de la represión y violación de los derechos humanos producidos con motivo de la huelga de los trabajadores del IETEL realizada el 27 de noviembre de 1981 y el reingreso de los trabajadores despedidos” (Dávila Loor 1995, 221). Así como la respectiva sanción a los autores del asesinato de los trabajadores de AZTRA (Dávila Loor 1995, 221).

El noveno y último punto de esta plataforma pide que se reconozca legalmente a la directiva de la CEDOC-Socialista encabezada por Froilán Asanza (Dávila Loor 1995, 221).

A raíz de la intervención de los dirigentes del FUT en la Cámara Nacional de Representantes se creó una comisión especial multipartidista para tratar un pliego de 15 pedidos entre los que

se incluyó “la construcción de un centro comercial para pequeños comerciantes” (*El Comercio* 1982h, 2).

Es importante señalar, antes de cerrar este apartado, que ni uno solo de sus pedidos sería tramitado. Para cada uno tuvieron una justificación o la consecuente derivación del conflicto hacia el Ejecutivo (*El Comercio* 1982h, 2).

6.9.2. Y todavía no acaba septiembre

“Un ‘septiembre negro’ para el Presidente Osvaldo Hurtado” dirían Joaquín Loyola y Santiago Jaramillo de *Revista Nueva* (1982, 6), evaluando una serie de acontecimientos que pusieron contra la pared al gobierno. Así, en el marco de una ruptura del acuerdo político conocido como la *Troncha*, renunciaron los Ministros de Bienestar Social, Obras Públicas y Finanzas, cuotas del CFP y del Partido Demócrata en el Gobierno (Loyola y Jaramillo 1982, 6). Osvaldo Hurtado vetó, por presión de los empresarios la Ley de Defensa del Consumidor, aprobada por el Parlamento, demostrando su completa sumisión (Loyola y Jaramillo 1982, 10) a los grupos empresariales. Con esta acción y con un anuncio del Presidente sobre su intención de vetarlas, las leyes de Enriquecimiento Ilícito y de Comunas ni siquiera se tramitaron para así “crear tranquilidad y confianza entre las fuerzas de la producción y el capital” (Chiriboga 1982, 12).

La Revista *Vistazo* en su segundo número de septiembre hacia su propio llamado a *despolitizar* el gabinete:

El gobierno de parcelas políticas, con retazos de administración para cada partido no se ha demostrado viable, en forma alguna. La realidad, por el contrario, impone que el presidente gobierne sin ningún partido. Y que, más aún, tenga la altura, o el valor político, de prescindir de la Democracia Popular, ya que éste es el llamado “partido de gobierno”. Un gabinete de ciudadanos probos, capaces, versados en las tareas que se les encomiende, es lo que, actualmente, reclama la nación (*Vistazo* 1982, 5).

Hurtado se tomó algún tiempo para negociar —ante este tipo de llamados— con la derecha, encabezada por Baquerizo Nazur quien había empezado a enarbolar la necesidad de generar un gabinete de *concentración nacional*. Así, con la caracterización de ser cuadros técnicos, al no estar ligados a ningún partido político.

el Presidente Hurtado reconstituía su maltrecho gabinete ministerial con un recambio que, manteniendo el principio de la concentración nacional, no lo seguía en todas sus formas.

Llamó a la cartera de finanzas y a la Presidencia de la Junta Monetaria a prestantes miembros

del empresariado serrano, mientras que incluía en Bienestar Social y Recursos Naturales a personajes del progresismo guayaquileño. La cartera de Obras Públicas fue entregada a un profesor conservador de la Universidad Católica del Ecuador. La intención del recambio era clara: establecer líneas de comunicación con las Cámaras de Producción y con las Centrales Sindicales, prefigurando el conflicto que vendría una vez terminado el parlamento. Quedaban fuera del gabinete los sectores económicos de la costa, el centro político y obviamente sectores ligados directamente al FUT (Chiriboga 1982, 15).

La Revista *Vistazo*, por su parte, considera como un acierto la elección de los nuevos ministros: Pedro Pinto Rubianes para Finanzas, Gustavo Galindo a Recursos Naturales, Alfredo Mancero Samán para Bienestar Social y Edwin Ripalda para Obras Públicas. Para dicha revista, los “ministros son hombres eminentemente técnicos, sin ninguna filiación política alguna” (*Vistazo* 1982, 7).

El Presidente de la Junta Monetaria, Antonio Correa, en un acto claramente desesperado, visita Toronto para reunirse, durante la Asamblea General del FMI, con sus autoridades y representantes (Loyola & Jaramillo 1982, 12). Este mismo funcionario “responsable de la conducción de la política económica, monetaria y crediticia de nuestro país” (Revista *Vistazo* #362 1982, 9) tuvo, por esos días, un *impasse* con Abelardo Pachano, Gerente General del Banco Central quien dijo que “la banca privada pretende responsabilizar a quienes guían la política económica, de la difícil situación presentada en el país” (*Vistazo* 1982, 9).

Ya con completa conciencia de la gravedad de la crisis, los editorilistas de la Revista Nueva Joaquín Loyola y Santiago Jaramillo anticipan la futura entrega del gobierno a las condiciones que le imponga el FMI, además advierten que “Esta virtual asfixia financiera es, en definitiva, el reflejo más relevante de una crisis económica que tanto en sus componentes externos como internos, refleja un desajuste estructural, agravado por las limitaciones políticas que se ha impuesto el gobierno” (1982, 14). Nuevamente para septiembre la Reserva Monetaria Internacional causaba preocupación, pues “Si se considera que el gasto mensual de importaciones del país es de aproximadamente 180 millones de dólares como la liquidez real de la reserva monetaria podría cubrir poco más de 15 días de actividades en ese rubro del comercio exterior” (Loyola y Jaramillo 1982, 13). Además, señalan como una serie de préstamos por pagar vencerán justamente durante los próximos meses, aumento la presión sobre el gobierno. A esto se debe añadir el pedido de auxilio de los bancos particulares, pues la gran mayoría de ellos se hallaban para ese momento en “desencaje”, es decir no serían

capaces de cumplir con sus obligaciones frente a sus inversores y ahorristas (Loyola y Jaramillo 1982, 13).

Buena parte de los sectores sociales, articulados en ese momento alrededor del FUT, se concentraban en la organización de la Quinta Huelga Nacional Unitaria, así, en otro hito de la democratización de la acción popular se conforman en buena parte del Ecuador “Comités de Huelga a nivel Provincial, Zonal y en cada organización” (CEDOC-CEDEP 1983, 8).

Unos días antes de realizarse la huelga, Humberto Vacas Gómez, reclamaba de la siguiente manera en un editorial de El Comercio:

Una peligrosa marea de indisciplina está inundando a la República. Ya no solo son los estudiantes los que se lanzan a las calles violentamente para protestar, interrumpir el tráfico, quemar llantas, de agredir a la policía, en suma, para jugar a la guerra. Ahora son los pueblos enteros que paralizan sus actividades, se posesionan de edificios públicos, toman rehenes para obligar al gobierno atender sus solicitudes, muchas veces desmesuradas, pretendiendo se solucionen todos sus problemas que se han amontonado a lo largo de la existencia de la República (Vacas Gómez 1982, 4).

Los conflictos regionales siguieron en aumento, el 13 de septiembre de 1983: “la Federación de Barrios de Esmeraldas se toma la Gobernación de la Provincia, exigiendo fondos para las obras públicas proyectadas” (CEDOC-CEDEP 1983, 8). De igual manera “El combativo paro de Santa Rosa, en el Oro, culmina con un acuerdo que favorece las reclamaciones de dicho cantón” (CEDOC-CEDEP 1983, 8). Así relató diario El Comercio de Quito, la culminación de dicho conflicto, “después que una asamblea popular escuchó la lectura de un documento suscrito entre la comisión gubernamental y los miembros del comité de paro quienes deliberaron durante diecisiete horas en el Salón de la Ciudad” (*El Comercio* 1982a, 3).

El 19 de septiembre pobladores de Calceta, en Manabí, ocuparon el destacamento de policía “quemando enseres y papeles y persiguiendo a policías que horas antes habían disparado contra el bombero José Pinargote, lo que ocasionó su muerte” (*El Comercio* 1982f, 8).

Ante el irrefutable aumento de los conflictos laborales, el gobierno intentó resolver aquellos que consideraba claves, como aquel que sostenían los trabajadores de la Salud y Obras Públicas. Pese a ello “continúan en lucha los trabajadores de los Correos, de UNE, Hacienda la Montaña, y otros” (CEDOC-CEDEP 1983, 8).

Es relevante conocer que, en el plano internacional, a mediados de septiembre la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) ejecutó un paro indefinido que acabó doblegando al último

de una secuencia de regímenes militares que duraron casi dieciocho años en el país andino. El 18 de septiembre, el diario *El Comercio* lo recogía con un titular de primera plana que decía: “Militares entregarán el poder en Bolivia” (*El Comercio* 1982c0, 1), otorgándole — sorpresivamente— el crédito de esta vuelta a la democracia, a la poderosa Confederación Obrera Boliviana (COB). Así mismo, Perú a finales de septiembre era declarado el estado de emergencia en Ayacucho “foco de la actividad subversiva en el sureste del país” (*El Comercio* 1982p, 15). En Colombia su presidente Belisario Betancur lanzaba un “Clamoroso llamado a la paz” dirigido a los grupos guerrilleros de este país (*El Comercio* 1982f1, 14). Se cumplían también 2 años de la guerra entre Irak e Irán, esta duraría hasta 1988.

En el Reino Unido se levantaban para final de este mes y una vez superada la guerra de Las Malvinas, grandes huelgas de trabajadores en contra de las políticas *neoliberales* de Margaret Thatcher:

Cientos de miles de trabajadores británicos fueron a la huelga hoy provocando el cierre de los periódicos, de la mayoría de las minas de carbón, de muchas plantas industriales y de la Casa de la Moneda, interrumpiendo en parte las comunicaciones, en la mayor confrontación que haya habido entre los sindicatos y el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher (*El Comercio* 1982q, 18).

6.9.3. Antecedentes y pronunciamientos frente a la Quinta Huelga Unitaria de septiembre

Junto a importantes titulares que hablaban de la condena de “la masacre de centenares de civiles palestinos, hombres, mujeres, niños y ancianos perpetrada en la ciudad de Beirut”, por parte del gobierno y pueblo ecuatorianos (*El Comercio* 1982d1-1, 1), el 21 de septiembre — un día antes del inicio de la quinta Huelga unitaria—, *El Comercio* recogía en sus portadas en grandes letras resaltadas, las palabras del ministro de trabajo Vladimiro Álvarez: “La huelga es ilegal” (*El Comercio* 1982c, 1). Este discurso fue ratificado en todo momento por el Ministro de Gobierno, aun ante las evidentes muestras de descontento social a nivel local. Así mismo se anunciaba el inicio de un proceso de “Conciliación entre Cámara y Ejecutivo” (*El Comercio* 1982d, 1) que finalmente dejaría libres de cargo a varios ministros de Estado.

Los sectores de poder cerraban filas frente a la movilización de los sectores populares encabezados por el FUT:

El gobierno a través del Ministro de Trabajo, Vladimiro Álvarez, señaló que la realización de una huelga nacional o un paro general de actividades del sector es absolutamente ilegal.

Mientras tanto como el Frente Unitario de Trabajadores ratificó que llevará adelante la Quinta Huelga Nacional los días miércoles y jueves de esta semana. Señaló que es la única alternativa del sector laboral para lograr sus justas aspiraciones (*El Comercio* 1982c, 1).

En la segunda página de ese mismo diario, se indicaba claramente que el FUT pagó por la publicación de su “Manifiesto del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) al país, todo el pueblo a la Huelga Nacional, 22 y 23 de septiembre de 1982 (*El Comercio* 1982e, 2). Aquí, los sindicalistas, expusieron un amplio análisis político y económico de la crisis, en el que acusan sin piedad primero a “las clases privilegiadas” (*El Comercio* 1982e, 2), entendidas como “instrumentos de los grandes intereses transnacionales” (*El Comercio* 1982e, 2). Y después interpelan al gobierno “que ha agudizado la crisis general y fiscal” (*El Comercio* 1982e, A-2) para beneficiar a “las oligarquías del país” (*El Comercio* 1982e, 2). Además, acusan a “ciertos industriales, terratenientes, banqueros, grandes comerciantes y los monopolios internacionales” de intervenir en el gobierno (*El Comercio* 1982e, 2). El FUT hace un fuerte reclamo a estos sectores por el “desprecio a la situación nacional y a las deplorables condiciones de vida de nuestro pueblo”, por sacar irresponsablemente grandes capitales del país.

Mientras tanto la situación social es alarmante, el deterioro de los salarios reales; la disminución del poder adquisitivo del sucre; la grave desnutrición, especialmente de los niños; el déficit habitacional, el aumento de los cinturones de miseria en las ciudades, el creciente índice de desempleo, la paralización de la reforma agraria, la desprotección a la salud del pueblo, y en general, la insatisfacción de las necesidades elementales de la población conforman un macabro panorama que no puede ser tolerado por el pueblo, y por ello la clase trabajadora exige a los poderes del Estado una inmediata solución (*El Comercio* 1982e, 2).

Aunque continúan en la línea de exigir al Estado la solución, esta vez, no centraron sus cargas solo en el ejecutivo, pues mencionarán como responsables también a la cámara de representantes e incluso al diputado Jaime Hurtado González del MPD. Vuelven a enlistar los pedidos de su plataforma de lucha y llaman a la “Huelga Nacional combativa” (*El Comercio* 1982e, 2). No sin antes recordar que fueron ellos, “los trabajadores los que más luchamos para terminar con el régimen de Dictadura Militar” (*El Comercio* 1982e, 2). Y termina convocando a otros sectores populares y movimientos sociales a sumarse de la siguiente manera:

El Frente Unitario de Trabajadores llama a toda su militancia, a los demás sectores populares, a los estudiantes, a los maestros, a los artesanos y a todos quienes sufren las consecuencias de la crisis económica, a cumplir con esta gran jornada histórica participando activamente en la

huelga nacional. VIVA LA QUINTA HUELGA NACIONAL! VIVA LA UNIDAD DEL FRENTE UNITARIO DE LOS TRABAJADORES! (*El Comercio* 1982e, 2).

A este Manifiesto, le cabe perfecto el análisis que hizo al iniciar 1983, el académico Manuel Chiriboga, a partir de los discursos sobre la crisis en las organizaciones populares, las centrales sindicales, y los partidos de izquierda:

El origen de la crisis debe encontrarse fundamentalmente en el carácter dependiente de nuestra economía, que permite su sujeción a la voracidad de las multinacionales y del imperialismo, así como al carácter poco patriótico e insaciable de las Cámaras de la Producción y principalmente del Capital Financiero y Comercial ligado al capital internacional. Deben nacionalizarse aquellos sectores de la economía que generan nuestra sujeción al imperialismo: Banca, Petróleo, Comercio Exterior, y devolver a los sectores populares su poder adquisitivo. El Gobierno con sus medidas demuestra su subordinación al capital internacional (Chiriboga 1983, 17-18).

Cabe agregar que la VI Asamblea Nacional de Economistas del Ecuador, reunida en Cuenca a inicios de octubre de 1982, también recomendó nacionalizar la banca (*El Comercio* 1982n2, 6), lo que demuestra que no era el movimiento sindical el único espacio que estaba proponiendo este tipo de medidas, más bien existía una especie de tenue consenso social sobre las nacionalizaciones.

La distancia entre el movimiento sindical y la “sufrida clase del volante” fue recogida también por el reputado periódico capitalino, *El Comercio*, que así anunciaba el día anterior a su inicio, que las organizaciones de conductores profesionales no plegarían a la huelga del FUT. “Al parecer es una represalia a los reiterados pronunciamientos del FUT oponiéndose al alza de precios en el pasaje urbano e interprovincial planteados por los choferes profesionales” (*El Comercio* 1982c, 2).

José Chávez como presidente de turno del Frente Unitario, recordó —en el mismo diario— que, desde el mes de mayo, esta organización presentó al gobierno diez planteamientos como medidas alternativas, ante la crítica situación económica del país. “Han transcurrido casi 4 meses y nada se ha hecho, dijo. Hemos mantenido reuniones con el Presidente de la República y con el Ministro de Trabajo, sin llegar a nada concreto. El gobierno no ha respondido a nuestras peticiones, señaló” (*El Comercio* 1982c, A-2). En una clara maniobra para debilitar a la huelga nacional, el día del paro se anunció por todos los medios una nueva reunión entre el Presidente y los dirigentes del FUT, a la que —por supuesto— no asistieron estos últimos (*El Comercio* 1982l, 3).

Los dirigentes del movimiento sindical también dejaron claro en *El Comercio* que esta era solo una primera etapa, que podría existir un incremento en la lucha social al tiempo que dejaban —como siempre— la puerta abierta para que el gobierno cumpla con sus exigencias y así retomar el diálogo. “Los dirigentes sindicales enfatizaron que esta huelga será una demostración clasista de una futura y probable huelga indefinida, si es que el gobierno no atiende las reclamaciones de las centrales sindicales que integran el FUT” (*El Comercio* 1982c, 2). En el mismo sentido se expresó José Chávez al iniciar la huelga: “La medida de hecho es únicamente preventiva frente a otras que se adoptarán si no se atienden los pedidos que son de absoluto beneficio popular” (*El Comercio* 1982c, 2).

En el mismo diario al día siguiente la CEDOC-CLAT criticó al FUT, a través de un comunicado público —hecho como los otros por vía de pago— cuestionó la convocatoria a la quinta huelga, a la que definió como “la acción precipitada de las élites de la CTE, la CEOSL” (*El Comercio* 1982g, 2). Y reclamó que fue hecha “sin consultar a importantes organizaciones que tienen en sus bases” (*El Comercio* 1982g, 2). Sobre la huelga en sí misma dijeron que “plantean aspiraciones sectarias que malogran la mejor arma que tenemos los trabajadores, e invita a realizar acciones descabelladas frente al momento de crisis política y económica por la que atravesamos, como en el caso de la convocatoria a huelgas nacionales” (*El Comercio* 1982g, 2). Reclamaron también firmemente las aspiraciones de incremento de precios por parte de los choferes.

Cabe destacar que esta facción de la CEDOC, en su comunicado saca una conclusión que —al menos parcialmente— podría ser tomada como cierta:

En el caso del FUT con un pliego elaborado al apuro y la clara intención de no llegar a soluciones, buscando nada más la posibilidad de entrar en negociaciones políticas, burocráticas y de respaldo a un grupo que salió expulsado de la CEDOC en 1976 y que luego se entregó en cuerpo y alma a los zares del marxismo europeizante (*El Comercio* 1982g, 2).

Se hace referencia, a la clara intención de no llegar a soluciones pues para el FUT, al parecer, no existía ningún otro camino dentro de su imaginario que no sea doblegar al gobierno para que este ejecute sus exigencias, actitud que se comprueba en la siempre vigente voluntad de sus dirigencias para entrar en diálogos con el gobierno, decisión que fue confrontada, en público y en privado cuantiosas ocasiones, por las organizaciones de base.

También, los pequeños y grandes industriales de Pichincha se pronunciaron en contra de la huelga y “en contra de toda medida de fuerza, por el respeto y la disciplina sociales, en contra

de la elevación de sueldos y salarios” (*El Comercio* 1982m, 5). Así lo dijo Carlos Rivadeneira de la Cámara de Pequeños Industriales y en la misma lógica se expresó Jacinto Vélez de la Cámara de Industriales de Pichincha:

Elevar el salario mínimo a 7000 sucres, considera un aumento general de sueldos de 3000 sucres; incrementar la compensación salarial; implantar la inmovilidad laboral y prohibir el ejercicio del derecho constitucional a terminar las actividades o negocios, no solo que precipitaría la masiva liquidación de empresas, sino que generaría una incontrolable espiral inflacionaria cuyas mayores víctimas serían precisamente los trabajadores a quienes se pretende ayudar (*El Comercio* 1982m, 5).

En este contexto de tensión se realizó la Quinta huelga general unitaria del FUT.

Capítulo 7. El Estallido

En este capítulo, el más extenso de este trabajo, se abordará la masiva acción colectiva de protesta que tuvo lugar en Ecuador a finales de 1982, misma que se extendió durante más de un mes en buena parte del territorio ecuatoriano. Su clímax fue el Paro Nacional del Pueblo. Este *estallido social* se describirá a través de una revisión cronológica de los acontecimientos —cercanos unos a otros en el tiempo— mismos que determinaron e impulsaron un gran grupo de *medidas de hecho*. Cabe recordar que a través de este trabajo se entiende que la quinta y sexta huelgas unitarias fueron parte del mismo proceso de explosión social. Se incorpora, además, la visión de la conflictividad social y la crisis —a nivel general— recogida de distintas formas. Para ello, en un inicio se revisarán los antecedentes inmediatos del conflicto, entendiéndolos también como sus desencadenantes. Para después abordar, de manera detallada, el Paro del Pueblo en sí mismo y la convulsionada semana que le precedió, recorrido clave para comprender el hecho histórico en su magnitud.

La revisión cronológica que se usa aquí —deliberadamente— permite adentrarse en el vertiginoso acontecer del *estallido social* y deja percibir la intensidad de una dinámica política a la que se iban sumando distintos factores, sectores, formas de organización, respuesta, propuesta y protesta. Elementos que, conjugados con las erráticas decisiones gubernamentales y la fuerte presión ejercida desde las élites, configuraban el conflicto y sus escenarios, día tras día, hora tras hora. Contenido en esta estructura cronológica, el objetivo principal de este capítulo es mostrar cómo, en el fragor del enfrentamiento entre clases, el conflicto fue creciendo de manera espontánea y fueron apareciendo formas de reacción, organización y acción que lo sostuvieron y alimentaron durante largo tiempo retroalimentando y enriqueciendo la protesta y la movilización social. Esto para —en el próximo capítulo, el final— hacer visibles y comprensibles los motivos por los cuales súbitamente se apagó lo que ya era una huelga general de masas, una acción colectiva que había incorporado al grueso de los sectores populares del país.

7.1. Quinta Huelga Nacional Unitaria, 22 y 23 de septiembre 1982

La Quinta Huelga Nacional Unitaria fue presentada por la mayoría de los autores que han trabajado el tema como un simple preámbulo del Paro del Pueblo, soslayando así su importancia. Pese a que el Paro es, sin duda, “el mayor acto de protesta popular” (Chiriboga 1982, 31-32) de ese periodo, esta posición no es del todo acertada. No solo por el hecho de que el Paro mismo no hubiera sido imposible sin la huelga, sino porque los dos momentos

son esenciales y complementarios dentro un solo ciclo de explosión social. Es a través de esta primera acción colectiva concertada y planificada que —como dice Joaquín Loyola de Nueva— “el movimiento obrero se repuso del notorio fracaso que fue el paro nacional del 9 de diciembre de 1981” (1982d, 11). O como dijo también Jorge Dávila Loor, es a través de esta acción que “se revirtió la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores. El gobierno salió golpeado y el FUT fortalecido” (1995, 78).

Recuperación que se explica en el hecho de que las condiciones sociales y específicamente las presiones de las bases encausaron —esta vez— la decisión del FUT. Esto se manifestó en una variedad de novedosos mecanismos, dinámicas y prácticas democráticas que se revisan con énfasis en este capítulo. Estas *emergencias* le dieron al FUT una evidente capacidad de reacción y respuesta, con respecto a los eventos políticos que sucedían rápidamente uno tras otro. Esta forma de *armonía* temporal entre la dirigencia y la base, le permitió al movimiento social tener una voz y una acción que se volvieron hegemónicas al momento de la expedición de las nuevas medidas económicas de octubre. Al punto de que los sectores populares ya se encontraban movilizados al momento de la expedición de las nuevas medidas económicas.

Por las razones que se acaban de exponer, en este trabajo se entiende a la Quinta Huelga como parte de un solo proceso de explosión social y se resalta su importancia como generador de las condiciones que permitieron la existencia del Paro Nacional del Pueblo.

Otro de los aciertos del movimiento popular encabezado por el FUT —que se deben nombrar, pues también hicieron de esta huelga un éxito— fue la ruptura con los transportistas que —en ese momento— chantajeaban al gobierno exigiendo un aumento en los precios de los pasajes. Existía un claro entrampamiento, una situación donde los choferes exigían, cada vez con más agresividad, la elevación de los pasajes, mientras el movimiento popular se oponía a ella. Frente a esta demanda, el gobierno no sé atrevía a dar ningún paso, pues quería evitar la protesta popular para no tener que ceder frente al alza de salarios. La clara indecisión del gobierno también aportó a la generación de una situación favorable para la huelga nacional.

Un día antes del inicio de la huelga, los jefes de bloques legislativos se reunieron con el Presidente de la Cámara de Representantes (*El Comercio* 1982k, 2). Por su parte, Osvaldo Hurtado decidió, a ultima hora, cancelar su viaje a Machala donde debía asistir al IX Congreso Nacional de Municipalidades del Ecuador (*El Comercio* 1982i, 2).

Los obreros no solo que paralizaron efectivamente gran parte de la producción, sino que, junto a los campesinos, estudiantes y pobladores, paralizaron en buena medida la circulación

del transporte, durante las 48 horas de la huelga (Dávila Loor 1995, 78). “Un pueblo en lucha: las huelgas nacionales 1982-83”, valioso trabajo de periodismo militante —editado en 1983 por la CEDOC-Socialista y el CEDEP— festeja el éxito de la huelga nacional realizada los días miércoles 22 y jueves 23 de septiembre de 1982. Este trabajo caracteriza la huelga como “Una victoria popular” (CEDOC-CEDEP 1983, 11) y —para fortuna del presente trabajo— recoge testimonios, a través de corresponsales de las organizaciones locales de la CEDOC Socialista, sobre los actos de protesta en once provincias. “Un pueblo en lucha...” permite conocer a viva voz, cómo los miembros del movimiento sindical y los sectores populares vivieron y valoraron esta huelga.

En Quito, Guayaquil y Cuenca, los trabajadores industriales cumplieron con su compromiso de paralizar las principales fábricas y de impedir la circulación vehicular, al costo de enfrentar una fuerte represión. Como dice Joaquín Loyola de Nueva: “esta vez la huelga se ‘sintió’” (Loyola 1982d, 11).

Las fábricas ubicadas principalmente en la panamericana norte y sur de Quito paralizaron sus actividades. Desde las 9 de la mañana del primer día de huelga ya lograron suspender totalmente el tráfico en esas vías. Al norte, empresas como Botar, Carpintería Modular, West, Moteles del triángulo, Masuca enfrentaban decididamente la represión policial como a la acción se sumaron obreros que a pesar de no pertenecer al FUT estaban de acuerdo con la medida, como fue el caso de EMPROMET. Al sur, los obreros de AYMESA, PEPSI-COLA, MAESTRO, CHAIDE y CHAIDE, y otras fábricas enfrentaban verdaderas batallas campales con la policía que trataba de restablecer el tráfico, sin lograrlo. En los en otros sectores fabriles como El Inca, Cotocollao, la vía a Tumbaco y la av. 5 de Junio los trabajadores también actuaron decididamente. La represión fue dura. La policía tuvo con gran violencia al desalojar la fábrica MASUCA (puso en serio peligro la vida de una trabajadora y sus dos hijos), hirió con una bomba lacrimógena al Secretario General de CHAIDE Y CHAIDE y apresó a decenas de obreros (CEDOC-CEDEP 1983, 11).

A tal punto llegó la eficiencia de los bloqueos de los obreros del extremo sur de Quito, que, para el segundo día de huelga, se generó una escasez de combustible en toda la ciudad “toda vez que los vehículos repartidores no pudieron ingresar a la ciudad. Largas colas se formaron junto a las gasolineras. Algunas bombas tuvieron que suspender su atención ante la falta de combustible” (*El Comercio* 1982c1, 8).

El diario *El Comercio* dispuso a un equipo de periodistas para realizar una inspección durante el primer día de huelga nacional mismo que pudo comprobar que:

En un recorrido por las principales fábricas de Quito, tanto por el norte como por el sur, se pudo comprobar ayer que un 40% de ellas laboraban normalmente en medio de ciertas seguridades, tanto de su personal como de miembros de la policía nacional, que tuvieron que afanarse en abrir las calles al tránsito y apagar las llantas, maderos y otros materiales combustibles como gasolina y aceite que fueron diseminados y encendidos en sitios estratégicos de calles y avenidas de mayor tráfico (*El Comercio* 1982p1, 8).

Ese mismo diario, como portada de su segunda sección, mediante un sugerente título, acusó de que “Hubo excesos de los huelguistas en Quito” (*El Comercio* 1982r, 10). Así, según este medio, durante el primer día de la quinta huelga nacional “En el sector de Guajaló los trabajadores de la ‘Pepsi Cola’; ‘Chaide y Chaide’; ‘Henasa’ y ‘Poliplast’ tuvieron enfrentamientos con la Policía” (*El Comercio* 1982r, 10). Así mismo “Los carros cisterna lanzaron agua y bombas lacrimógenas al tiempo que trataban de despejar la vía” (*El Comercio* 1982r, B-10). Se informó también que “En la Panamericana Norte también se produjeron incidentes con la policía. Los gendarmes tuvieron que actuar enérgicamente para disolver a los manifestantes. Varias personas fueron detenidas por arrojar piedras de los vehículos particulares y públicos” (*El Comercio* 1982r, 10). Con respecto al transporte, se difundió que “era normal en la mañana. Posteriormente fueron desapareciendo las unidades, cuyos propietarios prefirieron guardar sus vehículos en previsión de ataques” (*El Comercio* 1982r, 10).

Grupos de estudiantes universitarios salieron a las calles y se adueñaron de las zonas adyacentes al recinto universitario. Un grupo avanzó por la calle Guayaquil y prácticamente interrumpió el tránsito vehicular. Los manifestantes se ubicaron en el sector de el Ejido y la Alameda y de ahí avanzaron hasta el centro de la ciudad. La policía lanzó bombas lacrimógenas a fin de dispersar a los manifestantes a momentos era intransitable la avenida 10 de agosto y Guayaquil; pese a ellos los establecimientos comerciales mantenían sus puertas abiertas (*El Comercio* 1982r, 10).

De igual manera, se dijo que “en la plaza de Santo Domingo un grupo de personas lanzaba consignas contra el gobierno, reclamaba por la carestía de la vida y solicitaban aumento de salarios” (*El Comercio* 1982r, 10). Grupos de ciudadanos se aglomeraban espontáneamente en puntos claves de la ciudad para participar en la Huelga, logrando en muchos casos interrumpir el tránsito. *El Comercio* atestigua que eso precisamente “aconteció en las calles del Riofrio, América, 5 de Junio, Guayaquil y Avenida 10 de agosto” (*El Comercio* 1982r, 10). El diario recogió reportes en el mismo sentido desde el sector de Carretas, en la calle

Maldonado en el sur de la ciudad, el sector de El Tejar en el centro sur. Así mismo, señala que en la Plaza Benalcázar “se adueñaron de una vulcanizadora y sacaron las llantas para quemarlas” (*El Comercio* 1982r, 10). También se informó que muchos vehículos sufrieron la destrucción de sus parabrisas y un gran grupo de personas sufrió afecciones respiratorias por el uso de gases lacrimógenos (*El Comercio* 1982r, 10).

Al evaluar el desempeño de los sectores poblacionales y barriales en la capital, los editores del folleto “Un pueblo en lucha...” reconocen que “Fue determinante para el éxito de la huelga, la acción decidida del Comité del Pueblo que distribuyó brigadas destinadas a paralizar el tráfico en toda la ciudad. Lograron su objetivo pese a la brutal represión” (CEDOC-CEDEP 1983, 12). El Comité del Pueblo fue una agrupación de ciudadanos, que, en busca de solucionar su problema de vivienda, construyeron una sólida organización social y que, poco después, acabarían fundando un barrio en Quito que lleva ese nombre.

Miembros de la CEDOC Socialista y el CEDEP, con equipos de reporteros desplegados en distintas zonas de Quito, recogieron testimonios como el que sigue:

Estamos contra el alto costo de la vida y contra este gobierno antipopular que se ha dedicado atender a los gamonales y oligarcas, por eso estamos por toda la ciudad paralizando el tráfico desde las 7 de la mañana”, dijo una de las integrantes de las brigadas (CEDOC-CEDEP 1983, 12).

Así mismo, llegaron a la conclusión de que empleados públicos, estudiantes y el pueblo en general apoyaron la huelga:

Trabajadores del IESS, Empresa Eléctrica, el Consejo Provincial, el Municipio, profesores y trabajadores de la salud, también paralizaron sus actividades apoyando la medida del FUT. Se dedicaron a paralizar el tránsito en los sectores en los que se hallaban concentrados. Los trabajadores del IESS cerraron las puertas, dispuestos a suspender sus actividades, pero el local del instituto fue allanado por la policía lo que les obligó a trabajar. Los estudiantes cerraron las calles cercanas a las universidades y se unieron a las brigadas de trabajadores y pobladores que recorrían la ciudad junto los pequeños comerciantes de El Tejar, igualmente paralizaron el tráfico de las calles aledañas muchos de ellos fueron apresados junto con el dirigente laboral Telmo Hidalgo (CEDOC-CEDEP 1983, 12).

Así se informó sobre la detención del connotado dirigente socialista Telmo Hidalgo, diario *El Comercio*:

En Quito fue detenido el dirigente sindical Telmo Hidalgo, cuando la policía lo sorprendió distribuyendo “miguelitos” a fin de causar daños a los vehículos. Según la información oficial, Hidalgo se negó a identificarse al momento que fue detenido, pero posteriormente fue puesto en libertad. Algunos dirigentes quieren con la detención darse espectáculo, había comentado el ministro de Gobierno (*El Comercio* 1982c1, 8).

La presencia de brigadas de trabajadores, pobladores y estudiantes también son incorporadas dentro del relato de *El Comercio* de una manera en que se las minimiza, pero que no logra ocultar su existencia: “En la avenida 10 de agosto y calle Guayaquil el tráfico fue casi normal. A momentos pequeños grupos de trabajadores de intentaban obstruir el paso de vehículos, pero rápidamente eran dispersados por la policía” (*El Comercio* 1982c1, 8). Bajo la misma mirada se enuncia la participación de los estudiantes. Hablando específicamente sobre el sector de la Universidad el diario dice que “estudiantes se dedicaron a obstruir el tránsito vehicular. La policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. No hubo incidentes mayores. En la tarde los estudiantes se replegaron y únicamente un pequeño grupo alteraba la tranquilidad ciudadana” (*El Comercio* 1982c1, 8).

Según los trabajadores, entre siete y diez mil personas participaron en la marcha que dio conclusión a la huelga en Quito (CEDOC-CEDEP 1983, 12). *El Comercio* por su parte diría que fueron 4000 los participantes (*El Comercio* 1982d1, 8). Coinciden las dos fuentes al decir que “La población se iba sumando espontáneamente al paso de la manifestación, demostrando así su descontento y rechazo al Gobierno” (CEDOC-CEDEP 1983, 12). *El Comercio* publicó detalles sobre el final de la marcha en la primera plana del 24 de septiembre: “Como epílogo de la actitud de hecho de los trabajadores cómo se cumplió ayer una manifestación que recorrió desde El Ejido hasta la plaza de San Francisco” (*El Comercio* 1982v, 1). Informó el diario que al llegar a la plaza varios dirigentes, en sus discursos, rechazaron “la actitud represiva desatada por las fuerzas policiales a la vez que demandaron la libertad de los trabajadores detenidos” (*El Comercio* 1982v, 1).

Edgar Ponce, presidente de la CTE “afirmó que la huelga fue producto del hambre y la explotación que ha sometido el gobierno al pueblo ecuatoriano” (*El Comercio* 1982d1, 8). Así mismo Ponce “Atribuyó la muerte del ciudadano Miguel Jiménez en Cañar a la ‘brutal represión’ que fueron objeto los trabajadores” (*El Comercio* 1982d1, 8). El gobierno negó inmediatamente este hecho y atribuyó la muerte a causas naturales. Por su parte, Froilán Asanza, Presidente de la CEDOC Socialista reconoció el valor de la clase trabajadora y atribuyó el triunfo de la huelga a su valor y decisión (*El Comercio* 1982d1, 8). Dijo, según

recoge El Comercio, “que los trabajadores estarán pendientes de las resoluciones del gobierno y no permitirán la elevación de pasajes” (*El Comercio* 1982d1, 8).

José Chávez, además de calificar la huelga como un éxito, advirtió que, de no haber respuesta positiva del gobierno a los nueve puntos planteados en su plataforma de lucha, se tomarán medidas más enérgicas en octubre. Además, fustigó duramente al legislativo, mostrando su descontento por el *quemimportismo* que, según él, “ha demostrado la Cámara Nacional de Representantes para los planteamientos de los trabajadores y añadió que los legisladores lo único que hacen llenarse de la palabra pueblo y cuándo es de estar junto a él, le dan las espaldas” (*El Comercio* 1982d1, 8).

La fuerza de esta acción colectiva se puede medir también en el siguiente hecho que da cuenta también de la voluntad del gobierno de no entrar en confrontación con los trabajadores:

“Luego de congregarse en la plaza de San Francisco para escuchar a los dirigentes sindicales, la multitud se dirigió al Palacio de Gobierno para exigir la libertad de más de 200 detenidos por la huelga, que fueron inmediatamente sacados del penal” (CEDOC-CEDEP 1983, 12).

En este punto, los dirigentes sindicales también empezaron a solicitar recurrentemente la dimisión del Ministro de Gobierno Galo García Feraud quien evitó responder sobre el tema ante la prensa y “Recordó que es el Presidente de la República al que le corresponde la integración de su gobierno, y presionar al mandatario sobre su permanencia en la función es un atentado contra las potestades constitucionales” (*El Comercio* 1982e1, 8). Este ministro también estableció una importante diferencia entre la cuarta huelga nacional realizada en diciembre de 1981 y la quinta huelga de septiembre de 1982 misma que fue calificada por el rudo ministro como un paro “agresivo y violento que ha lesionado muchos derechos particulares y generales del Ecuador” (*El Comercio* 1982e1, 8).

Según lo recogido por “Un pueblo en lucha...”, en Guayas, provincia que para ese momento concentraba gran parte de las industrias del país, fueron también los obreros quienes encabezaron las manifestaciones. “Para la clase obrera de Guayaquil la QUINTA HUELGA no fue huelga de ‘no trabajar’ sino de ‘combatir’” (CEDOC-CEDEP 1983, 13). En la principal zona fabril de la ciudad, el sector de la vía a Daule, “la policía se enfrentó al juego de ‘la gallina ciega’. Cuando lograba abrir un tramo de la carretera cerrada por los obreros, ellos ya la habían bloqueado nuevamente en otros tres sitios” (CEDOC-CEDEP 1983, 13). El folleto destaca la participación de las siguientes fábricas, lo que deja ver el alcance de la huelga en dicha ciudad: “ETERNIT, CERVECERÍA, CLAVOS GUAYAS, MOLINOS

CHAMPION, AGA, ORANGE CRUSH, PEPSI COLA, CONALEC, PASTEURIZADORA SUPER, STERLING, POLIMEROS, DISTRIBUIDORA COMERCIAL, FRIGORO, PRODOMECA, UNIÓN CARIBE, entre otros” (CEDOC-CEDEP 1983, 13, [las mayúsculas pertenecen al original]).

Al igual que en la capital las organizaciones de pobladores participaron de la huelga y “paralizaron el tráfico en Guayaquil. Cabe mencionar la lucha de Mapasingue y la Prosperina” (CEDOC-CEDEP 1983, 13), inmensos barrios populares del puerto principal. Resaltan también la participación de ocho cooperativas organizadas de sectores populares (CEDOC-CEDEP 1983, 13). Calcularon que al menos sesenta personas fueron detenidas en esta ciudad (CEDOC-CEDEP 1983, 19).

El gobernador del Guayas Juan Pablo Moncagatta, por su parte dijo que la Huelga Nacional “Fue un fracaso” (El Comercio 1982t, B-10). Y explicó las razones por las cuales ordenó a la Policía impedir por la fuerza la marcha con la que el FUT esperaba dar por finalizada su acción colectiva en dicha ciudad:

el Gobernador del Guayas, manifestó que la marcha y concentración de los trabajadores organizados por el FUT esta tarde y que fue frustrada por la Policía, se la impidió, en primer lugar porque las manifestaciones públicas deben ser previamente autorizadas por la Intendencia de Policía, y en este caso no hubo ninguna solicitud de autorización; y, en segundo lugar porque en esa concentración se suscitaron actos de violencia lanzaron piedras de los vehículos, obligando a los agentes del orden al realizar algunas detenciones (*El Comercio* 1982a1, 3).

Los campesinos del Guayas también participaron de la paralización. En Milagro, otra de las ciudades de importancia en esta provincia, “miles de campesinos y obreros realizaron una combativa manifestación por el centro de la ciudad, paralizando el tráfico y obligando a cerrar los comercios” (CEDOC-CEDEP 1983, 14). Aquí, los trabajadores municipales y la gran mayoría de los 5000 obreros del Ingenio Azucarero Valdez, también plegaron a la huelga, según el citado folleto. En Daule “los campesinos bloquearon las vías y realizaron manifestaciones” (CEDOC-CEDEP 1983, 14).

En la norteña y fronteriza provincia de Esmeraldas, la paralización se empezó a calentar un día antes con la declaración de huelga de “los obreros del Consejo Provincial, obras de vialidad y Autoridad Portuaria” (CEDOC-CEDEP 1983, 15). Ya para el miércoles 22, los sectores sociales de la provincia lograron que sea visible una paralización casi total de la

capital provincial. Así, “se realizaron dos grandes manifestaciones que paralizaron el tráfico y obligaron a cerrar comercios, bancos, correos y gasolineras. La represión fue muy dura, produjo cuatro heridos e igual número de presos” (CEDOC-CEDEP 1983, 15). Muy parecido fue lo que ocurrió el jueves 23, pues a las 10 de la mañana se realizó una nueva marcha, dos personas fueron heridas por disparos de la policía: “Miguel Méndez con una bala en el pulmón y Ángel Chica con otra en la frente” (CEDOC-CEDEP 1983, 15).

Manabí, provincia en la que durante 1982 se produjeron serios enfrentamientos entre sectores populares y las fuerzas del orden, estuvo también muy activa durante la quinta huelga. Pues las presiones económicas —que se han descrito ya ampliamente— se juntaron con una sequía que se extendió por varios meses durante el año. Lo que hizo que las tensiones exploten en enfrentamientos en algunos casos por ocupaciones de terrenos y otros enmarcados en paros cantonales, como aquel al que ya se hizo referencia en la ciudad de Chone.

Mauro Guillén, Presidente de la FENOP y Secretario General Adjunto de la CEDOC Socialista, informó sobre los detalles de la realización de la quinta huelga nacional en la provincia de Manabí:

Participaron combativamente en la huelga los trabajadores de PEPSI COLA, Obras Públicas, Municipales, Portuarios, de la Salud, de la malaria y la Previsora. Apoyaron decididamente el paro los maestros y estudiantes, principalmente los de la Universidad Técnica, la FEUE, la FESE y varios colegios. Los empleados públicos del MAG, CRM e INIAP también plegaron a la acción del FUT. Los campesinos actuaron, cerrando las carreteras que conducen a Manta y a Chone. Los pobladores de los barrios realizaron manifestaciones callejeras. La ciudad de Portoviejo está atravesada por el río del mismo nombre, por eso los puentes son fundamentales para el tráfico de vehículos, los pobladores se tomaron esos puentes durante los días de huelga paralizando el tránsito hasta que fueron desalojados por la policía. Se paralizaron las vías Portoviejo-Manta y Portoviejo-Quito. El segundo día se programó una marcha del FUT, la cual no se pudo realizar por la represión policial (CEDOC-CEDEP 1983, 15).

En la Provincia de El Oro, concretamente en su capital Machala “Obreros, estudiantes y pobladores hicieron varias manifestaciones, cerraron vías y comercios, logrando paralizar las actividades durante los dos días. Se luchaba en las calles hasta pasadas las 10 de la noche” (CEDOC-CEDEP 1983, 16). En la ciudad de Santa Rosa ocurrieron situaciones similares al punto que “como fruto de la represión policial quedó un compañero herido de bayoneta” (CEDOC-CEDEP 1983, 16). La población de Arenillas también logró paralizar la ciudad. Mientras que en Huaquillas frontera sur, la población encontró una oportunidad en la huelga,

para incrementar su lucha local contra las irregularidades en el manejo de los fondos y en el funcionamiento del municipio de Huaquillas. Por ello, “el 21 de septiembre se tomaron por segunda vez en este año, el local del municipio, exigiendo la renuncia del presidente que no ha convocado una sola sesión por más de un año” (CEDOC-CEDEP 1983, 16).

Joaquín Vásquez, dirigente de FCTO, filial de la CEDOC en El Oro, fue el encargado de evaluar el desempeño de la huelga en esta provincia:

Lo más importante sido la presencia activa del pueblo en las calles demostrando su descontento con el gobierno y los sectores dominantes como estos han llevado al país de la crisis y quieren superar la costa del pueblo ecuatoriano. La característica de la lucha fue la combatividad. Los obreros salieron a pelear y encontraron el apoyo popular como el pueblo está descontento y necesitó una dirección que conduzca su lucha se ha demostrado que las mejores conquistas se logran luchando y no con el diálogo (CEDOC-CEDEP 1983, 16).

En Azuay, se recoge en la publicación de la CEDOC y el CEDEP que se paralizaron sus labores los trabajadores del Consejo Provincial, la empresa de agua potable, del proyecto Paute y de muchas otras fábricas (CEDOC-CEDEP 1983, 17). Se agrega que, como ha ocurrido en otras provincias, “Los 2 días del paro se realizaron grandes manifestaciones populares que llegaron hasta la plaza de San Francisco y dejaron en claro el descontento general de la población con el Gobierno” (CEDOC-CEDEP 1983, 17).

Los obreros de la serrana provincia de Chimborazo “se movilizaron y combatieron de una manera nunca antes vista” (CEDOC-CEDEP 1983, 17). Como fue la tónica en esta huelga, “Paralizaron sus actividades los obreros de CERÁMICA ANDINA, CEMENTO CHIMBORAZO, TUBASEC, PROLAC, EMDEFOR, los trabajadores de obras públicas fiscales y municipales, los de aseo de calles, los eléctricos, los ferroviarios y los del Ministerio de Agricultura” (CEDOC-CEDEP 1983, 17). Una de las fábricas más grandes de la capital de provincia, TUBASEC, estaba paralizada por los trabajadores, a lo que la Policía respondió con un infructuoso intento de desalojo, que dejó tres heridos. Tal como en otras provincias, los pobladores de varias cooperativas de vivienda también participaron en actividades destinadas a paralizar el tránsito en las vías principales “y participaron masivamente en las manifestaciones que se realizaron los dos días” (CEDOC-CEDEP 1983, 17). Los editores de “Un pueblo en lucha...”, destacan “la actuación de los campesinos organizados de Columbe y San Juan que paralizaron las carreteras Riobamba-Pallatanga, Riobamba-Cuenca y Riobamba-Guaranda” (CEDOC-CEDEP 1983, 17).

En Cañar, el FUT estaba integrado por la Unión Provincial de Cooperativas y Comunas, la Asociación de Organizaciones Agrícolas de Cañar, ASOAC, los Trabajadores Municipales, el sindicato artesanal del Cantón y el sindicato SOMEC (CEDOC-CEDEP 1983, 18). Los miembros de estas organizaciones bloquearon las calles, las carreteras y los caminos de la provincia. Se destaca el hecho de que las organizaciones campesinas de la provincia “recogiendo una necesidad popular, se tomaron el hospital del cantón exigiendo una mejor atención y la dotación de médicos permanentes” (CEDOC-CEDEP 1983, 18).

“Un grupo de unas 400 personas del pueblo y los estudiantes empezaron a apoyarnos impidiendo que la policía nos desaloje”, dice Segundo Calle, dirigente campesino. En la mañana del segundo día se realizó una misa Popular de apoyo a las demandas de los campesinos que permanecían dentro del hospital, incomunicados y totalmente rodeados de policías. Como saldo de la brutal represión policial, murió ahogado por los gases lacrimógenos el anciano Manuel Antonio Jiménez. El apoyo popular impidió que se detuviera los dirigentes que se tomaron el hospital (CEDOC-CEDEP 1983, 18).

En la frontera norte, en la provincia de Carchi, específicamente en la ciudad de Tulcán “Pararon todos los sindicatos obreros, los trabajadores de la salud, los eléctricos y los municipales” (CEDOC-CEDEP 1983, 18). También los campesinos de los cantones Espejo y Montúfar cerraron varias vías con miguelitos y otros materiales.

Jaime Guerrero, dirigente campesino de la UNOCCAR aprovechó su reporte para hacer un reclamo a las dirigencias:

Tuvimos que hacer un fuerte trabajo de aclaración en las bases sobre la falsedad de las noticias de que había diálogo entre el FUT y el Gobierno, pues según los informes de prensa se terminaría suspendiendo el paro. Yo estuve en la convención del FUT y se decidió cortar el diálogo porque no daba ningún resultado, creo que los dirigentes debían ser consecuentes con esto y no vacilar porque ahí confunden a la gente (CEDOC-CEDEP 1983, 18).

Este reclamo responde —como ya se había mencionado— al último intento del gobierno por parar, a última hora, la realización de la huelga, como dice Dávila Llor “—o más bien la pretensión de confundir a los trabajadores y a la opinión pública— al convocar a la dirección del FUT a nuevas conversaciones para el 21 de septiembre, un día antes de la huelga” (1995, 78). Este intento no prosperó, pues la dirección del FUT no acudió a dicho diálogo, pero si exigió a los dirigentes de bases —como se concluye de la cita— un esfuerzo extra en el trabajo organizativo para informar a las bases sobre la inexistencia del diálogo que fue ampliamente difundido por la prensa.

“Un pueblo en lucha...” señaló que la región amazónica del país “Varias organizaciones sindicales, encabezadas por los trabajadores petroleros, paralizaron sus actividades en Coca, Shushufindi y Lago Agrio. En Coca se realizó una concurrida manifestación en la que participaron los trabajadores del IERAC” (CEDOC-CEDEP 1983, 18).

Este rico informe de la CEDOC y el CEDEP deja ver todo el tiempo las tensiones y los reclamos de las bases debido a los diálogos que mantenían las dirigencias con el Gobierno. Pero, además, varias formas de organización y acción colectiva popular, de carácter diverso y muchas veces espontáneo, que participaban en esta tensión. Y se hacían más presentes en la medida en que el FUT se iba conformando en el “aglutinador de los sectores populares en función de dirigir la protesta social” (Chiriboga 1982, 35).

En este sentido, es preciso abordar un ámbito de particular importancia, la emergencia de una serie de mecanismos de articulación, acción y decisión de las bases. Esta dinámica buscaba la unidad de acción, desde las bases, que se hacía concreta en diferentes tipos de prácticas; dinámica misma que superó, en varios momentos de agitación social, al centralismo burocrático de las organizaciones sindicales y les forzó a actuar.

Ese centralismo vertical que garantizaba espacios de poder y por tanto de privilegios en las cúpulas, se vio desafiado por la conformación espontánea de Comités Ampliados de Huelga. Estas instancias, creadas para ejecutar la quinta huelga, quedaron en funcionamiento para el Paro del Pueblo. Y—como resulta evidente— sostuvieron una buena parte de la responsabilidad durante el punto más alto del estallido social y las acciones que le antecedieron. Es precisamente gracias al tejido social que lograron consolidar y su consiguiente ampliación, que la movilización social pudo ser tan grande. Este es el caso de Comité Ampliado de Huelga en la provincia del Guayas que asumió con éxito la ejecución de los dos días de protesta en septiembre de 1982:

El dirigente de la FECLATG y Presidente de turno del FUT de Guayas, Jorge Macharé, señaló que fueron dos los factores determinantes para el éxito de la huelga. El primero, la constitución del COMITÉ AMPLIADO DE HUELGA que permitió integrar a la preparación y dirección del paro a amplios sectores populares como los campesinos, pobladores, empleados públicos, bancarios maestros y pequeños, comerciantes.

El segundo la acción comunitaria y coordinada de todas las organizaciones de izquierda del Guayas, mencionando al Partido Socialista, Partido Comunista, Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Movimiento

Revolucionario de los Trabajadores (CEDOC-CEDEP 1983, 14, [las mayúsculas pertenecen al original]).

En las provincias fronterizas de Carchi al norte del Ecuador y de El Oro al sur, también se conformaron Comités Ampliados de Huelga. En Tulcán este comité “agrupó a las organizaciones sindicales de artistas, estudiantes y artesanos” (CEDOC-CEDEP 1983, 18). En la Provincia de El Oro, fue el FUT, es decir, la unificación concreta de las centrales sindicales en dicha provincia, el organismo que llamó a la conformación de un Comité Ampliado de Huelga. El comité “estuvo integrado por la Unión Nacional de Periodistas, Unión Nacional de Educadores, FESE, FEUE y la Federación de Barrios Suburbanos de Machala” (CEDOC-CEDEP 1983, 16). Este conglomerado de organizaciones realizó una rueda de prensa “y una concurrida Asamblea Popular” (CEDOC-CEDEP 1983, 16).

Otra difundida práctica que permitió la ampliación del tejido social hacia el gran Paro de octubre, y que merece ser resaltada, son precisamente las asambleas populares que se realizaron en distintas localidades. Por ejemplo, el tejido social movilizado de la ciudad de Esmeraldas, que terminó su participación en la quinta huelga nacional con una gran reunión de este tipo (CEDOC-CEDEP 1983, 15).

El FUT, según Manuel Chiriboga, “salió airoso de su huelga de 48 horas el 22 y 23 de Septiembre reflejando claramente su capacidad de convocatoria y aglutinamiento de los sectores populares” (Chiriboga 1982, 30). Es importante resaltar que “Esos días se había logrado paralizar la economía del país, prácticamente sin contar con el apoyo de choferes y estudiantes” (Chiriboga 1982, 30). Lo cual dejaba claro que una próxima convocatoria de huelga “sería acatada multitudinariamente por los sectores populares, ante la agresión a la economía popular” (Chiriboga 1982, 30). En palabras de Hernán Ibarra “la huelga del 23 y 24 de Septiembre, con un sensible aumento de la movilización anunciaba una potencialidad que empezaba a rebasar la dirección sindical” (Ibarra 1983, 80).

Ante esto, el gobierno desató una respuesta represiva que intentó ser ejemplar, en la que se incluyó las tradicionales detenciones y golpizas, además de allanamientos y desalojos.

Algunos testimonios sobre estos hechos son recogidos por la CEDOC Socialista y el CEDEP:

La policía nos ha pegado salvajemente con los sables; a la compañera Carmen Molina le llevaron herida a la cárcel. A otras seis compañeras detenidas le dieron palo y les patearon como animales” dice una compañera del Comité del Pueblo en Quito (CEDOC-CEDEP 1983, 19).

Aquí otro testimonio:

Trabajadores de CHAIDE Y CHAIDE denunciaron: “Ha habido mucha represión. En la mañana un carro de la policía que lanzaba bombas le impactó con una en el pecho al compañero Secretario General. Le llevamos a un centro de salud” (CEDOC-CEDEP 1983, 19).

El ataque contra los dirigentes y miembros del movimiento sindical por parte del gobierno fue directo y despiadado. El primer día de la huelga fue allanado el local de la CEOSL, ubicado en la calle Salinas 154, con el fin de detener a los principales dirigentes de las tres centrales que se encontraban allí reunidos (CEDOC-CEDEP 1983, 19). “La policía causó varios destrozos en el local, detuvo a algunos trabajadores e hirió a los compañeros Francisco Chalá y Gonzalo Guamán” (CEDOC-CEDEP 1983, 19). Aunque este hecho fue cínicamente desmentido por el gobierno (El Comercio 1982w, A-1), José Chávez acusó directamente a la Policía y al gobierno por este hecho y, al anunciar que el FUT enjuiciaría al Ministro de Gobierno por estos actos, mencionó incluso el nombre del policía que habría estado a cargo del operativo:

Dijo que quién destrozó esta seguridad fue el capitán de policía Rufo Rueda Bedoya, quién estuvo al mando del pelotón que allanó el local de la CEOSL. Luego trató de ingresar al despacho del dirigente Chávez y a poco los policías de emplearon la fuerza para reducir a los trabajadores que se encontraban allí. Se evidencia el ataque físico porque hay huellas de sangre en la pared (*El Comercio* 1982w, 2).

Saúl Cañar, quien ese momento era dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores de Pichincha y que años después fue torturado y asesinado por miembros del ejército (Amnistía Internacional 1998), fue apresado durante la Quinta Huelga. Cañar dijo, según transcribió “Un pueblo en lucha...”, que entre los detenidos había “uno que está roto la cabeza, le han cogido 12 puntos. Otro, al que los policías le han roto la boca de un batazo. Otro con el rostro desfigurado y muy mal de la columna, pero no reciben ninguna atención médica” (CEDOC-CEDEP 1983, 19).

Tarquino Fajardo dirigente de la fábrica BOTAR declaró: “después de la huelga, salimos, nos embarcamos en una camioneta y la policía la detuvo. Ahí nos apresaron, nos golpearon amargamente. Al compañero Roberto Balboa le rompieron la cabeza, también al compañero Miguel Díaz; él cuenta que en la cárcel los policías que iban llegando le pegaban e insultaban hasta que perdió el conocimiento, tiene de roturas y le han cogido 25 puntos en la cabeza junto

a mí me rompieron la nariz y la ceja junto a otro compañero le pegaron tanto que le dejaron por muerto en el carretero” (CEDOC-CEDEP 1983, 19).

Diario El Comercio de Quito, recoge que:

Dirigentes de las centrales sindicales afirmaron que no menos de 100 personas fueron detenidas por la policía. Entre los apresados encuentran dirigentes sindicales como Juan Andrango, Presidente de la Fetralpi; Mesías Tatamuez, presidente de la FENOC, Hugo Enríquez, dirigente de la CTE, Esperanza Macías, del Comité del Pueblo y obreros de las diferentes fábricas de industrias que plegaron a la huelga (*El Comercio* 1982r, 10).

Cabe anotar que, en otro de sus titulares del mismo día, este diario había sostenido sin aclarar que existen dos organizaciones que pugnan por el mismo nombre: que la FENOC no había participado de las protestas (*El Comercio* 1982s, A-8). Y sin notarlo —al parecer— aseguran en otra parte del mismo diario, que su Presidente fue detenido por la Policía.

De igual manera, el segundo día de huelga, fue cercado local de la CEDOC y atacado con gases lacrimógenos, a fin de obligar a salir y detener a los ocupantes (CEDOC-CEDEP 1983, 19).

Sin quitarle mérito a la coincidencia, es llamativo saber que el mismo día que terminó la quinta huelga nacional, acabó el “juicio político al Frente Económico declarando —como se esperaba— la inocencia de los ministros Carlos Vallejo, de Agricultura y Ganadería y Orlando Alcívar, de Industrias, Comercio e Integración” (*El Comercio* 1982u, A-1). La clase política concretaba así una nueva tregua a través de la cual quedaron libres de todo cargo varios ministros en un amplio proceso de interpelación propuesto por el legislador “Jaime Hurtado, del MPD quien consideró que los secretarios de Estado —miembros del Frente Económico— habían violado la ley lo que benefició sobremanera a los ingenios al acordar el alza del precio del azúcar” (*El Comercio* 1982u, 1).

De manera evidente las élites cerraban filas en defensa de una institucionalidad frágil, pero que estaba —de todas maneras— a su disposición. Todo esto frente a una movilización popular que podía convertirse en una importante amenaza al *statu quo*. Muestra de esto es que el FUT alcanza su primer titular de los años 1981 y 1982 en la Revista Vistazo, recién el 17 de septiembre de 1982, donde lo presentan sin ambages como un enemigo del bienestar público (Vistazo #361 1982, 9). En un duro pronunciamiento, los editores de dicha revista ridiculizan la intervención del FUT en el Parlamento. Para la siguiente edición, la 362, volverán a tener un titular que hablaba en los mismos términos sobre la quinta huelga. Según

la noticia de Vistazo, “Huelga del FUT” (Vistazo #362 1982, 9), “el movimiento huelguístico no tuvo repercusiones en la opinión colectiva. Las repercusiones las sufrió el país en el orden material, en razón de los muchos millones de sucres que, como único saldo, nos deja la forzada inacción” (Vistazo 1982, 9). Además, afirmó que “el pueblo, en realidad, no brindó apoyo alguno al movimiento 'futista’” (Vistazo 1982, 9). Usando esto como argumento para caracterizar la huelga nacional como una huelga política; pues según Vistazo, el pueblo con respecto al FUT: “Se sentía lejos de él, no identificado con sus prédicas, tal vez porque la huelga era más política que laboral, y los políticos, dicho sea de paso, no están muy bien conceptuados en la opinión popular” (Vistazo 1982, 9).

David Tenesaca presidente recién electo de la CEDOC-CLAT y Francisco Minda de la FENOC literalmente festejaban el fracaso de la huelga en amplios reportajes en la segunda página de El Comercio como “El Pueblo rechazó a los irresponsables” (El Comercio 1982y, 2). Para demostrar así el fracaso de lo que ellos denominaron burocracia sindical (El Comercio 1982y, 2).

Las quejas sobre el paro en este diario se centraron en la falta de transporte, incluso problemas con las matrículas en el sistema educativo, así como por la falta de aseo en las calles de la capital. También hablaron sobre la falta de luz y alumbrado eléctrico en varias zonas de la capital:

Moradores de Carcelén, El Inca, Laureles y otros sectores del norte de la ciudad reclamaron indignados por la suspensión deliberada de la energía eléctrica sin que las autoridades hayan adoptado una medida eficaz a fin de restituir el servicio. Indicaron que ante los continuos pedidos ante la empresa eléctrica para que restituir el servicio en los barrios del norte de la ciudad, escuchaban la respuesta de “no podemos atender sus pedidos porque estamos en huelga” (El Comercio 1982c1, 8).

Con respecto a la movilidad en la ciudad, debe anotarse que el primer día:

El transporte público casi desapareció ayer. Los propietarios de los vehículos prefirieron guardar sus unidades a exponerlas a ser destruidas por los manifestantes. Las paradas estaban abarrotadas de personas y fue dificultoso transportarse de un lugar a otro. La escasez de transporte se acentuó ayer. Los buses que circulaban se encontraban permanentemente atestados de pasajeros. Largas caminatas tuvieron que emprender los ciudadanos para llegar a sus sitios de trabajo (El Comercio 1982z, 2).

Durante los dos días se suspendieron los viajes interprovinciales hacia Guayaquil y el sur del país, mientras que, hacia el norte, hubo el servicio de manera intermitente. Pues en la panamericana norte se enfrentaban la policía y los obreros organizados que, además de bloquear la calle, atentaban contra las unidades de transporte (*El Comercio* 1982c1, 8).

El segundo día, el transporte desapareció casi por completo, pues buena parte de la rabia de los manifestantes se desataba contra las unidades de transporte colectivo privado. “La ciudadanía tuvo que soportar la falta de transporte. Los buses y colectivos trabajaron parcialmente. El servicio fue sustituido por improvisadas camionetas que junto con los taxis aprovecharon de la situación para hacer plata” (*El Comercio* 1982c1, 8). Del conjunto de las fuentes encontradas se concluye que hubo escenas frecuentes durante los días de paro en varias zonas de la ciudad de Quito. Por ejemplo, gente caminando en grupos durante largos trayectos para intentar realizar sus actividades normales. O camionetas con baldes llenos más allá de su capacidad circulando por las calles aledañas a los bloqueos; en algunos casos se veía a sus conductores rogando para que les dejen pasar por las barricadas. Al igual que los taxis, compartidos por varias personas para superar el bloqueo hecho con llantas quemadas, árboles, montañas de tierra y escombros. En algunos puntos de la ciudad la dinámica con la policía asemejaría a un juego, al lograr los agentes del orden desbloquear un punto, otros puntos habían sido bloqueados.

Al día siguiente de terminada la Huelga Nacional, *El Comercio* recogió la lectura tanto del gobierno como de los dirigentes del FUT con un titular de primera plana del día 24 de septiembre: “Gobierno y trabajadores satisfechos” (*El Comercio* 1982v). Publicó primero la versión del gobierno en los siguientes términos: “Según un balance del gobierno los ecuatorianos se han inclinado por la paz y tranquilidad durante los dos días de huelga que terminaron ayer. La acción policial ha estado dirigida a contrarrestar actitudes combativas y de caris terrorista” (*El Comercio* 1982v, A-1). El Ministro de Gobierno “excitó por su parte al pueblo para retornar a la vida ordenada, a la paz social y al trabajo” (*El Comercio* 1982v). Así mismo, “Lamentó que durante los dos días de huelga se hayan producido actos de violencia y anticipó que sus autores eran sometidos a la acción penal” (*El Comercio* 1982v, 1). Los dirigentes del movimiento sindical, consideraron por su parte, “que la huelga ha demostrado la fuerza combativa y la unidad de la clase trabajadora” (*El Comercio* 1982v, 1).

Es importante destacar que los dirigentes del movimiento sindical anunciaron que “El FUT esperará hasta el 12 de octubre una respuesta positiva a sus planteamientos, de lo contrario el

gobierno deberá someterse a las consecuencias” (*El Comercio* 1982v, 1). Esto tuvo una respuesta inmediata del Gobierno, “El ministro de Trabajo, doctor Vladimiro Álvarez Grau, dio a conocer que el gobierno reanudará el diálogo con los dirigentes de la clase trabajadora del país en el afán de estudiar la posibilidad de un incremento o compensación salarial para los trabajadores del país” (*El Comercio* 1982x, 2). Este diálogo fue el más prolongado entre el FUT y el gobierno durante el periodo estudiado.

Como una clara muestra de buena voluntad con respecto a estos diálogos:

Álvarez Grau informó además que a pedido de varios dirigentes se ha realizado gestiones mediadoras ante el Ministerio de gobierno y policía a fin de que sean puestos en libertad los ciudadanos que fueron detenidos en algarazas interrumpiendo el tráfico de la ciudad, únicamente se quedaron detenidos quienes hayan infringido la ley gravemente atentando contra la vida y la propiedad de las personas y que son de conocimiento público (*El Comercio* 1982x, 2).

Haciéndose eco del discurso del gobierno y de la gran mayoría de sectores de poder, el editorial central de *El Comercio* del sábado 25 de septiembre de 1982, dijo que la huelga fue un completo fracaso y que la posición de los dirigentes del movimiento sindical es un claro desafío de una minoría a toda la sociedad ecuatoriana. Calculan sin citar ninguna fuente, que como máximo 100.000 trabajadores estarían afiliados en el Ecuador para ese momento. Y que “En el país viven muchos cientos de miles de trabajadores que nada tienen que ver con los diez líderes de los sindicatos que ya se creen supremos árbitros del destino nacional” (*El Comercio* 1982h1, 4).

En el mismo párrafo determinaron al enemigo oculto detrás de los sindicatos: “No se puede ocultar el manejo del comunismo en todas aquellas actitudes de agitación social” (*El Comercio* 1982h1, 4). Sostuvieron también que los responsables fueron “Los grupos comunistas presentes en todos esos casos de rebelión y los dirigentes de sindicatos complaciendo a esas consignas políticas extremistas de estorbar la marcha del país hacia adelante” (*El Comercio* 1982h1, 4). No existían entonces para *El Comercio* razones legítimas para la protesta, todo provenía de un complot comunista en contra del Ecuador.

Esa misma noche en la televisión nacional, en el programa *Los periodistas y el personaje de la semana*, José Chávez dijo en vivo y en directo que el FUT pedía la salida del ministro García Feraud, por ser responsable de la represión ejercida en las dos jornadas de lucha. Además, expresó que no se aceptaría la pérdida de la semana integral como amenazaba el

gobierno. Y mantuvo la presión sobre el gobierno al expresar que “se emplazaba a este hasta el 12 de octubre para que reconsiderarse las demandas contenidas en la plataforma de lucha” (Pérez Sáinz 1985, 112).

El Ministro de Trabajo dijo en Guayaquil el 26 de septiembre que “no obstante el perjuicio ocasionado por la huelga última, el gobierno está dispuesto a plantear a la Cámara de Representantes al aumento de los sueldos y de la compensación salarial” (*El Comercio* 1982n1, 19). El último pronunciamiento de políticos en relación a esta quinta huelga nacional fue recogido en la principal prensa del país ocurrió el 24 de septiembre cuando unos 30 legisladores entre los que se encontraban Baquerizo, Borja, Carrión entre otros pidieron al presidente Hurtado que se atendiera las demandas de los trabajadores (Pérez Sáinz 1985, 112).

Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz, también hicieron una esclarecedora lectura sobre esta huelga. En el siguiente fragmento se puede ver además de la interacción del FUT con otros importantes actores sociales, varios de los elementos fundamentales de la movilización popular:

La oposición al alza de pasajes, que constituyó una de las principales demandas de esta nueva plataforma, impidió cualquier entendimiento con los choferes. Incluso desató cierto antagonismo que se expresó en la negativa por parte del FUT de apoyo al paro de este sector que tuvo lugar a fines de septiembre y en la celebración de una manifestación, a comienzos del mes siguiente en contra de la subida de las tarifas del transporte. También hay que señalar las fricciones que se dieron con la CONASEP, cuya dirigencia acusó a la huelga de inoportuna y desestabilizadora. Por el contrario, fue en esta huelga que sectores poblacionales comenzaron a adherirse, de manera significativa, al FUT, sobre todo en Quito. En el mismo sentido hay que señalar los contactos establecidos con los maestros. Ciertos núcleos provinciales de la UNE (Azuay, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Guayas y Tungurahua) pidieron participar en la III Convención iniciándose así el acercamiento entre cierto sector del magisterio y el movimiento sindical (León y Pérez Sáinz 1986, 112).

7.2. El paro de los transportistas

La quinta huelga terminó el jueves 23 de septiembre y, al día siguiente, el viernes 24 de septiembre los dirigentes de Federación de Choferes del Ecuador anunciaron, después de una fracasada reunión con el Presidente Osvaldo Hurtado, su decisión de realizar un paro de actividades indefinido a partir del lunes 27 de septiembre. Esto, aunque el Presidente mostraba toda la disposición para la elevación de tarifas. Lo único que le detenía es que,

según él, tenía una traba legal: una prohibición expresa de la Junta Militar de Gobierno que prohibía explícitamente el incremento de los servicios públicos. Para cuando se realizó la reunión todavía no había sido enviada a la Cámara Nacional de Representantes para su interpretación (*El Comercio* 1982g1, 1).

“Frente a la actitud del gobierno de acogerse a un informe político sobre el costo de la transportación, reflejando también una actitud política insensible a los requerimientos de la clase del volante, no nos queda más la alternativa que irnos al paro de actividades...”, declaró anoche el secretario general de la Federación de Choferes del Ecuador, Vicente Mendoza (*El Comercio* 1982i1, 1, [comillas en el original]).

El lunes 27, inició el Paro de los transportistas, pero, según el manabita Vicente Mendoza Rivadeneira, alcalde de Portoviejo, afiliado al Partido Liberal, quien además presidía el gremio de los choferes como Secretario General de la Federación Nacional:

Una puerta quedó sin embargo abierta, de acuerdo con las declaraciones de Mendoza, para la solución del problema. Reveló el dirigente que la federación decidió ceder en sus aspiraciones, bajando su inicial postura de un alza en un 50% sobre las tarifas vigentes al 25%, pero que esperaba una respuesta concreta del gobierno porque los choferes estaban cansados ya de engaños y dilatorias, según expreso (*El Comercio* 1982i1, 1).

Ese mismo día lunes, el gobierno envió la consulta, sobre la supuesta traba legal a la Cámara de representantes, con respecto a lo cual el dirigente de los transportistas señaló que ya antes les habían subido las tarifas sin tener que hacer ninguna clase de consultas (*El Comercio* 1982i1, 1). Por la noche de ese día, la Cámara Nacional de Representantes anunció que “nada tiene que ver en la elevación de las tarifas del transporte terrestre, deslindando esta responsabilidad exclusivamente al Ejecutivo” (*El Comercio* 1982o1, 1). Por su parte, el Departamento de Información Económica del Consejo Nacional de Tránsito calculó que los transportistas perdían 40 millones de sucres diarios al paralizar 20.000 unidades, con una pérdida por unidad de 2.000 sucres diarios (*El Comercio* 1982b2, 6).

Se tomaron varias medidas por parte del gobierno para intentar minimizar los efectos del paro de los transportistas, visiblemente impopular entre el grueso de la población. Entre otras medidas, se pusieron a circular vehículos del ejército y se permitió la circulación de una oferta privada de transporte que no estaba legalizada (*El Comercio* 1982j1, A-1). En Guayas se suspendieron las clases, se declaró la Ley Seca, es decir, se prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas además de la tradicional “prohibición de todo tipo de manifestaciones” (*El Comercio* 1982k1, 2).

Después del primer día de paro El Comercio informaba que: “Con tranquilidad se soporta el paro” (*El Comercio* 1982p1, 1).

Las unidades de transporte público, tanto urbano como rural, no aparecieron ayer por las calles, avenidas y carreteras, pero la ciudadanía se dio modos para enfrentar al paro y lo consiguió utilizando furgonetas, camiones, automóviles, vehículos institucionales, pero, particularmente, camionetas de cajón, a fin de cumplir con su jornada de trabajo y otros menesteres (*El Comercio* 1982p1, 1).

Los choferes indignados con estas *soluciones*, empezaron a echar miguelitos en las calles, así como a apedrear las unidades de transporte improvisadas. De hecho, en Esmeraldas trataron de bloquear con canoas el acceso tanto fluvial como marítimo. En esta misma ciudad el día 28, ocurrieron enfrentamientos entre los miembros de la Federación de Choferes y el FUT. Como resultado de los incidentes un universitario perteneciente a la FEUE “fue herido de bala por parte de un grupo de dueños de la transportación” (*El Comercio* 1982z1, 8).

En Quito se registró un lamentable accidente cuando uno de los camiones que realizaba el servicio de transporte se volcó dejando varios heridos (*El Comercio* 1982p1, 1). Durante el segundo día de paro, esta vez intencionalmente, se volcó e incendió una furgoneta en el centro norte de la capital, quedando tres personas con heridas leves (*El Comercio* 1982y1, 8). Solo para esta ciudad, el Consejo Nacional de Tránsito expidió 1.230 permisos de operación a vehículos que desearon colaborar ofreciendo este servicio (*El Comercio* 1982q1, 2).

Un periodista de El Comercio concluyó el 29 de septiembre desde Cuenca que “la clase del volante se encuentra absolutamente abandonada a su suerte en medio de una ola de protestas de los sectores populares” (*El Comercio* 1982a2, 13). Ese mismo día en Machala “elementos representativos de algunas instituciones, estudiantes y pobladores del lugar se tomaron el local del sindicato cantonal de choferes” (*El Comercio* 1982c2, 8), esto luego de apedrearlo. Los asaltantes lanzaron por las ventanas escritorios, máquinas de escribir y otros enseres” (*El Comercio* 1982c2, 8). Esto sucedió después de atacar la lavadora de una cooperativa de transportes local.

Para el segundo día del paro de choferes y frente al estancamiento de las negociaciones entre las partes se generó una comisión de legisladores nombrada para buscar conciliación y coincidencias entre el gobierno y los transportistas (*El Comercio* 1982r1, 1). Esta comisión haría las veces de intermediadora frente al gobierno; mediación que empezó el miércoles 29 con una reunión con el Ministro de Gobierno (*El Comercio* 1982u1, 2). Este día, el tercero de

paro, se empezó a sentir el desabastecimiento de productos en las ciudades más grandes, pese a las declaraciones positivas que al respecto hacían las autoridades. Hubo en todo el país “acaparamiento y ocultamiento de productos, con lo que se logró el desabastecimiento propicio para la especulación” (*El Comercio* 1982k2, 4).

El jueves 30, cuarto día de paro de transportistas se vivió así en Quito:

Las caminatas prosiguieron en la ciudad. Desde el Banco Central hasta Santo Domingo con miles de ciudadanos ocupaban las aceras de Quito. El tránsito se desenvolvía normalmente y no había los clásicos de embotellamientos que se producen a consecuencia de la aglomeración de los buses y colectivos de transporte público. La contrariedad se hizo evidente. La ciudadanía reclamó por la actitud de los choferes y demandó una enérgica actuación de las autoridades gubernamentales a fin de solucionar el problema. La ciudad vivió otro día de paralización de transporte y los reclamos se fueron multiplicando (*El Comercio* 1982e2, 2).

A la noche de ese jueves, después de casi una semana de paro, representantes de los 107 sindicatos de choferes, al cabo de una deliberación de más de seis horas, decidieron mantener el paro indefinido, pues no habían logrado todavía doblegar al gobierno. Los taxistas rompieron unilateralmente con la decisión y empezaron a ofrecer su servicio desde el viernes 1 de octubre (*El Comercio* 1982d2, 1).

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) se pronunció sobre el posible incremento: “La sola idea de elevar el precio de los pasajes en el transporte urbano rebasa los marcos de las ambiciones de los monopolistas del transporte, en acción conjunta con las autoridades de este gobierno también propiciador de este hecho” (*El Comercio* 1982i1, 3). En el mismo sentido se manifestaría la Unión Nacional de Educadores (UNE) a través de su Presidente, Antonio Yáñez. Quien afirmó que las medidas, a las que determinó como antipopulares: “agudizan los problemas del alto costo de la vida y por consiguiente vendrá a repercutir en la desnutrición, vivienda, costo de útiles escolares, etc. Estos factores determinan un mayor porcentaje de deserción escolar no permitiendo el normal desenvolvimiento del proceso enseñanza-aprendizaje” (*El Comercio* 1982v1, 3). El legislador Jaime Hurtado González del partido político MPD, quien fuera asesinado junto a su sobrino y su guardaespaldas en 1999, siempre fue muy cercano políticamente a estas dos agrupaciones, por lo que presentó en esos días “un proyecto de decreto para el congelamiento de las tarifas de transporte terrestre y los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, correos y comunicaciones, por el lapso de tres años” (*El Comercio* 1982v1, 3).

En ese mismo sentido, los legisladores Carlos Julio Arosemena y Luis Mejía solicitaron al Presidente del Congreso “convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso con el fin de analizar el problema económico que vive el país y aprobar la Ley Orgánica de la Función Legislativa” (*El Comercio* 1982t1, 2). Con el argumento de que el periodo ordinario de sesiones estaba por culminar y el tiempo podría no alcanzar para tratar las leyes que tenían pendientes y encarar de manera sería el problema económico. Este congreso extraordinario se volverá uno de los principales ejes de disputa, pues los trabajadores también encontrarán que este era el camino para volver concretas sus demandas.

7.3. Finales de septiembre de 1982

A finales de septiembre, en el marco del proceso de expansión petrolera, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) incorporó 8 nuevos campos de producción, para lo cual se había requerido “cinco años de trabajos en las distintas fases y una inversión de 5.000 millones de sucres” (*El Comercio* 1982m1, 4).

Durante el mismo periodo, el gobierno nacional analizaba el impacto social que tendría la eliminación de los subsidios a las tarifas de la energía eléctrica (Neira 1982, 9). Hurtado empezó a advertir sobre posibles repercusiones de la crisis y a insistir sobre pretensiones de algunos sectores para desestabilizar la democracia. Así, en un artículo sobre esto en la portada del diario *El Comercio* del 29 de septiembre, el joven Presidente dijo “Quienes creen que los gobiernos dictatoriales son mejores, deben observar el dramático ejemplo de Bolivia, que anuncia el retorno a la democracia” (*El Comercio* 1982s1, 1). El fantasma del golpe volvía a ser parte imperante del discurso.

Así mismo Hurtado recordó que desde el fin de la segunda guerra mundial, América Latina registró un crecimiento económico permanente para después anunciar que “el sueño concluyó y hoy nos encontramos ante una situación equiparable a la de los años 30” (*El Comercio* 1982s1, 1). En esa misma retórica, agregó que “en 1981 el PIB se elevó apenas en 1,2 por ciento —la tasa más baja desde 1945— y se estima para este año, un crecimiento negativo” (*El Comercio* 1982s1, 1). El optimismo había desaparecido, la crisis se reconocía en plenitud, lo que se demuestra a través de la gran atención que dan tanto Vistazo, como *Revista Nueva* y especialmente *El Comercio* al tema económico durante septiembre y octubre.

Casualmente o no, al terminar septiembre, después de la quinta huelga, se le da razón al brazo político del Partido Comunista Ecuatoriano en la demanda planteada sobre su eliminación del

registro electoral. Esta resolución permitirá también —un poco más tarde— que el Partido Socialista siga con vida en el campo electoral.

La reclamación planteada por la Unión Democrática Popular (UDP) con respecto a la cancelación de su registro en el Tribunal Supremo Electoral —acogida favorablemente por la Corte Suprema de Justicia—ha tenido el mérito de demostrar la inconstitucionalidad, y de paso las arbitrariedades, de la controvertida Ley de Partidos Políticos (Loyola 1982d, 11).

El 28 de septiembre se denuncia la muerte de un rompehuelgas, además de 4 trabajadores que quedaron heridos en un violento enfrentamiento en el marco de una huelga solidaria en Guayaquil:

El ciclista y entrenador de este deporte en de origen argentino y nacionalizado en el Ecuador, Anselmo Zarlenga Dipietro, murió de un tiro en el rostro en un enfrentamiento registrado entre trabajadores de la empresa “Polímeros Nacionales” (Pollinasa) y elementos extraños calificados como “rompehuelgas”, según se informó. El suceso tuvo lugar en el interior de la mencionada empresa ubicada en el kilómetro 6 y medio de la vía a Daule. Los trabajadores según una denuncia presentada en la comisaría de turnos, se habían declarado en huelga desde el pasado 22 cuando tuvo la huelga nacional decretada por el FUT y luego continuaron apoderados de local, en señal de solidaridad para con los trabajadores de la pasteurizadora “Super”. Los denunciantes: Manuel Espinosa, Washington Gilery, Miguel Valarezo, secretarios generales de Defensa Jurídica y de Organización, respectivamente, afirmaron que ayer a las 15 horas irrumpieron en el local de la empresa 150 extraños, presumiblemente asalariados y encabezados por Zarlenga y otro individuo llamado Gustavo Aguilar quienes portando armas de fuego y cortopunzantes arremetieron contra los trabajadores, con el propósito de desalojarlos, por lo que los trabajadores tuvieron que hacerles frente en defensa de su integridad física (*El Comercio* 1982z4-1, 14).

El 30 de septiembre, el Presidente Hurtado condecoró a Isabel Robalino Bolle por haber “dedicado gran parte de su vida al servicio de los sectores populares” (*El Comercio* 1982f2, 2). Esta condecoración fue tomada por algunos sectores del movimiento sindical como una verdadera provocación.

7.4. Octubre Negro

El viernes 1 de octubre cerca de la media noche, por desgaste, terminó el paro de los choferes:

Se informó que la única condición fue la suscripción de un acta avalada por la comisión mediadora de la Cámara Nacional de Representantes, según la cual la comisión se compromete a vigilar que la Comisión Nacional de Tránsito, en un plazo de treinta días,

analice el estudio elaborado por la comisión en la que se establecerán las condiciones económicas en que se desenvuelve la transportación nacional. Unas 30 personas se encontraban en el local de la Federación Nacional de Choferes cuando se levantó el paro y abandonaron luego visiblemente contrariadas (*El Comercio* 1982g2, 1).

Con una tregua de 30 días por parte de los choferes a favor del gobierno, el país terminaba con dos largas semanas de inestabilidad. Según *El Comercio* “La ciudadanía recibió con cierto entusiasmo la decisión de los dirigentes de la transportación y aplaudieron la firme posición del gobierno de no ceder a las presiones de los transportistas” (*El Comercio* 1982h2, 1). Así “Tras la suspensión del paro, el público pudo movilizarse a diferentes lugares con relativa normalidad. La escasez de los buses urbanos no creó ningún problema a la ciudadanía. Los camiones y camionetas de uso particular continuaron colaborando en la transportación” (*El Comercio* 1982h2, 1).

Los dirigentes de la Federación Nacional de Choferes mantuvieron consultas con los sindicatos del país y evaluaron las consecuencias del fracasado paro. Los transportadores admitieron que el país no se paralizó ante la medida de hecho, pero resaltaron la unidad demostrada por la clase del volante (*El Comercio* 1982h2, 1).

Pese a que el paro se encontraba oficialmente terminado, en varias provincias el precio del transporte se elevó arbitrariamente. Así, por ejemplo, los choferes del Carchi que decidieron continuar unilateralmente con el paro además de aumentar —sin autorización gubernamental— el 25% al precio de los pasajes (*El Comercio* 1982i2, 13).

Otra de las reacciones frente a la terminación del paro de transportistas, fue la del historiador militante Patricio Ycaza, quien a nombre del Comité por la Defensa de los Derechos Democráticos de los Trabajadores y el Pueblo sobre la inminencia del incremento de los pasajes dijo “el pueblo no transigirá en la lucha para detener el aumento de los pasajes y contra el alto costo de la vida” (*El Comercio* 1982j2, 1). Ycaza presionó también en favor de la estatización o municipalización del transporte y agregó irónicamente que esta medida no tendría mayor impacto para los transportistas dado que según ellos habrían dicho su actividad “no les reporta ningún beneficio económico” (*El Comercio* 1982j2, 1). Así mismo, el secretario general del Socialismo Revolucionario ecuatoriano, Víctor Granda, “insistió en su exigencia de que se estaticen la importación de automotores y de repuestos evitando que unos se enriquezcan ilimitadamente” (*El Comercio* 1982j2, 1).

La disputa pública entre el FUT y los choferes se agudizó poniendo en el centro de la discusión al gobierno que era presionado por los dos sectores que habían paralizado el país en las últimas semanas. A saber, el movimiento sindical presionando para que no se realice el alza de los precios de los pasajes y el gremio de los propietarios de buses presionando fuertemente en sentido contrario. Así, el 5 de octubre el FUT confirmó que al día siguiente se iban a realizar manifestaciones públicas para “oponerse a la pretendida alza del valor de los pasajes del servicio de transporte terrestre” (*El Comercio* 1982r2, A). José Chávez, Presidente de turno del FUT, dijo

que las 3 centrales sindicales que conforman el Frente Unitario de los Trabajadores, han instruido a sus organizaciones filiales para que mañana en el país, se realicen manifestaciones públicas en señal de rechazo a la pretensión de los monopolistas del transporte terrestre y de servicio urbano, para que sean revisadas y elevadas las tarifas de transporte de pasajeros y carga, del servicio interprovincial, y del servicio urbano (*El Comercio* 1982r2, 8).

Es importante agregar que Chávez advirtió que, en Quito, la manifestación tendrá el respaldo de los sindicatos que forman parte de la CTE, CEOSL y CEDOC Socialista, “así como de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, y de la Federación de Estudiantes Secundarios, FESE” (*El Comercio* 1982r2, 8). Se evidenciaba un proceso de unidad de acción entre distintos sociales.

Los resultados de esta movilización fueron ocultados deliberadamente tanto por *El Comercio* como por *Vistazo*, tratando de invisibilizar no solo el descontento sino la capacidad de convocatoria del movimiento sindical que iba en claro aumento.

Al ser increpado sobre los planteamientos del FUT que insistían en la ejecución de los puntos de su plataforma de lucha el Ministro de Trabajo, Vladimiro Álvarez dijo según la portada del *El Comercio* del miércoles 6 de octubre: “El gobierno nacional no admite amenazas ni condicionamientos” (*El Comercio* 1982t2, 1).

Al mismo tiempo, una mezquina disputa empezó entre Galo Vayas Salazar presidente de la comisión mediadora designada por la Cámara y el Ministro Galo García Feraud, para atribuirse el triunfo ante los choferes (*El Comercio* 1982q2, 2).

Frente al inminente fin de los 42 días del cuarto periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Representantes, *El Comercio* fortaleció su campaña de desprestigio contra dicha institución. Así, el domingo 3 de octubre, resaltó el siguiente texto, que es la conclusión,

según señalaron de un sondeo entre personalidades: “Unanimidad de criterios para reducir período de legisladores” (El Comercio 1982i2, A-1):

La Cámara Nacional de Representantes concluirá el próximo viernes su cuarto periodo ordinario de sesiones, en medio de serios cuestionamientos, críticas y desprestigio, en el que se han sumido sus propias contradicciones, su inoperancia y la falta de decisión política para enfrentar con seriedad los grandes problemas nacionales (*El Comercio* 1982i2, 1).

Las críticas a la legislatura desbordaban los medios, un editorialista incluso se atrevió a hacer un cálculo de cuantos millones de sucres se desperdiciaron en cada interpelación: 15 millones de sucres (Leiva 1982, 5).

Los conflictos cantonales y provinciales siguieron apareciendo, a inicios de octubre se declaran paros en las parroquias El Triunfo de la provincia del Guayas y La Troncal en la provincia de Cañar. Medidas que exigen a la Cámara Nacional de Representantes su cantonización (*El Comercio* 1982m2, 2). En varios lugares las huelgas de trabajadores continuaban, aquí un caso en la provincia de Esmeraldas:

Varios trabajadores del Sindicato de Vialidad del Consejo Provincial mantienen una huelga y permanece interior del edificio de la corporación desde hace más de un mes, están enfermos de tifoidea y paludismo, según denuncia el secretario general del Sindicato de Vialidad, Edison Pérez (*El Comercio* 1982o2, 14).

Unos días después una delegación de estos trabajadores acompañados de numerosos estudiantes y dirigentes barriales, “irrumperon en el local de la Inspectoría de Trabajo, buscando intimidar al inspector Patricio Sánchez Mancheno que venía conociendo los problemas laborales de la región” (El Comercio 1982z2). En Guayaquil, los bomberos bloquearon parcialmente la avenida 9 de octubre, exigían el pago de una compensación de 250 sucres que no recibían hace algunos meses (*El Comercio* 1982f3, 8).

El martes 5 de octubre, “el gobierno suspendió por 60 días el aumento de tarifas eléctricas hasta realizar un estudio que determine un reajuste de acuerdo con las circunstancias actuales del país” (*El Comercio* 1982p2, 1). Al parecer, empezaba a cuidarse el ejecutivo de otra ola de estallido social.

Además de la crisis económica y política que se ha venido señalando, para inicios octubre se destapó una crisis en el sistema de justicia:

Catorce magistrados y jueces de la Función Judicial fuera de sus cargos hasta fines de septiembre de 1982; dos magistrados de Quito en espera de ser juzgados; dos jueces de la

provincia de El Oro, en similar situación y, ahora, en Guayaquil un número indeterminado de administradores de justicia en proceso de investigación por una alta comisión de la Corte Suprema de Justicia, es el panorama del estado de la justicia en el país (*El Comercio* 1982s2, 1).

7.5. Las medidas dramáticas

El miércoles 6 de octubre daría inicio una nueva escalada del ciclo de protesta social que tendrá su clímax el jueves 21 de octubre. Unas intrigantes declaraciones del Presidente Hurtado darán nombre a las medidas económicas que se aprestaba a tomar, pues anunció “en Babahoyo que tomará *medidas dramáticas* para salvar la economía nacional. El primer mandatario hizo esta afirmación durante la sesión solemne del Consejo provincial de Los Ríos realizada para conmemorar el CXXII aniversario de la erección provincial” (*El Comercio* 1982u2, 1).

Es menester transcribir las palabras exactas de Hurtado, para que se observe una supuesta disposición al sacrificio de su carrera política por un bien mayor, que se resume en el heroico acto de salvar la economía a través de un grupo de dramáticas medidas económicas:

Qué me ha tocado y me tocará tomar decisiones dramáticas para salvar la economía nacional, pero después se analizará que he salvado a la economía, que he transformado a la sociedad nacional y que he dado a los que nada tenían servicios de salud, educación; tierra para los campesinos, cambios para los agricultores y trabajo para todos los habitantes de todas las regiones de la patria (*El Comercio* 1982u2, 1).

Y otra de sus frases deja ver un supuesto estoicismo y sentido de abnegación, que conservaría durante la crisis social con respecto al tema. Con este tono invitó permanentemente a otros actores a asumir responsabilidades:

El gobierno y la oposición, los trabajadores y los empresarios no conseguiremos superar las dificultades económicas que hoy nos ponen a prueba si no compartimos entre todos las responsabilidades que a cada uno exige la patria (*El Comercio* 1982y2, 3).

En un abrir y cerrar de ojos la situación económica aparecía como incontrolable. Hurtado suspendió un importante viaje a Quevedo y convocó a una reunión urgente de lo que se conocía como el Frente Económico, es decir, el conjunto de ministros que dirigían las políticas públicas ligadas a la producción, los recursos naturales, las finanzas y la política monetaria. En ese momento dicho frente estaba conformado por el Ministro de Finanzas, Pedro Pinto; de Recursos Naturales, Gustavo Galindo; de Industrias, Orlando Alcívar; y, de

Agricultura, Carlos Vallejo, así como por el Presidente de la Junta Monetaria, José Antonio Correa y el gerente general del Banco Central, Abelardo Pachano (*El Comercio* 1982v2, 1). Otra reunión del mismo tipo se realizó con el Frente Social. A pesar del descontento popular, expresado en la Quinta Huelga Nacional Unitaria, las presiones económicas se volvieron insostenibles para el gobierno que empezó a esbozar una solución arremetiendo contra los sectores populares.

El mismo 6 de octubre, Hurtado aprobó la proforma del presupuesto del Estado para 1983 misma que ascendía a los 79.500 millones de sucres. *El Comercio* en su portada del 7 de octubre, señalaba, a modo de disimulado reclamo, que “Este monto es mayor en un 11,6 por ciento que el presupuesto de 1982” (*El Comercio* 1982w2, 1). Este incremento se hizo pese a las grandes presiones de las élites que en conjunto señalaban a la reducción del gasto del Estado como una de las principales soluciones para la crisis económica.

Para estar claros sobre la visión de las élites económicas y políticas tradicionales sobre la crisis, es decir, Cámaras de Industrias, Comercio y Agricultura, Partidos Social Cristiano, Conservador, Liberal, CFP, etc. y otros gremios patronales, cabe traer el análisis que hizo Manuel Chiriboga sobre el discurso de las élites sobre la crisis:

La crisis económica tiene su origen en el mal manejo de la economía, en la demagogia gubernamental, en los falsos proyectos de cambio; así como en una política de intervencionismo estatal sobre la economía que impide el libre desarrollo de la iniciativa privada. Es imprescindible para superar la crisis crear un clima de confianza, acabar con los proyectos demagógicos, reducir el presupuesto, terminar con los subsidios, estableciendo precios reales, congelar salarios, volver a las 48 horas (sic), etc. (Chiriboga 1982, 17).

La Cámara Nacional de Representantes empezó, al igual que el gobierno lo haría después, una política de pequeñas concesiones a sectores de los trabajadores. Los maestros fueron los primeros en recibirlas, a través de un decreto que permitía que los sueldos décimo tercero y décimo cuarto se calculen en base al sueldo básico y al sueldo funcional, tal como constaban en el nombramiento original de cada maestro (*El Comercio* 1982x2, 2). El Ministro de Educación Claudio Malo dijo que el alza asciende a tres mil millones de sucres, en el presupuesto del año siguiente y quedaba en manos del Presidente decidir si esto era posible o no en el marco de una crisis económica (*El Comercio* 1982e3, 7). En su edición del sábado 9 de octubre, un editorial del diario *El Comercio* cuestionó esta decisión. El diario argumentó que esta decisión era inconstitucional pues no determinó el origen de dichos recursos (*El Comercio* 1982j3, 4).

El 7 de octubre, en la portada de diario El Comercio el vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Hugo Suárez, manifestó que “al momento la banca comercial no está concediendo préstamos porque no dispone de recursos para ello” (*El Comercio* 1982a3, 1). Marcel Laniado, Presidente del Banco del Pacífico “manifestó por su parte la iliquidez se presentó por una contracción del circulante” (*El Comercio* 1982a3, 1). Para ese momento ya se hablaba de un grave desencaje bancario, esto quiere decir que los bancos no tenían los suficientes recursos para cubrir la totalidad de los ahorros de sus clientes. Así, “el dinero en poder de la banca privada bajó de 11,562’833,000 sucres al 31 de diciembre pasado, a 8,875’131,000, el 10 de septiembre último” (*El Comercio* 1982a3, 1). Los bancos —de una manera todavía disimulada— exigían un salvataje. Para el 8 de octubre, el Banco Nacional de Fomento también anunciaba que, por falta de liquidez, se haría una considerable reducción del monto asignado a créditos (*El Comercio* 1982g3, 1). Días después se anunciaba que su cartera vencida ascendía 2.064, pero un dato todavía más preocupante es que su cartera por vencer llegaba a los “12 mil millones de sucres que representan el 85.3 por ciento del total” (*El Comercio* 1982r3, 6).

Así mismo y sin ambages, en la portada de ese mismo diario, de ese mismo día 7, se denunciaba que la deuda privada adquirida hasta ese momento “fue para gastos de consumo” (*El Comercio* 1982b3, 1).

Con respecto al escaso endeudamiento en el exterior para fines de inversión, que en 1981 fue solo el 9 por ciento, los analistas hacen notar que, sin embargo, global de la deuda contraída por el sector privado en la banca internacional fue de unos 1.000 a 1.200 millones de dólares, según versiones oficiales basadas en los registros del Banco Central. Esta situación se explica, afirman los entendidos, el hecho de que es enorme endeudamiento no se destinó a inversión, sino casi en su totalidad a consumo (*El Comercio* 1982b3, 1).

Esta cita quiere mostrar el cinismo de los llamados sectores productivos, que se endeudaron el exterior esencialmente para “gastos de operación —sueldos y salarios y en definitiva aquellos que no generan divisas—” (*El Comercio* 1982b3, 1). Estas deudas se incrementaron inmensamente gracias a las irracionales decisiones de los grandes banqueros norteamericanos que aumentaron sin control las tasas de interés en búsqueda de liquidez ante la crisis global. Estas son las deudas privadas sobre las que se empezó a exigir que sean —de alguna manera— asumidas por el Estado. Esto finalmente ocurrió a través de un gran salvataje a empresarios y banqueros, al que se le denominó, la sucretización de la deuda.

La portada de El Comercio de ese día resulta fascinante, pues también se anuncia que “1.224 millones de dólares se pedirá refinanciar en exterior” (*El Comercio* 1982c3, 1), de un total de 4.681 millones de deuda pública. Es decir que, el gobierno a través de su Banco Central dio a conocer que solicitaría un refinanciamiento a los acreedores extranjeros —principalmente norteamericanos— del 26% del total de la deuda externa. Esto es más de un cuarto del total. Para ello una comisión negociadora debía reunirse en Nueva York con delegados del City Bank, el Chase Manhattan Bank, el Lloyds International Bank y el Bank of America (*El Comercio* 1982c3, 1) los mayores acreedores del país, entonces. Dicho comunicado emitido el 1 de octubre y publicado como anuncio en El Comercio el día 7 de octubre, dice literalmente que el gobierno solicita “refinanciar la deuda pública del Ecuador que vence en el periodo del 1ro de noviembre de 1982 al 31 de diciembre de 1983” (*El Comercio* 1982d3, 3). El comunicado finaliza llamando a los ecuatorianos que cooperen con prudencia con el proceso de renegociación.

La Cámara de Comercio de Quito solicitó —por su parte— unos días después de que se hizo público dicho comunicado, que el Parlamento investigue “el monto real de la deuda pública y opina que los datos últimamente revelados por el Ejecutivo, son inverosímiles” (*El Comercio* 1982k3, 7).

Haciendo público por anticipado su pesimismo, varios de los negociadores partieron algunos días antes a preparar en Nueva York, el escenario de la negociación. La negociación fue cuestionada con el argumento de que “el Ecuador debe a unos 140 bancos y en un ‘meeting’ de esa índole es difícil que se pueda llegar a una conclusión favorable porque el interés y la actitud de los pequeños acreedores son diferentes a la de los grandes” (*El Comercio* 1982m3, A-1). Tiene lógica el argumento de que primero había que reunirse con los más grandes acreedores, es decir, el City Bank, el Chase Manhattan Bank, el Lloyds International y el Bank of America, una vez conseguidos resultados con estos bancos, se podría presionar a los pequeños a aceptar ciertas condiciones. Dos días después de la reunión con los bancos, en la misma ciudad se llevó a cabo una reunión con una delegación del FMI.

En en contexto internacional, es preciso conocer que Hernán Siles Suazo, llegó a La Paz el día 8 de octubre en calidad de presidente electo por el Congreso de Bolivia, elegido en 1980 y disuelto por la dictadura militar. Según anunció, una de sus primeras acciones sería “renegociar la deuda externa de Bolivia, que asciende a más de 2.500 millones de dólares” (*El Comercio* 1982h3, A-1). Esto era un poco más de la mitad de la deuda pública del Ecuador.

Siles Zuazo también dijo que “Solo la presión del pueblo obligó a los militares entregar el poder y a disponer la transición pacífica de la dictadura a la democracia” (*El Comercio* 1982h3, A-1).

Ese mismo viernes se reanudaron los diálogos entre el gobierno en la persona del Ministro de Trabajo Vladimiro Álvarez Grau y los dirigentes del movimiento sindical. Así, “Al efecto, mantuvieron una extensa reunión de casi siete horas” (*El Comercio* 1982i3, A-3):

El ministro de Trabajo hizo conocer los estudios pormenorizados, preparados en base a la información del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, analizándose a profundidad las repercusiones que tendrían en la economía nacional la aplicación de cada una de estas alternativas planteadas, destacando el interés del gobierno por buscar mejoras salariales para el sector laboral, tomando como fundamento elementos técnicos que permitan su ejecución. Los trabajadores, presentaron los estudios y datos obtenidos al respecto, manifestando su buena disposición para discutir y analizar las diversas medidas que puedan adoptarse siempre y cuando estos favorezcan a las mayorías nacionales. El ministro señaló la vigencia de las comisiones salariales, que debe tender a evitar la inflación (*El Comercio* 1982i3, A-3).

Los dirigentes del FUT, en una delegación encabezada por Edgar Ponce, se reunieron también con el Ministro de Bienestar Social, Alfredo Mancero, “con el objetivo de iniciar conversaciones respecto a los planteamientos formulados por las centrales sindicales y otros organismos que integran el FUT, al gobierno, en lo referente a la problemática social y laboral del país” (*El Comercio* 1982i3, A-10). Mancero anunció que se había “conformado una comisión interministerial designada por el Presidente de la República, en la que participaban los titulares de Trabajo, Finanzas y Bienestar Social, con el objeto de analizar y buscar alternativas al pedido de elevación de sueldos y salarios” (*El Comercio* 1982i3, A-10).

El tema de los salarios para el Gobierno debía resolverse así:

El gobierno considera que la mejor manera de establecer una política salarial coherente, es a través de las comisiones interseccionales de salario mínimo pero que, indudablemente no es la única, pero si deseable, una vez que por intermedio de ellas se puede dar respuestas a los planteamientos. Otra opción sería el proyecto de compensación sala enviado por el presidente de la república a la Cámara Nacional de Representantes y sobre el cual todavía no hay respuesta (*El Comercio* 1982i3, A-10).

El primer grupo de medidas del paquete anunciado como dramático, las tomó la Junta Monetaria el día lunes 11 de octubre. El ente rector de la política monetaria, “resolvió reestructurar e incrementar el mecanismo del fondo financiero, reducir el encaje bancario,

restringir las importaciones y revalorizar el oro de la reserva monetaria” (El Comercio 1982m3, A-1). Sin rodeos admitieron que estas medidas tenían como objetivo “canalizar mayores recursos a los sectores de la producción y aliviar los problemas del sector financiero” (El Comercio 1982m3, A-1). No solo se amplió la cantidad de recursos disponibles por parte del estado para los bancos pues el fondo financiero creció “de diez mil millones de sucres, a quince mil setecientos millones” (El Comercio 1982m3, A-1). Sino que se diseñaron mecanismos para que éstos puedan acceder más rápidamente a dichos fondos “de manera que la banca y las compañías financieras puedan actuar de forma automática” (El Comercio 1982m3, A-1). Como si esto fuera poco, se ingeniaron otras novedosas formas de aumentar su rentabilidad como, por ejemplo:

Por otra parte, la junta asignó tres mil millones de sucres para un programa de participación del Banco Central en el mercado de valores, mediante compraventa de cédulas hipotecarias, bonos de prenda, bonos de garantía general y específica emitidos por bancos y compañías financieras privadas (El Comercio 1982m3, A-1).

Esto es, simplemente destinar dinero del Estado para comprarles productos a los bancos y financieras. Complementó este cóctel, la reducción del encaje bancario en un punto, es decir, los bancos podían tener menos dinero en caja para responder ante los retiros. Este conjunto de medidas pondría más de 9 mil millones de sucres a circular en el país a través del sector financiero (El Comercio 1982w3, A-1).

Para restringir un tanto la tradicional fuga de capitales que por la naturaleza ambiciosa de estos sectores se provocaría con estas medidas, la Junta Monetaria emitió un grupo de medidas en este sentido:

Considerando los problemas de balanza de pagos y urgencias de restringir y racionalizar las importaciones, incremento un sistema de depósitos previos; reestructuró las listas de importaciones y también impuso restricciones a la importación de bienes de capital, poniendo que se hagan con el ochenta por ciento de crédito de proveedores y a más de un año plazo (El Comercio 1982m3, A-1).

La revalorización del oro de la Reserva Monetaria, consiste en hacer un nuevo cálculo sobre la cantidad de oro que se tenía guardada con precios actualizados, para así poder emitir más dinero con ese mismo respaldo. Esto es —evidentemente— una especie de truco contable que hace a la larga que la moneda pierda precio real. Sobre estas medidas, el Presidente de la República, Osvaldo Hurtado, a su regreso de Bolivia, país en donde asistió a la ceremonia de

retorno a la democracia a manos de Hernán Siles Zuazo, dijo cínicamente: “Las nuevas medidas económicas afectarán a la clase alta y a los sectores populares, pero procurarán evitar el incremento del desempleo que se viene produciendo en los últimos meses por la crisis” (El Comercio 1982q3, A-3). Y continuó:

Según el Presidente, política del gobierno constitucional es distribuir el ingreso. Los tres últimos años, por ejemplo, dijo, hubo un mejoramiento del ingreso de los trabajadores cómo no se registró en años. Por otra parte, observó que las quejas sobre la actual situación, se producen en las clases media y alta. Esta última protesta, según Hurtado, porque le resulta más costoso ir a Miami. Según el Presidente, las quejas no quieren decir necesariamente que empeoraron las condiciones económicas y sociales. Además, opinó que los reclamos surgieron porque los ecuatorianos estamos acostumbrados a vivir con gran comodidad por el enorme progreso registrado en los últimos años (El Comercio 1982q3, A-3).

Anticipándose ante las reacciones sociales a las medidas, el Ministro de Gobierno, Galo García manifestó la necesidad de unión, sacrificio y comprensión de los ecuatorianos mientras insistía en la necesidad de que el Presidente se pueda reunir con todos los bloques parlamentarios (El Comercio 1982o3, A-2). Estas primeras medidas provocaron un ligero incremento en el precio del dólar (El Comercio 1982v3, A-1).

En el valioso folleto “Un pueblo en lucha...”, miembros del movimiento sindical resumen de esta manera este primer grupo de medidas: “El gobierno entrega la banca privada 20.000 millones de sucres, a pesar de que el país se encuentra fuertemente endeudado. Los partidos políticos de centro y de derecha aplauden las medidas” (CEDOC-CEDEP 1983, 29).

Al día siguiente el martes 12 de octubre, el Presidente de la República Osvaldo Hurtado, propuso a la legislatura una serie de medidas de carácter impositivo para financiar el presupuesto de 1983 que ascendía a 79.500 millones de sucres. La tesis principal de este conjunto de medidas centradas en el aumento y la reconfiguración del impuesto fue que el financiamiento del presupuesto del Estado “debe basarse fundamentalmente en el ahorro interno, procurando disminuir su dependencia de los préstamos externos” (El Comercio 1982t3, A-1).

Por otra parte, Hurtado consideró “inconveniente una reducción drástica del gasto público porque provocaría una caída también drástica del desarrollo, lo que aumentaría considerablemente el desempleo y se empobrecerían los sectores populares y medios con los conflictos sociales consiguientes” (*El Comercio* 1982t3, 1).

Hurtado respondía así a las constantes demandas de las élites que exigían reducir el gasto público, al tiempo que argüía no haber incrementado el presupuesto pues, según Hurtado:

si se deduce los 14.462 millones que corresponden al incremento en 1983 revelará el pago de la deuda pública, se encuentra que el gasto se mantiene prácticamente igual al del año 1981. Pero tal cifra también pone en evidencia el crecimiento peligrosamente progresivo que adquirido el pago de la deuda pública. En 1981 se destinó a ese rubro el 16 por ciento presupuesto, 1982 del 23 por ciento y en 1983 el 37 por ciento (sic) (*El Comercio* 1982t3, 1).

Complementaba su respuesta, diciendo que no es posible llevar a efecto esa política propuesta por *algunos dirigentes*, “ya que las tres cuartas partes de los empleados del gobierno, corresponden al profesorado los servicios de salud y de policía, los que, por razones obvias, deben reducirse sino incrementarse” (*El Comercio* 1982t3, A-1).

Para lograr financiar el presupuesto con lo que él denominó como ahorro interno, puso a consideración función legislativa, los siguientes proyectos de ley: ley de impuesto a la propiedad de vehículos con motor, reformatoria de las leyes de fomento industrial, turístico, pequeña industria y artesanía, pesca y desarrollo pesquero, forestal, minero, automotriz, parques industriales, de inversiones dirigidas; que pretendían reducir en un 50% los porcentajes de exoneración tributaria para esos sectores. Así también, promovió la ley reformatoria del sistema impositivo al consumo de cigarrillo y ley reformatoria del impuesto selectivo al consumo de cerveza. El presidente también pidió se consideren los proyectos de ley reformatoria a la ley sobre utilidades en la transferencia de dominio de inmuebles y ley de impuesto a los consumos selectivos, enviados el 16 de julio y 5 de agosto este año (*El Comercio* 1982t3, A-1). Con este grupo de leyes el gobierno aspiraba recaudar 6.200 millones (*El Comercio* 1982z3, A-1).

Hurtado considera que esas imposiciones son viables por cuanto afecta a los sectores más acomodados —dice— la revisión de los sistemas impositivos a los cigarrillos y a la cerveza, afecta a bienes no esenciales y de cuyo consumo puede abstenerse quienes no deseen pagar un mayor precio. Mientras que la reducción de los niveles de protección consagrados en las leyes de fomento, parece justa después de los años que han estado en vigencia y de los considerables beneficios que generaron. En tanto impuesto a la matriculación de vehículos particulares afecta a 1 de cada 1000 ecuatorianos esto es a los privilegiados (*El Comercio* 1982t3, A-1).

Cuando los ministros de Estado tuvieron que acercarse a la Cámara de Representantes para argumentar en favor de los proyectos mencionados, llevaron consigo tres proyectos de ley con los que pretendían reducir el costo social del conjunto de medidas que paulatinamente iban

anunciado. Un proyecto de incremento del salario mínimo que no cumplía con los requerimientos planteados por el FUT. Otro para elevar la compensación salarial y uno más para incrementar el subsidio para el transporte (El Comercio 1982y3, A-1).

Cómo contrapartida se ha propuesto elevar en 1.000 sucres el sueldo mensual de los trabajadores: 500 sucres como compensación por el incremento del costo de la vida para los trabajadores y servidores públicos con sueldos inferiores a 8000 sucres; y, 500 sucres de aumento en el sueldo para los trabajadores que perciben entre 1500 y 8000 sucres mensuales. Por último, se propone aumentar a 150 sucres la compensación del transporte de quienes ganan 1000 sucres por mes y fijar 2 años la estabilidad del trabajador en todo el país (El Comercio 1982z3, A-1).

La Función Legislativa reinició sus actividades con un propósito centrado en “buscar solución a la crisis que en el plano económico, político y social enfrenta el país” (El Comercio 1982u3, A-1) Su Presidente Rodolfo Baquerizo Nazur, después de hablar con un grupo de líderes políticos de su elección, determinó antojadizamente que los objetivos nacionales eran: “la utilización de los recursos hidráulicos, el impulso a la infraestructura agrícola, el desarrollo del sector industrial, la fijación de una política clara, tendiente a conseguir el ahorro de la energía y en el campo social, la reorientación de la educación” (El Comercio 1982u3, A-1). Todo esto sin que se vea un camino cierto para lograrlo.

El diputado León Febres Cordero que se consolidaba ya como el vocero indiscutible de los sectores de derecha rechazó la creación de más impuestos. Y de una manera demagógica que desconocía todos los argumentos del Presidente Hurtado, volvió a decir que la solución era reducir los gastos del Estado y el Estado en sí mismo (El Comercio 1982a4, A-2). Otros sectores de la cámara de representantes se pronunciaron en el mismo sentido (El Comercio 1982b4, A-3), al igual que los copiosos editoriales de diario El Comercio y la Revista Vistazo.

Ese mismo martes 12 de octubre, la Federación de Trabajadores de Pichincha marchó para protestar por la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Telmo Hidalgo, presidente de dicha organización, informó sobre una cifra inmensa de deuda del gobierno con dicha institución; así como la pretensión del gobierno de hacerse con sus fondos para superar la crisis (El Comercio 1982s3, B-8).

Un millón cien mil estudiantes regresaron a clases, el miércoles 13 de octubre de 1982 en la región sierra, lo cual ponía todavía más presión sobre las familias pobres, pues los gastos de

los insumos necesarios para el estudio en algunos casos superaban el 50% de aumento, según el diario El Comercio (1982p3, A-3).

Días vértigo pasaban uno tras otro en el Ecuador, el jueves 14 de octubre, El Comercio anunciaba ya como “Inminente la eliminación de los subsidios” (El Comercio 1982x3, A-1), fortísima medida que ponía nuevamente el peso de la crisis sobre las espaldas de los sectores populares. De acuerdo con los estudios técnicos del gobierno “por el subsidio al trigo el estado deja de percibir alrededor de 1400 millones de sucres y por los combustibles, 21 mil millones” (El Comercio 1982x3, A-1). Según cálculos del referido periódico “Con eliminación del subsidio al trigo, el precio del quintal de harina subirá de 253 sucres a unos 500 sucres, es decir alrededor del 100 por ciento” (El Comercio 1982x3, A-1). Reconocen también que la desaparición de estos subsidios, generará inflación “con eliminación del subsidio al trigo (considerando la elevación del precio del pan) y de los combustibles, la inflación anual que hoy está ubicada en el 16, 6 por ciento, subiría al 22, 6 por ciento” (El Comercio 1982x3, A-1).

El viernes 15 de octubre empezaron a regir los nuevos precios. La noche anterior Osvaldo Hurtado anunció el esquema final de las medidas, pidiendo nuevamente comprensión en cadena nacional de radio y televisión. Se debe reconocer que los cálculos, publicados el día anterior por El Comercio fallaron por muy poco:

A partir de hoy, dónde gasolina “Super” será vendida al consumidor a 38 sucres, el de gasolina “Extra” a 33 y el de “Corriente” a 28 sucres, en vez de los 20, 15 y 10 sucres, respectivamente, que eran los precios que regían hasta ayer para los tres tipos de gasolina. Los precios de los otros combustibles de uso en el país, kerocepe, diésel, turbo fuel y bunker, Al igual que el gas de consumo doméstico, fueron congelados. En cuanto al trigo, se informó que el Frente Económico en sesión de ayer, se pronunció por la eliminación del subsidio del grano importado, cuyo precio de referencia será, en adelante, 190 dólares la tonelada puesta en Guayaquil al mismo tiempo acordó elevar el precio del trigo nacional que en la próxima cosecha recibirá un precio de 400 sucres por quintal. Como consecuencia de esa medida, se ha fijado un precio final para la harina en 464 sucres el quintal en la sierra y en 461,33 el quintal en la costa toma el lugar de los 300 y 320 que regían hasta ayer (El Comercio 1982b4, A-1, comillas en el original).

El Presidente reconoció durante dicha cadena, como el peso de la crisis ha afectado a los sectores populares y habló del incremento de sueldos:

Dijo también que el gobierno, consciente de que la eliminación de los subsidios y la devaluación decretadas de algunos meses traen consigo consecuencias negativas para los sectores populares, ha enviado el parlamento un proyecto de aumento de salarios, pero dentro de las nuevas posibilidades de la economía nacional, “para que no vuelva a suceder lo que ya pasó en 1979, cuando se alzaron ilimitadamente los salarios”. La magnitud del problema económico ha alcanzado tal gravedad que el gobierno, por sí solo, no está en posibilidades de resolverlo y en la solución que hemos de darle se juega el futuro de la patria, enfatizó (El Comercio 1982b4, A-1).

Con este grupo de decisiones se completaban las famosas *medidas dramáticas*. Hurtado argumentó en su favor:

Es cierto que es malo que los trabajadores tengan salarios bajos, pero peor es que no tengan una ocupación como consecuencia ningún salario, advirtió, expresando que el otro remedio para enfrentar esta situación, es el endeudamiento que ha hecho el Estado en los últimos años. Por ese camino, ¿qué es lo que le voy a dejar como herencia al próximo Presidente de la República?, ¿que deba destinar la mitad del presupuesto o más, a pagar deuda pública? Eso no lo puedo hacer, por responsabilidad con la democracia y por responsabilidad con el país. ¿Qué es entonces lo que debo hacer?, algo que hasta ahora no se ha enfrentado: aumentar los ingresos, ¿y cómo? Sin duda mejorando las recaudaciones; pero poco puede recibirse por ese camino (El Comercio 1982b4, A-2).

Se hizo a sí mismo la pregunta de ¿A quiénes afectan estas leyes? y se respondió:

No a los pobres, como dicen los demagogos, no al pueblo ecuatoriano, afectan a los sectores sociales más acomodados, a quiénes se enriquecieron en los últimos años y hoy tienen la obligación de retribuir aquello que les dio el país, aquello que les dio el estado, aquello que les dio el pueblo ecuatoriano (El Comercio 1982b4, A-2).

Le respondió también directamente al FUT y su exigencia de un salario mínimo de 7.000 sucres:

No es posible, trabajadores ecuatorianos, dijo, un salario mínimo de siete mil sucres (s./ 7.000.00). eso significaría para el Estado, 11.000 millones de sucres al año, como gastos extraordinarios, aparte de los 3.000 millones de sucres que perderían las finanzas públicas como consecuencia del impuesto a la renta que se calcula sobre el salario mínimo más alto; aparte de la espiral inflacionaria que se desataría, anotó (El Comercio 1982b4, A-2).

Pero no solo eso, les incluyó en su llamado a la cooperación con la solución de la crisis en los siguientes términos: “A los dirigentes sindicales que no extremen sus demandas; los

trabajadores y a los estudiantes, que no se dejen manipular por ciertos politiqueros” (El Comercio 1982b4, A-2). Ante esto, el Presidente de la Legislatura dijo “Todos debemos participar en la solución del problema económica que vive el país” (El Comercio 1982d4, A-1).

El Comercio se unía, con un titular en su portada del viernes 15 de octubre, al coro de voces que reclamaban una solución desde el Estado al problema de la deuda externa privada (El Comercio 1982c4, A-1). Por su parte, León Roldós denunciaba que el alza de gasolina le dejaría ganancias al gobierno (El Comercio 1982i4, A-1). Hurtado, por su parte, se reunió a puerta cerrada con el alto mando de las fuerzas armadas el viernes 15 de octubre (El Comercio 1982p4, A-8) probablemente para asegurarse su respaldo frente al previsible estallido.

Chiriboga explica el efecto de las medidas en los sectores populares:

las dramáticas medidas se dirigieron a generar recursos a través de la suspensión de los subsidios (e incluso probablemente a gravar impositivamente) al trigo y a la gasolina. Estos dos productos subsidiaban, por así decirlo, el costo de la mano de obra de los sectores populares, que de una u otra forma permitía a los empresarios gozar de cierta paz laboral. Obviamente, que la decisión del gobierno tomó en cuenta a aquel sector del subsidio estatal que más rápidamente le daría dividendos y que cargaba la crisis a los sectores populares, los cuales vieron de un solo golpe acabarse su poder adquisitivo, que dos años antes habían logrado compensar con el alza general de sueldos y salarios en 1979. El gobierno no revisó la cadena de subsidios a los diversos sectores del capital, a los que más bien se les incrementó los fondos crediticios puestos a su disposición (Chiriboga 1982, 24).

El precio de los pasajes subió inmediatamente, “El Consejo Nacional de tránsito resolvió anoche incrementar el valor del pasaje para el transporte urbano en todo el país a 2,50 sucres para los días ordinarios y a 3,00 sucres para los días sábado, domingo y días feriados” (El Comercio 1982h4, A-1). De igual forma, “el organismo acordó elevar en un 20% las tarifas vigentes en el transporte cantonal e interprovincial” (El Comercio 1982h4, A-1). Los dirigentes de la Federación Nacional de Choferes rechazaron el incremento de los pasajes y anunciaron la paralización de actividades “ante la imposibilidad de seguir operando en forma rentable” (El Comercio 1982h4, A-1). El paro de actividades fue prácticamente espontáneo pues “Fueron escasas las unidades que cumplieron con este servicio, y los pocos propietarios que circularon en las áreas urbanas, intercantonales e interprovinciales optaron por elevar por su cuenta el precio de los pasajes” (El Comercio 1982g4, A-1). Este incremento alcanzó una

elevación del 50% en buena parte de los casos (El Comercio 1982h4, A-1). En Quito los choferes incluso bloquearon algunas calles e intentaron interrumpir la circulación de otros medios de transporte (El Comercio 1982q4, C-14).

Una medida *dramática* complementaria un tanto absurda, fue aquella en la que se ordenó que en adelante el pan sea vendido por kilos y ya no por unidades como se había hecho tradicionalmente:

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Vallejo, al justificar el retiro del subsidio de la harina de trigo, informó que el Frente Económico ha fijado en 23 sucres del kilo de pan, dando inicio una nueva fase de comercialización de este alimento de consumo diario. Señaló que el nuevo precio del pan por kilogramos regirá el país en cuánto se publique el decreto en el Registro Oficial (El Comercio 1982f4, A-1).

El jueves 14, al día siguiente de anunciadas las medidas, los estudiantes salieron a la calle en lo que El Comercio sancionó como un sin número de manifestaciones relámpago en Quito (El Comercio 1982g4, A-1). En Guayaquil, las protestas estallaron en varios puntos, alcanzando elevados niveles de violencia (El Comercio 1982j4, A-2). La reacción de los dirigentes del movimiento sindical también fue inmediata:

Edgar Ponce como presidente de la CTE, expresó: nosotros asumimos una actitud de frontal rechazo a las medidas del presidente Hurtado. Recibimos un escarnio y una burla. En definitiva, es una sumisión al FMI. Los costos sociales de las medidas no tienen precedentes y esto lo vamos a analizar en la IV Convención del FUT que se reunirá este sábado 16 (hoy), a fin de adoptar las resoluciones que sean necesarias. Ponce, dijo también: las declaraciones del presidente Hurtado se tornan graves y peligrosas cuándo pretende decir que las medidas se aplicarán a los sectores del nivel de capitales. ¿Cómo se puede afirmar esto sí analizamos solamente el alza de la gasolina, qué afecta más a las clases pobres? Esto mismo supone una escalada de precios de los otros artículos (El Comercio 1982k4, A-2).

Se ratificó en estas declaraciones que, para el movimiento sindical, el espacio para la resolución del conflicto se colocaba en la Asamblea Nacional y en la institucionalidad en general. “En definitiva, dijo creemos que la Cámara de Representantes impedirá que se pongan en la práctica estas medidas” (El Comercio 1982k4, A-2).

Pedro Estévez, dirigente de la Federación de Trabajadores de Pichincha (FTP) se pronunció así en El Comercio:

Es una tomadura de pelo, dice Estévez, el ofrecer la "limosna" 500 sucres de compensación mensual los trabajadores, lo que, en el fondo, es un chantaje. ¿Qué se puede hacer con 500 sucres frente a la monstruosa elevación de todos los artículos?, preguntó. La FTP, dijo Estévez, propondrá en la reunión del FUT, la declaración inmediata de la VI Huelga Nacional (El Comercio 1982k4, A-2, comillas en el original).

El presidente de la Federación de Trabajadores Libres del Guayas (FETLIG) Julio Chang Crespo, expresó que “las nuevas imposiciones tributarias que ha planteado el Ejecutivo al parlamento no tienen otro propósito que financiar el presupuesto general del estado a costa de la clase trabajadora y de los sectores marginados” (El Comercio 1982k4, A-2).

La fracción de la CEDOC, dirigida por David Tenesaca, manifestó también su inconformidad, sobre todo por la forma como el gobierno nacional procedió a tomar las últimas medidas económicas:

por cuánto ha prescindido de los criterios de los trabajadores organizados y no se ha tomado en cuenta las aspiraciones que reiteradamente han sido expuestas en las medidas vemos del afán del gobierno de solucionar su problema, pero hay muy poco interés en defender las economías de los hogares más pobres del Ecuador produciendo un deterioro de las mismas (El Comercio 1982k4, A-2).

La banca por su parte utilizó a sus voceros tradicionales para mostrar algún grado de satisfacción por las medidas adoptadas (El Comercio 1982l4, A-3). El Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil Jorge Bejarano Orrantia, dijo —por su parte— que las medidas les resultan sumamente alarmantes, pues “son tomadas en un momento de desastre de la economía nacional y que han sido dispuestas por falta de oportunidad” (El Comercio 1982l4, A-3). Reclamó, como era de esperarse, por no haber reducido el Estado y también porque no se aplicaron los 15 puntos que la Cámara había exigido por medio de más de una publicación en mayo de 1982, según Bejarano, con la aplicación de dichos puntos se habrían solucionado los problemas del país y no se habría llegado a este momento (El Comercio 1982l4, A-3). El presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Jacinto Vélez, manifestó que su sector era partidario de la eliminación paulatina de los subsidios. Así, dijo, “el proceso coincide con un ajuste de la economía” (El Comercio 1982m3, A-8). También apuntó que la forma en que se adoptó la decisión puede ocasionar un deterioro económico y social en el país (El Comercio 1982m3, A-8). El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura del Ecuador, Dr. Ricardo Izurieta Mora Bowen, dijo, en un buen resumen de la posición de varios sectores de la burguesía, que:

el país está afrontando en forma dramática el resultado del errático manejo de la economía del país que ha sido característica del poder público en los últimos años. Frente a una política de endeudamiento agresivo que caracterizó el gobierno militar y a decisiones económicas irresponsablemente tomadas como la duplicación improvisada de salarios mínimos, la disminución de la jornada de trabajo y la duplicación injustificada del presupuesto del Estado, no podía existir otra consecuencia que la crisis económica que estamos soportando (El Comercio 1982c5, A-2).

Esa misma semana salió a luz, la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) cercana al MPD y por tanto al PCMLE, “como alternativa de unidad nacida de los propios trabajadores” (El Comercio 1982e4, D-2). Nació cuestionando al FUT, “alejada y opuesta a los intereses de las potencias extranjeras y a su penetración en el movimiento obrero y campesino ecuatoriano” (El Comercio 1982e4, D-2). Así mismo “opuesta a los designios divisionistas de las burocracias sindicales, de los oportunistas y demás enemigos de la unidad de los trabajadores” (El Comercio 1982e4, D-2).

La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador señaló que, en respuesta a las medidas tomadas por el gobierno, a las que calificaron como *antipopulares*, se encontraba preparando para el lunes y martes 18 y 19 una jornada nacional de lucha contra el alto costo de la vida, recogiendo en llamado hecho en días pasados por la comisión coordinadora de la UGTE (El Comercio 1982p4, C-8). Así mismo, la Unión de Educadores de Pichincha y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador anunciaron jornadas de protesta contra el gobierno para los días lunes 18 y martes 19 de octubre. Mauricio Peña presidente de la FEUE nacional manifestó que “su lucha está junto al pueblo, Ya que no se puede aceptar la resignación del hambre que rodea a los más necesitados” (El Comercio 1982n4, D-2).

Los titulares de diario El Comercio del día domingo 17 de octubre de 1982 permiten situarse en el panorama que daría pie a la última y más importante escalada del conflicto. Entre la noticia sobre el posible rechazo a las medidas impositivas por parte de la Cámara, la baja de los ingresos por ventas de petróleo, el anuncio de que las clases “podrían suspenderse si se agravan los desórdenes” (El Comercio 1982s4, A-1) cualquiera puede armarse un cuadro de la crisis que atravesaba el país y prever la reacción que preparaban los sectores populares aglutinados en torno al FUT.

De hecho, el FUT alcanza la primera plana de El Comercio al anunciar el paro para el jueves 21 de octubre. La rapidez en la toma de la decisión garantizó —como ya se ha dicho— en parte su éxito en conjunto con el acumulado de prestigio y relaciones sociales que se venían

congregando desde la ejecución de la Quinta Huelga Nacional Unitaria. El FUT ya no era un actor político menor, sino que había reemplazado temporalmente a los mecanismos institucionales como posible actor de la resolución de conflicto.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) decretó paro general preventivo a nivel nacional desde la 06h00 del jueves, el mismo que se convertirá en indefinido si es que el gobierno no deroga el paquete de medidas que ha puesto en vigencia desde ayer. Después de 10 horas de deliberaciones, los dirigentes del FUT informaron que la huelga englobará a todos los trabajadores de incluyendo a los choferes con quiénes mantuvieron los contactos necesarios a fin de tomar una medida unitaria. Los choferes por su parte resolvieron retirar sus unidades del servicio urbano, intercantonal e interprovincial hasta adoptar una resolución definitiva, tras una reunión que sostendrán todos los dirigentes del país el día de mañana. Los dirigentes del FUT informaron además que el martes por la tarde harán una nueva marcha hasta el Palacio Legislativo con el objeto de que se convoque a un congreso extraordinario. Por otra parte, la cúpula del Frente Unitario resolvió visitar al Presidente de la República el martes próximo como a las 17h00, para plantearle la solicitud de derogatoria de las medidas económicas adoptadas últimamente (El Comercio 1982r4, A-1).

Una oleada de prestigio y respaldo le dio al FUT la rapidez y acierto de la medida, así como anunciar su carácter condicional. Es decir que, de no cumplirse sus condiciones, el FUT incrementaría el nivel de presión y lucha a través de una huelga indefinida. Los dos mensajes lograron concentrar las fuerzas y —desde ese momento— la atención de la sociedad entera en la medida del FUT: El Paro Nacional del Pueblo. La peor pesadilla para el gobierno había tomado forma, las dos fuerzas que habían paralizado al país semanas antes ahora resolvían actuar en unidad en pos de derogar las medidas.

El FUT en su Cuarta Convención Nacional resuelve, por primera vez en su historia con tan vertiginosa celeridad, dar continuidad a la lucha social, esto a través de la convocatoria a una nueva huelga nacional. Así, a menos de un mes de realizada la quinta huelga nacional, se convoca a una sexta. Nació lo que desde ese momento se denominó, por la importancia que le dieron las organizaciones: el Paro Nacional de Pueblo.

En el folleto de la CEDOC Socialista y el CEDEP se recogen los argumentos por los cuales le dieron su nombre a la sexta huelga nacional unitaria:

PARO: Porque esta es la forma de lucha que unificaba los distintos métodos de protesta del pueblo tal como la lucha callejera, los mítines relámpagos, el cierre de vías y carreteras, las asambleas populares como los paros nacionales y cantonales.

NACIONAL: Porque se trataba de una jornada de lucha en todo lo ancho y largo del país, y en contra de la intervención la lista a través del fondo monetario internacional.

DEL PUEBLO: Porque debía expresar la unidad de la clase trabajadora con otros sectores del pueblo: campesinos, los pobladores, los empleados, la mujer, la juventud, los estudiantes (CEDOC-CEDEP 1983, 28 / Mayúsculas en el original).

El FUT decidió prontamente la ejecución de una huelga, la sexta nacional, para el jueves 21 de Octubre, así como una serie de marchas y manifestaciones que se iniciaron el día lunes 18 (Chiriboga 1982, 31). Pero no sólo eso, se resolvió romper el diálogo con el gobierno de Hurtado (CEDOC-CEDEP 1983, 29), lo cual fue una conquista de las bases, frente a la posición negociadora de las dirigencias.

Además, es fundamental señalar que en esta convención se consensuó colectivamente la propuesta de la dirigencia del movimiento sindical, para encontrar una salida política para la crisis, que debía venir de la propia institucionalidad burguesa a través de la convocatoria de un Congreso Extraordinario. Es necesario, además tener en cuenta que, pese a que no estaban de manera explícita en su plataforma de lucha, seguían sonando en los sectores que se movilizaron demandas tales como la nacionalización de la banca o el comercio exterior, en anteriores jornadas de lucha había enarbolado el FUT (Chiriboga 1982, 31).

En esta importante Convención se presentará también una lectura global de la crisis por parte del movimiento sindical:

En esta IV Convención, la presidencia de turno presentó un análisis de la situación ofreciendo lo que sería, en adelante y, la visión del FUT sobre la crisis. En este informe se enfatizaba la dimensión internacional de la misma, señalando que esta se estaba descargando sobre los países dependientes. A su vez, “gobiernos títeres” en estos países transmitían la crisis al pueblo. En todo ese proceso el FMI jugaba un papel fundamental por lo que se acusaba al gobierno de someterse a los dictámenes de este organismo. De esta manera, se visualizaba Hurtado como representante del capital internacional y de las clases dominantes locales, calificando a su política económica, inequívocamente, de antipopular (León y Pérez Sáinz 1986, 115).

Los choferes, por su parte, también se esforzaban por acercar su discurso y posición hacia los sectores populares de tal manera que disminuya el evidente rechazo que sus demandas generaban en la población. Se cita a continuación un fragmento de una grandilocuente publicación pagada en El Comercio por parte del Sindicato Único de Choferes de Pichincha, dirigido a toda la ciudadanía y publicado el domingo 17 de octubre en El Comercio:

Una vez más la incuria, la abulia administrativa del gobierno constitucional y de la Democracia Popular se lanza al más inmisericorde estrangulamiento de la exhausta economía del pueblo del Ecuador; el Gobierno causante de la devaluación monetaria por ayuno de dirección y orientación de un sistema económico, estuvo y está obligado a dictar las medidas conducentes para la reestructuración de una política monetaria que imponga la mayor contribución a las oligarquías que han sido las únicas beneficiadas con la devaluación pero no, más bien, todas las cargas tributarias, todas las imposiciones están encaminadas a esquilmar a los trabajadores, vale decir a la masa popular; infame e infamante actitud de nuestros gobernantes pretende cumplir lo que dijimos ya como la fuerza del cambio reside en cambiar de la pobreza a la más despampanante miseria (Sindicato Único de Choferes de Pichincha 1982, 8).

Incluso personas claramente alineadas con la derecha como el editorialista de la Revista Vistazo y diario El Comercio, Alejandro Carrión cuestionaron las medidas y la carga que estas representaban para los sectores populares. En su editorial del domingo en El Comercio usó la siguiente metáfora: “No es verdad que el impuesto grave solamente a los ricos. El impuesto es como la lluvia y moja a todos, pero moja más a los que están contra el suelo” (Carrión 1982, 4). El editorial central de ese mismo periódico, pidiendo guardar el sentido de las proporciones y justo después de criticar al gobierno y a la Cámara, dedicó una crítica específica a los dirigentes del movimiento sindical:

Los líderes laborales se han alejado más fácilmente del justo medio, de lo proporcionado y aceptable para mantener el lema de intensificar la batalla de todos modos. Olvidan que para luchar por la justicia hay que comenzar por ser justos, justo para no exagerar reacciones de violencia y justos para no dejarse seducir por el plan de los agitadores (El Comercio 1982t4. A-4).

El Ministro de Gobierno respondía también las acusaciones de los sectores de izquierda sobre la supuesta sumisión del gobierno a los designios del FMI:

García Feraud rechazó el argumento de que el Presidente de la República para las últimas medidas de económicas ha cedido a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otras instituciones extranjeras, y afirmó, que “el Presidente de la República, frente a lo que puede acontecer de inmediato y para salvar la economía ecuatoriana ha adoptado decisiones soberanas en uso de la potestad legal que le confiere la ley. No importa al país lo que pueda pensar el FMI, pero sí importa lo que interesa al país para 1983 y 1984”, enfatizó (El Comercio 1982s4, A-8).

Las instituciones de gobierno, se esmeraban por cobrar deudas vencidas. Aquí un ejemplo: “Más de cien empresas comerciales que desde hace tres años no han cancelado más de 200 millones de sucres por concepto de garantías vencidas, están impedidas de tramitar la concesión de nuevas garantías aduaneras, lo dispuso la administración aduana de Guayaquil” (El Comercio 1982u4, A-7). Se ordenó al mismo tiempo que se inicien las acciones de coactivas en contra de los representantes de las empresas que no han cancelado con oportunidad las obligaciones vencidas (El Comercio 1982u4, A-7). Esto al tiempo que las emisiones del Banco Central se duplicaron:

Las designaciones autorizadas por la Junta Monetaria a través de las emisiones del Banco Central del Ecuador, prácticamente se han duplicado al pasar de 8 mil millones de sucres del pasado 21 de Septiembre, a 15.700 millones de sucres el 11 de octubre último, según datos oficiales.

Hasta el 21 de Septiembre, el monto total asignado a través del Banco Central fue de 8 mil millones de sucres. Ese día, la junta monetaria autorizó asignaciones por dos mil millones de sucres, que elevaron el total de 10 mil millones.

El pasado jueves, el organismo autorizó asignaciones que elevan el monto de 15.700 millones de sucres, a través del aumento de cupos de redescuento hacia los sectores Pro agrupados esta vez en cinco grandes fondos (El Comercio 1982v4, A-7).

7.6. La semana del Paro

El Paro se anunció y se puso en ejecución en claro desafío a un inestable ambiente de tregua política, la cual no puede leerse como un acto gratuito de parte de un grupo de representantes controlados casi completamente por intereses empresariales. La debilidad e incapacidad del gobierno de Hurtado hizo que buscarse permanentemente formas de calmar a todas las facciones de la burguesía sin aliarse permanentemente con ninguna. Así, es importante tener presente que, ante sus permanentes ofensivas de exigencias, Hurtado durante 1982:

Decretó dos devaluaciones de la moneda buscando favorecer al capital agroexportador, sin por ello abandonar a los industriales, a quienes se dio trato preferencial en el tipo de cambio para el pago de sus préstamos en dólares. Se estableció un sistema de subsidio a las exportaciones a través del mecanismo del FOPEX favoreciendo a la agroexportación. Para los banqueros se revisó favorablemente el encaje bancario al tiempo que se les entregaba la dirección de la Junta Monetaria y se alzó las tasas de interés. Los industriales no fueron abandonados, aun cuando su posición relativa se debilitó. El gobierno negoció en condiciones desfavorables un préstamo de 400 millones de dólares, para ser canalizados hacia el sector privado endeudado

en dólares, al tiempo que se aumentaron considerablemente los fondos financieros destinados a favorecer vía crédito al capital productivo. A los terratenientes y al capital agrario se destinó igualmente varios cientos de millones de sucres, fueron revisados algunos precios y se suspendió completamente la afectación de predios (Chiriboga 1982, 11).

Hay que ser claros, el conjunto de medidas aplicadas por el gobierno de Hurtado impactó duramente en las clases populares especialmente por la constante de alzas de precios. Con estos sectores, el gobierno ensayó una ambigua política que contenía negociaciones, concesiones mínimas y grandes dosis de represión.

Una parte del movimiento sindical explicaba la tregua de la siguiente manera:

Luego de la Quinta Huelga varios notables quisieron oportunistamente canalizar el descontento popular; impedir que el FUT se constituyera en el polo principal de la oposición al gobierno. Febres Cordero amenazó con destituir a Hurtado. Pero la burguesía espantada ante la fuerza de la movilización popular, pidió calma en sus filas. Partidos de derecha, de centro izquierda y los de gobierno, se unieron todos, junto a las fuerzas armadas ante el pueblo (CEDOC-CEDEP 1983, 41).

La crisis económica, en combinación con las medidas del gobierno, desató una escalada inflacionaria que según cálculos oficiales alcanzó en octubre de 1982 “el 20.2 o/o, y que seguramente crecerá el año con algo más del 23 o/o; es decir la tasa de inflación más alta desde 1972” (Chiriboga 1982, 24). Para tener una idea del impacto en los sectores populares se cita un cálculo recogido del periódico HOY por Manuel Chiriboga “una canasta alimenticia que en 1979 costaba 100 sucres, cuesta hoy en día 164 sucres” (1982, 24). Estas medidas, según Chiriboga, no podían solucionar la crisis económica, sino que —tal como sucedió— sirvieron para “llevar algo más de fondos a las escuálidas arcas fiscales y por lo tanto a los insaciables acreedores extranjeros” (Chiriboga 1982, 25).

A esto hay que agregar que la agresiva agenda de la derecha, que incluía ya desde aquel momento la exigencia de un salvataje amplio para sus negocios, requería —para legitimarse— “ampliar su base política y social, y se convirtió en tarea permanente de la prensa controlada por estos sectores (Canal 4, Programa Una Hora, El Tiempo, Vistazo, Televistazo), que buscaron crear una línea de opinión que presionase en este sentido” (Chiriboga 1982, 10-11).

Es interesante también observar que a partir del mes de octubre en diario El Comercio empiezan a aparecer con más frecuencia noticias sobre trabajadores, sindicatos y hasta

declaratorias de huelgas en diferentes lugares del país. Es así que el domingo 17 se publicó algo tan específico y particular como una noticia sobre el inicio de una medida de hecho por parte del Sindicato de Obreros de la Construcción del Consejo Provincial de Imbabura, filial de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores de la Construcción y la Madera:

Los 48 miembros del sindicato presentaron el pliego de peticiones hace poco más de un mes, ante el Inspector del Trabajo, César Pérez, reclamando que el Consejo Provincial garantice la estabilidad de los trabajadores, sobre quienes existe la amenaza de despido por parte del Prefecto Provincial, por motivos de carácter político; la suscripción del primer contrato colectivo; y el pago de los haberes que adeuda al consejo provincial quincenas de trabajo, décimo cuarto sueldo y bonificaciones (El Comercio 1982w4, C-14).

En la tercera página de la siguiente edición se informó que este grupo decidió tomarse el edificio del Consejo Provincial de dicha provincia. Las organizaciones miembros del FUTI, el Frente Unido de Trabajadores de Imbabura rechazaron esta medida de hecho, mientras que las organizaciones cercanas a la CEDOC-CLAT la apoyaron (El Comercio 1982d5, A-3).

En esa misma edición, apareció en su segunda página una cobertura sobre la asamblea extraordinaria de la Federación de Trabajadores de Pichincha (FTP) que se realizó el lunes 18, “con el objeto de programar su participación en los actos que llevará adelante el FUT, en rechazo a la política económica del régimen” (El Comercio 1982a5, A-2). Amplió la noticia el medio de comunicación de derechas, al punto de mencionar la hora y el lugar, la histórica Casa del Obrero, cerca de la Plaza del Teatro:

Según informó el presidente de la FTP, Telmo Hidalgo, los trabajadores de Pichincha y el Comité del Pueblo, en acatamiento de las resoluciones de la IV Convención Nacional del FUT, plegarán a la manifestación que se realizará mañana a partir de las 16 horas desde el parque de El Ejido hacia el centro de la ciudad como ahí al paro de actividades que se cumplirá el jueves desde las 06h00 (El Comercio 1982a5, A-2).

Así mismo, en otro artículo publicado en la misma página, recogen la crítica de la mencionada FTP sobre el “Irrisorio aumento de salarios” (El Comercio 1982b5, A-2), citando nuevamente a Telmo Hidalgo quien caracterizó a las medidas como una “tomadura de pelo” (El Comercio 1982b5, A-2) y anunció “que los trabajadores seguirán luchando por un salario mínimo vital de 7.000 sucres mensuales” (El Comercio 1982b5, A-2).

El Comercio también recogió las reacciones de las distintas tiendas políticas frente a las medidas económicas. Así, el Partido Socialcristiano se mantuvo en su simplista, pero efectiva

línea de exigir recortes, caracterizando esta medida “como única manera de estabilizar la situación económica, el reajuste y reducción del presupuesto general del Estado” (El Comercio 1982c5, A-2). El Partido Liberal Radical por su parte, radicalizó su oposición acercándose a la del PSC (El Comercio 1982c5, A-2).

Los cuestionamientos vinieron incluso de las propias filas de la Democracia Popular. El vocero de la filial de Manabí de dicha agrupación dijo que “le corresponde al Estado dar ejemplo en la práctica de la proclamada austeridad y pregunta que hasta cuándo la alta burocracia, cuando las funciones legislativo inicial tienen que moverse en vehículo de extranjeros de costos de importación” (El Comercio 1982c5, A-2). Reclamaron airados también por las medidas varios miembros del Frente Radical Alfarista (FRA) buscando un espacio de legitimidad política en la oposición. El editorial principal de ese día en El Comercio alertaba sobre los signos de beligerancia que se veían en la sociedad (El Comercio 1982g5, A-4).

Ante la escalada de la protesta popular, el Ministro de Educación Claudio Malo González no tuvo más remedio de que suspender las clases en Quito, “Sin embargo manifestó que cada director provincial de Educación estaba facultado para tomar medidas similares, según las circunstancias de cada ciudad” (El Comercio 1982i5, A-1).

Se anunció, en la portada del diario El Comercio, apenas con un día de anticipación, que el miércoles 20, una misión del Fondo Monetario Internacional arribaría a Quito para evaluar la posibilidad de entregarle al país un préstamo de emergencia (El Comercio 1982i5, A-1). Así mismo, se dijo —en la misma nota de prensa— que las negociaciones con los acreedores privados empezaron tal como estaba programadas el día lunes 18 de octubre en Nueva York y que “seguramente se prolongarán uno o dos días más” (El Comercio 1982i5, A-1). Otra sorpresa fue además que, de la negociación anunciada, en la mencionada reunión se intentaría “lograr un crédito de 1.224 millones destinado a cubrir las obligaciones crediticias” (El Comercio 1982i5, A-1).

Desapareció definitivamente el optimismo sobre estas negociaciones:

Fuentes allegadas del sector oficial reiteraron que las negociaciones son complicadas y que requieren del mayor tino. Muchos países atraviesan el mismo problema y todos ellos están negociando el refinanciamiento de su deuda. Por las dificultades en cuenta corriente, debido a la crisis mundial como los bancos son ahora más duros en sus condiciones de crédito y tratan de garantizar máximo sus capitales (El Comercio 1982i5, A-1).

Tanto el ejecutivo como el legislativo anunciaron que buscaban arduamente salidas a la crisis económica, la Cámara Nacional de Representantes anunció la creación de una comisión multipartidista “para que estudie la situación que sobre el país en el campo económico” (El Comercio 1982j5, A-1). Al tiempo que el Presidente de la Cámara descartó nuevamente la convocatoria a un Congreso Extraordinario que —como ya se ha dicho— era una de las exigencias de los dirigentes del movimiento sindical.

Llama la atención que, pese a los pomposos anuncios hechos por el titular de la Cámara y el supuesto compromiso de las tiendas políticas a encontrar una solución para la crisis, la Comisión de Presupuesto no sesionó el día lunes 18 “por la inasistencia de dos de sus vocales” (El Comercio 1982m5, A-2).

Mientras tanto, el gobierno del presidente Hurtado comenzó a tratar a nivel de gabinete medidas colaterales aplicables en el sector público para reforzar el plan de austeridad anunciado hace pocos días (El Comercio 1982j5, A-1). Medidas con poco efecto real fueron anunciadas:

se anunció la rebaja de los sueldos en un 20 por ciento del Presidente y Vicepresidente de la República como ministros de estado, subsecretarios y demás funcionarios gubernamentales que tienen un rango equivalente y cuyo sueldo sean superiores a treinta y un mil sucres mensuales (El Comercio 1982j5, A-1).

El debate sobre si el plenario de las Comisiones Legislativas podía o no aprobar los proyectos enviados por Hurtado seguía sumando voces a favor y en contra. Un jurista muy reputado, el doctor Miguel Macías Hurtado, ex-decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil y autor varios libros de derecho, opinó en diario El Comercio el día 19 de octubre, que “conforme al artículo 66 de la constitución política, la atribución de conocer aprobar y negar proyectos de ley corresponde al plenario de las comisiones legislativas esta facultad es amplia, se refiere a toda clase de leyes, agregó” (El Comercio 1982n5, A-2).

Llama la atención que la CEDOC-CLAT —en un largo e intrincado comunicado pagado en el mismo diario— se pronuncie el mismo sentido, es decir, en total oposición a la convocatoria a un Congreso Extraordinario:

No queremos más circo y nos oponemos radicalmente a la reunión de un Congreso Extraordinario. El plenario de las comisiones de la Cámara Nacional de Representantes tiene las atribuciones suficientes para que el legislativo tome las medidas y decisiones que son convenientes, especialmente el alza de sueldos y salarios y la creación de subsidios para los

sectores populares más pobres. El Congreso Extraordinario crearía mayor confusión, retardaría todo acuerdo sensato y multiplicaría los gastos por la demagogia de los legisladores oligarcas y reaccionarios que mayoritariamente integran la cámara (El Comercio 1982g, A-2).

Esta posición coincidía plenamente con la expuesta por el Presidente de la Cámara Nacional de Representantes. Quien dijo “el trabajo de esta comisión podría resultar mucho más beneficioso que el que pueda realizarse en un período extraordinario de sesiones de la cámara Porque existe el peligro de que los legisladores se dediquen únicamente a dar discursos” (CEDOC-CLAT 1982, 3).

El mencionado comunicado de la CEDOC, dirigida por Tenesaca y Barragán, partía por anunciar sus propias acciones de protesta, distintas —obviamente— a las del FUT, que empezarían un día antes del Paro del Pueblo. Además, en el documento, se exige rectificaciones para mejorar la democracia y no para regresar a ninguna forma de dictadura, esto lo dejan muy claro. Resulta relevante en este comunicado, su advertencia sobre un vigente proceso de deslegitimación de la democracia:

El mayor peso de la solución de los problemas fiscales lo ha cargado el Ejecutivo a los sectores populares. Esto además de injusto es tremendamente peligroso por la desesperación en que pueden caer los desocupados y subempleados. Es asimismo contraproducente para la consolidación de la democracia porque ésta le está costando al pueblo un ojo de la cara y va a perder todo interés por defenderla, por ello nuestra enérgica protesta, que la manifestaremos con movilizaciones en todo el país, para provocar, no el retorno a un pasado oprobioso, urgentes y profundas rectificaciones (CEDOC -CLAT 1982, 2).

Para “ayudar más, a los que más necesitan” (CEDOC -CLAT 1982, 2) sugirieron las siguientes medidas, mismas que deberían ser de aplicación inmediata:

- 5.1. Entrega de un subsidio mensual para las familias ecuatorianas que carecen de bienes y de ingresos.
- 5.2. Aumento de los sueldos y la compensación en el mismo porcentaje que ha subido el costo de la vida.
- 5.3. Extensión de la seguridad social a los trabajadores autónomos, aplicación de la atención médica a los familiares del afiliado al IESS y cumplimiento de las obligaciones que el estado tiene con el IESS.
- 5.4. Multiplicación de las boticas populares y puesta en marcha de la socialización de la medicina conforme manda la constitución

5.5. EDUCACIÓN

5.5.1. Entrega gratuita de los útiles escolares para los alumnos de las escuelas fiscales y particulares gratuitos.

5.5.2. Duplicar la asignación para el refrigerio escolar, especialmente para el que se da en los planteles rurales.

5.5.3. Establecimiento de un solo uniforme para todos los estudiantes del país. entrega gratuita de dos uniformes del año para los niños cuyos padres ganen hasta dos salarios mínimos al mes; uniforme anual para los escolares de hogares que ganen de dos a cuatro salarios mínimos.

5.5.4. Pago del transporte para los estudiantes de primaria y secundaria, cuyos padres ganen hasta dos salarios mínimos al mes para niños y jóvenes que tenga asistiendo a planteles Fiscales o particulares gratuitos.

5.6. Aumentar las asignaciones para la junta Nacional de Vivienda y señalar la obligación de que invierta exclusivamente en vivienda barata en programas con los sectores populares organizados.

5.7. Prestación gratuita de los servicios de asesoramiento jurídico y técnico a las organizaciones populares como en especial a las cooperativas de vivienda popular.

5.8. Eliminación de las ordenanzas demás disposiciones legales con las cuales los municipios traban el desarrollo de los programas de vivienda de las cooperativas (CEDOC -CLAT 1982, 2).

En una lectura general se puede concluir que sus estrategia y posición son muy parecidas a la del FUT. Es decir, encargarle al Estado la resolución del conflicto, en este caso a través de un grupo de subsidios focalizados. Además de facilitar el proceso de construcción de vivienda popular también a través de la agencia del Estado. Propusieron también que “se debe subsidiar la acción sindical” (CEDOC -CLAT 1982, 2). Finalmente se declararon dispuestos a conformar una unidad programática “y promover todas las acciones que se requieran, incluyendo las huelgas nacionales de duración determinada” (CEDOC -CLAT 1982, 2). Una nueva advertencia da cuenta de una sorprendente claridad política, la cual dejaría en evidencia la falsa disposición del FUT de llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias. La CEDOC-CLAT advierte que “una Huelga Nacional Indefinida tendría que terminar con la caída del gobierno o la derrota total del movimiento obrero, consecuencias que en ningún caso contribuirían a mejorar la situación, sino que acarrearían sacrificios aún mayores para el pueblo” (CEDOC-CLAT 1982, 2).

Ernesto Albán Gómez, Secretario Nacional de Información Pública, en declaraciones a la prensa, coincidió con esta indirecta acusación de golpismo en contra del movimiento sindical:

Sobre el anuncio de la huelga nacional anunciada para el próximo jueves por el Frente Unido de Trabajadores, si el gobierno no deroga las medidas económicas dictadas la semana pasada, el funcionario preguntó a dónde conduce una huelga general. ¿A dónde —dijo— conducen ciertos gritos callejeros que parecen estar incitando a la fuerza pública a un desconocimiento en rebelión ante el régimen? Y que además lleva a una desestabilización política.

Observó que una huelga general indefinida solo puede terminar ahí. Porque en definitiva significa echar al gobierno, una huelga general tiene esa finalidad. A eso se quiere llevar el país cómo es la pregunta que la opinión pública tiene que hacer a quienes están auspiciando esta medida (El Comercio 1982p5, A-3).

Otro comunicado que aparece en la tercera página del mismo diario, dos días antes del Paro, merece ser reseñado pues viene del famoso Ingeniero León Febres Cordero que buscaba, desde la extrema derecha, convertirse en el líder de la oposición. En dicho comunicado, vuelve con su reclamo: “No se ha hecho absolutamente nada por reducir el gasto del sector público. Origen de todos los problemas” (Febres Cordero 1982, 3). Después de señalar los detalles de la crisis que derivarían, según él, en “mayor inflación, alza del costo de la vida y presiones sobre el tipo de cambio” (Febres Cordero 1982, 3). Lo que a su vez derivaría en una “nueva devaluación y espiral incontenible” (Febres Cordero 1982, 3). Además de apuntar que los estímulos han hecho que los importadores “prefieran las importaciones a corto plazo” (Febres Cordero 1982, A-3), enfiló sin piedad contra Hurtado. Dijo que “Las horas de dolor que viven los ecuatorianos, la ruina del país, el hambre, la tremenda descomposición, es de absoluta responsabilidad del Presidente de la República” (Febres Cordero 1982, 3).

Albán Gómez también reaccionó por parte del Gobierno ante esta posición:

Al gobierno le preocupa las diversas reacciones que han surgido en el país y que sectores políticos, empresariales y gremiales no hayan mirado con la debida serenidad las medidas adoptadas por el régimen declaró el secretario de comunicación pública, Ernesto Albán Gómez. Dijo que lamentablemente muchos sectores políticos, que aspiran a gobernar los próximos años como no han tenido la suficiente cautela y prudencia para sus comentarios lo que realmente preocupa al gobierno (El Comercio 1982p5, 3).

Al parecer el gobierno se empezaba a tomar en serio la disposición de los choferes para entregar sus unidades, de tal manera que se pueda estatizar de inmediato el transporte público:

Sobre la declaratoria de la dirigencia de los choferes que podrían entregar inmediatamente las unidades al gobierno, Albán Gómez manifestó que también se examina esa posibilidad, y — agregó— si realmente se trata de una proposición seria de los transportistas, el gobierno tomará en cuenta para responder. Anotó que si los transportistas entregan sus unidades seguramente la entregarán con plazos y condiciones que el gobierno pueda responder. Se puede entender que la entrega lo hagan a determinados precios, y condiciones a su arbitrio. De vencerse para una negociación con el gobierno a la cual responderá de acuerdo con sus posibilidades económicas (El Comercio 1982p5, 3).

Cabe resaltar que a partir del viernes 14 los disturbios espontáneos fueron frecuentes en varias ciudades “principalmente en Guayaquil, Machala y Milagro” (El Comercio 1982x4, 1). Más allá de los carros apedreados en Guayaquil, los disturbios en Milagro del viernes 15 de octubre merecen un apartado propio, pues nacidos de una marcha de descontento al iniciar la tarde, terminaron a las 01h00 con la intervención de la Policía Nacional, después de haberse destruido 3 vehículos y saqueado un vagón de tren (El Comercio 1982h5, 10).

7.7. Lunes 18 de octubre

“La protesta fue general ayer en el país” (El Comercio 1982k5, 1) decía el principal titular de la portada de diario El Comercio del día martes 19 de octubre. El diario señaló que “Con inusitada violencia recrudecieron ayer las manifestaciones de condena las últimas decisiones económicas adoptadas por el gobierno” (El Comercio 1982k5, 1). En el balance general de lo ocurrido en el primer día de esta convulsionada semana concluyó que: “Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades fueron centros de desmanes que dejaron como saldo una persona fallecida, heridos, saqueos y asaltos a la propiedad privada, vehículos destruidos, edificios apedreados y más de una veintena de detenidos” (El Comercio 1982k5, 1). Es así que “Grupos de estudiantes, apoyados por choferes y trabajadores se lanzaron a las calles en las primeras horas laborales para obstruir la circulación” (El Comercio 1982k5, 1).

En Milagro, una mujer falleció cuando el vehículo en que viajaba sufrió un accidente al ser atacado por manifestantes; otras personas quedaron heridas en el percance. (...). En Guayaquil los desmanes degeneraron en asaltos a la propiedad privada y saqueos en varios sectores de la ciudad. La fuerza pública actuó con más drasticidad para controlar el orden. Más de veinte personas, entre estudiantes y desadaptados, fueron apresados en la tarde. Los profesores de afiliados a la UNE de guayas declararon un paro de 24 horas (El Comercio 1982k5, 1).

Desde el lunes 18, en Quito las manifestaciones ciudadanas fueron más constantes y sorprendidas, al punto que la policía tuvo que intervenir, usando la fuerza para “reestablecer la

circulación vehicular en un tramo de la Panamericana Sur” (El Comercio 1982e5, A-3). Las protestas espontáneas fueron inusualmente violentas, así lo recogía El Comercio:

Trabajadores, estudiantes y choferes se apoderaron ayer de la ciudad y protagonizaron serie de incidentes por las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno. La falta de transporte urbano agravó la situación y el malestar en la ciudadanía fue evidente. Las protestas culminaron en actos vandálicos que merecieron el unánime rechazo de la ciudadanía (*El Comercio* 1982r5, 7).

Para tener idea de la magnitud de la reacción social, es preciso anotar que el lunes 18 ocurrió la destrucción casi total de dos vehículos en el sector del parque La Alameda y otros dos carros destruidos en horas de la tarde, cerca de la Universidad Central. El Comercio atestigua que “dos vehículos fueron virados e incendiados. Afortunadamente no se produjeron desgracias personales” (El Comercio 1982r5, A-7). Los estudiantes prácticamente tomaron control de los sectores aledaños a la Universidad Central a lo que la Policía respondió, como ha sido su tradición, deteniendo a un pequeño grupo de personas para que puedan hacerse cargo de los costes económicos de los disturbios, según informó a El Comercio el intendente de Policía Hugo Salvador (El Comercio 1982r5, 7).

Alrededor de las 09h00 salieron a las calles grupos de estudiantes secundarios y universitarios y se dedicaron a obstruir las principales vías del centro de la ciudad. El tránsito vehicular se tornó caótico y fue imposible circular con normalidad. Los manifestantes se adueñaron de las avenidas 10 de Agosto, América y Guayaquil dedicándose a la quema de llantas y a colocar obstáculos. Los parques de la Alameda y del Ejido fueron los lugares de concentración de los manifestantes. Fue imposible circular a pie y peor en vehículo por esas zonas. Igual sucedió en San Blas. Los estudiantes del colegio Mejía y de la Universidad Central lanzaron piedras contra los vehículos particulares y contra las busetas que circulaban por la ciudad. Edificios públicos también fueron el blanco de la furia estudiantil. El edificio del Banco Central y el del Ministerio de Recursos sufrieron la rotura de sus ventanales (*El Comercio* 1982r5, 7).

En los sectores de la Panamericana Norte y Sur, la policía concentró su acción e impidió —por momentos— que los trabajadores de las fábricas aledañas puedan cerrar las vías, a pesar de sus varios intentos (*El Comercio* 1982r5, 7). De todas maneras, la acción espontánea de los manifestantes dejó casi sin capacidad de reacción a las fuerzas del orden. En el sur, varios fueron los puntos de protesta: en la avenida Napo fueron los estudiantes del Colegio Montúfar los que protagonizaron incidentes, en su intento de interrumpir la circulación vehicular. En el sector de El Camal fueron los choferes quienes lograron por largos momentos cerrar el tráfico

“la policía tuvo que emplearse a fondo a fin de dispersar a los manifestantes” (*El Comercio* 1982r5, 7). En la Magdalena “también se presentaron problemas y el tránsito vehicular estuvo cerrado. En la tarde los incidentes de aumentaron y prácticamente desapareció la circulación vehicular” (*El Comercio* 1982r5, 7).

Como ya se esperaba: “Los buses, colectivos y busetas no aparecieron por las calles y nuevamente la ciudadanía y los estudiantes tuvieron que afrontar un sin número de dificultades para cumplir sus labores cotidianas” (*El Comercio* 1982k5, 1). Según diario *El Comercio*, para el lunes 18 de octubre, “El operativo del Consejo Nacional de Tránsito no entró en vigencia y la ciudadanía tuvo serios problemas en la transportación” (*El Comercio* 1982r5, 7). Hasta ese momento el transporte de mercancías fue normal, lo que garantizaba, hasta cierto punto, el abastecimiento, pero las complicaciones en el transporte de los ciudadanos hacían que la demanda se redujera a pesar de las existencias de productos.

La trama de terrorismo, como posible explicación a la inusitada violencia de las protestas sociales, volvió a tomar fuerza cuando “Ernesto Albán Gómez, denunció la aparición de brotes terroristas y de violencia en el país llamando a la calma ciudadana” (*El Comercio* 1982o5, 3). Es así que el funcionario enseñando a la prensa el mecanismo de un explosivo, “informó que 2 personas intentaron volar un puente en la zona de Calderón lo que demuestra —dijo— como se está perdiendo el límite y la mesura de los reclamos” (*El Comercio* 1982o5, 3). Pese a esta grave acusación, según todos los reportes obtenidos, los heridos del primer día de la semana de protestas fueron todos civiles agredidos por las fuerzas del orden:

Carlos Vallejo, estudiante del colegio Mejía, Sergio Hugo Toapanta, jornalero, y un voluntario de la Cruz Roja recibieron los impactos de bombas lacrimógenas durante los incidentes callejeros. Los heridos fueron trasladados al hospital Eugenio espejo y tras recibir las curaciones se retiraron a sus domicilios (*El Comercio* 1982t5, 7).

La tónica general en las provincias del Ecuador, además de los mencionados problemas con el transporte, fue la especulación y el acaparamiento. En varias ciudades del país se reportaron incidentes y manifestaciones.

El mismo lunes 18, la Cámara de Representantes, a través de su Comisión Legislativa Permanente de Presupuesto conoció los proyectos de ley enviados por el ejecutivo (*El Comercio* 1982y4, 1). Aunque algunos diputados manifestaron públicamente sus dudas sobre “si el plenario legislativo puede crear impuestos” (*El Comercio* 1982z4, 2).

Una pequeña encuesta realizada por *El Comercio* al terminar el cuarto período ordinario de sesiones entre periodistas y comunicadores, mostró que los diputados mejor valorados por la población eran, Raúl Clemente Huerta, Rodrigo Borja, León Febres Cordero, Jaime Hurtado y Camilo Gallegos (*El Comercio* 1982f5, 3). Dos ellos alcanzarían la primera magistratura en años posteriores.

En Guayaquil, marcharon en horas de la mañana los maestros organizados en la UNE, en una marcha pacífica que acabó en una reunión con el Gobernador del Guayas a quien entregaron su pliego de peticiones (*El Comercio* 1982x5, 6). En Cuenca hubo suspensión total de las actividades en un clima permanente de intranquilidad, agravado con la presencia de manifestantes que llegaron incluso a atacar edificios públicos y a particulares, así como a vehículos (*El Comercio* 1982s5, 7). En Ibarra, los estudiantes del Colegio Teodoro Gómez de la Torre salieron en manifestación, lanzando gritos de protesta contra las últimas medidas del gobierno. El servicio de transporte intercantonal e interprovincial se cumplió a medias. En Santo Domingo numerosos estudiantes organizaron manifestaciones portando cartelones en los que se dejaba constancia de su protesta por las últimas medidas económicas dictadas por el gobierno. El transporte se paralizó cumpliéndose el servicio interprovincial también a medias (*El Comercio* 1982s5, 7).

En Machala, para evitar incidentes se suspendieron las clases lo que permitió una relativa tranquilidad. Lo mismo sucedió en Babahoyo, pero aún a pesar de la suspensión, por la noche los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo realizaron manifestaciones de protesta. En Tulcán, los especuladores se aprovecharon de la emergencia para elevar el costo de los víveres, y hasta de los textos escolares. Los transportistas aumentaron los pasajes a su gusto (*El Comercio* 1982s5, 7). En Esmeraldas, las organizaciones de pescadores decidieron —en protesta por la elevación del precio de los combustibles— “no salir a pescar hasta que no se derogue la medida” (*El Comercio* 1982x5, 6).

El Presidente de la República convocó a reunión de gabinete, y una vez terminada esta se reunió con los Ministros del Frente Político y del Frente Social, reuniones que se extendieron hasta las 23h20, del día lunes 18 de octubre (*El Comercio* 1982v5, 8). De esas reuniones se sacó como resolución —entre otras cosas— que nuevamente los vehículos del Estado harían el servicio de transporte público. El Ministro García Feraud, “Había llevado a la reunión la bomba que fue desmontada en el sector de Calderón y que contenía un reloj de mesa de fabricación soviética” (*El Comercio* 1982v5, A-8). Este mismo Ministro “desmintió ayer

enfáticamente que el régimen intentó un autogolpe y tal versión la estimó con una falsedad, una especulación que carece de asidero y que repugna el sentido democrático que caracteriza al actual gobierno y al Presidente de la República” (*El Comercio* 1982w5, 8).

El Ministro de Trabajo, Vladimiro Álvarez, preguntado sobre el pedido de los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores en el sentido de elevar a siete mil sucres del salario mínimo, manifestó que eso costaría 11 mil millones de sucres, dijo que sería apropiado que se le indicara de dónde obtener la contrapartida (*El Comercio* 1982v5, 8).

Uno de los temas que más le costó explicar, al gobierno de Hurtado, fue el tema del incremento del presupuesto general del Estado y, rueda de prensa tras rueda de prensa, nuevamente aclararon que el incremento era solo una apariencia ligada al incremento de los intereses de la deuda. Arguyeron que el presupuesto real había disminuido y lo que había aumentado eran los rubros por pagar por servicio de deuda. El Ministro de Finanzas encargado, dos días antes del paro intentaba nuevamente calmar los ánimos, con una nueva explicación mientras el Ministro titular rogaba en Nueva York por mejores condiciones y un nuevo préstamo:

Durante una conferencia de prensa el ministro encargado de Finanzas, Juan Carlos Guzmán, a tiempo de explicar el contenido de la proforma dijo que se trata de un presupuesto de absoluta austeridad, pues la mayor parte de su incremento se destina a cubrir el servicio de la deuda pública interna y externa tiene un aumento del 75.9% lo que sacrifica lo demás sectores que acusan pequeños incrementos o que incluso recibirán asignaciones que las que figuran en el presupuesto codificado de este año (*El Comercio* 1982z5, 1).

Hay que ser claros, esta era una presión real y asfixiante sobre una economía completamente dependiente al mercado global, es así que, según cálculos del ministro encargado para el año 1983, el pago de la deuda pública “absorberá el 37 por ciento del presupuesto fiscal, fijado en 79.500 millones de sucres. Sólo para cubrir intereses se necesitarán unos 15.450 millones” (*El Comercio* 1982z5, 1). Gracias a los arbitrarios cambios de intereses de los bancos norteamericanos, los intereses de dicha deuda habían aumentado en 6.567.7 millones de sucres (*El Comercio* 1982z5, 1). El desglose de la deuda hecho por el funcionario es sumamente decidor y merece ser transcrito: “intereses, deuda interna 4.039.7 millones; deuda externa 11.416.8 millones. Amortización: deuda interna 4.760.8 millones y deuda externa, 9.280.9 millones de sucres, lo que significa un total de todo el servicio de 29.500 millones” (*El Comercio* 1982z5, 1).

Con la misma intención de calmar los ánimos, el Ministro de Trabajo, Vladimiro Álvarez compareció ante la prensa para insistir en el hecho de que a través de los tres proyectos de leyes presentados por el gobierno a la Cámara de Representantes “los aumentos reales de los ingresos de los trabajadores del sector público y privado serán del orden de los mil ciento cincuenta sucres por mes” (*El Comercio* 1982a6, 1).

Ese mismo día se anunció que la reserva monetaria del país había vuelto a caer, esta vez en 251,5 millones de dólares (*El Comercio* 1982h6, A-6). Así mismo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) dio a conocer que “El índice de precios al consumidor para las familias de ingresos bajos y medios al mes de septiembre fue de 162.1 con agosto se registró un incremento del 1.6 por ciento” (*El Comercio* 1982i6, A-7).

7.8. El incidente en el Congreso

Varias manifestaciones masivas, algunos actos de violencia y la represión constante de la policía se registraron el martes 19 de octubre al continuar las protestas en contra del conjunto de medidas económicas decretadas por el gobierno de Osvaldo Hurtado. En la mayoría de ciudades, las manifestaciones efectuaron en horas de la tarde y en Quito se produjo un llamativo incidente cuando la anunciada marcha del FUT que había nacido en El Ejido, hizo su primera parada en la Cámara Nacional de Representantes. La gran cantidad de personas movilizadas hizo que la comisión general que se tenía prevista con el FUT para el final de la tarde, tenga que ser adelantada, lo que hizo —a su vez— que el Presidente de la Cámara, salga a recibir a los manifestantes que se habían apoderado del parqueadero central del edificio (*El Comercio* 1982k6, 11). Así, cuando este empezó a evadir los pedidos de los trabajadores sobre el llamado a un Congreso Extraordinario, estos le impidieron seguir hablando y le lanzaron toda clase de objetos. Todo esto mientras la comisión general intentaba continuar en los interiores del edificio, ante la respuesta de la Policía contra los trabajadores se generaron considerables desmanes en el sector (*El Comercio* 1982b6, 1).

La portada del miércoles 20 de abril del diario *El Comercio* recoge este incidente acompañado de una fascinante fotografía que muestra como José Chávez, Presidente de turno del FUT, junto a otros dirigentes sindicales, levantan las manos tratando de calmar a la masa enfurecida, la expresión de preocupación en la cara de Rodolfo Baquerizo es también impactante.

Cuando hablaban le interrumpieron primero con gritos y luego con silbos y arrojándole algunos objetos, lo que le obligó a terminar su intervención y retornar al interior del palacio

legislativo. Como consecuencia de estos incidentes, al parecer originados por la evasiva con que respondió el presidente de la Cámara, Rodolfo Baquerizo, al planteamiento hecho por la dirigencia del FUT para que convocara un congreso extraordinario a fin de que fueran derogadas las medidas económicas, resultaron seriamente averiados varios vehículos apostados en las inmediaciones del recinto legislativo, obligando a la acción de la escolta legislativa, que tuvo que recurrir a los gases lacrimógenos para dispersar a los furiosos manifestantes (*El Comercio* 1982f6, 3).

Ante la reacción de la policía, en su huida “los manifestantes apedrearon a todos los vehículos que se encontraban en el parqueadero del Congreso, volcaron dos automóviles y procedieron a quemar un jeep del Canal 8 de televisión” (*El Comercio* 1982k6, 11). Frente a este grave incidente y a la presión del movimiento sindical dirigida hacia la convocatoria de un congreso extraordinario que derogue las medidas económicas, Baquerizo dijo ante los medios que no cederá a la presión (*El Comercio* 1982c6, 1).

Una impresionante y accidentada marcha de trabajadores como estudiantes y organizaciones populares se cumplió ayer en protesta por las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno (...). Un vehículo incendiado, dos volcados varios parabrisas destruidos fue el saldo que dejó la movilización por las calles. La policía se empleó a fondo a fin de evitar que los manifestantes ingresaran a la Plaza de la independencia (*El Comercio* 1982k6, 11).

Como impresionante definirá *El Comercio* a la marcha del FUT del martes 19 de octubre, la cual después de los incidentes en el Congreso, culminó en la plaza de San Francisco. Pues — como se acaba de ver— su intento de llegar al Palacio de Gobierno fue impedido por acción represiva de la fuerza pública (*El Comercio* 1982f6, A-3). En San Francisco sus dirigentes fustigaron al gobierno y allí también se registraron disturbios y enfrentamientos con la policía (*El Comercio* 1982b6, A-1). En esta plaza Chávez, *profetizó* que la huelga general que estaba por producirse sería “la más combativa y masiva de los últimos tiempos” (*El Comercio* 1982k6, 11).

Los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores dispusieron que todos los participantes de la marcha se retiren en forma organizada hacia los diferentes sectores de la ciudad a fin de protagonizar mítines callejeros en protesta a la carestía de la vida. Un fuerte aguacero que cayó sobre el centro de la ciudad a las 19h00 disperso a los manifestantes en diferentes sectores. La policía no reportó detenidos ni heridos durante la marcha de los trabajadores (*El Comercio* 1982k6, A-11).

El folleto “Un pueblo en lucha...” describe esta marcha *preparatoria* de la siguiente manera:

El día 19 en varias ciudades del país se realizan manifestaciones de apoyo al Paro Nacional del Pueblo. En Quito 30.000 manifestantes se desplazan al Palacio Legislativo donde rechazan la actitud del presidente del Congreso, Baquerizo Nazur. Se quiere dispersar tres veces a la manifestación, pero demostrando una gran disciplina y valor, el pueblo quiteño mantiene la marcha hasta la plaza de San Francisco iluminada esa noche por antorchas (CEDOC-CEDEP 1983, 28).

Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz, fueron capaces de hacer una lectura adecuada sobre los objetivos de la movilización hacia la Cámara Nacional de Representantes (CNR). Y así mismo explicar con total acierto, el objetivo real del FUT: proponer el Congreso Extraordinario como la forma de solucionar la coyuntura política y económica:

El objetivo de esta convocatoria para el FUT, además de su finalidad explícita de que el congreso derogase las medidas adoptadas, era múltiple: incentivar el antagonismo entre ejecutivo y legislativo, desenmascarar a la CNR por su insensibilidad con las demandas de los trabajadores, echar contradicciones intraburguesas dentro del propio parlamento. En cualquier caso, es importante señalar que la celebración de un congreso extraordinario le hubiera supuesto al movimiento sindical su reconocimiento en la escena política reforzando sea si su posición. Aprovechemos para señalar que la (re) instauración de un régimen democrático supuso una redefinición del papel político del FUT debido al protagonismo que se otorgó a los partidos de la nueva escena representativa. En este sentido pensamos que, a través de la celebración de tal congreso, movimiento laboral buscaba recuperar la presencia política que tuvo durante el régimen autoritario (León y Pérez Sáinz 1986, 116).

7.9. Martes 19 de octubre

La intensidad de la protesta social solo siguió creciendo, por ello es pertinente mirar la descripción que Manuel Chiriboga hace sobre este innegable *in crescendo*:

Esto comenzó a demostrarse desde el mismo lunes 18 y particularmente el martes 19 de Octubre. Las manifestaciones y marchas se multiplicaron en todo el país, involucrando al conjunto de los sectores populares. Aún, los sectores laborales controlados por el gobierno como el grupo de Tenesaca-Barragán, debieron involucrarse en las medidas de protesta. El martes más 50.000 personas desfilaron en Quito y miles de trabajadores lo hicieron en todo el país. Las manifestaciones adquirieron niveles de violencia sorprendentes, demostrando la furia del pueblo contra el gobierno, llegando incluso a apedrearse al Congreso y varios edificios gubernamentales. En las manifestaciones participaron además de los trabajadores, los barrios populares, los choferes y a su manera los campesinos, que cortaron caminos, invadieron los pueblos, destruyeron construcciones e instalaciones del gobierno (Chiriboga 1982, 31).

Ante esta manifestación popular que se iba volviendo incontrolable, el Gobierno empezó a bajar desde el martes 19 la posibilidad de decretar estado de emergencia, tal como se lo posibilitaba la Constitución vigente en ese momento. El secretario de información, Albán Gómez, advirtió se lo decretaría “si el país entra a un momento de conmoción interna a raíz de los incidentes registrados por la reciente alza de los precios” (*El Comercio* 1982y5, 1). La preocupación del gobierno era palpable en dicha declaración pues, mencionando la huelga convocada por el FUT, que para ese momento había recabado ya el apoyo de los más importantes actores sociales del país, anunció que “las fuerzas armadas reiteraron su respaldo al gobierno constitucional del Dr. Osvaldo Hurtado” (*El Comercio* 1982y5, 1).

De hecho, Albán Gómez dijo “que el gobierno tiene conocimiento de qué en ciertos ámbitos de la dirigencia sindical existe el propósito de derrocar al gobierno” (*El Comercio* 1982y5, 1). Ante la presión de los periodistas, exigiendo claridad “Acusó de este hecho a la dirigencia sindical agrupada en el Frente Unitario de Trabajadores” (*El Comercio* 1982y5, 1).

En Guayaquil hubo también una nutrida manifestación organizada por las centrales sindicales, pero no se registraron incidentes además de un bus apedreado (*El Comercio* 198216, 14). Ante la especulación y el acaparamiento, fueron las autoridades las que distribuyeron los víveres provenientes de la sierra, a pequeños comerciantes. Así mismo se realizaron operativos de control por parte de la intendencia, bajo amenaza de cárcel y multa en contra de quienes estuvieran ocultando los productos (*El Comercio* 1982j6, 10). En horas de la tarde un grupo de personas se dedicaron a saquear locales comerciales en el centro de la ciudad portuaria (*El Comercio* 198216, 14).

En Babahoyo fue atacada la casa del vicepresidente de la cámara, Gary Esparza (*El Comercio* 1982b6, A-1). En esta misma ciudad, la jefatura de Salud fue asaltada por maleantes que se llevaron especies valoradas en siete millones de sucres, además se apedrearon los edificios del Registro Civil, de la Gobernación y la Corte Superior (*El Comercio* 1982b6, 13). En la misma provincia de Los Ríos en el cantón Ventanas “se conoció que grupos de enardecidos manifestantes atacaron a edificios públicos y privados e incendiaron una motocicleta de la Policía” (*El Comercio* 198216, 14).

En Ibarra un grupo atacó un vagón y se apoderó de provisiones (*El Comercio* 1982b6, A-1), “ni la presencia de los conscriptos en la Plaza de Ibarra, de guardia en el sector impidió los desmanes” (*El Comercio* 198216, A-14). En Latacunga numerosos manifestantes bloquearon la carretera Panamericana y prácticamente se adueñaron de la ciudad pasadas las 17h00, la

dotación policial fue impotente para detener los desmanes (*El Comercio* 1982b6, 1). Así mismo en Machala, “Durante tres horas y media estudiantes universitarios enfrentaron a la policía en el sector céntrico de la ciudad” (*El Comercio* 1982s7, 9).

En Cuenca fueron apedreados “ventanales en la Gobernación, Dirección de Educación, Delegación de Finanzas, City Bank y otros locales privados” (*El Comercio* 1982s7, 9). La suspensión de clases fue total en esta ciudad “salvo en la Universidad de Cuenca en donde las labores docentes se desarrollan a medias, en virtud de las asambleas que convoca en la mañana y en la tarde la FEUE filial de Cuenca” (*El Comercio* 1982s7, 9). En Esmeraldas no se registraron manifestaciones callejeras, pero en casi la totalidad de organizaciones populares, laborales, políticas y clasistas se realizaron asambleas para analizar el impacto de las últimas medidas, condenar su vigencia y reclamar su derogatoria (*El Comercio* 1982m6, 14). Las asambleas populares en todo su esplendor.

Finalmente, el martes 19 de octubre, se conformó la comisión multipartidista encargada de estudiar “las medidas de económica expedidas últimamente por el gobierno” (*El Comercio* 1982d6, 2). Que fue “conformada por dos representantes, titular y suplente de cada uno de los bloques parlamentarios” (*El Comercio* 1982d6, 2). Buscando otro espacio para figurar, Febres Cordero se sumó a los sectores que exigían la convocatoria a un congreso extraordinario mediante telegramas dirigidos al presidente de la Cámara Nacional de Representantes, Rodolfo Baquerizo. Febres Cordero “pidió que se convoque a congreso extraordinario para estudiar y analizar el presupuesto del estado y de manera especial el gasto público. También pidió informes sobre los estudios para la elevación de los nuevos precios de la gasolina” (*El Comercio* 1982f6-1, 3).

El gobierno, por su parte, para el martes anunciaba, esta vez, *medidas draconianas* en contra de los especuladores, así como su disposición a recibir los buses que los transportistas quieran entregar, “para transferirlos a su vez a quienes estén dispuestos a hacerse cargo del transporte público” (*El Comercio* 1982e6, A-2). Ernesto Albán Gómez volvió el martes a dar la cara ante los medios de comunicación para cuestionar la alianza entre el FUT y los choferes; “Ahora, dijo, el FUT está apoyando el alza de las tarifas a los transportistas. ¿O es que los transportistas han renunciado a su alza de tarifas para unirse al FUT? (*El Comercio* 1982y5, 12).

En un comunicado pagado, eso sí, mucho más claro que el de la CEDOC-CLAT, Mesías Tatamuez a nombre de la FENOC, anuncia la participación de esta organización en el Paro

Nacional del Pueblo. El comunicado señalaba que las medidas tomadas por Hurtado son “un asalto a las pobres economías de los más humildes ecuatorianos” (FENOC 1982, 2). Medidas que “son ordenadas por los banqueros gringos” (FENOC 1982, 2) del FMI, mediante las cuales “Hurtado ha entregado al país a las grandes empresas imperialistas” (FENOC 1982, 2). La FENOC hace un breve análisis de la situación en el campo:

Estás medidas agravan aún más la terrible situación en la que estamos viviendo los campesinos ecuatorianos. La expedición del Reglamento Agrario no solo que es anticonstitucional, sino que termina con la Reforma Agraria, dejando sin tierra a millares de campesinos e indígenas pobres del país. La política estatal de entregar grandes créditos y todo tipo de protección a los grandes terratenientes arruinado a los campesinos que carecemos de vías de comunicación, de asistencia técnica, de créditos del Banco Nacional de Fomento, no existe un control de la venta de insumos favoreciendo una vez más a los especuladores de las casas distribuidoras. La política estatal de comercialización beneficia a los grandes comerciantes que obtienen enormes ganancias en tanto pagan precio de hambre a los campesinos productores. Han entregado todas las instituciones estatales a los terratenientes (FENOC 1982, 2).

Para después exigir el inmediato cumplimiento de los siguientes puntos:

- 1.- Derogatoria del alza de la gasolina, de la harina y todo el paquete de medidas económicas.
- 2.- Derogatoria del reglamento agrario por ser anticonstitucional.
- 3.- Cumplimiento del decreto 1159 que da por terminado el contrato del gobierno con el Instituto Lingüístico de Cerano. Y su expulsión definitiva.
- 4.- Rechazamos la entrega del país al Fondo Monetario Internacional, y exigimos la destitución de los miembros del Frente Económico y del Presidente de la Junta Monetaria por haber tomado tales medidas.
- 5.- Exigimos el inmediato cumplimiento de la plataforma de lucha de los nueve puntos del FUT (FENOC 1982, 2).

Avanza el comunicado diciendo que “El gobierno para superar su crisis pudo haber tomado otras medidas nacionalizando el petróleo, estatizando la banca y las casas de cambio, prohibiendo la importación de artículos de lujo incluido vehículos” (FENOC 1982, 2). Invita la FENOC a participar del Paro del Pueblo a todos los sectores sociales, enumerándolos, lo que permite ver sus consideraciones sobre como estaban constituidos los sectores populares cuando llaman a: “Estudiantes, maestros, amas de casa, obreros, campesinos, empleados, personas y organizaciones democráticas se unan al PARO NACIONAL para frenar la política

antipopular del gobierno y contra el alza de los pasajes” (FENOC 1982, 2). Finaliza emotivamente el comunicado en la siguiente frase “VIVA EL PARO NACIONAL DEL PUEBLO” (FENOC 1982, 2).

En los editoriales de autor de *El Comercio*, Santiago Jervis dijo sobre la decisión de eliminar el subsidio a la gasolina que sería “inadmisible que sea revocada y ni siquiera reajustada” (Jervis 1982, 4) poniéndose del todo a favor del Gobierno. Teodoro Crespo, por su parte, sugería un conjunto de siete medidas que empezaban con que en un plazo máximo de tres meses se redujera en un 60% el personal de todas las instituciones del estado. Seguía con que se suspendan todos los ascensos para militares, policías y funcionarios del servicio público. Además de que castigue con pena de muerte la compra de armamento y las importaciones de “artículos extranjeros suntuarios y competitivos con los de manufactura nacional” (Crespo 1982, 5). Remataba, este editorialista, sugiriendo colonizaciones dirigidas por el ejército en el Oriente para cuidar la soberanía nacional, la prohibición de compra de autos de marca Mercedes Benz para la administración pública (Crespo 1982, A-5) entre otras insensatas medidas.

Carlos Oquendo Cepeda, Rector de la Universidad Central a nombre de dicha institución y del Comité Ecuatoriano de la Paz, publica un comunicado pagado en *El Comercio* en el que en 20 puntos también realiza una serie de demandas al Presidente de la República. En dicho comunicado se incorporan varios de los pedidos del FUT como la estatización del transporte y otros tan antiguos como el traspaso de la banca al sector público. A lo que se suma el cese de los pagos por las deudas contraídas por la reciente guerra, dice que “deje que embarguen los cañones y más armamento” (Oquendo 1982, 10). Así también propone la prohibición de importación de licores, cigarrillos, joyas y lujos (Oquendo 1982, 10).

Así mismo el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador en pleno publicaba su resolución que denunciaba “ante la conciencia pública que las medidas propuestas por el gobierno constituyen una provocación para el estallido imprevisibles conflictos sociales” (*El Comercio* 1982k7, 10). Por cual solicitaron “la derogatoria inmediata del decreto que eleva el precio de la gasolina” (*El Comercio* 1982k7, 10). El comunicado finaliza haciendo un llamado a la comunidad universitaria a “que permanezca unida para rechazar y luchar contra los despropósitos del actual gobierno.” (*El Comercio* 1982k7, 10). Terminan extrañamente alineándose con una tesis de la derecha cuando dicen que “el verdadero origen de la crisis: el gasto sobredimensionado del sector público” (*El Comercio* 1982k7, 10).

Los principales dirigentes de la transportación exponían también sus justificaciones para la paralización; en resumen: el encarecimiento de los repuestos producido por la devaluación, así como el incremento de la gasolina eran razones suficientes para “no poder continuar laborando” (Herrera et al. 1982, 10).

La Izquierda Democrática también contrató ese día la publicación de un comunicado, en el que después de recalcar que en varias ocasiones lo habían advertido dicen que además habían ofrecido las correspondientes soluciones para terminar tratando de congraciarse con los trabajadores, diciendo:

Pero ya es tarde para lamentaciones. Hay que mirar el futuro. Desde luego, esto no significa que los culpables quedan exonerados del juzgamiento popular. Pero lo que hoy interesa es que el sacrificio para conjurar la crisis sea proporcional y que recaiga sobre los sectores sociales que, en la época de las vacas gordas petroleras, se llevaron los excedentes. No cabe que sean los trabajadores, que sufren el impacto de la carestía de la vida, los que asuman los mayores sacrificios. De ahí que demandamos una revisión de las medidas para hacer una justa distribución de sacrificios (Izquierda Democrática 1982, 11).

7.10. Miércoles 20 de octubre, un día antes del Paro

El mismo día que una misión del FMI inició sus labores en el país, el Presidente Hurtado informó en cadena nacional de radio y televisión, luego de tres días de incidentes y horas antes del inicio del Paro, que se había decretado Estado de Emergencia Nacional “y de inmediato se estableció el toque de queda desde la diez de la noche hasta las seis de la mañana” (El Comercio 1982n6, A-1). La declaratoria que suspendió varias de las garantías democráticas, fue formulada bajo la consideración de que “el país vive desde el 18 de octubre un estado de conmoción interna que afecta a la paz ciudadana, la estabilidad del régimen constitucional y la permanencia del sistema democrático” (El Comercio 1982n6, 1). Esto además de “en las horas se han multiplicado atentados contra la seguridad de las personas y el derecho a la propiedad” (El Comercio 1982n6, 1). Hizo también un llamado a abandonar la violencia:

Quiero rogarles —dijo— que desarmemos las conciencias y los puños, qué ha llegado la hora de que nos encontremos, es necesario hacer en una sociedad verdaderamente democrática”.

Preguntó si “es que queremos repetir en nuestra patria lo que ha pasado en otros países del continente” y añadió: “¿Qué va a ser con el país y a los graves problemas sociales se suman conflictos sociales, violencia y terrorismo?” (El Comercio 1982n6, 1).

Hurtado, en el marco de una nueva justificación de sus medidas, se dirigió directamente hacia los trabajadores, hablando en primera persona:

Estoy muy consciente —dijo— de sus efectos, comparto las preocupaciones de amplios sectores sociales. Es explicable el malestar de muchos trabajadores, pero también quiero decirles que no tenía otra salida el Presidente de la República; cualquiera otro que hubiera estado en mi lugar, con la responsabilidad que debe tener un gobernante con la patria con su pueblo, habría tomado similares decisiones, subrayó (*El Comercio* 1982r6, 3).

En su corta intervención, Hurtado volvió a decir que “la crisis económica es el peor enemigo de la democracia” (*El Comercio* 1982n6, A-1) y aceptó finalmente que “las medidas, especialmente la eliminación de los subsidios, ocasiona perjuicios a amplios sectores populares” (*El Comercio* 1982n6, A-1). Con temor de la reacción popular dijo:

Pero también es verdad que envié a la cámara de representantes proyectos de ley orientados a crear gravámenes que particularmente están dirigidos, no al pueblo ecuatoriano que no tiene un automóvil, no al pueblo ecuatoriano que no tiene ningún bien de fortuna, no al pueblo ecuatoriano que solo vive de su sueldo, sino aquellos que tienen la riqueza suficiente y que deben compartirla con toda la sociedad ecuatoriana. Son entonces medidas que exigen a cada cual lo que pueden y deben dar en este momento crítico de la vida nacional en realidad les piden una contribución a todos, porque el momento es tan complejo. Que no hay un solo habitante de nuestra patria que pueda sentirse sin obligación a contribuir a la solución del problema económico (*El Comercio* 1982r6, A-3).

Procedió entonces a reclamar por la cantidad de huelgas que se han realizado en su gobierno: “De las cinco huelgas nacionales sólo dos se han realizado durante la década de gobiernos dictatoriales, las otras tres en mi gobierno, que apenas tiene 17 meses” (*El Comercio* 1982r6, A-3). Acusó al movimiento sindical de haber roto del diálogo y se preguntó: “¿Es qué quieren convertir al Ecuador, como ya se dice en el caso de algunas manifestaciones, quieren convertirla en país de América Latina con una guerra fratricida, de hermanos? ¿se Corea: Nicaragua, El Salvador y ahora Ecuador!” (*El Comercio* 1982r6, A-3).

Las disposiciones que contenía dicha declaratoria de Estado de Emergencia, además del toque de queda, eran las siguientes: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debían garantizar la libre circulación de personas y vehículos (*El Comercio* 1982n6, A-1). Es decir, como dijo Manuel Chiriboga, se permitía la “intervención de las Fuerzas Armadas en la represión” (Chiriboga 1982, 31); se prohibieron manifestaciones y concentraciones en calles o plazas públicas (*El Comercio* 1982n6, A-1); prohibición total para el porte armas, que dejaba

suspendidas todas las licencias y permisos concedidos (El Comercio 1982n6, A-1). Y “Todos los servicios públicos quedan sujetos al control militar” (El Comercio 1982n6, A-1); se ratificaba oficialmente la suspensión de las clases. Así “El Gobierno, con la intervención de la Fuerza Pública, garantiza el libre desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales” (El Comercio 1982n6, A-1). Tal como ocurrió durante el paro de los choferes, se convocaron a vehículos apropiados para la transportación urbana a inscribirse en el Consejo Nacional de Tránsito (El Comercio 1982f7, A-10).

Justo antes del perturbador anuncio, el Ministro de Gobierno Galo García Feraud seguiría denunciando, como era ya su costumbre el carácter *golpista* del movimiento popular y “la intervención de terroristas de diverso tipo” (Chiriboga 1982, 31).

En su editorial del día anterior al Paro del Pueblo, El Comercio advertía que a pretexto “de una comprensible protesta popular, se han producido en los últimos días injustificables actos de vandalismo, inclusive de terrorismo, que podrían ser el comienzo de una escalada de violencia que liquidar y a los valores fundamentales de la vida nacional” (El Comercio 1982g6, A-4).

Hay intentos muy claro día inequívocos por desatar la violencia en el Ecuador. Son los extremismos, antagónicos en sus objetivos, pero idénticos en sus procedimientos los que se encuentran detrás de agitadores y terroristas. La promoción del caos ha sido como hasta ahora como un esfuerzo discontinuo y de insignificante repercusión social. Pero cuando los actos vandálicos se multiplican y se llega a, inclusive, a manifestaciones directas de terrorismo — como dentro de voladura de un puente— hay que empezar a preocuparse de verdad, puedes notorio que el peligro se ha vuelto inminente. (El Comercio 1982g6, A-4).

Durante el día miércoles la falta de transporte público fue total (El Comercio 1982i7, A-10).

Trabajadores de todo el país se preparaban para el Paro:

En Guayaquil, dirigentes de las centrales obreras que pertenecen al frente unitario de trabajadores, dieron a conocer que por lo menos 50.000 obreros de la provincia del Guayas paralizarán hoy sus labores en acatamiento a la huelga decretada a nivel nacional. Señalaron que entre los trabajadores afiliados de las centrales constan trabajadores azucareros, de los ferrocarriles, de los 20 sindicatos de trabajadores municipales comprende aseo de calles, parques, etc. (El Comercio 1982o6, A-1).

En Portoviejo solo “Con presencia del Ejército tornó la calma” (El Comercio 1982p6, A-2):

En la tarde, al término de la manifestación del FUT, se produjeron hechos violentos. Numerosos edificios públicos y privados fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes y algunas oficinas estatales fueron saqueadas por antisociales quienes aprovecharon la ausencia inicial de la policía.

Fue notoria la presencia de agitadores y elementos extraños. En previsión de los ataques, los vehículos fueron retirados de la circulación.

El clima de violencia se mantenía cuando dotaciones del ejército aparecieron por las calles de Portoviejo con el fin de restablecer el orden, sin embargo, se informó que en la periferia las manifestaciones continuaban (El Comercio 1982p6, A-2).

La tarde del miércoles 20 de octubre, la fracción de la CEDOC dirigida por Tenesaca y Barragán, conocida para la época como CEDOC-CLAT realizó “una manifestación de protesta, exigiendo un cambio enérgico de la política económica del gobierno de Osvaldo Hurtado” (El Comercio 1982v6, A-8). El encuentro inició en la Plaza de Santo Domingo. Acorde a lo dicho en su comunicado, David Tenesaca, Presidente de dicha central dijo “que el mayor peso de la solución de los problemas fiscales lo ha cargado el Ejecutivo a los sectores populares. Esto, a más de injusto, es tremendamente peligroso por la desesperación en que pueden caer los desocupados y subempleados” (El Comercio 1982v6, A-8).

Ese mismo día, un nutrido grupo de estudiantes universitarios se trasladaron al aeropuerto Mariscal Sucre para esperar la llegada de los representantes del FMI que supuestamente llegaban ese día al país invitados por el Gobierno (El Comercio 1982d7, A-10). La misión había llegado de manera secreta el día anterior (El Comercio 1982j7, A-11).

Osvaldo Hurtado presidió ese día la graduación de 34 oficiales de Estado Mayor del ejército (El Comercio 1982j7, A-10). Demostrando así el respaldo de ese sector del Estado hacia el Gobierno Nacional.

A 60 ascendían —para el miércoles 20— la cantidad de detenidos en la ciudad de Guayaquil, entre otras cosas, por los saqueos ocurridos el lunes por la noche en la zona comercial del centro de dicha ciudad (El Comercio 1982g7, A-10). En Quito, en el barrio La Tola Baja, cuando trataba de disolver una manifestación, resultó herido un policía que tuvo que ser hospitalizado (El Comercio 1982h7, A-10). Así mismo, se reportó que durante la masiva marcha del día martes 19, “varios vehículos y buses de la Policía Nacional sufrieron la rotura de sus parabrisas” (El Comercio 1982h7, A-10). Por ello, 50 personas también se encontraban detenidas en la capital (El Comercio 1982h7, A-10). En Sangolquí “la ciudadanía salió a las

calles y obstruyeron la vía de ingreso a esa ciudad” (El Comercio 1982i7, A-10). Algo parecido ocurrió en Alóag (El Comercio 1982i7, A-10). En Babahoyo durante las protestas fueron heridos 4 policías, así mismo, una moto fue incendiada (El Comercio 1982h7, A-10).

El miércoles 20 en Guayaquil la gente dedicó el día a abastecerse de productos en vista a lo que podría pasar al día siguiente “por el anunciado movimiento huelguístico que realizará el Frente Unitario de Trabajadores y al que plegarán diversas entidades y principalmente los comerciantes minoristas que laboran en los mercados” (El Comercio 1982s7, C-9). Además, los rumores sobre la presencia de agitadores extranjeros, recogidos en los comunicados de las cámaras —como se verá más abajo— se iban reproduciendo:

Varios órganos de información denuncian que elementos extranjeros están participando en las manifestaciones públicas los que presumiblemente son agitadores internacionales.

Durante el mitin y concentración del FUT ayer, “se puede apreciar con claridad rostros de elementos foráneos que al ser enfocados tratan de ocultar la fisionomía y evitar aparecer con claridad en las pantallas de televisión” (El Comercio 1982s7, C-9).

En Yaguachi, provincia del Guayas, “Turbas exaltadas asaltaron anoche el Palacio Municipal” (El Comercio 1982s7, C-9), después de saquearlo, “lanzaron a la calle, muebles, enseres y archivos y los incineraron” (El Comercio 1982s7, 9). Después “Irrumpieron con violencia en el pequeño destacamento policial, así como de la Comisión de Tránsito, por lo que los gendarmes y vigilantes debieron abandonar la plaza que al momento estaba desguarnecida” (El Comercio 1982s7, C-9). Como si eso fuera poco, “Grupos de exaltados ciudadanos prendieron fuego a los durmientes de madera sobre los que se asientan los rieles del ferrocarril en el puente sobre el río Yaguachi y apedrearon un autoferro” (El Comercio 1982s7, 9).

En Loja, estudiantes de los colegios nocturnos de la ciudad, realizaron una serie de manifestaciones, “Los jóvenes incendiaron llantas en varias calles de la ciudad, atacaron a la propiedad privada y causaron destrozos en los edificios de la Gobernación, Consejo Provincial, Predesur, Consejo Cantonal, Jefatura de Salud y Dirección de Educación” (El Comercio 1982s7, 9).

La situación se subió de tono en la provincia de Cotopaxi, donde se decretó un paro indefinido de actividades “exigiendo al gobierno central la derogatoria de las últimas medidas económicas, por considerarlas atentatorias contra los intereses populares” (El Comercio 1982p7, A-14). Lo particular de este caso es que las fuerzas vivas, eran un conglomerado que contenía a sectores de poder tradicionales y también al movimiento sindical así como al

gremio de los choferes. Es decir, que hubo en este caso una alianza entre sectores que usualmente son antagónicos, es así que el otro gran grupo de peticiones tenía que ver con “la asignación de fondos para las obras prioritarias de esa provincia” (*El Comercio* 1982p7, A-14).

Los habitantes de Latacunga “se tomaron de manera pacífica las entradas norte y sur de la Panamericana, colocando obstáculos, al igual que en las principales calles de la ciudad” (*El Comercio* 1982p7, A-14). Para la noche la protesta tomó tintes de violencia en la ciudad capital de la Provincia de Cotopaxi, donde “resultó incendiado un kiosco de control policial” (*El Comercio* 1982p7, A-14). Así mismo, durante la mañana resultaron heridos dos manifestantes cuando los militares de la Brigada Patria dispararon para evitar seguir siendo apedreados por una turba de estudiantes secundarios que los atacó (*El Comercio* 1982p7, A-14).

Se sentían ya en provincias los primeros efectos del desabastecimiento. Las autoridades tanto de Latacunga como de Cuenca temían por las afectaciones que podrían tener las manifestaciones en las fiestas locales que se aproximaban (*El Comercio* 1982q7, A-14). En la ciudad austral, “salvo pequeños grupos de manifestantes que fueron dispersados por la fuerza pública” (*El Comercio* 1982s7, C-9), la situación se mantuvo en relativa calma.

En Manta, centenares de pescadores, provenientes de diversos lugares participaron en una manifestación pública para protestar por la resolución del gobierno nacional (*El Comercio* 1982s7, C-9).

La UGTE, central sindical recién nacida bajo el cobijo del PCMLE, hizo fuertes acusaciones en contra del FUT:

Señalan que estas medidas estuvieron precedidas por un planteamiento irrisorio de alza salarial que constituye una burla a las necesidades de los trabajadores “con la participación de los traidores de la clase obrera y la burocracia sindical dirigente del FUT: de Chávez, Edgar Ponce, Bolívar Bolaños que para encubrir su complicidad hacen llamamientos engañosos de resistencia a estas medidas, con la finalidad de reeditar el diálogo con los hambreadores del pueblo” (*El Comercio* 1982a7, A-8).

La CTE por su parte acusó “la acción provocadora de elementos del MPD que de manera abierta convocaban a la destrucción de bienes” (*El Comercio* 1982e7, A-10). Según esta central “el vandalismo tiene por objeto generar enemistad entre el FUT y los medios de comunicación colectiva” (*El Comercio* 1982e7, A-10). Alejándose de toda posible

responsabilidad, la CTE acusó también por la violencia y los disturbios al gobierno, puesto que —según ellos—:

Para el FUT lo único importante es demostrar la multitudinaria decisión popular, esa decisión, antipopular conocimiento técnico el presidente y la necesidad Nacional de la derogatoria de esas medidas.

La CTE expresa su repudio a los hechos vandálicos y se solidariza con los afectados. La CTE desea que se arrime un clima de paz y concordia nacionales para lo cual es fundamental que se supriman las medidas de terrorismo económico que ha adoptado el gobierno (El Comercio 1982e7, A-10).

Bolívar Bolaños, representante de los trabajadores ante el Tribunal de Garantías Constitucionales “pidió se excite al presidente de la República, Osvaldo Hurtado, para que retire las medidas fiscales y económicas dictadas por el Frente Económico y proponga otras” (El Comercio 1982c7, A-9).

Uno de los dos editoriales oficiales de El Comercio del día preciso del paro pedía también a los trabajadores no recurrir a la violencia, insinuando la posibilidad de generar condiciones para un golpe de Estado:

De todos modos, la realización de la huelga será pernicioso para la economía nacional en su conjunto y para la de los propios trabajadores. ya que significará reducción en los niveles de la producción. precisamente en una coyuntura histórica incuestionablemente recesiva. Pero lo será más, si degenera en la violencia y llega a extremos tales que pudiesen impulsar al Ejecutivo a recurrir a las facultades extraordinarias por situación de emergencia nacional, con lo cual las fuerzas armadas serían llamadas a cooperar en el control represivo del malestar social, medida de impredecibles consecuencias (El Comercio 1982s6, A-4).

En el otro editorial, el diario felicitaba al Presidente del Congreso Nacional por su decisión de no llamar al congreso extraordinario para no permitir que la “agitación demagógica” (El Comercio 1982t6, A-4) se imponga, “sin amilanarse frente a las reacciones de vandalismo como las que se observaron en las puertas mismas del Palacio Legislativo” (El Comercio 1982t6, A-4). Impidiendo con ello “discusiones acaloradas que no llegarían a ninguna conclusión favorable a la rehabilitación de la economía nacional” (El Comercio 1982t6, A-4). Estos editoriales vienen acompañados de una genial caricatura de Roque, que pone a un hombre con expresión de desesperación siendo aplanado por cuatro filas de rodillos.

En un pequeño artículo de la sección de economía, El Comercio, publica un cálculo que permite ver el grave nivel de endeudamiento, a través de ello se llegó a la conclusión de que cada ecuatoriano adeudaba, para 1982: 520 dólares:

Si se considera el monto global de la deuda externa pública y la población del país, tiene que cada ecuatoriano debe \$520.

De acuerdo a los datos oficiales, la deuda externa total del sector público asciende a 4.681 millones de dólares y el número de habitantes Estaca este año en 8'945 000.

Lo que supuestamente debe cada ecuatoriano, es menor al ingreso per cápita en 462 dólares.
(...)

Si se toma en cuenta los 800 millones de dólares adicionales que se estima debe el sector privado, picar y ya que cada ecuatoriano debe 609 dólares (El Comercio 1982u6, A-7).

Es importante agregar que la deuda externa pública se incrementó un 132% desde 1978 a 1982 (El Comercio 1982v8, A-6).

El arzobispo de Quito y Presidente de Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Pablo Muñoz Vega hizo un llamado a mantener la paz social en la portada de El Comercio, del preciso día el paro:

El Cardenal Arzobispo de Quito, monseñor Pablo Muñoz Vega, hizo un llamamiento a la reflexión y a la unión para salvar a todo trance “el bien inapreciable de la paz social”. Todo puede perderse con la violencia que rompa las barreras del orden; no puede alcanzarse al Amparo de la paz social, dice el jefe de la iglesia ecuatoriana (El Comercio 1982z6, A-1).

El religioso agregó

Muñoz Vega dijo que es preciso que los trabajadores gocen de su derecho inalienable a formar asociaciones libres y autogestionadas, y defender, de forma solidaria y pacífica condiciones justas de trabajo y de salario. Es importante que las organizaciones sindicales desempeñan bien su papel en la defensa de los derechos justos de los trabajadores dentro del marco del bien común de la sociedad. Teniendo en cuenta la situación económica del país en que han nacido. Más en la actual coyuntura también ellas tienen el deber de reflexionar sobre la rectitud del camino a seguir en la lucha inherente al derecho sindical y, porque se quiere librar a la economía ecuatoriana de un colapso irremediable y fatal no de igual lanzarse a un camino que a otro no todos los medios son buenos o todas las finalidades están justificadas cuando en el movimiento sindical se infiltra la perspectiva de alcanzar un poder político (El Comercio 1982z6, A-11).

El jerarca también hacía pública, en una publicación de pago, la postergación de un homenaje en Quito al Papa Juan Pablo II, esto “En atención a la delicada coyuntura por la que atraviesa la nación ecuatoriana” (El Comercio 1982y6, A-8).

Ese mismo día y con el pretexto de analizar las medidas gubernamentales, representantes de las distintas Cámaras del país, se reunieron en Quito “En el marco de la más estricta reserva” (El Comercio 1982q6, A-2) para después declararse en sesión permanente (El Comercio 1982m7, A-12). Mientras tanto las fuerzas políticas y otros grupos de interés seguían ofreciendo recetas de cómo enfrentar la crisis. En este marco, Rodrigo Borja líder de la izquierda democrática “acusó al gobierno de haber llevado al país al borde del barranco” (El Comercio 1982b7, A-9).

En su propio comunicado de media página, las Cámaras de la Producción, culpaban “a la conducción dogmática de la economía” (El Comercio 1982n7, A-14) que ha llevado —según ellos— a una situación en que “la empresa privada ha sido la principal víctima” (El Comercio 1982n7, A-14). Complementan esta afirmación diciendo que las medidas económicas que pretenden superar una emergencia fiscal “fruto del despilfarro tanto de los recursos nacionales como de la agresiva intervención del Estado en todos los órdenes de la economía” (El Comercio 1982n7, A-14). Cabe decir que los firmantes representan a las cámaras de industriales, comercio, agricultura, artesanos, pequeños industriales, construcción, ganaderos, proveedores de materiales de la construcción y hasta la bolsa de valores de Quito, quienes terminan diciendo:

Los sectores de la producción consideran que solamente con un ambiente de tranquilidad económica y de paz social podrá salir el Ecuador de su actual postración. Por esto demandan al gobierno la inmediata rectificación de rumbos y llaman a los diferentes sectores sociales para que no se dejen seducir por los activistas de siempre y los agitadores internacionales, recientemente llegados al país, que no buscan un país mejor, sino su destrucción, cumpliendo consignas foráneas extraño del sistema de vida democrático y la libertad que el Ecuador ha escogido para enrumbar su destino (El Comercio 1982n7, 14).

En la página C-7 de El Comercio del 21 de octubre de 1982, en un tono parecido la Cámara de Industriales de Pichincha y la Cámara de Comercio de Quito se contrataron toda la hoja para nuevamente plantear esta lectura de la realidad y además su única propuesta de solución: reducir al Estado.

Llama la atención un pequeño comunicado pautado por un ciudadano que afectado directamente por las manifestaciones amenaza públicamente con repeler directamente los atentados contra su propiedad, este comunicado da buena cuenta de los tintes que el enfrentamiento social iba tomando. A continuación, se lo ha transcrito de manera íntegra:

INTERESES GENERALES:

SR. MINISTRO DE GOBIERNO

En esta ciudad, del día martes 19 de octubre último a vista y paciencia de la Policía que custodiaba el edificio que ocupa el Ministerio de Trabajo y en presencia del camarógrafo de Telenoticias “el pueblo Unido que jamás será vencido”, en actitud cobarde, procedió a volcar e incendiar automóvil de mi propiedad estacionado en la calle Luis F Borja. Sí persiste esta situación anárquica y presencio similar agresión contra mis bienes, haciendo uso del derecho de legítima defensa Y ante la falta de garantías, estoy dispuesto a repeler directamente estos hechos (El Comercio 1982x6, A-14).

Con el título de “La Izquierda al Pueblo Ecuatoriano” (El Comercio 198217, A-12) publicaban un comunicado juntos: el Partido Comunista del Ecuador, Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, Movimiento Revolucionario Izquierda Cristiana, Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, el Comité del Pueblo y la Unión Revolucionaria Popular Ecuatoriana.

Comunicado del cual transcribimos un fragmento:

Rechazamos la demagogia que encubre una política económica antinacional, pretendiendo en nombre de la defensa del régimen constitucional que los trabajadores y sus fuerzas políticas guardemos un silencio cómplice y una mansedumbre servil ante medidas que en sí son una provocación y un llamado al endurecimiento del régimen político y al sacrificio de garantías democráticas, con actos represivos como la prisión política que guardan militantes del FUT, cuya inmediata libertad exigimos.

Al rechazar estas medidas respaldamos la resolución tomada por la IV Convención Nacional del FUT de convocar para el día jueves 21 de suspensión general de actividades, lo que significa un verdadero PARO NACIONAL DEL PUEBLO en defensa de la vida y de la soberanía nacional sacrificadas por el gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado ante el Fondo Monetario Internacional y subsecuentes asociados criollos (El Comercio 198217, A-12, mayúsculas en el original).

Todos los sectores involucrados se pronunciaron a través de comunicados contratados en El Comercio, así en la misma página que las poderosas cámaras de la producción, en un tamaño menor y por tanto de menor precio estaba también el comunicado de la CTE. Donde se

proponía su propio conjunto de medidas para superar la crisis, cabe resaltar su propuesta de una “renegociación multilateral y colectiva de la deuda externa de países latinoamericanos” (El Comercio 1982o7, A-14). Citamos a continuación el conjunto de medidas propuestas por esta Central Sindical:

- Modificar el impuesto a la renta y su elevación para remuneraciones que sean 10 veces superiores al salario mínimo vital.
- Aumentar el impuesto a la herencia y a las donaciones entre vivos.
- Suspender durante 5 años todas las importaciones artículos de lujo automóviles, licores, vinos y productos que tengan sustitutos en la fabricación nacional
- Buscar medios financieros externos con condiciones distintas de las impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Nacionalizar la banca.
- Nacionalizar los procesos de explotación, industrialización y comercialización del petróleo. Línea.
- Suspender definitivamente las casas de cambio.
- Intervención estatal en el comercio exterior.
- Proteger la industria nacional y consolidar el sector estatal de la economía
- Reducción del gasto público por compra de armamentos.
- Limitar los gastos de misiones diplomáticas.
- Establecer prioridades en las inversiones de obras públicas.
- Control estatal de la deuda contraída por la empresa privada en el exterior.
- Supresión de la burocracia internacional ajena a los intereses de los trabajadores (El Comercio 1982o7, A-14).

El comunicado firmado por Edgar Ponce concluía también enumerando a los sectores con los que se pretendían conectar los trabajadores:

Los trabajadores recogemos la angustia de campesinos, estudiantes, choferes, pequeños productores y comerciantes, empleados públicos y privados, profesionales desempleados amas de casa y todos Quiénes integran los sectores populares a nombre de quienes convocamos un PARO NACIONAL DEL PUEBLO, para desconocer las medidas económicas dictadas por el gobierno demócrata-cristiano y exigir la supresión de ellas.

Las demandas de la clase Obrera son las demandas de nuestro pueblo.

¡¡JUEVES 21 DE OCTUBRE PARO GENERAL DEL PUEBLO!! (El Comercio 1982o7, A-14, mayúsculas en el original).

7.11. 21 de octubre de 1982, Paro Nacional del Pueblo

El Comercio en su portada del día del Paro del Pueblo, señalaba que el país guardaba “Expectativa por huelga de hoy” (El Comercio 1982o6, A-1) en un artículo en el que recogía las expresiones de José Chávez:

Una paralización total de las actividades laborales decretó el Frente Unitario de Trabajadores, para el día de hoy, en todo el país, desde la 06h00. José Chávez como presidente de turno del FUT, informó que se han hecho los preparativos para que la huelga tenga toda la extensión posible, hasta alcanzar la anulación del paquete de medidas económicas y plantear que el programa alternativo propuesto por la convención nacional del FUT.

Este programa, dijo no solo permitirá resolver los problemas económicos del país y del Estado, sino que también resguardar a la soberanía nacional y la economía popular. En lo fundamental, agregó, el programa señala a la nacionalización de los bancos y las casas de cambio, modificación del sistema arancelario, para grabar a los sectores de mayores de ingresos.

El presidente del FUT informó que se han venido recibiendo adiciones de todos los sectores de trabajadores y de otros grupos como entre ellos de los artesanos y de las plantas industriales que no estuvieron en esta actitud en la huelga anterior como la fábrica La Internacional, la Empresa Eléctrica, los trabajadores municipales y pequeños comerciantes (El Comercio 1982o6, A-1).

El Paro Nacional del Pueblo pasaba a ser la noticia más importante en el país. En el artículo mencionado nuevamente se toman también las expresiones de Telmo Hidalgo que dijo que el Parlamento “está lleno de demagogos” (El Comercio 1982o6, A-1). Rechazó también la declaración de estado de emergencia en el país diciendo “que esa medida lo único que busca es suprimir las garantías constitucionales, silenciar la voz acusadora del pueblo y continuar la tarea negra de su despojo” (El Comercio 1982o6, A-1).

En efecto, los trabajadores de la emblemática fábrica La Internacional, no solo se sumaron a las protestas, sino que pagaron un anuncio firmado por César Ortiz como Secretario General del Sindicato y por Gonzalo Robalino Secretario General del Comité de Empresa. Anuncio

publicado en El Comercio, el mismo día del paro, que por su relevancia se transcribe integralmente a continuación:

INTERESES GENERALES

LOS TRABAJADORES DE “LA INTERNACIONAL” ACATAN DISCIPLINARIAMENTE LA RESOLUCIÓN DE PARO NACIONAL DECRETADO POR EL FUT

La Asamblea General del Sindicato y Comité de Empresa de Los Trabajadores “LA INTERNACIONAL” analizo las hambreadoras medidas económicas dictadas por el Gobierno Demócrata Cristiano del Presidente Hurtado y considero que esas medidas constituyen un golpe mortal para la escuálida economía de los trabajadores, de las grandes masas populares y de todo el pueblo, por lo que resolvió rechazarlas y participar activa y combativamente junto a los demás trabajadores hasta que sean derogadas.

Al mismo tiempo pronunció por el apoyo irrestricto a todas las resoluciones de la Cuarta Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores, del cual formamos parte como militantes de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) porque todas las imprimen un carácter de clase y recogen el sentir no solamente de los trabajadores sino también de todo el pueblo.

En esas condiciones la asamblea general de los trabajadores resolvió participar en la GRAN MARCHA ORGANIZADA POR EL FUT, como también en el PARO NACIONAL decretado por el mismo, que se llevará a cabo el día jueves 21 del presente mes.

Con esta oportunidad los trabajadores de "LA INTERNACIONAL llamamos a la más férrea unidad con todos los sectores del pueblo hasta conseguir la derogatoria de las medidas económicas:

VIVA EL PARO NACIONAL

VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

VIVA EL FRENTE UNITARIO DE LOS TRABAJADORES (El Comercio 1982w6, A-8 / Mayúsculas en el original).

Llegado el día, la conjunción de fuerzas en acción se desplegó eficaz y disciplinadamente, los sectores populares, pese a las molestias de todo tipo que tuvieron enfrentar, respaldaron la medida de hecho. Se había logrado conjugar un nivel muy elevado de organización y coordinación entre el seno del movimiento sindical y la voluntad popular con el objetivo de atender sus urgencias.

Un par de meses después del hecho, Manuel Chiriboga lo describió de la siguiente manera:

El Jueves 21 la huelga con seguridad se convirtió en el mayor acto de protesta popular registrado en los últimos treinta o cuarenta años, paralizando al país. En el ámbito urbano la huelga implicó una participación activa de los sectores populares, que enfrentaron con piedras y gritos la inusitada represión realizada por el ejército. El pueblo se tomó de hecho las calles, demostrando la fuerza de la protesta, rebasando en mucho las previsiones del FUT y de las Centrales Sindicales (Chiriboga 1982, 32).

Es importante destacar, que esta reacción no solo ocurrió en las ciudades, sino que dejó ver, en especialmente en los territorios rurales —en el campo— la acción del que poco después, a inicios de los noventa, se convertiría en el movimiento social más importante de la historia contemporánea en Ecuador: *el movimiento campesino e indígena* —que era como se le conocía en la época—, mismo que se movilizó fuertemente, pero exgrimiendo sus particulares demandas en esta convocatoria. Como resume Chiriboga, en sus territorios también hubo graves disturbios y protestas además de cierres de carreteras, vehículos apedreados, destrucción de instalaciones de gobierno, toma de pueblos por parte de los indígenas y rechazo generalizado a las actividades comerciales normales, todo esto “bajo reivindicaciones y consignas diferentes a las planteadas por el FUT” (Chiriboga 1982, 32).

Es importante tener en cuenta que, los habitantes de los sectores rurales especialmente de la sierra, consideraban contrarios a sus intereses “La alianza con los choferes por parte del FUT y su pedido de congelación de los precios de los bienes básicos fueron consideradas acciones anti—campesinas” (Chiriboga 1982, 32). Pese a que —como se ha ido mostrando— el FUT se esforzó por incorporar contenidos de estas poblaciones en su plataforma de lucha, quedó demostrado que el FUT no daba real cuenta de las exigencias de estos sectores.

La unión de campesinos y asalariados agrícolas del Ecuador, UCAE, manifestó su satisfacción por la participación activa que tuvieron sus afiliados en la huelga nacional preventiva decretada por el FUT (El Comercio 1982w8, C-12).

Durante la ejecución del Paro Nacional, las bases mantenían su reclamo al FUT por privilegiar las conversaciones con el gobierno a lo que se sumaba un fuerte reclamo por no haber conformado un Comité Ampliado de Huelga a nivel nacional (CEDOC-CEDEP 1983, 27), que bien podría haber sido el gen de una dirección unificada del movimiento popular o de anhelada *Central Única*.

La portada del diario El Comercio del día siguiente al paro es impactante, abre con un titular gigante que dice “La huelga nacional: Protestas y violencia” (El Comercio 1982t7. A-1). En el

desarrollo de la noticia reconoce, este importante diario que “Las actividades en todo el país quedaron virtualmente paralizadas de ayer al cumplirse la huelga nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para protestar contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Osvaldo Hurtado” (El Comercio 1982t7. A-1). Y resaltó que “La huelga se realizó a pesar del estado de emergencia decretado por el Presidente de la República” (El Comercio 1982t7. A-1). Para entender la magnitud del hecho es importante observar como este diario resumió la situación del país:

La huelga decretada a nivel nacional por el FUT paralizó completamente las actividades en las ciudades y poblaciones del país. Tanto la transportación, el comercio y la banca se vieron paralizados, en tanto que las oficinas públicas que pensaron en principio laborar debieron suspender ante las manifestaciones que arreciaron durante el día.

En varias ciudades los manifestantes hicieron oír sus voces de protesta ante las medidas económicas decretadas por el gobierno, actitud que fue reprimida por la fuerza pública. esto determinó enfrentamientos con saldo de numerosos contusos y cientos de detenidos (El Comercio 1982e8, C-6).

Así resumió el diario capitalino la situación en Quito:

Quito presentó ayer el aspecto de una ciudad sitiada, mientras los enfrentamientos proliferaban y la policía se veía impotente para controlar las manifestaciones a pesar de la profusión de gases lacrimógenos, la participación de los carros antimotines y la intervención de miembros de las fuerzas armadas.

Prácticamente en toda la capital se vive estado de convulsión. Si bien en horas de la mañana hubo cierta tranquilidad, a pesar de que se habían registrado actos de violencia los sectores del sur y en la zona de Cotocollao, fue después de la lluvia del mediodía cuando arreció la actividad de los obreros, trabajadores y gente de los sectores populares, que sitiaron la ciudad.

Los disturbios llegaron hasta las inmediaciones del Palacio de Gobierno como residencia actual del presidente Hurtado, que permaneció fuertemente custodiado (El Comercio 1982t7, A-1).

La descripción de los hechos se amplía en fascinantes detalles. Así “Desde las primeras horas, grupos de obreros y estudiantes empezaron a tomar posiciones estratégicas en la urbe para conducir las protestas. Efectuaron acciones primeramente en la Panamericana Sur, dónde importante cordón industrial y en la zona de Cotocollao y El Inca” (El Comercio 1982t7, A-1). Es preciso caracterizar estas zonas mencionadas, pues son precisamente las zonas

industriales de la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, lo que da perfecta cuenta de la participación masiva de los obreros de las industrias ubicadas en dichos sectores.

Poco después de que las eficientes organizaciones obreras, sindicatos y comités de empresa, empezaron los forcejeos con las fuerzas del orden, “las protestas se extendieron al sector de la Universidad Central, debiendo cerrarse la circulación de la avenida América” (El Comercio 1982t7, A-1). Es decir, entraban en acción también los estudiantes.

En la tarde el centro de la ciudad se convirtió en un verdadero campo de batalla entre las fuerzas del orden que realizaban disparos al aire y lanzaban bombas lacrimógenas y los manifestantes que lanzaban piedras y todo objeto que encontraban a mano. Fuerzas del ejército pasaban en sus vehículos a gran velocidad, los manifestantes y dispersaban momentáneamente y volvían aglutinar se para seguir con la propuesta.

Pero, si la situación en el centro de Quito fue trágica, el sur de la ciudad se convirtió en el área más conflictiva. En muchos casos la policía tuvo que observar a distancia los acontecimientos (El Comercio 1982t7, A-1).

Toda clase de materiales eran usados para alimentar la protesta popular: “Postes, piedras, carrocerías viejas, llantas, etc., fueron colocadas en todas en casi todas las calles de la ciudad” (El Comercio 1982t7, A-1). Los parques de la ciudad también se convirtieron en escenarios del conflicto: “En la Alameda y el Ejido grupos de estudiantes y trabajadores protagonizaron serios incidentes, con la quema de llantas, maderos y toda clase de objetos que encontraban a su paso” (El Comercio 1982z7, A-10). En algunos casos fue tan grande la colocación de escombros y materiales que se tuvo que recurrir a maquinaria pesada para evacuarlos. Así mismo, un grupo de manifestantes apedreó las instalaciones del Ministerio de Educación (El Comercio 1982z7, A-10).

Los mercados de la ciudad no atendieron al público y los comerciantes minoristas se congregaron en los alrededores a sus lugares de trabajo y se dedicaron a obstruir las vías. En El Camal los vendedores cerraron las calles adyacentes al mercado y la policía tuvo que emplearse a fondo para contener a los manifestantes (El Comercio 1982z7, A-10)

La contradicción de clase también fue evidente, pues hubo un sector en específico que no participó de la protesta, la ciudad entera contenía disturbios “con excepción de la zona del norte, donde se aprecia una tensa calma” (El Comercio 1982t7, A-1), esta zona habitada en la época precisamente por la clase media y alta, no se movilizó. Cabe aclarar que las zonas industriales y populares del norte de la ciudad sí participaron activamente de la medida de

hecho. La situación en el sur de la ciudad, donde se encuentra históricamente el grueso de la clase trabajadora, así también lo demuestra:

Los manifestantes colocaron obstáculos, quemaron llantas y maderos desde el redondel de la Villaflora hasta Guamaní, dejando de esta forma aislada a la capital y cerrado el ingreso por el sur, a la entrada de Machachi se tumbaron árboles y los colocaron a lo ancho de la vía con la finalidad de inutilizar el carretero para que no ingrese alimentos a Quito.

A las 12h00 de ayer, se informó desde Machachi que no podían ingresar leche y víveres a los mercados capitalinos por cuanto la vía estaba inutilizada y cerrada con obstáculos. Se pidió la colaboración del Ejército y la Policía para poder llevar los alimentos a los sitios de distribución.

La calle Rodrigo de Chávez también fue utilizada por los manifestantes. Igualmente, la calle Bahía y la avenida Libertadores de Pichincha (El Comercio 1982z7, A-10).

Los barrios populares del centro de la ciudad también fueron escenario del enfrentamiento “Los conflictos se presentaron con violencia en el centro de la ciudad en la avenida 10 de agosto a la altura del cine Alhambra, Banco Central, Alameda, San Blas, La Tola, Plaza Marín, San Juan y diversos barrios” (El Comercio 1982z7, A-10).

Se produjeron varios intentos de saqueos en Quito y por la noche fue atacado el tradicional almacén Casa Vivanco. Tuvo que movilizarse el ejército para detener esta acción (El Comercio 1982t7, A-1). También fue saqueado un almacén de Durallantas en la Panamericana Sur y varios almacenes en la zona del centro al igual que otros en el sector de Cotocollao, al norte de la ciudad (El Comercio 1982t7, A-1). Así mismo, durante horas de la noche se registraron varios episodios de extorsión: “En la noche los maleantes disfrazados de manifestantes circulaban por diferentes sectores de la urbe. Detenían a los escasos vehículos que rodeaban por la ciudad y obligaban a sus conductores de entregar determinadas cantidades de dinero” (El Comercio 1982r8, C-12).

Un joven manifestante de nombre René Raúl Córdova Ron recibió un impacto de bala y murió a los pocos minutos en el sector de San Blas, una de las entradas por el norte al centro de Quito (El Comercio 1982x7, A-2). Otro joven, llamado Rene Patricio Velasco fue atropellado por patrullero policial en la plazoleta Victoria. Corrió el rumor de que habría muerto, lo cual fue desmentido por la noche por la Comandancia de Policía que informó que había sufrido una fractura en la clavícula y otras muchas en el resto de su cuerpo (El Comercio 1982x7, A-2).

El intendente de policía informo que los detenidos serán juzgados penalmente y que deberán pagar los daños que hayan causado a la propiedad privada. No se dio la cifra exacta de los presos, pero se informó que pasan de un centenar. Entre ellos muchos menores de edad (El Comercio 1982z7, A-10).

Además de poner a disposición de la ciudadanía los buses, camiones y camionetas propiedad del Estado, incluyendo los del ejército, para suplir la ausencia de los transportistas privados, esta vez, también se dispuso que *almacenes rodantes de productos vitales* visitaran directamente a las poblaciones:

La Empresa de Productos Vitales, Enprovit, para combatir la especulación con los productos de primera necesidad como en servicio los almacenes rodantes que vendieron a la ciudadanía de los barrios populares de Quito artículos de consumo popular.

De acuerdo con informes oficiales, los camiones de Enprovit expendieron ayer alimentos en los barrios Carcelén, San Francisco, Toctiuco Alto, Cotocollao, El Camal, 24 de mayo, San Blas y Santa Lucía. (El Comercio 1982b8, A-10).

Esto se hizo pues “Los mercados de Quito, permanecieron cerrados durante el día de paro preventivo” (El Comercio 1982b8, C-10) lo que provocó que en prevención por lo que podría pasar “Los usuarios prácticamente asaltaron antier los mercados y supermercados de Quito” (El Comercio 1982b8, C-10). Lo que, a su vez, devino en aglomeraciones y los correspondientes conflictos.

Un testimonio del periodista Marco Mendoza publicado el día sábado 23 de octubre en El Comercio, permite conocer con más detalle cómo se vivió la huelga en Quito. Así Mendoza describe su travesía para llegar desde las oficinas del diario en el extremo sur de la ciudad hasta su hogar en el norte de la misma, acompañado por otros 12 trabajadores de dicho diario. El periodista afirmó:

Habíamos salido a las 17h15 desde el diario después de un intenso trabajo. Éramos tres en total, mal número para muchos. Uno de los compañeros, Napoleón Narváez, había dejado su vehículo en la zona de la Villa Flora y decidimos caminar hasta ese barrio. Al salir del edificio del diario vimos como la Panamericana estaba “encendida” hacia el norte y hacia el sur. No pasaba ningún vehículo. Solamente había fuego, piedras, cenizas negras y mucha gente que iba y venía, con sus rostros mostrando la fatiga producida por la intensa jornada de protesta.

Unos cuantos pasos al norte del edificio diario un numeroso grupo de personas rodeada una ambulancia de la Cruz Roja. "Hay cuatro heridos", dijo su conductor. "Cómo no va a haber

heridos si todo el día ha habido bala por el sector", comentó un ciudadano. La verdad que en el sur de Quito la situación fue grave y preocupante (Mendoza 1982, B-8).

Este afortunado testimonio, también deja ver otro tipo de situaciones que reforzaban y acompañaban la lucha social, durante el Paro:

Cerca del cuartel Eplicachima, un joven de aspecto extranjero, atraía la atención de los manifestantes con su guitarra y canto "revolucionario". "Todos salimos a las calles en busca de pan porque nos morimos de hambre, larala, larala larala...".

Los muchachos acompañaban el son agitando sus brazos. Ojos rojizos por los gases y garganta resacas del cansancio.

Más abajo, avanzando a la Villa Flora, a unos metros del Epiclachima se oyeron ráfagas de bala desde "El Pintado" (Mendoza 1982, 8, comillas en el original).

Una vez recogida la camioneta del señor Napoleón en la Villa Flora, el viaje de los trabajadores de El Comercio, avanzó esquivando toda clase de obstáculos e imprevistos "Patricio Torres recibió un 'bombazo' en la cabeza. Felizmente era una cápsula vacía. Todos esquivamos 'pedrazos' lanzados por los manifestantes" (Mendoza 1982, B-8). El periodista describe su situación como de un "¡Un campo de batalla!" (Mendoza 1982, B-8). Al punto que el vehículo del trabajador de El Comercio quedó, en un punto, inutilizado y tuvieron que usar otros dos automóviles para llegar a casa.

Este es el resumen que hicieron la CEDOC-Socialista y el CEDEP sobre el Paro Nacional en Quito da cuenta del nivel de movilización y organización de los sectores populares:

El jueves 21, el combate en las calles contra el ejército y la policía se prolongó durante más de 16 horas, ni la fuerte lluvia del mediodía detuvo la lucha.

Los sectores del norte y sur de la ciudad, donde se concentran las fábricas, se mantuvieron totalmente paralizados. El resto del pueblo se concentró en el centro y sur de la ciudad, donde la balacera del ejército y la policía no pudo detener la lucha, pero causó la muerte de René Córdova Romo.

El cadáver fue conducido por el pueblo hasta la iglesia de San Blas, de donde fue sacado por el ejército en medio de una impresionante balacera y la inundación de gases lacrimógenos (CEDOC-CEDEP 1983, 33).

Este mismo folleto recoge la movilización popular en el Noroccidente de la Provincia de Pichincha, en un reporte de uno de los dirigentes de la Unión Noroccidental de organizaciones Campesinas y Poblacionales de Pichincha (UNOCYPP):

El compañero Malaquías Santos, dirigente de la UNOCYPP, organización campesina del noroccidente de Pichincha, informó que el paro nacional fue un éxito en la zona.

Según el compañero Malaquías, era la primera vez que se hacía un paro, “la gente ni siquiera sabía lo que era una huelga, pero estaba en contra de las medidas económicas del Gobierno”.

Cerraron 70 km. de la carretera, utilizando grandes árboles.

“Los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del IERAC, creían que era una broma, pero como no les dejamos pasar, se dieron cuenta que era en serio”.

“Nosotros estábamos en San Vicente de Andoas y la policía fue a pedir refuerzos de Los Bancos, a pesar de eso, no pudo detenernos” (CEDOC-CEDEP 1983, 34. comillas en el original).

En Guayaquil, además de la innegable presencia de sectores organizados de obreros en protesta en las zonas industriales, la jornada estuvo además marcada por la movilización de distintos sectores del CFP y del roldosismo que también tomaron las calles para mostrar descontento con el gobierno. En ese caso concreto por razones más bien de reparto político. Un muchacho de 15 años fue herido de bala al encontrarse cerca de una de las manifestaciones y el exintendente de la ciudad: Abdala Bucaram activo entre los que protestaban, recibió el impacto de una bomba lacrimógena que estalló a sus pies (El Comercio 1982e8, C-6).

Además de Elsa y Abdala Bucaram, René Mauge, secretario general del Partido Comunista del Ecuador, fue entrevistado por corresponsales de El Comercio en medio de una manifestación. En las mismas condiciones en Guayaquil, el legislador cefepista, Carlos Llerena Márquez dio algunas declaraciones y también Aquiles Rigail regente heredero del partido de Jaime Roldós, Pueblo, Cambio y Democracia, quienes coincidieron en rechazar el bloque de medidas tomadas por el Gobierno (El Comercio 1985f5, C-6).

La huelga fue acatada disciplinariamente por decenas de fábricas, empresas fabriles, en general; obreros de la Autoridad Portuaria que conllevaron en impedimento de carga y descarga de buques así como de trámites en aduana y total paralización de los transportes urbanos, intercantonales. En la ciudad entraron a prestar servicio muy contadas camionetas, furgonetas y otras de servicio particular por lo que la ciudadanía confrontó problemas para el traslado (El Comercio 1982e8, C-6 / errores de coherencia en el original).

Al medio día, los enfrentamientos empezaron a subir de tono en el centro de la *perla del pacífico*:

Al promediar la hora meridiana y luego de que la Policía Nacional había mantenido una discreta vigilancia, salieron a las calles patrullas militares armadas de fusiles y ametralladoras, las arremetidas callejeras especialmente de elementos de Concentración de Fuerzas Populares, Movimiento Roldosista que lidera Abdalá Bucaram Ortiz así como de las zonas periféricas como El Guasmo, barracas de los mercadillos del Oeste de Guayaquil puente 5 de junio y de las calles Pedro Pablo Gómez y Machala (El Comercio 1982e8, C-6).

En otros sectores populares como Mapasingue también se registraron incidentes. Los estudiantes activaron la protesta cerca de la histórica Casona Universitaria, así como en las inmediaciones de la Universidad de Guayaquil (El Comercio 1982e8, C-6). El desabastecimiento se dejó sentir con relativa fuerza en la ciudad.

La participación de los obreros fue tan grande en las Quinta Huelga Nacional de septiembre, que para impedir tales desmanes en Octubre, se declaró toque queda en la vía a Daule, principal zona industrial de la ciudad:

Evidentemente que a la efectividad de la huelga acatada por la militancia del FUT, coadyuvó la decisión de los transportadores de buses y colectivos y aparentemente también la declaratoria de estado de emergencia y toque de queda que fue declarada en la zona industrial en la vida vía a Daule en dónde se agrupan empresas fabriles fue más notoria la incidencia de la huelga (El Comercio 1982e8, C-6).

Se reportó que 147 personas fueron detenidas por irrespetar el toque de queda en la ciudad. La población de Durán, una ciudad vecina de Guayaquil, quedó aislada “debido a la suspensión del servicio de motorizados y lanchas, que está a cargo, ésta última, de la empresa de ferrocarriles, cuyos trabajadores entraron en huelga” (El Comercio 1982e8, C-6). Así mismo, el local del edificio de la Cámara de Comercio de Guayaquil fue apedreado (El Comercio 1982e8, C-6).

Los campesinos del Guayas también se movilizaron, en el cantón Santa Lucía, las calles y carreteras se empezaron a cerrar desde temprano en la mañana, “Cuando se encontraba todo paralizado, llegó el ejército y apresó a los dirigentes, pero el pueblo los liberó, bajándolos de los carros militares.” (CEDOC-CEDEP 1983, 37). Tanto en Milagro como en Machala se había mantenida encendida la protesta social toda la semana CEDOC-CEDEP 1983, 38). Samborondón también se paralizó (CEDOC-CEDEP 1983, 38).

En Esmeraldas, aproximadamente 20 heridos, varios de ellos Policías, dejaron como saldo de las violentas manifestaciones protagonizadas allí por choferes, estudiantes y trabajadores (El

Comercio 1982e8, C-6). En esta ciudad los manifestantes lograron impedir la acción de la Policía, al punto que solo se contabilizaron cuatro detenidos. El reporte de diario El Comercio habla de “unos 2 mil manifestantes, apostados en lugares céntricos de la ciudad” (El Comercio 1982e8, C-6). Quienes “acosaron a la fuerza pública que respondió lanzando bombas lacrimógenas” (El Comercio 1982e8, C-6). Los enfrentamientos alcanzaron tal fuerza que varias familias fueron evacuadas de la zona “adyacente al local de la Federación de Trabajadores” (El Comercio 1982e8, C-6). Así mismo se informa de una gran cantidad de niñas y niños afectados por los gases lacrimógenos.

Hogueras de madera con llantas y basura ayudaron a disipar el ambiente saturado de gases. Trabajadores, choferes y estudiantes integraron las manifestaciones que acusaron por todos lados de la Policía Nacional cuyos efectivos fueron impotentes para reprimir a los revoltosos (El Comercio 1982e8, C-6).

En Manabí, hubo protestas en todas las ciudades de la provincia. En Portoviejo “el pueblo apedreó y se tomó el local de la Democracia Popular, varias oficinas estatales y las oficinas del Partido Liberal” (CEDOC-CEDEP 1983, 39). La protesta creció hasta el punto de que “El pueblo manejaba la ciudad y la policía no se atrevió a intervenir” (CEDOC-CEDEP 1983, 39).

En la norteña ciudad de Ibarra se conformó un amplio Comité de Defensa Popular, en el que participaron la UNE de Imbabura, el Sindicato de Choferes, el Gremio de Zapateros, Sindicato de Obras Fiscales, Cooperativa 28 de Septiembre, Universidad Técnica del Norte, Sociedad de Peluqueros, Flota Imbabura, Asociación de Administración y Lenguas Universidad Católica, Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Amazonas, Expreso Turismo, Unión de Taxistas y Sociedad de Artesanos de Ibarra (El Comercio 1982w7, A-2). Este comité entre sus resoluciones acordó llevar a cabo una marcha desde el obelisco de la estación hasta el parque Pedro Moncayo, en demostración de protesta al gobierno por las que consideraron como “medidas desacertadas” (El Comercio 1982w7, A-2). Mismas que —según ellos— endurecieron la situación de crisis económica que vivía el pueblo ecuatoriano. El relato que ofreció El Comercio, es muy interesante pues el enfrentamiento en dicha ciudad dejó —según esta fuente— un total de nueve heridos de gravedad, ocho ciudadanos y un policía:

A eso de las 09h30, cuando se habían concentrado algo así como unos 3000 ciudadanos de los organismos citados para iniciar la marcha, fueron disueltos por la policía mediante gases

lacrimógenos, en un operativo que desbandó a los manifestantes en algunos grupos, los mismos que se dirigieron a diversos lugares de la ciudad. (...)

Los manifestantes replicaron con piedras, palos y otros objetos la acción represiva de la policía a la que hostigaron en diversos lugares, ubicándose especialmente en el sector de la estación en las calles Sánchez y Cifuentes, Pedro Moncayo y posteriormente es la calle Flores en las inmediaciones del edificio del Sindicato de Choferes y Flota Imbabura.

Los manifestantes de toda edad y condición, se dieron a quemar llantas y madera en las esquinas a fin de contrarrestar la acción de los gases lanzados por la policía cuenta la profusión de humo que la ciudad quedó prácticamente cubierta por una nube tóxica y asfixiante (El Comercio 1982w7, 2).

En la misma provincia, la Federación de Comunas de Cotacachi, realizó en ese cantón, varias movilizaciones durante el día del paro, esto “a pesar de las prohibiciones y amenazas del Jefe Político” (CEDOC-CEDEP 1983, 34).

Los campesinos salieron a las calles a protestar contra las medidas económicas dictadas por el gobierno, así como por el quinto aniversario del asesinato de su dirigente, Rafael Perugachi.

Los campesinos y el pueblo quemaron varias casetas de la policía sin que el ejército pueda frenar la protesta (CEDOC-CEDEP 1983, 34).

En Cuenca, provincia del Azuay, se colocaron militares con uniformes de campaña armados de bayonetas para resguardar los edificios públicos después de los continuos apedreamientos en días pasados. Monseñor Luis Alberto Luna Tobar también suspendió una misa por el aniversario del asesinato del campesino José Pushi en una hacienda cercana a la ciudad austral. En aquella ciudad, 34 personas fueron detenidas durante las protestas, de estos un buen porcentaje eran estudiantes (El Comercio 1982e8, C-6). Así resumió El Comercio, el día de paro: “En medio de cualquier cantidad de bombas lacrimógenas, estudiantes, trabajadores y choferes detenidos, ciudad de Cuenca muestra un rostro de ‘carnaval sin agua’ porque la paralización de actividades es ahora casi total” (El Comercio 1982e8, C-6).

Las manifestaciones callejeras a pesar de que fueron contrarrestadas en las cercanías de los predios universitarios, lograron salir hasta el centro de la ciudad que está desolado, cargado de un ambiente tenso por efecto de la gran cantidad de bombas lacrimógenas que lanzó la policía. (...). Los choferes lograron bloquear con piedras y palos parte de la Panamericana Norte y Sur, siendo necesaria la intervención del ejército a fin de dejar expeditas las carreteras en tanto que los militares en traje de campaña resguardan con bayonetas los principales edificios públicos y de servicios básicos (El Comercio 1982e8, 6).

En la ciudad de Santo Domingo que en ese momento todavía pertenecía a la provincia de Pichincha, los estudiantes secundarios protestaron de manera violenta y se registraron actos de vandalismo (*El Comercio* 1982w8, 6).

En la provincia de El Oro, las manifestaciones se mantuvieron hasta el 30 de octubre:

El día del paro, el pueblo salió paralizar el centro de Machala pero el sector estaba repleto de soldados y policías, por lo que se dirigió a los barrios suburbanos donde se mantuvo la protesta durante todo el día gracias al gran apoyo popular que se logró.

El ejército no pudo controlar esta movilización, fotos de fogatas callejeras se mantuvieron hasta después de la medianoche (CEDOC-CEDEP 1983, 35).

En Guaranda, en otra extraña configuración de unidad, se realizó una manifestación encabezada por el Prefecto de Bolívar, el Alcalde de la ciudad y los líderes locales de las centrales sindicales. Así:

Los enardecidos manifestantes al pasar frente al edificio de la gobernación, lanzaron gritos contra el régimen del presidente Hurtado y exigieron la renuncia de las autoridades del ejecutivo.

Los choferes recorrieron las calles en sus carros utilizando altoparlantes exhortaron al pueblo a unirse a luchar contra las medidas económicas del Gobierno. La fuerza pública no trató de reprimir a los manifestantes, por lo que no hubo incidentes que lamentar. Grupo de exaltados de estudiantes se concentraron en frente a la casa del Gobernador, donde funciona también el Partido Demócrata Popular, exigiendo su renuncia y profiriendo epítetos al partido de gobierno, pero fueron disueltos por la policía mediante el uso de bombas lacrimógenas (*El Comercio* 1982e8, 6).

En la provincia del Chimborazo, durante el día del paro, los disturbios callejeros en su capital Riobamba se mantuvieron durante todo el día, pero tal como había anticipado Manuel Chiriboga, las comunidades indígenas y los campesinos de la provincia se movilizaron más visiblemente. “Un pueblo en lucha...” dedica dos hojas a las movilizaciones en dicha provincia, recogiendo valiosos testimonios de sus dirigentes, como este que sigue de la zona de San Juan:

Valeria Anaguarqui, dirigente indígena cuenta que la gente reaccionó con mucha indignación cuando supo del alza del precio de la gasolina.

Desde las dos de la madrugada los indígenas salieron a paralizar la carretera que conduce a Guaranda.

Avanzado el día, unos 800 hombres protestaban en las calles de San Juan hasta que la policía apresó a 4 dirigentes. Dada la voz de alarma más y más gente bajó de las comunidades. 3.000 personas se tomaron el pueblo y obligaron a dejar en libertad a sus dirigentes (CEDOC-CEDEP 1983, 35).

En el sector de Pangor, los indígenas cerraron el tráfico en la carretera panamericana y vaciaron los camiones que transportaban alimentos, repartiendo los víveres entre la población, “Así se hicieron justicia con sus propias manos” (CEDOC-CEDEP 1983, 34-35). También en Guamote “más de 4,000 indígenas se apoderaron de la tienda de ENPROVIT y repartieron los alimentos a la población” (CEDOC-CEDEP 1983, 35). También se reportaron levantamientos en las poblaciones de Lirio, Palmira, Licto y Tixán. El relato sobre lo ocurrido en la zona de Punín es sumamente interesante:

Con gran iniciativa, los indígenas de Punín decidieron realizar el paro el día sábado 23, porque en ese día de feria se concentra la gente. Salió desde el pueblo una gigantesca marcha de 10.000 hombres hacia Riobamba. En el camino se iban uniendo las demás comunidades. Como hace años sucedió con el heroico Daquilema.

Al llegar a Guaslán apedrearon a las oficinas del Ministerio de Agricultura y bloquearon las carreteras. Dos camiones de policía no pudieron detenerlos.

En San Luis, cerca de Riobamba, camiones del ejército abalearon la Marcha, obligándoles a dispersarse.

Al regresar a Punín se apoderaron de algunas tiendas y de la cooperativa de transportes.

Autoridades de Punín ofrecieron un diálogo para atender los pedidos de los indígenas, con este engaño lograron que se presenten los dirigentes y les apresaron (CEDOC-CEDEP 1983, 36).

En Cotopaxi, los indígenas bloquearon los caminos que rodean a Saquisilí y los que llegan a Sigchos, con tal eficacia que “El Gobierno acusó a los indígenas de estar haciendo guerrillas y envió al páramo paracaidistas fuertemente armados para apresar a los dirigentes (CEDOC-CEDEP 1983, 37).

En Cañar, las protestas empezaron con una concentración “de más de 5.000 personas, que quemaron un ataúd que representaba al Presidente de la República y a su partido, la Democracia Cristiana” (CEDOC-CEDEP 1983, 38). Luego los manifestantes se tomaron la radiodifusora Voz de la Juventud, para forzar la transmisión de los discursos de los dirigentes sindicales que se transmitían en la cadena radial Ingapirca (CEDOC-CEDEP 1983, 38).

En Babahoyo, se detuvo y liberó el mismo día a 10 dirigentes sindicales de la provincia (CEDOC-CEDEP 1983, 33). A diferencia de los días anteriores, pues durante el día del Paro Nacional no hubo disturbios más allá de “algazaras callejeras oportunamente controladas por la Policía” (*El Comercio* 1982e8, 6). En Quevedo y Ambato se paralizaron efectivamente las actividades sin que se hayan registrado otra clase de incidentes (*El Comercio* 1982e8, 6).

Galo García Feraud salió nuevamente a dar la cara por el gobierno y dijo que son activistas quienes propiciaron los actos de violencia (*El Comercio* 1982u7, A-1); al tiempo que agradecía a la gran mayoría de la población que decidió acatar el estado de emergencia. Por otra parte, el Ministro de Finanzas Pedro Pinto al regresar de Nueva York, anunció —sin dar mayores detalles— que los “Bancos acogieron la refinanciación de parte de la deuda” (*El Comercio* 1982v7, 1) y de inmediato empezó a trabajar con la misión del FMI presente en el país.

Otro de los resultados de la gigantesca movilización es que el Frente Radical Alfarista, mediante comunicado público se sumó, a la postre, a los sectores que exigían la convocatoria a un congreso extraordinario (Calderón 1982, 3).

Revista Vistazo, dedicó en su primer número de noviembre: 2 páginas al estallido social, al tiempo que pedía al gobierno “jubilar el desgastado cuento de la desestabilización, pues en realidad nada desestabiliza más al país que observar tantas equivocaciones a nivel oficial” (*Vistazo* 1982, 5), finalmente, para ellos, toda la culpa era del gobierno:

El anuncio del alza del precio de la gasolina y la eliminación de los subsidios del trigo desencadena una serie de sucesos trágicos por los que se puede bautizar a este mes como Octubre Negro. El descontento popular fue capitalizado por las centrales sindicales obreras que llevaron a cabo su sexta huelga nacional. A diferencia de sus anteriores fracasos, la huelga tuvo éxito... pero el éxito se debió precisamente a una desacertada acción del Gobierno, que al no conceder a tiempo el pedido de alza de tarifas de los transportistas, permitió que estos se sumen a los trabajadores, ocasionándose la paralización. Resultado... millonarias pérdidas para un país que atraviesa por uno de sus más críticos momentos económicos... violencia esporádica pero Trágica en las ciudades más importantes (sic) (*Vistazo* 1982, 5).

7.12. Reflexiones y evaluaciones sobre el Paro

José Chávez a nombre del FUT dijo que “luego del éxito total de la huelga preventiva decretada por el Frente Unitario de los Trabajadores, el gobierno debe derogar las medidas económicas expedidas recientemente” (*El Comercio* 1982y7, 10). Por su parte la CTE

protestó enérgicamente por el allanamiento del local de la Asociación de Trabajadores y Empleados de la Empresa Eléctrica Quito que se produjo en la mañana del día 21 de octubre. Los dirigentes denunciaron que en el operativo fueron detenidos veinte trabajadores (El Comercio 1982a8, A-10). También se hizo público que —nuevamente— Telmo Hidalgo había sido apresado “mientras estaba en las proximidades de la Fábrica La Internacional, pero luego fue puesto en libertad” (*El Comercio* 1982a8, 10). El CFP por su parte denunció que su sede en Guayaquil había sido abaleada mientras sus militantes participaban en el Paro (El Comercio 1983y8, A-3).

En declaraciones para la Revista Nueva, José Chávez dijo:

Incesantemente acusada de conspirar contra el gobierno, la dirigencia sindical del país se puso al frente de una protesta popular de magnitudes sin precedentes en la historia reciente del país. Las explicaciones oficiales de que “si en 1981 tuvimos que enfrentar una guerra con el Perú, hoy, en 1982, enfrentamos una guerra económica”, poco pudieron ante los reclamos de las clases populares, cuya economía será, sin duda alguna, la que sufrirá los mayores impactos de las últimas disposiciones gubernamentales.

Meros testigos de un endeudamiento externo cuyas consecuencias son los primeros en pagar, los sectores de más bajos ingresos ven diluirse, hoy más que nunca, las promesas electorales que el partido gobernante hiciera cuando se inició el régimen democrático.

Si el gobierno aduce haber utilizado recursos previstos por la Constitución para la adopción de las últimas medidas económicas, también las clases trabajadoras pueden rescatar la Carta Fundamental y los derechos que ella les concede para legitimar su protesta (*Revista Nueva* 1982a, 22).

Edgar Ponce, por su parte, “Convocó al pueblo a desconocer las medidas del gobierno y sumarse a los actos organizados por las centrales sindicales nacionales aglutinadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), hasta obtener la derogatoria” (*El Comercio* 1982d8, 10).

Juan Pablo Pérez Sáinz, en su libro *Clase obrera y democracia en el Ecuador*, hace una lectura de las razones por las cuales este paro se convirtió en la “coyuntura socialmente más explosiva del Ecuador en los últimos años” (1985, 114). Pérez Sáinz explica que el nivel de lucha que se alcanzó, tiene —para él— una múltiple significación: “La profundización de la crisis comenzaba a perfilar la contradicción principal de la sociedad ecuatoriana. Las medidas gubernamentales exasperaron a amplios sectores de trabajadores incorporándolos a una oposición activa y manifiesta al ataque del capital” (Pérez Sáinz 1985, 116). Al tiempo que

coincide con Dalton Burgos (1983, 31), al concluir que el “alto grado de movilización popular alcanzado desplazó la contradicción entre el gobierno y derecha, sobredimensionada en el plano político por el protagonismo de Febres Cordero (PSC), y perfiló, como antagonismo principal, la contradicción entre gobierno y los llamados sectores populares” (Pérez Sáinz 1985, 116).

Por otro lado, la lucha de clases desbordaba el marco que había impuesto la democracia al conflicto social, erosionándose así la legitimidad del régimen representativo. Finalmente, debido al reflujo de la gran mayoría de los movimientos populares durante 1982, la protesta de diversos sectores de trabajadores se canalizaba a través del FUT que aparecía como el portador de los mismos (la convocatoria a la huelga del 21/10/82 se hizo en términos de “Paro Nacional del Pueblo”), sin que esto signifique una hegemonía efectiva del movimiento laboral (Pérez Sáinz 1985, 116).

El análisis que presentó Revista Nueva para cerrar año 1982, se enmarcó en el criterio general de que fue año de ascenso de la lucha social:

Las marchas y otras manifestaciones de protesta devienen hechos cotidianos, que van unificando la respuesta popular. Estudiantes, organizaciones barriales y otros sectores de base reconocen implícitamente la conducción del FUT, neutralizando los intentos gubernamentales de aislar al sindicalismo a través de insostenibles y alarmistas acusaciones de “desestabilización” o “conspiración” lanzadas contra ese frente laboral.

La “Marcha del Pueblo”, que tuvo sus expresiones más conflictivas frente al Congreso, dio pábulo a las autoridades para implantar el Estado de Emergencia en vísperas del paro nacional convocado para el 21 de octubre. Una vez más, se adujo la existencia de maniobras golpistas que, de haber existido, no tenían su origen en el movimiento sindical —como sugería el ministro Galo García— sino en una extrema derecha que el gobierno nunca ha enfrentado.

El 21 de octubre, a través de un paro absolutamente exitoso, marcó el hito más alto de la lucha popular en 1982, obligando a Hurtado a una revisión parcial de las medidas económicas y a ampliar sus propuestas de mejoramiento salariales (*Revista Nueva* 1982, 31).

Sobre los extendidos diálogos entre el gobierno y la dirigencia del movimiento sindical, Nueva dijo:

La disposición del Ejecutivo al diálogo con el FUT fue bastante simbólica. No porque faltaran contactos, sino por el tratamiento diferenciado que las autoridades dieron a las demandas de los empresarios y de los trabajadores. Los primeros obtenían prontas respuestas, a través de resoluciones de la Junta Monetaria o del Ministerio de Finanzas. En cambio, las

reivindicaciones laborales eran remitidas a un laberinto institucional, postergando definiciones del régimen (*Revista Nueva* 1982, 30-31).

Con la intención de amplificar la voz de las bases del movimiento sindical, se cierra este apartado con algunas de las conclusiones que el texto “Un pueblo en lucha...” recogió sobre el Paro:

El Paro del 21 de octubre fue la jornada de lucha más alta de los últimos veinte años. Tuvo fuerza porque fue fruto de la pelea que día, de rincón en rincón de la patria, ha venido sosteniendo el pueblo. En el paro se UNIÓ toda la lucha con un objetivo común: rechazar al Gobierno por elevar la gasolina. Montubios e indios, mestizos y blancos explotados, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, costeños y serranos, obreros y campesinos, todos juntos estuvimos peleando en todo el país.

Cada grupo del pueblo sabe cómo pelear. Y todas las formas de lucha también se unieron en esta gran jornada. El paro Cívico que ha tomado fuerza en Chone, Santa Rosa y otros, se unió a la huelga obrera; la agitación callejera de los pobladores y estudiantes se unió a la manifestación popular; las barricadas de palos y llantas se unió al mitin relámpago. Estas fueron las formas de lucha que se adoptaron en todas partes. Así luchamos, y así logramos realizar jornadas combativas, qué hicieron temblar a los ricos. Ni siquiera los soldados nos asustaron.

Nos unimos porque teníamos un objetivo común: rechazar al gobierno, rechazar sus medidas antipopulares. En nuestra conciencia estaba claro quién era el responsable: Hurtado. Y este contaba con el apoyo de los gringos, los militares, los politiqueros y todos los ricos.

El FUT estuvo bien cuando se puso a la altura de la lucha y actuó oportunamente sin demora. Pero cuando confío en los partidos de “centro”, cuando confío en los diálogos, cuando se retrasó de la lucha y comenzó a desmovilizar a las bases, allí se debilitó.

Todo esto porque hay sectores del FUT que tienen el cuco del golpe de estado (CEDOC-CEDEP 1983, 47-48, [las mayúsculas pertenecen al original]).

7.12.1. Muertos y heridos

Tal como reconoce Manuel Chiriboga (Chiriboga 1982, 8), nunca se supo con exactitud las cifras de muertos y heridos. Pese aquello en este apartado se recogen todas las menciones que hay sobre el tema, en las fuentes revisadas.

El folleto producido por la CEDOC-Socialista y el CEDEP (1983), coincide con la cifra que dieron Dalton Burgos (1983) además de Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz, es decir, 5 fallecidos durante los acontecimientos del día que duró el Paro Nacional del Pueblo.

Ni Burgos, ni León & Pérez Sáinz mencionan nombres, mientras que “Un pueblo en lucha...” y El Comercio, mencionan el nombre del joven René Córdova Romo cercano al PCMLE. Quien, según El Comercio, habría muerto casi en el acto, producto de un impacto de bala en su cabeza, en el marco de los enfrentamientos con la policía en el Sector de San Blas, en el extremo norte del centro de Quito (1982x7, 2). Se pudo encontrar su nota fúnebre en diario El Comercio del domingo 24 de octubre, misma que se transcribe a continuación.

El eximio maestro y estudiante

René Raúl Córdova Romo

Ofrendó su vida a la patria

Su madre, Amada Pastoriza Romo Vda. de Córdova; sus hermanos: Julio César, Nelly, Ángel Olmedo, Nilo, Teresa y Bolívar Córdova Romo; sus hermanos políticos: Ana Maldonado, Manuel Taco y Ángel Saltos; sus tíos, primos, parientes y amigos profundamente consternados por este doloroso suceso participan al pueblo ecuatoriano su fallecimiento acaecido el día 21 de octubre de 1982. E invitan a la misa que se celebrará en sufragio de su alma en la iglesia de San Blas el día martes 26 de octubre a las 10h00 (*El Comercio* 1982t8, 6, [las negritas pertenecen al original]).

El martes 26 de octubre se celebró también, además de la misa de René, una misa campal en memoria de los caídos, organizada por el FUT, la misma que no pudo concretar su objetivo de realizar una marcha hasta el cementerio de San Diego, pues fue fuertemente reprimida por la policía nacional (*El Comercio* 1982u8, A-6).

Además de René, habrían muerto en la provincia de Los Ríos, según la CEDOC y CEDEP: Eusebio Obando García y Humberto Vera Navarrete, caídos en enfrentamientos con terratenientes durante el paro (1983, 33). Este dato fue confirmado a través de una noticia en El Comercio, aparecida el sábado 23 de octubre de 1982:

La primera víctima fue el joven Eusebio Obando García quién el martes participaba de una manifestación que, a su pasó, atacó a la piladora de Guillermo Torres Sotomayor desde dónde se hizo disparos.

El cadáver de Obando fue velado en Ventanas y al día siguiente cuando iba a ser enterrado, el féretro pasó por la mencionada piladora, mientras los acompañantes lanzaban gritos

enardecidos contra los dueños, escuchando se entre otras cosas: “asesinos... Aquí va tu víctima”.

En estas circunstancias, hubo nuevos disparos, uno de los cuales impactó a Humberto Vera Navarrete, de 28 años, quién era uno de los que llevaba en hombros el cofre mortuario y fue herido en la cabeza.

Familiares de Vera Navarrete lo auxiliaron y aún con vida lo trasladaron a Guayaquil al hospital Luis Vernaza, en donde los facultativos únicamente pudieran constatar que ya en el trayecto había dejado de existir (*El Comercio* 1982i8, 7).

Según Patricio Ycaza, además de René, cayeron durante el paro, “Patricio Altamirano Vaca, Marlon Castillo Mora” (1991, 279). Con quienes se completaría la cifra de cinco muertos que se mencionaba constantemente sobre todo por parte de los autores vinculados a las luchas sociales.

La muerte de Marlon Castillo Goya pudo ser confirmada a través de una pequeña nota de prensa en la que —según *El Comercio*— el gobierno informó oficialmente que las manifestaciones dejaron un saldo de dos muertos, uno en Quito, René Raúl Córdova Romo y en Guayaquil, Marlon Castillo Goya. Al anunciarse estas muertes, supuestamente, se desmintieron otras: “De esta forma quedaron desmentidas las versiones propaladas en el sentido de que el número de víctimas por los actos de protesta fue mayor que el señalado oficialmente” (*El Comercio* 1982n8, 8).

La muerte de Altamirano, también se confirmó, pues según recogió *El Comercio* “Moradores de Conocoto denunciaron también que Luis Altamirano Vaca de 17 años, murió al ser alcanzado por una rampa de metralleta disparada desde un vehículo militar que realizaba patrullaje en esa zona” (*El Comercio* 1982p8, B-8). Este incidente nunca fue reconocido oficialmente.

Además, habría que mencionar dos muertes más relacionadas con el Paro. En primer lugar, el lamentable fallecimiento de la señora Bélgica Torres, en el marco de un ataque a un bus de la cooperativa San Francisco por parte de manifestantes en el kilómetro 28 de la vía Guayaquil Milagro, donde el transporte colectivo se volcó, dejando además cinco heridos (*El Comercio* 1982s8, 9). En segundo lugar, Luciano Córdova Guerra de Quito, que según la Revista *Vistazo* “cayó en una manifestación” (*Vistazo* 1982, 12).

En la Provincia de Imbabura se reportaron en el folleto del CEDEP y fue confirmado por *El Comercio* 9 personas heridas (*El Comercio* 1982w7, 2). En Esmeraldas según *El Comercio*, se

reportaron 20 heridos (*El Comercio* 1982e8, 11). Paradójicamente, Este mismo diario el domingo 24 de octubre, mencionaba una cifra total de 20 heridos en todo el país (*El Comercio* 1982p8, 8).

Otro grupo de heridos se registró en la provincia de El Oro: “más de 5 dirigentes del FUT heridos de bala durante una Asamblea Popular” (CEDOC-CEDEP 1983, 35). En Manabí, acorde con los niveles que alcanzó la protesta se detuvieron a 30 personas y se instauraron varios juicios penales (CEDOC-CEDEP 1983, 39).

El departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional informó que durante las manifestaciones fueron heridos de bala tres policías que recibieron atención en el policlínico de la institución (*El Comercio* 1982p8, 8). Esto de un total de 10 policías fueron atendidos por distintos tipos de razones (*El Comercio* 1982s8, 9).

Otro de los heridos casuales de la jornada de lucha social, fue un miembro de la Embajada de la República Popular China, el ayudante del Consejero Comercial de la misión diplomática, fue herido cuando circulaba en un carro oficial cerca de la Universidad Central (*El Comercio* 1982h8, 2).

En su edición del sábado 23 de octubre, *El Comercio* informó sobre 172 personas detenidas en Quito, “varias de ellas por causar daños a la propiedad privada” (*El Comercio* 1982p8, B-8); dato obtenido de un informe hecho por parte del Intendente de Policía de Pichincha Hugo Salvador Cruz.

Otra de las acciones represivas, en el marco del estado de emergencia fue la suspensión por ocho días de dos radios: Radio Noticia de Quito y Radio Centenario de Guayaquil, esta última sancionada por permitir la intervención del abogado Abdalá Bucaram del Movimiento Roldosista Ecuatoriano (*El Comercio* 1982o8, 8). Mientras que la radio quiteña fue sancionada por:

De acuerdo con la información oficial como la emisora quiteña venía realizando programaciones noticiosas con intervenciones directas de ciudadanos, lo que fue aprovechado por algunos para insultar al Presidente de la República e incitar a cometer atentados contra el primer mandatario y a organizar movilizaciones contra la estabilidad del régimen (*El Comercio* 1982o8, 8).

Finalmente el valioso folleto “Un pueblo en lucha...”, señala que existió dentro de la policía y el ejército algunos elementos que respaldaron el paro (CEDOC-CEDEP 1983, 30).

7.12.2. El repliegue

El sábado 23 de octubre El Comercio informó en uno de sus titulares de portada que:

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) desistió de realizar a partir del lunes una nueva huelga nacional y el presidente de turno, José Chávez dijo que se convocará a una convención nacional de los organismos que integran el frente para que señalen la fecha para otra “jornada de protesta” contra medidas económicas adoptadas por el gobierno (*El Comercio* 1982g8, 1).

Este aplazamiento, que fue resuelto por el Comité Ejecutivo del FUT (*El Comercio* 1982i8, 2), fue el primero de una larga lista de ambiguas declaraciones. La tan anunciada huelga indefinida, nunca se llevó a cabo. Chávez, no solo anunció ante los medios de comunicación, una nueva fecha tentativa, sino que dijo que tal huelga se podría anular si el Congreso Extraordinario procede a:

- Dejar sin efecto el incremento del precio de la gasolina en eliminación del subsidio al trigo;
- Atender los nuevos puntos de la plataforma coyuntural de las centrales obreras y,
- Levantar el estado de emergencia;
- Observar al Presidente de la República por la actuación del gobierno durante el estado de emergencia (*El Comercio* 1982g8, 1).

Telmo Hidalgo de la FTP dijo en El Comercio que el “Estado de emergencia no amedrentó a los trabajadores y que la huelga se realizó con fuerza, unidad y férrea decisión de lucha, contando con el respaldo y adhesión de todo el pueblo” (*El Comercio* 1982m8, 7).

La FTP, dijo, expresa su protesta por el asesinato de René Córdova y por la represión de las fuerzas policiales y del ejército contra los trabajadores como estudiantes y elementos del pueblo que fueron dejados, heridos, y apresados por centenares por su participación en la huelga nacional (*El Comercio* 1982m8, 7).

Vladimiro Álvarez por su parte acusó a los dirigentes del movimiento sindical, de haber alcanzado sus objetivos: “Pérdidas cuantiosas, por la baja tremenda de la producción nacional, muertos y heridos” (*El Comercio* 1982g8, 1). El Ex-Presidente de la República, Otto Arosemena Gómez renunció a su calidad de Presidente de la Comisión Multipartidista que buscaba una salida a la crisis política y económica, dijo que “la comisión se ha reducido a una acción de tipo lírico” (*El Comercio* 1982j8, 3). Por otro lado, una comisión mediadora de notables se autoconformó y se atribuyó a sí misma la función de mediar en el conflicto. Esta comisión estuvo integrada por el Cardenal Muñoz Vega, el expresidente Galo Plaza, el doctor

Juan Isaac Lovato, el periodista renegado de la izquierda Alejandro Carrión, el doctor Andrés F. Córdova y el legislador cefepista Galo Vayas, el impulsor de que se reestablezca la jornada de trabajo de 44 horas (*El Comercio* 1982k8, 3).

Uno de los militares que dirigía “una de las fuerzas castrenses más poderosas del país” (*El Comercio* 1982q8, 8) dijo:

La situación actual que vive el país exige que todos los Ecuatorianos arrimemos el hombro, nos impongamos de rigurosidad y, con la serenidad y seriedad del caso, ayudemos al gobierno nacional en la tarea difícil de orientar la economía”, dijo el comandante de la primera brigada de Infantería de El Oro, general Germánico Paredes Gómez, en declaraciones a los medios de comunicación (*El Comercio* 1982q8, 8).

Así se apagó el magnánimo esfuerzo de un gran grupo de fuerzas sociales que habían movilizado gigantescas cantidades de energía y recursos en todo el país, articuladas por el FUT. Al parecer, el paro “se fue apagando”, porque precisamente la incapacidad o falta de voluntad de los sectores que lo conducían, hizo que no se ejecute ninguna otra acción posterior. La energía de las dirigencias, se concentró nuevamente en buscar la negociación y ningún otro sector desafió con la suficiente fuerza este criterio. En síntesis, fue su inacción y falta de visión la que junto a un grupo de concesiones —que se verán en el capítulo que sigue— hizo que este estallido social se apagara de a poco.

Conclusiones

Este capítulo da por finalizado este trabajo y contiene tres apartados. Primero se realiza una rápida descripción de cómo se apagó el estallido social, que, siguiendo la lógica de investigación de los capítulos anteriores, tendrá su principal sustento en fuentes hemerográficas. En segundo lugar, se responde a la pregunta ¿Por qué el FUT no realizó la huelga indefinida?, pregunta central para la investigación, motivada no solo por la frustración recogida en las entrevistas realizadas y en los textos de la época; de hecho, esta precisa pregunta motivo, en buena parte, la realización de esta tesis. Finalmente, compilamos un grupo de reflexiones y conclusiones que se construyen desde el presente, en diálogo con lo que académicos y militantes de la época plantearon —en su momento— sobre el Paro Nacional del Pueblo.

Es importante antes de ampliarse, tener un punto de partida. Acertó en ello Manuel Chiriboga en diciembre de 1982, “La crisis económica lejos de evidenciar problemas superficiales, ponía al desnudo la fragilidad del modelo de acumulación en su conjunto” (Chiriboga 1982, 10). Esto junto a una crisis económica global y una transformación geopolítica de la misma escala, llevó a una gigantesca reestructuración de la economía ecuatoriana, bajo renovadas tesis provenientes del liberalismo.

A saber, a inicios de la década de 1980, empezó un brutal reajuste estructural de la economía y del Estado. Procesos que el movimiento sindical solo pudo reconocer en su magnitud, años más tarde cuando ya habían sacrificado buena parte de su capacidad organizada de reacción y de propuesta. Se debe recordar que, una vez concluida la década en la que el movimiento sindical encabezó desde la sociedad el rol de la resistencia, emergió —igualmente contra el neoliberalismo— un formidable movimiento indígena que desestabilizó las estructuras políticas y sociales del Ecuador. Un movimiento social que si tenía un proyecto distinto de sociedad y que acabó transformando parcialmente el destino del país.

Sin lugar a dudas, el movimiento sindical que aquí se estudia, contribuyó a la creación de una versión específica de la sociedad ecuatoriana, de su modo de producción y del modelo de gestión de la política para la década de 1980, es decir, ayudó a consolidar un proceso de democratización específico en el Ecuador en el marco de la democracia liberal-representativa. En este trabajo me remito a señalar este rol al tiempo que reconozco que las dirigencias, asumieron deliberadamente su rol como árbitros del conflicto capital-trabajo. Esto al tiempo que se les reconoce su innegable papel en la resistencia social, frente a la expansión del

neoliberalismo —un rol que nunca esbozo siquiera un proyecto de nueva sociedad y menos en los momentos que empezaba el brutal ajuste estructural de la economía latinoamericana— todo esto visto como una expresión de sus limitaciones políticas concretas. Es precisamente a través de esta ambigüedad que se debe estudiar al FUT.

Es así que, para el final del periodo de dictaduras militares, el movimiento sindical gestionaba una parte importante de *lo político* dentro de la sociedad ecuatoriana, entendido lo político como la posibilidad directa de representar y de influir en la toma de decisiones. Así lo leyó también Jaime Roldós y les entregó sendas consenciones y espacios de decisión.

Antonio Gramsci reconoce que en momentos excepcionales puede “suceder que la dirección política y moral del país en una determinada coyuntura no la ejerza el gobierno, sino una organización «privada», e incluso un partido revolucionario.” (Gramsci 2022, 97). No se afirma aquí que el FUT haya sido algo siquiera cercano a un partido revolucionario, pero sí que ejercía un alto grado de representación política, y para el momento del Paro del Pueblo, incluso más que la misma Cámara Nacional de Representantes. De hecho, este era el objetivo real de la dirigencia sindical durante el estallido: de alguna manera: suplantar a la cámara de representantes como —esporádicamente— lo habían hecho durante el régimen autoritario de los años setenta

En este trabajo, más allá del sentido crítico que lo impulsa, se reconoce en el movimiento sindical y sus organizaciones aliadas para la década del 80 del siglo XX, a un actor social que le plantó —desde sus condiciones e imaginarios reales— resistencia a este ajuste estructural. Esta capacidad de resistencia entraña una forma de acción de tipo colectivo que —de todas maneras— desafió a la ciudadanía liberal y su forma de acción individual. Esa que el sistema representativo y capitalista buscaba consolidar para funcionar en su plenitud.

Debe resaltarse además, que la capacidad organizativa de la base sindical, visible en la prolongada acción colectiva, que en contraste con el autoritarismo y burocratización de su élite, resulta fascinante. Por eso es preciso reconocer también, para aquel momento, la clara tensión entre formas democráticas de acción y organización y el modelo centralizado que finalmente se impuso y sigue vigente.

Así se apagó el estallido

En la cita que sigue de Manuel Chiriboga se encuentra un claro resumen de cómo y porqué se apagó el estallido social de septiembre y octubre de 1982:

pasada la explosión, el FUT quiso mantener la movilización popular en torno a las demandas más directamente obreras: alza de sueldos. El FUT había convocado para el Lunes 25 de Octubre una huelga general indefinida para lograr del gobierno y del parlamento la abolición de las dramáticas medidas, pero ésta poco a poco fue diluyéndose. Jugó sobre ello un doble tipo de factores: por un lado, el reducido carácter orgánico del movimiento social y la heterogeneidad de las reivindicaciones que en él se expresaron. Por otro, la fragilidad de la democracia hacía prever que una huelga general indefinida hubiese terminado con la caída del gobierno, con lo cual el movimiento sindical no quiso comprometerse (Chiriboga 1982, 32).

Se procede a partir de aquí, a desarrollar estos contenidos. Para partir, es menester recordar que el clima de confrontación social no se apagó una vez que las acciones del Paro del Pueblo habían concluido. Como ejemplo de esto, es preciso anotar que el 24 de octubre de 1982, fuerzas represivas allanaron nuevamente el local de la Revista Nueva, esta vez siendo todavía más claros sus fines de amedrentamiento (*Revista Nueva* 1982). Al día siguiente, el 25 de octubre de 1982, se denuncia una explosión de una bomba en contra de la residencia de Carlos Oquendo de la Universidad Central, quien como se mostró en el capítulo anterior, hacía fuerte oposición al gobierno desde sus espacios (*Revista Nueva* 1982).

Siguiendo la línea de tiempo y los argumentos propuestos por Jorge León y Juan Pablo Pérez, se reproducen los hitos que acabaron con la declaración hecha el 7 de noviembre por el movimiento sindical, en la que se anunciaba la suspensión definitiva de la tan mentada huelga indefinida. León y Pérez Sáinz, empiezan por afirmar que fue la fuerza del ataque contra los sectores populares a través de las dramáticas medidas lo que hizo que se cierren las filas dentro del FUT, “minimizándose las diferencias internas, como se mostró en la IV Convención” (León y Pérez Sáinz 1986, 117). Sin embargo, al no conseguir ni siquiera una ruta mínimamente convincente para volver efectivas las demandas de la plataforma de lucha de los nueve puntos, sin conseguir que se convoque al Congreso extraordinario y, sin que el auge de la lucha popular afecte visiblemente al gobierno y su posición, su propio repliegue le planteó al movimiento sindical una seria disyuntiva sobre cuál debería ser su siguiente paso.

Cuestión fue abordada en la nueva Convención celebrada el 27/10/82. En esta V Convención se plantearon dos posturas. La CEDOC y la CEOSL se pronunciaron por la celebración de una huelga indefinida hasta la satisfacción de las demandas formuladas, divergiendo sobre su fecha de inicio. (Para la CEDOC debía ser el 4/11/82 ganar tiempo al gobierno y para la CEOSL debía postergar si unos días para prepararla adecuadamente). Por su parte, la CTE, reflejando la posición del Partido Comunista, planteó la realización de una huelga de solo 24 horas argumentando el peligro de golpe de estado. La Convención resolvió la convocatoria de

una huelga indefinida para el 8/11/82 así como pidió la libertad de los detenidos, sanción de las muertes acaecidas en Quito y la destitución del Ministro de Gobierno (León y Pérez Sáinz 1986, 117-118).

Al parecer, para el Partido Comunista fueron más importantes sus posibilidades electorales que el acumulado social, fruto de la movilización del movimiento sindical.

A pesar de esta resolución, los comunistas presionaron y en un manifiesto a la prensa de la Unión Democrática Popular se pronunciaron en contra de la celebración de una huelga indefinida invocando la defensa del régimen democrático y el peligro de las posiciones “ultraizquierdistas”. Este pronunciamiento público hizo que se tuviera que celebrar una nueva convención el 6/11/82. Mientras tanto, ya levantado el estado de emergencia, se revisó —diferenciadamente— los precios de distintos tipos de gasolina, la CNR aprobó las alzas salariales y el gobierno, hábilmente, decretó un largo fin de semana los últimos días de octubre. Estos factores junto a las nuevas diferencias internas del FUT, llevaron a postergar, en esta VI Convención, la convocatoria de huelga. De esta manera se entró en un proceso de desmovilización generalizada (León y Pérez Sáinz 1986, 117-118).

Tal como lo concluyó Ibarra, lo que vino después del paro, mostró las claras limitaciones del movimiento sindical. Y como explicó en el capítulo quinto, Washington Espín, mostró claramente su falta de proyecto sobre una sociedad alternativa y además —lo que es todavía más grave— su incapacidad de producirlo.

Lo que vino después bien puede ser la crónica de una huelga indefinida anunciada y no realizada, porque el movimiento sindical al pasar al terreno de la lucha política directa, pierde cohesión interna. En primer lugar, José Chávez como presidente del FUT en Octubre, tiene canales de comunicación directos con el Gobierno, emerge como una figura crítica en tanto el movimiento sindical se ha ubicado en la escena como una fuerza que debe ser tomada en cuenta. En segundo lugar, el Partido Comunista, debilitado como estructura orgánica, ve un peligroso proyecto socialdemócrata en la importancia política que ha adquirido José Chávez, y cree necesario preservar un espacio de negociación con el Gobierno para lograr el reconocimiento de la ilegalizada UDP con miras a las elecciones del 84. En tercer lugar, las salidas políticas no eran claras con la huelga indefinida porque un Congreso Extraordinario resultaba incontrolable para el movimiento popular, incluso pensando en la posibilidad de que se sostuviera la movilización. La huelga indefinida se volvió un chantaje que terminó dirimiéndose en la dirigencia sindical, con la oposición del CEOSL y la CEDOC por realizar la huelga, y la CTE por evitar a toda costa supuesto de un golpe de estado reaccionario (Ibarra 1983, 80-81).

En la segunda página del diario El Comercio del día 25 de octubre, apenas cuatro días después de paro se encuentra una noticia que con el título “Que se le reconozca como partido pide UDP” (*El Comercio* 1982z8, 2). Donde se relata como René Mauge director de la Unión Democrática Popular y a la vez Secretario General del Partido Comunista “ha presentado al Tribunal Supremo Electoral, una vez que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el literal c) de la Ley de Partidos, una solicitud que se le reconozca como partido político” (*El Comercio* 1982z8, 2). La burocracia comunista, centraba —otra vez— su esperanza y atención en la institucionalidad burguesa, de la cual eran los más grandes defensores. Evitaban la huelga —según ellos— para no ser útiles a una desestabilización de la democracia. Esta explicación no deja de ser llamativa, por la paradoja que entraña.

José Chávez justificó la suspensión de la huelga prevista para el lunes 25 así al tiempo que le daba al gobierno tiempo para recapacitar:

La suspensión de la huelga nacional indefinida que estuvo prevista para el lunes pasado, según Chávez, estuvo encaminada a que las autoridades gubernamentales mediten en lo impopular de sus medidas y las deroguen, dado que han ocasionado un descalabro económico perjudicando a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano que soportan el alto costo de la vida (*El Comercio* 1982c9, 8).

El mismo día 25, el plenario de las comisiones legislativas permanentes aprobó en primer debate, los proyectos de tipo social. Es decir, los proyectos de ley para elevar los sueldos y salarios y generar compensaciones enviados por Hurtado (*El Comercio* 1982a9, 1). Al día siguiente, se aprobarían en debate definitivo. Frente a los 7.000 sucres que el FUT consideraba como un mínimo para sobrevivir en medio de la crisis, se dio el incremento de apenas 600 sucres mensuales. Así, el sueldo básico apenas alcanzó a los 4 600 sucres. Para quienes ganaban hasta 8 000 sucres hubo una compensación de 800 sucres por el costo de la vida. Además de una compensación de transporte que se calculaba en base al precio oficial del pasaje urbano, mismo que se multiplicaba por “4 y por 20” (*El Comercio* 1982b9, 1). Calculando el alza con los precios de la época, ese beneficio alcanzaba un total de 240 sucres al mes. También se aprobó una controvertida medida que decretó la estabilidad laboral de los trabajadores durante dos años (*El Comercio* 1982b9, 1).

Entre los sectores populares, este conjunto de medidas se interpretó de una manera sumamente ambigua, pues, aunque se había conseguido un incremento este era mucho menor al que solicitaba el FUT. Sumando todos los rubros, el total era de 5640 sucres, es decir 1340

menos que lo reclamado por el movimiento sindical, que como efecto de estas concesiones gubernamentales, se iba quedando sin discurso.

Ante esto y como finalmente se habían revisado las medidas, el FUT convocó una Convención Nacional, la Quinta para el 27 de octubre de 1982, a la que asistieron representantes del Comité del Pueblo, ECUARUNARI, FEUE Nacional, Asociación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador, Unión Nacional de Periodistas, Unión Nacional de Educadores, Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, Federación de Cooperativas Agropecuarias del Litoral, ACAE, Federación de Profesores Universitarios, Federación Nacional de Comerciantes Minoristas, Federación de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana, Federación Nacional de Médicos y federaciones provinciales y cantonales de los trabajadores del país (*El Comercio* 1982c9, 8). Se reunieron buena parte de los sectores organizados y activos de la época. En esta convención se resolvió realizar una huelga indefinida para el 8 de noviembre.

Ernesto Albán, Secretario Nacional de Información Pública dijo que una “Huelga indefinida es una conspiración contra el país” (*El Comercio* 1982e9, 2). Acusó —sin ambages— al movimiento sindical de golpista, preguntando sobre el significado de la huelga indefinida “y señaló que en 50 días le hacen tres huelgas a un gobierno constitucional y recordó que en 10 años de gobierno dictatorial hubo dos huelgas” (*El Comercio* 1982e9, 2).

Como si el alza de sueldos fuera poco para dejarle sin conflicto movilizador al movimiento sindical, el miércoles por la noche, al levantar el Estado de Emergencia, Hurtado anunció una baja en los precios de la gasolina. De 28 sucres por galón, la gasolina corriente costaría 20 sucres; la gasolina especial de 33 se redujo a 30 y le subió 2 sucres a la Super, hasta 40 sucres por galón (*El Comercio* 1982d9, 1). Incluso César López, quien era miembro del sindicato de la emblemática ensambladora BOTAR ese momento, leía, en la concreción parcial de sus demandas, un triunfo frente al gobierno y también frente a la dirigencia del FUT. El Presidente Hurtado, expuso su objetivo con esta medida: “Aspiro a que estas decisiones contribuyan a pacificar el país; que a partir de hoy volvamos todos los Ecuatorianos a las tareas cotidianas para beneficio de la patria y para la consolidación del sistema democrático” (*El Comercio* 1982d9, 1).

El viernes 29 de octubre, terminó el paro de los transportistas, ellos sí consiguieron la totalidad de lo que habían exigido: el pasaje para el transporte urbano se fijó en 3 sucres, con la respectiva alza para el transporte interprovincial (*El Comercio* 1982f9, 1).

El mismo viernes 29, Edgar Ponce a nombre de la CTE daría una rueda de prensa en la que se deslindaba del llamado a huelga indefinida en los siguientes términos:

La decisión expresó, fue de “realizar la huelga general de los trabajadores y el paro nacional del pueblo, desde el 8 de noviembre próximo, facultando a la dirección Nacional del FUT el momento en que debe suspenderse de acuerdo a las circunstancias”.

Ponce señaló que esta resolución fue recogida por consenso durante la quinta convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores.

Reitero que esta decisión fue tomada por la derogatoria de las medidas de económicas relativas al alza del precio de la gasolina y la eliminación del subsidio de trigo la atención a los 9 puntos del FUT y la separación del ministro de gobierno, Galo García, entre otras cosas (*El Comercio* 1982g9, 2).

Ese día, hábilmente el gobierno decreta un largo feriado para el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de noviembre (*El Comercio* 1982i9, 2), decisión que ayudó a calmar aún más los ánimos y permitió asimilar y procesar tanto las medidas como los aumentos de sueldos y la reducción del precio de la gasolina.

En Machala y Guayaquil, las protestas continuaron durante varios días después de terminado el Paro al punto que un bus fue incendiado y tres estudiantes fueron detenidos (*El Comercio* 1982h9, 10).

Vistazo continuó con su insistente discurso sobre la necesidad de recortar el gasto público. En su principal editorial del 5 de noviembre, indignados atacaban sin piedad las pequeñas concesiones que Hurtado había hecho a los sectores populares:

Presionado por la movilización popular en contra de las últimas medidas económicas dictadas por el ejecutivo, el plenario de las comisiones legislativas de la Cámara Nacional de Representantes, ha reincidido en la aprobación de normas legales atentatorias contra la estabilidad económica y social de la república. La elevación nominal de sueldos y salarios, si bien aparentemente fundada en plausibles intenciones de beneficio popular, como lo fuera la que se decretó en 1979, no hará sino acrecentar el proceso inflacionario en perjuicio de la enorme mayoría de trabajadores no asalariados, y aún en la de estos mismos, porque significará una disminución progresiva del valor adquisitivo de sus remuneraciones (...).

Complementariamente, la aprobación de un nuevo periodo de estabilidad forzosa para todos los trabajadores, que altera los principios básicos de la relación obrero-patronal, se añadirá a los múltiples factores que restringen las posibilidades de creación de nuevas fuentes de trabajo, precisamente cuando ellas son más necesarias que nunca, como único medio para

aliviar las tensiones sociales y la postración de la economía. Por último, al haber vuelto a “congelar” los precios de algunos productos agropecuarios e industriales a los que se denomina “de primera necesidad”, se ha condenado el país al desabastecimiento de ellos a muy corto plazo, y se ha dado un paso más en el proceso de destrucción de su sistema productivo (*Vistazo* 1982, 5).

Finalmente el sábado 6 de noviembre en la Sexta Convención Nacional del FUT, realizada en Quito, se tomó la decisión de suspender todo llamamiento a huelga. El domingo 7 de noviembre se anunciaba en los principales titulares de la prensa que “En forma indefinida quedaron postergados la huelga nacional anunciada para mañana por el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, así como el paro decretado por la Unión Nacional de Educadores” (*El Comercio* 1982j9, 1). Se decía también que “La decisión, adoptada por separado por las dos agrupaciones fue tomada ayer tras sesiones prolongadas de sus directivas nacionales” (*El Comercio* 1982j9, 1). José Chávez bajaba el tono y ya no mandaba a meditar a las autoridades “Chávez manifestó a continuación que el FUT no condicionará en momento alguno el diálogo con el gobierno y que solo buscará la atención a los pedidos de las bases” (*El Comercio* 1982j9, 1).

Alejandro Carrión, un editorialista renegado de la izquierda ecuatoriana, se toma dos páginas en la edición del 19 de noviembre de 1982 de la Revista *Vistazo*, para ensalzar la mano dura de Hurtado que había logrado la rendición de los trabajadores, a través de un convenio. La tesis de Washington Espín sobre la huelga usada como mecanismo de *especulación política* quedó demostrada. Es decir, en palabras simples, el sindicalismo pedía mucho, para recibir algo:

En el diario EL COMERCIO, del domingo 7 de noviembre se publicó el convenio entre el Ejecutivo y el FUT. Nunca se dio cosa igual. Las sedicentes superpoderosas organizaciones polisindicales obreras abandonaron todas sus posiciones: se rindieron en toda línea mientras del ejecutivo no cedía en un solo punto. Inclusive un detalle muy curioso: acordó una rebaja de 3 sucres en el galón de gasolina "corriente" y al mismo tiempo anunció la próxima suspensión de la producción de tal tipo de gasolina, mientras subía la de 92 octanos.

En forma expresa el gobierno dijo NO, en forma total y definitiva a los 5 planteamientos del FUT arriba indicados: NO revisaría los salarios, NO derogaría el alza de la gasolina, NO derogaría la supresión del subsidio del trigo, NO retiraría los nuevos de impuestos y NO revisaría los nuevos pasajes del transporte masivo.

Nunca un gobierno dijo NO con voz más llena y con más absoluta resolución: sin regresar a ver las consecuencias NUNCA revisaría el paso que haya dado, la medida que haya tomado.

Pero, al mismo tiempo, fue extrañamente pródigo en ofertas al FUT, le ofreció mil cosas que el FUT nunca había pedido. A la sombra de la total rendición del FUT, casi sin que se fijen en ella, la UNE, su compañera en la huelga general indefinida, se rindió también y para ella sí hubo ofrecimiento alguno (Carrión 1982, 26).

Aunque Carrión menciona que el supuesto convenio había sido publicado por el diario El Comercio del día domingo 7 de noviembre de 1982, esa edición ha sido revisada en su totalidad para esta investigación, así como las ediciones de los días anteriores y posteriores, sin que se haya encontrado tal cosa. Puede ser que se publicó en un suplemento que no consta dentro de los archivos que se usaron para este trabajo. Al ser domingo esto es probable; también puede ser que el autor equivocó su cita o que simplemente estaba inventando. Aunque, se debe reconocer que en los números anteriores se describen los sendos diálogos entre el FUT y el gobierno y allí se mencionan en ámbitos cercanos a lo que a continuación se expone. Es preciso recalcar que la fuente a la que se refiere Carrión, no fue hallada en el curso de esta investigación. Por tanto, se deja claro que solamente según Alejandro Carrión, estos son los puntos del convenio que motivo al FUT a abandonar en noviembre de 1982 su planteamiento de huelga indefinida:

- Revisión, con delegados del FUT del flamante Código Agrario.
- Reforma de la Ley de Fomento Agropecuario, de conformidad con lo que el FUT ha pedido ANTERIORMENTE: se trata de una vieja reivindicación del Partido Comunista, la supresión de los artículos que prohíben la invasión de haciendas. Nunca la pidió el FUT en esta oportunidad.
- Deliberar, con el FUT, sobre un tema novedoso: la estatificación de la comercialización del cacao, del café y del arroz: otra indicación del Partido Comunista.
- Formular, de acuerdo con el FUT, un plan de acción contra la subida no autorizada de precios.
- Emitir un decreto autorizando a los sindicatos miembros del FUT a usar de acción popular denunciar la especulación. (Esto parece chiste: todo el mundo tiene derecho a hacer esa clase de denuncia, no es absolutamente necesario el decreto).
- Emitir un decreto permitiendo que los empleados y trabajadores del IETEL, de los Correos y la Empresa Ecuatoriana de Aviación se encuadran en el Código de Trabajo: actualmente se los considera servidores públicos

- Expedir leyes en favor de las comunas, en defensa del consumidor y persiguiendo el enriquecimiento ilícito. Se trata de las leyes que fueron retiradas, tras mucha censura en diversos ámbitos de la nación.
- Hacer efectiva la jubilación de la mujer a los 25 años de trabajo.
- Autorizar el reingreso trabajo de los empleados y obreros del IETEL que separó este mismo Gobierno a raíz de la huelga de 1981.
- Instalar un servicio de trolley-buses en Quito para el transporte colectivo. Se trata de una fantasía como el monorriel en Guayaquil.
- Posible — fíjense bien: posible— creación de nuevas cooperativas de transporte urbano y rural con liberación aduanera de la importación de buses. ¿No se ha hecho esto ya repetidamente?
- Conceder al FUT un delegado en el Consejo Nacional de Tránsito.
- Control de las actuales cooperativas de transporte para evitar abusos.
- Estudio de las posibilidades de subsidiar el transporte de los escolares y menores, algo que se ha ofrecido mil y una veces: inclusive se creó ya un subsidio que debería cobrarse en las escuelas y que nunca fue pagado.
- Acelerar la resolución de los conflictos laborales en trámite.
- Enjuiciar a los posibles autores de la muerte a bala de los ciudadanos que cayeron el jueves negro (Carrión 1982b, 26-27).

Está claro que la posibilidad de ser intermediarios del conflicto entraña también la posibilidad de administrar las concesiones alcanzadas. Y tal como dijo Washington Espín, esta posibilidad de ser el actor de la redistribución de las dádivas, los contactos y los recursos; todo en medio de una relación jerárquica de poder, que da prestigio, genera lealtades y — sobre todo— afirma la autoridad de quienes lo ejercen. La aceptación de esta clase de convenios, deben ser analizados bajo esta perspectiva.

Así, el estallido social había terminado, un nuevo diálogo entre la dirigencia del movimiento sindical y el gobierno conseguiría pequeñas mercedes, sin que estas se correspondan con la intensa inversión de energías y las vidas que se tomó el Paro. Ante el fracaso de las medidas económicas y también de los extendidos diálogos, además del agudizamiento de la crisis económica, en marzo de 1983 se decretaría una nueva huelga nacional de dos días. El punto más alto en la capacidad de movilización del FUT fue, sin duda, el Paro Nacional del Pueblo, a partir de allí empieza para esta organización una larga y lenta caída que todavía no ha

terminado al momento en que se publica este trabajo. Debe decirse que incluso en su rol de aglutinador de la protesta es reemplazo en la década de 1990 por el movimiento indígena.

¿Por qué el FUT no realizó la huelga indefinida?

En primer lugar, no se logró en la práctica sumar orgánicamente a otros sectores, los mismos que acabaron aprovechando la convocatoria del FUT a la quinta y sexta huelgas, para impulsar sus demandas dentro de sus propios ámbitos y necesidades. Frente a la confusión generada por las concesiones parciales que hizo Hurtado, se quedaron literalmente sin respuesta y sin un direccionamiento concreto por parte de la dirigencia, esto por “el reducido carácter orgánico del movimiento social y la heterogeneidad de las reivindicaciones que en él se expresaron” (Chiriboga 1982, 32). Hernán Ibarra concluyó que “el movimiento sindical al pasar al terreno de la lucha política directa, pierde cohesión interna” (Ibarra 1983, 80) y tampoco logra generar un nuevo discurso peor una nueva respuesta.

La dirigencia sindical que tenía como bandera de lucha real el alza salarial, se fue quedando sin apoyo y legitimidad frente a otros sectores. Lo que hizo que se replieguen hacia demandas estrictamente laborales para después simplemente *darle un respiro* al Presidente Hurtado. Lo que derivó en “un proceso de desmovilización generalizada.” (León y Pérez Sáinz 1986, 117).

Si bien la búsqueda explícita de la dirigencia sindical era derogar las dramáticas medidas, el movimiento sindical buscaba conseguir esto, al mismo tiempo que consolidar un rol de intermediario, frente al Estado y al conjunto de los actores políticos. De hecho, el sindicalismo retomó temporalmente —durante el mes que duró la explosión— el espacio que ya había ocupado durante la reciente dictadura militar; eligió el camino de incidir en la institucionalidad hasta hacer que esta ceda ante sus demandas. Esta estrategia falló por completo, no solo porque las dimensiones de la crisis no hacían probable la salida que ellos proponían sino —y sobre todo— porque las presiones de las élites locales e internacionales dejaron al Gobierno sin reales alternativas de reacción.

En las plataformas de lucha no se expresaba una propuesta integral para el cambio de la sociedad, sino la trasnochada exigencia de una reconfiguración de la institucionalidad, hacia una especie de Estado de Bienestar que administraría los negocios más rentables del país para después redistribuir esa riqueza. Según las ingenuas demandas del *sindicalismo clasista*, el Estado debía ser capaz de garantizar una distribución más igualitaria de la riqueza, a través de servicios y subsidios. Ellos debían ser los gestores de este modelo y por tanto los representantes del pueblo, de todo el pueblo.

Como ya se dijo, movimiento sindical, no solo carecía de un proyecto político enfocado en una transformación radical de la sociedad, sino que además era incapaz de producirlo. La huelga indefinida se volvió un chantaje (Ibarra 1983, 80) usado recurrentemente en la búsqueda del rol de intermediario de la política que buscaba ávidamente la dirigencia del movimiento sindical. Chantaje que —al no concretarse— dejó de ser efectivo al poco tiempo.

El fantasma del golpe

Es importante considerar que el miedo a un golpe de Estado, colocado en el debate por el FUT para no ampliarse hasta la huelga indefinida, no era de ninguna manera una fantasía sin sustento. Es, de hecho, mucho más que una justificación. Una de las razones que efectivamente motivaron a los dirigentes sindicales a contenerse frente a la posibilidad de decretar una huelga indefinida tenía mucho sustento.

Pepe Chávez, quien fuera el presidente de turno del FUT durante los días del estallido, le dijo a Juan Pablo Pérez Sáinz a principios de la década de 1980 que “la democracia no había hecho nada por los trabajadores” (Pérez Sáinz 1985, 9). Pero pese a esto, como concluye Manuel Chiriboga fueron los trabajadores y la embajada norteamericana los que salvaron a la frágil democracia representativa a principios de esa década en Ecuador. Los sectores radicales de la derecha se mostraban —hasta el final del ciclo de protestas— dispuestos no solo a provocar la caída de Hurtado. Sino también a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias, sin que el miedo a un golpe de estado les pesara tanto como a los dirigentes sindicales. Ellos sabían que en dictadura o en democracia el Estado estaría a su servicio. Los choferes —por su parte— se salieron con la suya, de tal manera que los únicos que acabaron cediendo y deslegitimándose, para *salvar a la democracia*, fueron los dirigentes de los trabajadores.

El 26 de octubre el cable internacional trajo la noticia de la declaración del Señor Romberg del Departamento de Estado gringo según lo cual ellos esperaban "que estos problemas puedan ser resueltos dentro del contexto de las instituciones democráticas del Ecuador". Muchos dicen que fue lo único que paró el ruido de las botas; los más escépticos señalaban sin embargo que se esperaba otra oportunidad para dar el golpe. Aún más, el FUT principal aglutinador de las fuerzas populares no estaba decidido a derribar al gobierno; la democracia de mierda vale más que cualquier dictadura decía alguno de sus dirigentes.

Al regresar a su casa Osvaldo Hurtado pensaba las paradojas de su (mini) poder político en el Ecuador: los gringos y esos obreros de mierda eran los únicos que en definitiva le habían dejado quedarse en el puesto (Chiriboga 1983, 8-9).

El mismo Osvaldo Hurtado en una entrevista con Benjamín Ortiz de Diario Hoy publicada el 1 de enero de 1983, dijo sobre esto: “A pesar de que los paros fueron un error de los sectores laborales, el pueblo y las organizaciones sociales son el sector más lúcido. La dirigencia sindical cayó en cuenta de que el gobierno tenía razón al afirmar que estaban siendo instrumento y objeto de manipuleo antidemocráticos y reaccionarios” (CORDES 1984, 241).

Queda claro que varios sectores sindicales fueron persuadidos efectivamente por la posibilidad de un golpe de estado. Toman —otra vez— fuerza las palabras de Washington Espín recogidas en el quinto capítulo, sobre lo que se conoció en aquella época como el *fantasma del golpe*. Categoría que no solo daba muestras de la incapacidad del movimiento sindical para construir un proyecto político, sino que también les servía de justificación —junto con la supuesta falta de condiciones— para no radicalizar la lucha social. No había un horizonte real de cambio y en la democracia representativa ellos podían consolidar su rol de intermediadores de todo conflicto laboral.

En su descargo se debe también aceptar que existían, efectivamente, las ambiciones de algunos militares y de algunos sectores de la élite para retomar el poder mediante un golpe de estado. No se puede dejar de lado el hecho de que se había regresado a la democracia apenas tres años atrás. Es muy probable que varios grupos de oficiales no estuvieran muy contentos con la democracia y la pérdida de privilegios que esta les representaba. Sobre todo, cuando estos mismos personajes probablemente veían que en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile sus brutales dictaduras seguían en pie. Y que —de hecho— en Centroamérica, tanto las élites locales como el gobierno norteamericano, veían a las dictaduras, como una posible salida a la insurgencia armada de izquierdas. A inicios de la década 1980, Ecuador había compartido, con República Dominicana, el honor de ser los primeros países en volver a la democracia, después de la oleada de dictaduras que ensangrentaron a América Latina en las décadas anteriores.

Pero no solo se debe considerar lo dicho —que ya es bastante— en la entrevista realizada a Edgar Ponce, señaló que un coronel de nombre Luis Piñeiros le contactó —a través de un tercero— para ofrecerle la posibilidad de mancomunar esfuerzos para conseguir la salida de Hurtado. Y que —por supuesto— en un nuevo gobierno militar, las principales demandas del FUT les serían concedidas. Podría creerse que esta es otra de las justificaciones de Ponce para evitar la huelga indefinida, pero José Chávez en otra entrevista realizada para este trabajo, confirmó estos rumores y se ratificó en que la razón para no hacer la huelga indefinida de

noviembre fue la posibilidad de un golpe militar. En este marco, no deja de llamar la atención el hecho de que Galo García Feraud, en otra de las entrevistas realizadas para este trabajo, reconoció el nombre, la intención y la influencia del Coronel Piñeiros dentro del ejército. Incluso Washington Espín también recordó haber escuchado rumores sobre este asunto y sobre este oscuro personaje en específico. Luis Piñeros Rivera fue Ministro de Defensa durante el Gobierno de León Febres Cordero.

Por otra parte, Galo García Feraud también rememoró con sorpresa durante la entrevista, una reunión en la que un funcionario del estado norteamericano le citó para decirle que Estados Unidos no respaldaría, bajo ningún criterio, un golpe de estado en contra del gobierno de Hurtado. Todo esto solo confirma la tesis de Chiriboga, de que los *gringos* y los sindicalistas salvaron al gobierno de Hurtado. Es decir que había más de una posibilidad cierta para que el gobierno sea derrocado.

A saber, este *fantasma* no era tan irreal. Osvaldo Hurtado respondió así, tratando de no provocar demasiado a los militares, cuando Benjamín Ortiz le preguntó sobre cuántos golpes de estado habían sucedido:

No hay coctel, no hay reunión social en la que estén oficiales de las Fuerzas Armadas en que algunos civiles no traten de incentivar a la conspiración para el derrocamiento del régimen constitucional. Tecnócratas fracasados, políticos fracasados, hombres de negocios cumplen esta actividad con absoluta escrupulosidad y, a pesar de eso, las fuerzas armadas han sido absolutamente leales con el régimen constitucional (CORDES 1984, 240).

Reflexiones finales

Se ha reconocido con insistencia el rol del movimiento sindical en el proceso de resistencia social ante el embate del neoliberalismo. Se concluye que el Paro Nacional del Pueblo obtuvo su relativo éxito sobre todo en términos de movilización colectiva, gracias a la imparable presión de las bases sindicales. Esto implica poner atención también en los otros movimientos y sectores sociales que presionaron a la dirigencia del FUT para que tome decisiones sobre la marcha, rompiendo además de su parsimonioso ritmo que siempre buscaba el diálogo con el gobierno para capitalizar ellos, los dirigentes sindicalistas, cualquier posible reforma.

Siguiendo la línea de lo planteado por Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz (1986), se atribuye también parte de este éxito, al respaldo que los sindicalistas encontraron temporalmente en las organizaciones de choferes y, de manera más estable y leal, en las organizaciones de campesinos e indígenas. Esto es importante, pues hasta ahora la

consideración que se ha hecho a su participación en las huelgas de la década de 1980 y especialmente en el estallido social de 1982 es —a la luz de este estudio— injusta pues las organizaciones indígenas y campesinas ya empezaban a mostrar la potencia organizativa y la cohesión que les permitiría derrocar varios gobiernos durante la década de 1990. Solo Manuel Chiriboga recogió con suficiente claridad, no solo las diferencias y distancias que había con el movimiento sindical, sino su importante rol durante el estallido. Así mismo se debe reconocer que el folleto de la CEDOC y el CEDEP señala siempre y con claridad su presencia en la movilización.

En este mismo sentido, es preciso, al enfocarse en el movimiento sindical de esta época, observar las condiciones y necesidades reales que lo generaron y sostuvieron, antes que ahondar en las influencias teóricas y grandilocuentes justificaciones que alimentaron sus incendiados y vacíos discursos. Resultan llamativas y hasta ridículas las tomas de posición que, siendo radicales en el discurso, no se correspondían con su acción cotidiana. Condiciones y necesidades concretas que los llevaron a convertirse ciertamente en gestores de la lucha por una mejor y más amplia valorización del trabajo. En la práctica no serían más que otra parte más del engranaje del Estado gestionando el conflicto entre el capital y el trabajo, como ha dicho con tanta claridad Washington Espín.

Es así que en lo posterior este particular *sindicalismo* poco a poco se fue estableciendo como intermediario del conflicto, es decir, se fueron consolidando aquellos espacios en donde se lograban *conciliar* el trabajo y el capital de tal manera que la relación de explotación y producción pueda seguir ocurriendo muchas veces en mejores condiciones para los trabajadores. El *sindicalismo* ecuatoriano de la década de 1980, mirado a través de los enfoques planteados por Jelin y Balbi, buscaba convertirse en el gran *árbitro del conflicto*. Es decir, paradójicamente en la concreción de ese *deber ser* planteado por la Dra. Isabel Robalino Bolle para los sindicatos. Condición que conservan aún en estos días.

Además del abismo que existía entre el discurso y la acción real, se ve con más profusión una desconexión intencional, un desconocimiento o anulación intencionada hacia los incipientes elementos de insurrección obrera para privilegiar ante ellos la simple negociación de condiciones laborales que permitiesen continuar con la producción, naturalizando y aceptando la explotación. Desconexión e invisibilización de estas formas primarias de insurrección obrera que, en las fábricas ecuatorianas de principios de la década de 1980, desafiaban y cuestionaban desde sus formas autoritarias de disciplina hasta los niveles de explotación, tal

como lo han expuesto Marco Velasco y Washington Espín. Esta acción implementada intencionalmente por parte de la dirigencia sindical favoreció —otra vez— la consolidación de su rol como administradores del descontento (Jelin 1975, 29).

Edgar Ponce, reconoció para este estudio, que nunca volvería a tener, el movimiento sindical, un momento tan propicio como el Paro del Pueblo, para “tomarse el poder” (Ponce 2021). Pero es claro, que eso no estaba en su horizonte, al menos definitivamente no en el horizonte del Partido Comunista. La CEOSL que insistía en la huelga indefinida, y la CEDOC-Socialista —aunque en menor medida— estaban más decididas a llevar las cosas hacia una resolución de ese estilo. Como ha señalado con tanto acierto Hernán Ibarra, *tomarse el poder*, no se mostraba como una salida política clara, pues la esperanza de resolución permanecía puesta en la institucionalidad burguesa. Es decir, conseguir el llamado al Congreso Extraordinario fruto de la propuesta popular o al menos un grupo de concesiones por parte del Ejecutivo, escenario que dejaría a los dirigentes sindicales como héroes de la protesta social. De todas maneras, es más probable que esta aparente temeridad de la CEOSL y particularmente de José Chávez, tenga más relación con su propia ansia de poder, que con la intención de superar capitalismo o transformar las estructuras que sostienen la desigualdad. Pues los sindicalistas en general nunca aceptaron a la huelga de masas o huelga general como una posibilidad cierta de superar en fuerza a las élites y sus fuerzas de represión (estatales o no), menos como una herramienta para imponer una nueva forma de sociedad, como lo habían defendido y entendido Bakunin y Luxemburgo. Esta afirmación podría verse comprobada, cuando se observa como poco después se conformó el Partido del Pueblo, *el PP del Pepe*, con base en la CEOSL, mismo que, al no alcanzar una oportunidad real en la vía electoral, acaba siendo absorbido por el Partido Socialista del que —como denunció López en el capítulo 5— eran parte Chávez, Tatamuez y otros tantos dirigentes.

El análisis de Carmen Rosa Balbi para el caso del sindicalismo clasista peruano grafica a perfección esta dinámica, así el concepto “CLASISTA adquirió en el Perú un contenido particular. El poder colectivo, derivado de la solidaridad cotidiana para exigir ciudadanía no trajo aparejado una visión de poder que conllevará también la noción de control colectivo de los medios de producción” (Balbi 1989,183).

Se debe también tomar en cuenta que, para la época, el movimiento sindical estaba fuertemente influido y posiblemente condicionado por las burocracias internacionales de los partidos comunistas, que señalaban —olvidando deliberadamente su propia historia— la

necesidad de construir primero un partido de masas —éste sí— con la capacidad de hacer una revolución. La vieja disputa entre Lenin y Luxemburgo se había resuelto, por influencia de los burócratas, a favor del partido como condición fundamental para la revolución. Y esa tesis se volvía carne en el Ecuador, a través de la eterna cantaleta de que no existen las condiciones objetivas para la toma del poder, ni siquiera para la insurrección obrera, peor para un nivel de presión más alto, y menos para la revolución. En general no había espacio para cualquier otra cosa que no fuera la vía electoral o institucional.

En este marco y como reproducción de los modelos de *centralismo democrático* toda posición crítica era señalada como traición o reformismo. Incluso si la crítica se volvía desafiante sus emisores podían ser acusados de agentes de la CIA. El *sindicalismo clasista* y la izquierda en su conjunto renunciaron así a la posibilidad de hacer lecturas locales que permitieran, a su vez, establecer estrategias de lucha locales. Renunciaron a incidir de manera más eficiente a través de sus propias estrategias, en las decisiones políticas del Estado y en la cotidianidad de amplios sectores de la sociedad, muchos de estos especialmente receptivos a la búsqueda de mejores condiciones de vida y que —como deja claro el Paro Nacional del Pueblo— estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios para conseguirlo. Esta serie de renunciaciones intencionales o no, dejaban como único camino la disputa del poder a través de la vía electoral en la que siempre perdían.

Al mismo tiempo que sostenían y cuidaban la democracia burguesa y su *statu quo*, las dirigencias sindicales participaban siempre divididas en las elecciones, atacándose unas a otras, persiguiendo sin piedad a la disidencia y —más grave aún— sin reconocer a los sindicatos y el movimiento social alrededor de ellos, como su principal espacio de influencia en la política real.

Los partidos de izquierda aparentaban tener un rol central dentro del movimiento sindical. Tal como ocurrió en Perú, “El partido antes que ser soporte del proceso organizativo de los trabajadores, se entendió como depositario de un conjunto de verdades políticas a ser implantadas en la clase obrera” (Balbi 1989, 185). Lo que —a su vez— no obsta en el hecho de que sostuvieron un tipo de trabajo político, especialmente en el plano de lo cotidiano, que acabó construyendo un gran movimiento sindical capaz de enfrentarse al Estado y al poder real a principios de la década de 1980.

Los sectores sociales —y particularmente los editores de la Revista Nueva— fueron víctimas de un *espejismo* basado en el *mito de la clase obrera*, en el mismo sentido que plantea Carmen Rosa Balbi, para lo ocurrido durante la misma época en el Perú:

La terminología marxista y las categorías adquiridas tal vez difuminaron u ocultaron los objetivos del clasismo real. Se creó así el espejismo de que el movimiento obrero, en sus movilizaciones y medidas de fuerza — qué expresaban una nueva conciencia de oposición a la patronal—, era expresión superior de una conciencia socialista. A la asunción de dichas categorías ciertamente se sumaba una vaga denuncia del sistema, pero que no se concretaba en una dimensión de totalidad en tanto portadora de una concepción de sociedad alternativa, una meta hacia la cual la clase se mueve y en la que existe conciencia de que tiene un rol protagónico en un nuevo proyecto social (Balbi 1989, 183).

Se concluye entonces, considerando las experiencias de los movimientos sindicales en el mundo, incluida la del poderoso sindicato Solidaridad de Polonia que, en el marco de las relaciones de producción del sistema capitalista, los sindicatos —cuando se centraliza la decisión y se carece de un proyecto de sociedad— acaban ocupando indefectiblemente el rol de intermediarios en el conflicto entre el capital y el trabajo. Esto quiere decir que lo que se ha considerado tradicionalmente como un *fracaso* del movimiento sindical ecuatoriano y más específicamente del FUT, es en realidad un fracaso del modelo centralizado de organización social y particularmente del *clasismo*.

Solidaridad —aquel sindicato con niveles de acción, organización y movilización épicos— ese que en el marco de la Guerra Fría abrió la primera gran fisura en la Cortina de Hierro, acabó completando el ciclo de este fracaso. Esto aun cuando logró —una vez derrocado el *socialismo real*— poner a su líder Lech Walesa en la presidencia de la nueva república polaca. Bajo las normas de la democracia burguesa, su fracaso fue todavía más estrepitoso al no poder construir ni acercarse a la construcción de una sociedad más justa. Solidaridad puso en jaque la doctrina marxista, pues fueron los obreros industriales quienes a la larga organizaron a buena parte de la sociedad polaca, misma que acabó derrocando al socialismo autoritario en Polonia. Es decir, quienes debían ser los defensores y ejecutores de la revolución y el socialismo, fueron quienes desafiaron las estructuras de un Estado que existía bajo el estricto dominio del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ergo, el sindicalismo *per se*, como forma de organización centralizada sin proyecto de cambio puede incluso tomar el poder sin que ello devenga en una transformación.

Como planteó Felipe Burbano de Lara, siguiendo a Foucault, en una fascinante discusión con Patricio Ycaza: durante el estallido social que tuvo como clímax al Paro del Pueblo, el poder salió —por un momento— de su cauce institucional. Así, “En octubre de 1982 fue el pueblo que se apropió del poder, aunque en un hecho fugaz y transitorio” (Burbano de Lara 1985, 10). Este autor, así como Chiriboga e Ibarra, coinciden en que la reacción popular rebasó a las dirigencias sindicales. Y “Solo cuando la reacción popular rebasó a la dirigencia sindical, se produjo realmente un movimiento contestatario al poder central con amplia participación social” (Burbano de Lara 1985, 10). Sin este elemento la dirigencia se hubiera mantenido, probablemente hasta carecer de toda legitimidad, en un proceso de eterno diálogo que, como se vio, les dejaba siempre algunas migajas con las que se contentaban. De hecho, las dirigencias en los modelos centralizados en el marco del capitalismo existen para eso, para el diálogo y la negociación; en otras palabras, para la gestión del conflicto.

En septiembre y octubre de 1982, las acciones colectivas fueron creciendo espontáneamente hacia huelga de masas, lo que planteó también —y de inmediato— el problema de la organización, “Toda lucha conjunta de trabajadores que rebasa los objetivos inmediatos y estrechamente corporativistas, plantea el problema de las formas de organización de la lucha, problema que contiene en germen un desafío al poder capitalista” (Mandel 1974, 11), problema que fue resuelto gracias a la conformación de variadas formas de democracia directa territorializada. La lucha de clases desbordó definitivamente el marco que le había impuesto la democracia liberal y la dirigencia sindical. Cosa que los dirigentes nunca lograron entender. En el caso del Paro del Pueblo, las centrales sindicales fueron en ese aspecto también rebasadas por las mencionadas formas de democracia directa, comités ampliados de huelga, asambleas populares y demás que surgían sin ninguna orden vertical y que permitían poco a poco la incorporación de otros sectores sociales a la vertiginosa dinámica de la acción colectiva.

A pesar de esto, tal como sostuvieron Jorge León y Juan Pablo Pérez Sáinz, el FUT fue en ese momento el portavoz de esta reacción social y, por lo tanto, también del conjunto de necesidades y resentimientos que la provocaban. Cuando este portavoz no ofreció una salida política, ese poder que se había trasladado temporalmente hacia las calles y asambleas populares, volvió a su cauce institucional, tal como había ocurrido 38 años antes del Paro, con La Gloriosa.

Con este argumento, se insiste nuevamente, que la responsabilidad sobre el supuesto fracaso no puede ser colocada solamente en la dirigencia del FUT. Pues no existía ni otro proyecto político, ni otra posible forma de gestión del poder, ni siquiera en el imaginario de los miembros de las organizaciones políticas. No se había imaginado una forma alternativa para organizarse por lo que no existía tampoco una propuesta de sociedad alternativa.

La dirigencia del FUT lo único que quería, como afirmaron Juan Pablo Pérez Sáinz y Jorge León, es volver a ejercer el gran nivel de incidencia política que tuvo cuando no estaban legalizados los partidos políticos durante la época de la dictadura. Es decir, suplantar o al menos complementar el rol de los partidos políticos. En últimas, ampliar su capacidad de intermediación del conflicto, trascendiendo de lo laboral hacia lo político.

Los líderes carismáticos, las personalidades magnéticas y arrasadoras, como la de Pepe Chávez, Mesías Tatamuez, Edgar Ponce, Fausto Dután, Velasco Ibarra, Abdala Bucaram o Rafael Correa son recibidas y aceptadas por una matriz cultural que crea y busca mesías constantemente. Misma que no pudo ser superada y ni siquiera fue cuestionada por las izquierdas del Ecuador. Las organizaciones sociales se constituían, al igual que las instituciones del Estado, bajo ese mismo patrón vertical y autoritario.

Gonzalo Ortiz Crespo retrataba así esta dinámica en 1982:

Los ultrismos del país han ido recapacitando en los últimos años sobre sus excesos y estridencias. Como es sabido, el liderato del Partido Comunista, fuerza “conservadora” de la izquierda ecuatoriana, se ha erosionado continuamente en los últimos años, permitiendo el surgimiento de grupos y grupúsculos de todos los tamaños y colores. Pero ello no lleva necesariamente al ultrismo. Al revés: aunque la crítica de la izquierda al “PeCé” es que se ha anquilosado, los grupos se han configurado a su imagen y semejanza, y añoran un poder de movilización y una organización tan eficientes como los de su grupo madre (¡chuta madre!) (Ortiz Crespo 1982, 8).

Como ya se ha dicho hasta las más pequeñas críticas eran perseguidas. Y en una sociedad acostumbrada a esperar Mesías de carne y hueso (no necesariamente de apellido Tatamuez), los dogmáticos de la izquierda se habían puesto a esperar también su propio mesías. Que no era como hubiera querido Walter Benjamín, una revolución, sino ese partido de masas perfecto, capaz de cualquier cosa. Como se constató en una conversación con Juan Pablo Pérez Sáinz, toda la izquierda en ese momento veía al Estado como escenario de la resolución del conflicto.

Por lo expuesto, se insiste a manera de conclusión, en la idea de que el supuesto fracaso del movimiento sindical al no convocar la huelga indefinida, es el fracaso del conjunto del movimiento popular y de toda la sociedad, que no supo encontrar otro canal para consensuar sus necesidades y urgencias en un proyecto político. No se institucionalizaron diálogos, ni mecanismos de acuerdo entre un movimiento popular diverso, unido en la acción colectiva, capaz de disputar el poder y derrotar al Estado y las élites que lo controlan, para imponer un nuevo orden social. Todo esto a pesar de que se conformaron Comités Ampliados para el Paro, existían Asambleas Populares en barrios, fábricas y universidades, entendidas estas como formas de poder popular concretas que fueron capaces de sostener el estallido social por más de un mes. No pudieron generar una forma de gestión de la decisión que supere el modelo centralizado del FUT, quedándose atorados en los límites de quienes —por falta de otras opciones— se erigieron como los portavoces de la acción colectiva.

Resumiendo, el Paro Nacional del Pueblo es el clímax de un estallido social que duró, en Ecuador, poco más de un mes, en el año 1982. Estallido que se fortaleció a través de la constatación de que la acción colectiva acorralaba —en un determinado momento— al gobierno y a toda la institucionalidad vigente. Institucionalidad que entre septiembre y octubre de 1982 había perdido casi por completo su legitimidad y se sostenía casi únicamente en el control del Estado y sus aparatos represivos. Se sostenía, además, en el miedo que ciertos sectores sentían ante un posible golpe militar. El articulador de este estallido es el FUT, un movimiento sindical altamente centralizado, que, comandado por una dirigencia de mirada corta, exigía como solución a la crisis, la implementación *de golpe y porrazo* de una especie de Estado de Bienestar o capitalismo de Estado. En el que el aparato estatal, a través de la constante redistribución de la riqueza, profundizaría la constitución de una forma de ciudadanía social. A través de la que se verían minimizados los efectos de la explotación a través de una serie interminable de concesiones y derechos garantizados —obviamente— por el mismo Estado a través de servicios y subsidios.

Paradójicamente, estas exigencias, respaldadas con la movilización de una gran parte de los sectores populares, se hacían precisamente en un momento de crisis económica global, en el que empezaba el ajuste estructural que habría de lograr un efecto totalmente inverso. El Estado se iría reduciendo a sus mínimos y por ello iría abandonando rápidamente su capacidad de redistribución, tanto como la posibilidad de garantizar derechos e incluso iba renunciando poco a poco a ser el árbitro de los conflictos entre las clases. En este marco, la acción colectiva se queda atrapada en las limitaciones políticas de las dirigencias, a pesar de

existir incipientes formas de organización popular que desde las bases lograron ejecutar y sostener el estallido social. Estas nacientes estructuras empezaban además a interactuar mancomunadamente, rebasando los límites impuestos por las dirigencias y con una potencia tal que lograron forzar a la temerosa élite sindical, a tomar audaces decisiones. A la larga, su acción política arrancó al gobierno de Hurtado una pequeña alza de salarios, una estabilidad laboral de dos años y una disimulada baja en el precio de la gasolina.

Referencias

- Achío Tascán, Mayra. 1983. “La reproducción de la fuerza de trabajo en la industrial fabril: La rama de alimentos, bebidas y tabaco, en la provincia de Pichincha”. Tesis de maestría. FLACSO Ecuador.
- Acosta, Alberto. 1982. *Rasgos dominantes del crecimiento ecuatoriano en las últimas décadas en Ecuador: el mito del desarrollo*. Quito: El Conejo / Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
- Agee, Philip. 1975. *Dentro de la compañía; Diario de la CIA*. Quito: Asociación Escuela Politécnica.
- Aguilar, Magdalena. 1986. *Petróleo y desarrollo nacional en Ecuador: petróleo y crisis económica*. Quito: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/45964.pdf>
- Aguirre, Manuel. 1982. “Las Malvinas y la unidad latinoamericana 351”. *Vistazo* 348: 70-71.
- Agurto, Gastón. 1996. “Héroes, Un Mismo Norte. Tres generaciones que en su momento supieron defender nuestra frontera con Ecuador”. *Revista Caretas*.
<https://web.archive.org/web/20130711140525/http://www.caretas.com.pe/1998/1530/heroes/heroes.htm>
- ALAI (Agencia Latinoamericana de Información). 1985. *Forjando la unidad. El movimiento popular en Ecuador*. Montreal: ALAI.
https://www.alainet.org/sites/default/files/forjando_la_unidad.pdf
- Albornoz Peralta, Osvaldo. 1962. “Esbozo histórico del movimiento obrero ecuatoriano en el primer cuarto de este siglo”. *Revista IDTIS* 2.
- 1983. *Breve síntesis, historia del movimiento obrero ecuatoriano*. Quito: Editorial Era Nueva.
- Altimir, Oscar, y Robert Devlin. 1992. “Una reseña de la moratoria de la deuda en América Latina”. En *Moratoria de la Deuda en América Latina, experiencia de los países*, compilado por Oscar Altimir y Robert Devlin, 11-66. Santiago de Chile: CEPAL.
<https://repository.eclac.org/handle/11362/33875>
- Andrade, Raúl. 1982. “Democracia condicional o dictadura perpetua”. *Vistazo* 355: 20-29.
- Amnistía Internacional. 1998. “La muerte de Saúl Cañar Pauta”.
<https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/amr280031998es.pdf>
- Balbi, Carmen Rosa. 1989. *Identidad Clasista en el sindicalismo. Su impacto en las fábricas*. Lima: DESCO / Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
- Barrera Guarderas, Augusto. 2001. *Acción Colectiva y Crisis Política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*. Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD / Abya-Yala / Observatorio Social de América Latina / CLACSO.
- Bayón, Manuel, Gustavo Durán, Alejandra Bonilla, Felipe Hernández, Margarete Araujo, Samanta Andrade, Caridad Santelices y Johanna Villavicencio. 2020. *Guayaquil: Renovación ecológica y vivienda social en las periferias de la ciudad a través de violentos desalojos*. Quito: FLACSO Ecuador.
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/151288-opac>
- Benjamin, Walter. 1991. *Écrits français*. París: Gallimard.

- Bértola, Luis, y José Antonio Ocampo. 2012. *El desarrollo económico de América Latina desde la independencia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Boockhin, Murray. 2019. *La próxima revolución, las asambleas populares y la promesa de democracia directa*. Barcelona: Virus Editorial i Distribuidora.
- Borja, Diego. 1990. “Deuda, crisis y monopolización en la década de los ochenta”. En *La crisis y el desarrollo social en el Ecuador*. Quito: Editorial El Conejo / UNICEF / Desarrollo y Autogestión.
- Burbano de Lara, Felipe. 1985. “El movimiento Sindical en la Coyuntura Política”. *Ecuador Debate* 9: 10-14.
- (1985) 1991. “Movimiento social y clase obrera en el Ecuador”. En *Nueva historia del Ecuador, volumen 11*, editado por Enrique Ayala Mora. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Burgos, Dalton. 1983. *Octubre 1982. El ascenso del movimiento de masas y la encrucijada de la dirección política*. Quito: Centro de Estudios y Difusión Social.
- Bustamante, Marco. 1982. “Un corto circuito en las tarifas eléctricas”. *Vistazo* 348: 82-84.
- Bustos, Guillermo. 1992. “La Identidad ‘Clase Obrera’ a revisión: Una lectura sobre las representaciones del Congreso Obrero de Ambato de 1938”. *Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia* 2.
- (1991) 2003. “La politización del “problema obrero”. Los trabajadores quiteños entre la identidad ‘pueblo’ y la identidad ‘clase’ (1931-34)”. En *Antología Ciudadanía e Identidad*, editado por Simón Pachano. Quito: FLACSO Ecuador.
- Calderón de Castro, Cecilia. 1982. “Frente Radical Alfarista”. *El Comercio*, 22 de octubre. 3.
- Camacho Monje, Daniel. 2015. “Movimientos sociales, algunas definiciones conceptuales”. En *El pensamiento latinoamericano: diálogos en alas: sociedad y sociología*, compilado por Alberto Bialakowsky, Marcelo Arnold Cathalifaud y Paulo Henrique Martins. Buenos Aires: Teseo: CLACSO.
- Carrión, Alejandro. 1981. “El Gobierno y los camaradas”. *Vistazo* 331: 21-24. Guayaquil: ENSA.
- 1982a. “Hay alguien en palacio: Una mano de hierro tras las medidas dramáticas”. *Vistazo* 364: 26-27.
- 1982b. “La lluvia moja a todos”. *El Comercio*, 17 de octubre: 4.
- 1982c. “La OPEP ya es la dueña del mercado”. *Vistazo* 354: 34-36.
- CEDEP (Centro de Educación Popular). 1981. *Viva la Huelga*. Quito: CEDEP.
- CEDOC (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas) y CEDEP. 1983. *Un pueblo en lucha. Las huelgas nacionales 1982-83*. Quito: CEDOC / CEDEP.
- CEDOC-CLAT. 1982. “Manifiesto de la CEDOC”. *El Comercio*, 19 de octubre: 2.
- Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. 2004. “Los últimos 40 años de la economía mundial”. Documento de Trabajo
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/ciem/20170628031838/pdf_641.pdf
- Chiriboga Vega, Manuel. 1982. “Crisis de acumulación, democracia y explosión social”. *Ecuador Debate* 1: 7-36. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/11621>

- Chiriboga Zambrano, Galo y Mardešić Vjekoslav Darlic. 1995. *Conflictos colectivos huelgas y paros patronales 1973-1994*. Quito: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales / Fundación Friedrich Ebert / Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. https://ecuador.fes.de/fileadmin/user_upload/pdf/indice_libros-conflictos-0272.pdf
- CORDES (Corporación de Estudios para el Desarrollo). 1984. *Democracia y crisis. Osvaldo Hurtado. Diálogos con la prensa. 1981-1984*. Quito: CORDES.
- Crespo, Teodoro. 1982. “Emergencia Nacional”. *El Comercio*, 20 de octubre: 5.
- Cuadernos de Nueva. 1980. “Ecuador: Los años ’70”. *Revista Nueva*.
- Cueva, Agustín. 1991. “El Ecuador de 1960 a 1979”. En *Nueva Historia del Ecuador vol. 11. Época Republicana*, 149-180. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Dávila Loor, Jorge. 1995. *El FUT, trayectoria y perspectivas*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Durán Barba, Jaime. 1981. “Estudio introductorio y selección”. En *Pensamiento Popular Ecuatoriano*. Quito: Corporación Editora Nacional / Banco Central del Ecuador.
- Dután, Fausto. 1987. “Nuestros objetivos políticos, nuestra práctica es reivindicacionista”. *Ecuador Debate* 18: 143-150.
- El Comercio*. 1982a. “Termino el paro en Santa Rosa”, 17 de septiembre: 3.
- 1982a1. “Hechos de violencia se deben al fracaso que ha tenido la huelga”, 24 de septiembre: 3.
- 1982a2. “El Paro en provincias”, 29 de septiembre: 13.
- 1982a3. “Bancos han cerrado los préstamos por falta de recursos”, 8 de octubre: 1.
- 1982a5. “FTP tendrá asamblea hoy”, 18 de octubre: 2.
- 1982a6. “Ministro del Trabajo: Medidas duras pero necesarias”, 20 de octubre: 1.
- 1982a7. “Unión General de Trabajadores rechaza las medidas económicas”, 21 de octubre: 8.
- 1982a8. “Protestan por allanamiento a local de una asociación”, 22 :10.
- 1982a9. “En marcha mejoras salariales”, 26 de octubre: 1.
- 1982b. “Solidaridad rechaza diálogo con gobierno”, 17 de septiembre: 12.
- 1982b1. “Impasse en el seno de Junta Monetaria”, 24 de septiembre: 3.
- 1982b2. “40 millones de sucres pierden transportistas”, 30 de septiembre: 6.
- 1982b3. “Deuda privada fue para gastos de consumo”, 8 de octubre: 1.
- 1982b5. “Irrisorio aumento de salarios dicen los trabajadores”, 18 de octubre: 2.
- 1982b6. “Manifestaciones y expectativa en el país”, 20 de octubre: 1-13.
- 1982b7. “País está al borde del barranco: Borja”, 21 de octubre: 9.
- 1982b8. “Enprovit vendió en almacenes rodantes”, 22 de octubre: 10.
- 1982b9. “Nuevo salario y compensaciones”, 27 de octubre: 1.
- 1982c0. “Militares entregarán el poder en Bolivia”, 18 de septiembre: 1.
- 1982c. “La huelga es ilegal”, 21 de septiembre: 1-2.

- 1982c1. “Huelga dejó sin servicios básicos a barrios de Quito”, 24 de septiembre: 2.
- 1982c2. “El Paro en provincias”, 30 de septiembre: 8.
- 1982c3. “1.224 millones de dólares se pedirá refinanciar en exterior”, 8 de octubre: 1.
- 1982c5. “Partidos políticos critican medidas adoptadas por Hurtado”, 18 de octubre: 2.
- 1982c6. “No actuaré por presión”, 20 de octubre: 1.
- 1982c7. “Trabajadores piden al TGC excite al presidente Hurtado”, 21 de octubre: 9.
- 1982c8. “Los mercados cerrados”, 22 de octubre: 10.
- 1982c9. “Hoy se realizará Convención del FUT”, 27 de octubre: 8.
- 1982d. “Conciliación entre Cámara y Ejecutivo”, 21 de septiembre: 1.
- 1982d1-1. “Indignación en el Ecuador por masacre”, 21 de septiembre: 1.
- 1982d1. “Hasta el 12 de octubre esperará el FUT la respuesta del gobierno”, 24 de septiembre: 8.
- 1982d2. “Continúa el paro”, 1 de octubre: 1.
- 1982d3. “Comunicado sobre el refinanciamiento de la Deuda Externa”, 8 de octubre: 3.
- 1982d5. “Sin solución huelga de los trabajadores ocasionales en Consejo Imbabura”, 18 de octubre: 3.
- 1982d6. “Integrada comisión de legisladores”, 20 de octubre: 2.
- 1982d7. “Protesta en el Aeropuerto”, 21 de octubre: 10.
- 1982d8. “La CTE rechaza las medidas económicas y plantea alternativas”, 22 de octubre: 11.
- 1982d9. “Terminó emergencia, bajan precios de la gasolina”, 28 de octubre: 8.
- 1982e. “Manifiesto del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) al país, todo el pueblo a la Huelga Nacional, 22 y 23 de septiembre de 1982”, 21 de septiembre: 2.
- 1982e1. “Excitativa para retornar al orden hizo ministro García”, 24 de septiembre: 8.
- 1982e2. “Molestias por cuarto día de paro”, 1 de octubre: 2.
- 1982e3. “A 3 mil millones asciende alza de sueldos a maestros”, 8 de octubre: 7.
- 1982e5. “Control del transporte”, 18 de octubre: 3.
- 1982e6. “Gobierno dispuesto a aplicar todo el peso de la ley a especuladores”, 20 de octubre: 2.
- 1982e7. “CTE acusa a MPD de acciones vandálicas”, 21 de octubre: 10.
- 1982e8. “Paralización e incidentes en el país”, 22 de octubre: 11.
- 1982e9. “Huelga indefinida es una conspiración contra el país”, en 29 de octubre: 2.
- 1982f. “Graves incidentes en Calceta”, 21 de septiembre: 8.
- 1982f1. “Clamoroso llamado a la paz de Betancur”, 24 de septiembre: 8.
- 1982f2. “Hurtado condecoró a Isabel Robalino”, 1 de octubre: 3.
- 1982f3. “Bomberos hicieron huelga”, 8 de octubre: 8.

- 1982f5. “Los cinco peores y los cinco mejores legisladores”, 18 de octubre: 3.
- 1982f6. “Discurso de Baquerizo terminó en abucheos, piedras y gases”, en 20 de octubre: 3.
- 1982f6-1. “Febres Cordero pide periodo extraordinario”, 20 de octubre: 3.
- 1982f7. “Piden inscribir unidades para transporte urbano”, 21 de octubre: 10.
- 1982f8. “Piden revisión de las medidas”, 22 de octubre: 11.
- 1982f9. “Huelga indefinida es una conspiración contra el país”, 30 de octubre: 1.
- 1982g. “La CEDOC al país, la Huelga Nacional última alternativa de los trabajadores”, 22 de septiembre: 2.
- 1982g1. “Choferes irán a paro el lunes”, 25 de septiembre: 1.
- 1982g2. “Terminó el paro”, 2 de octubre: 1.
- 1982g3. “También el BNF cortará los préstamos”, 9 de octubre: 1.
- 1982g4. “En vigencia las medidas”, 16 de octubre: 1.
- 1982g5. “Signos de beligerancia”, 18 de octubre: 4.
- 1982g6. “Violencia y terrorismo”, 20 de octubre: 4.
- 1982g7. “Sesenta detenidos”, 21 de octubre: 10.
- 1982g8. “Se suspende la huelga del lunes”, 23 de octubre: 1.
- 1982g9. “Aclaran posición de CTE dentro del FUT”, 30 de octubre: 2.
- 1982h. “La Cámara contesta al FUT”, 22 de septiembre: 2.
- 1982h1. “Agitación social y política”, 25 de septiembre: 1.
- 1982h2. “Transporte recupera normalidad”, 3 de octubre: 1.
- 1982h3. “Siles Zuazo: El pueblo se impuso a los militares”, 9 de octubre: 1.
- 1982h4. “Alza de pasajes; choferes al paro”, 16 de octubre: 1.
- 1982h5. “Brotos de intranquilidad en varias ciudades del país”, 18 de octubre: 10.
- 1982h6. “Reserva Monetaria Internacional cayó en 251,5 millones de dólares”, 20 de octubre: 6.
- 1982h7. “Varios policías heridos en incidentes callejeros”, 21 de octubre: 10.
- 1982h8. “Miembro de la embajada de China Popular fue herido”, 23 de octubre: 2.
- 1982h9. “3 estudiantes detenidos y un bus fue incendiado”, 30 de octubre: 2.
- 1982i. “Hurtado asiste hoy a cita de municipalidades”, 22 de septiembre: 2.
- 1982i1. “Choferes inician el paro”, 27 de septiembre: 1.
- 1982i2. “Debe restituirse principio de la alternabilidad legislativa”, 3 de octubre: 1-3.
- 1982i3. “Se reanuda diálogo entre gobierno y trabajadores”, 9 de octubre: 3.
- 1982i4. “Alza de gasolina dejará utilidad, asegura Roldós”, 16 de octubre: 1.
- 1982i5. “Misión del FMI llegará mañana”, 19 de octubre: 1.

- 1982i6. “Índice de precios al consumidor subió en 162 puntos últimamente”, 20 de octubre: 7.
- 1982i7. “Tensa calma ayer en Quito”, 21 de octubre: 10.
- 1982i7-1. “Se graduaron 34 oficiales de Estado Mayor del Ejército”, 21 de octubre: 10.
- 1982i8. “Suspenden huelga nacional”, 23 de octubre: 2.
- 1982i9. “En receso actividad política”, 31 de octubre: 1.
- 1982j. “Atentado causó daños en inmueble”, 22 de septiembre: 2.
- 1982j1. “Se han tomado medidas para la emergencia”, 27 de septiembre: 1.
- 1982j2. “Pueblo luchará porque no se aumenten los pasajes”, 3 de octubre: 2.
- 1982j3. “Egresos sin financiamiento”, 9 de octubre: 3.
- 1982j4. “Manifestaciones en Guayaquil contra últimas medidas económicas”, 16 de octubre: 2.
- 1982j5. “Se busca salida a la crisis”, 19 de octubre: 1.
- 1982j6. “En Guayaquil: Distribuyen víveres a precios oficiales”, 20 de octubre: 10.
- 1982j7. “Misión del Fondo Monetario inició labores en el país”, 21 de octubre: 11.
- 1982j8. “Renunció presidente de la comisión multipartidista”, en 23 de octubre: 3.
- 1982j9. “Suspendida la huelga”, 7 de noviembre: 1.
- 1982k. “Baquerizo se reúne hoy con los jefes de bloque”, 22 de septiembre: 2.
- 1982k1. “Suspensión de clases y ley seca en Guayaquil para encarar el paro”, 27 de septiembre: 2.
- 1982k2. “Abastecimiento y especulación”, 3 de octubre: 4.
- 1982k3. “Piden a la Cámara investigar monto real de deuda pública”, 10 de octubre: 3.
- 1982k4. “Trabajadores rechazan medidas del Gobierno”, 16 de octubre: 2.
- 1982k5. “La protesta fue general ayer en el país”, 19 de octubre: 1.
- 1982k6. “Accidentadas y violentas manifestaciones en Quito”, en *El Comercio* N. 28.416: A-11: miércoles 20 de octubre de 1982.
- 1982k7. “Comunicado de la Universidad Central del Ecuador”, 21 de octubre: 11.
- 1982k8. “Se conformó comisión mediadora de notables”, 23 de octubre: 3.
- 1982l. “Dirigentes del FUT no asistieron a diálogo con Hurtado”, 22 de septiembre: 3.
- 1982l1. “FEUE se opone a la elevación de pasajes”, 27 de septiembre: 2.
- 1982l2. “Choferes continuarán en paro”, 3 de octubre: 13.
- 1982l3. “Ministro de Bienestar Social se reunión con dirigentes sindicales”, 11 de octubre: 3.
- 1982l4. “Optimismo en la banca por medidas”, 16 de octubre: 3.
- 1982l5. “Suspendidas las clases”, 19 de octubre: 1.
- 1982l6. “Tensa calma en provincias”, 20 de octubre: 14.

- 1982l7. “La Izquierda al Pueblo Ecuatoriano”, 21 de octubre: 12.
- 1982l8. “Dos muertos en Ventanas a causa de las manifestaciones”, 23 de octubre: 7.
- 1982m. “Industriales se oponen a la huelga”, 22 de septiembre: 5.
- 1982m1. “Los asuntos de fondo”, 27 de septiembre: 4.
- 1982m2. “García Feraud: Medida de hecho innecesaria”, 4 de octubre: 1-2.
- 1982m3. “Adóptanse medidas para reactivar sectores financiero y productivo”, 12 de octubre: 1.
- 1982m4. “Eliminación de subsidios debía ser parcial y no solucionará la crisis, dicen empresarios”, 16 de octubre: 8.
- 1982m5. “Comisión de Presupuesto no pudo sesionar ayer”, 19 de octubre: 2.
- 1982m6. “Efectos de últimas medidas causan desconcierto en el país”, 20 de octubre: 8.
- 1982m7. “Cámaras de producción en sesión permanente”, 21 de octubre: 12.
- 1982m8. “Estado de emergencia no amedrentó a los trabajadores”, 23 de octubre: 7.
- 1982n. “Solo parcialmente se cumplió la huelga”, 23 de septiembre: 1.
- 1982n1. “Gobierno dispuesto a plantear a la Cámara aumento de sueldos”, 27 de septiembre: 19.
- 1982n2. “Plantean nacionalizar la banca”, 4 de octubre: 6.
- 1982n3. “Dificultades en la negociación de la deuda”, 12 de octubre: 1.
- 1982n4. “Une y Feue inconformes con medidas de gobierno”, 16 de octubre: 8.
- 1982n5. “Plenario puede aprobar proyectos enviados por Hurtado, opina jurista”, 19 de octubre: 2.
- 1982n6. “Se declara emergencia nacional”, 21 de octubre: 1.
- 1982n7. “Las Cámaras de la Producción al país”, 21 de octubre: 14.
- 1982n8. “Gobierno dice que hubo dos muertos durante mítines”, 23 de octubre: 8.
- 1982o. “Misión del Banco Mundial vendrá la próxima semana”, 23 de septiembre: 6.
- 1982o1. “Cámara se negó a interpelar ley”, 28 de septiembre: 1.
- 1982o2. “Enfermos con tifoidea y paludismo, obreros en huelga en Esmeraldas”, 4 de octubre: 14.
- 1982o3. “Sacrificio y comprensión frente a medidas económicas pide gobierno”, 12 de octubre: 2.
- 1982o4. “Hurtado se reunió con Alto Mando”, 16 de octubre: 8.
- 1982o5. “Albán Gómez denunció aparición de terrorismo”, 19 de octubre: 3.
- 1982o6. “Expectativa por huelga de hoy”, 21 de octubre: 1.
- 1982o7. “Los trabajadores proponemos”, 21 de octubre: 14.
- 1982o8. “Suspendidas radios de Quito y Guayaquil”, 23 de octubre: 8.
- 1982p. “Declarado estado de emergencia en Ayacucho”, 23 de septiembre: 15.

- 1982p1. “Con tranquilidad se soporta el paro”, 28 de septiembre: 1.
- 1982p2. “Por 60 días se suspende alza en la electricidad”, 5 de octubre: 1.
- 1982p3. “1’1000.000 estudiantes a clases”, 12 de octubre: 3.
- 1982p4. “Anuncia mítines estudiantiles por la elevación de la gasolina”, 16 de octubre: 14.
- 1982p5. “Preocupa a gobierno reacciones por últimas medidas: E. Albán”, 19 de octubre: 3.
- 1982p6. “Portoviejo: Con presencia del Ejército tornó la calma”, 21 de octubre: 2.
- 1982p7. “Latacunga decretó paro”, 21 de octubre: 14.
- 1982p8. “Un muerto, 20 heridos y 172 detenidos, saldo de huelga”, 23 de octubre: 8.
- 1982q. “Malestar social en Gran Bretaña”, 23 de septiembre: 18.
- 1982q1. “Vehículos de toda clase cubrieron ayer la transportación en Quito”, 28 de septiembre: 2.
- 1982q2. “Vayas: Triunfo no le corresponde a García”, 5 de octubre: 2.
- 1982q3. “Medidas afectarán, pero bajarán el desempleo”, 12 de octubre: 3.
- 1982q4. “Paralizan transporte urbano ante aumento del precio de la gasolina”, 16 de octubre: 14.
- 1982q5. “Comisión multipartidista de la Cámara analizará problema de la economía”, 19 de octubre: 3.
- 1982q6. “Cámaras analizaron decretos económicos”, 21 de octubre: 2.
- 1982q7. “Fiestas de Cuenca podrían fracasar”, 21 de octubre: 14.
- 1982q8. “Jefe de Brigada El Oro pide comprensión a las medidas económicas”, 23 de octubre: 8.
- 1982r. “Hubo excesos de los huelguistas en Quito”, 23 de septiembre: 10.
- 1982r1. “El paro en callejón sin salida: Partes no ceden posiciones”, 29 de septiembre: 1.
- 1982r2. “Mañana habrá mitin del FUT para oponerse al alza de pasajes”, 6 de octubre: 8.
- 1982r3. “Cartera vencida del BNF llega a 2.064 millones”, 12 de octubre: 6.
- 1982r4. “El FUT llama a paro”, 17 de octubre: 1-8.
- 1982r5. “Inusitada violencia callejera produjo malestar ayer en Quito”, 19 de octubre: 7.
- 1982r6. “Me ha tocado tomar decisiones difíciles”, 21 de octubre: 3.
- 1982r7. “Sr. Ministro de Gobierno”, 21 de octubre: 14.
- 1982r8. “Delincuentes se infiltraron en manifestaciones populares”, 23 de octubre: 12.
- 1982s. “Fenoc no plegó a la huelga”, 23 de septiembre: 8.
- 1982s1. “Hurtado previene de repercusiones negativas de la crisis económica”, 29 de septiembre: 1.
- 1982s2. “Sombrió panorama de la justicia en la República”, 6 de octubre: 1.
- 1982s3. “FTP hará marcha en respaldo al IESS”, 12 de octubre: 8.

- 1982s4. “Se tomarán otras medidas si se rechazan proyectos”, 17 de octubre: 1-8.
- 1982s5. “Ausencia de transporte, especulación y disgusto popular en varias ciudades”, 19 de octubre: 7.
- 1982s6. “La huelga nacional”, 21 de octubre: 4.
- 1982s7. “Nuevos incidentes en provincias”, 21 de octubre: 14.
- 1982s8. “Tres muertos, 20 heridos y 200 detenidos, saldo de la violencia”, 24 de octubre: 9.
- 1982t. “‘Fue un fracaso’ dice gobernador del Guayas”, 23 de septiembre: 8.
- 1982t1. “Piden Congreso Extraordinario para encarar problema económico”, 29 de septiembre: 2.
- 1982t2. “El gobierno no admite amenazas”, 6 de octubre: 1.
- 1982t3. “Con impuestos se espera financiar presupuesto”, 13 de octubre: 1.
- 1982t4. “Sentido de las proporciones”, 17 de octubre: 4.
- 1982t5. “Tres heridos en manifestaciones”, 19 de octubre: 7.
- 1982t6. “Lo serio y lo recomendable”, 21 de octubre: 4.
- 1982t7. “La huelga nacional: Protestas y violencia”, 22 de octubre: 1.
- 1982t8. “Nota Mortuoria René Raúl Córdova Romo”, 24 de octubre: 6.
- 1982u. “Cámara declara inocencia de Ministros Vallejo y Alcívar”, 24 de septiembre: 1.
- 1982u1. “Mediación de la cámara abre camino a solución”, 29 de septiembre: 2.
- 1982u2. “Hurtado anuncia en Los Ríos: Medidas dramáticas para salvar economía”, 7 de octubre: 1.
- 1982u3. “Comisiones atenderán el problema económico”, 13 de octubre: 1.
- 1982u4. “90 días tienen los importadores para cancelar tributos”, 17 de octubre: 7.
- 1982u6. “Cada ecuatoriano debe 520 dólares”, 21 de octubre: 7.
- 1982u7. “Afirma García: Activistas propician actos de violencia”, 22 de octubre: 1.
- 1982u8. “Se realizará marcha simbólica a cementerio”, 25 de octubre: 2.
- 1982v. “Gobierno y trabajadores satisfechos”, 24 de septiembre: 1.
- 1982v1. “UNE contra el alza de pasajes”, 29 de septiembre: 3.
- 1982v2. “Hoy reunión con el frente económico”, 7 de octubre: 1.
- 1982v3. “Repercusiones en el dólar”, 13 de octubre: 1.
- 1982v4. “Emisiones del Banco Central se duplicaron”, 17 de octubre: 7.
- 1982v5. “Vehículos del Estado harán el servicio de transporte”, 19 de octubre: 8.
- 1982v6. “Se realizó marcha de una fracción de la Cedoc”, 21 de octubre: 8.
- 1982v7. “Bancos acogieron la refinanciación de parte de deuda externa”, 22 de octubre: 1.
- 1982v8. “Deuda externa pública subió en 132% de 1978 a este año”, 25 de octubre: 6.
- 1982w. “FUT protestó por la violencia policial”, 24 de septiembre: 2.

- 1982w1. “Proyecto para congelar tarifas del transporte presentan en la Cámara”, 29 de septiembre: 3.
- 1982w2. “79.500 millones en proforma”, 7 de octubre: 1.
- 1982w3. “Las medidas aumentarán el circulante”, 13 de octubre: 1.
- 1982w4. “Trabajadores de la construcción se declararon en huelga”, 17 de octubre: 14.
- 1982w5. “García Feraud negó que régimen intente autogolpe”, 19 de octubre: 8.
- 1982w6. “Los trabajadores de ‘La Internacional’ acatan disciplinariamente la resolución de paro nacional decretado por el FUT”, 21 de octubre: 8.
- 1982w7. “Nueve heridos en Ibarra”, 22 de octubre: 2.
- 1982w8. “Vandalismo se desató en Santo Domingo durante el paro”, 26 de octubre: 6.
- 1982x. “Buscarán incremento a compensación salarial”, 24 de septiembre: 2.
- 1982x1. “El transporte público”, 29 de septiembre: 4.
- 1982x2. “La Cámara aprobó un decreto que beneficia al magisterio nacional”, 7 de octubre: 2.
- 1982x3. “Inminente la eliminación de los subsidios”, 14 de octubre: 1.
- 1982x4. “Semana crítica para Gobierno”, 18 de octubre: 1.
- 1982x5. “García Feraud negó que régimen intente autogolpe”, 19 de octubre: 6.
- 1982x6. “Intereses generales: Sr. Ministro de Gobierno”, 21 de octubre: 14.
- 1982x7. “Falleció un joven en San Blas; desmienten deceso de atropellado”, 22 de octubre: 2.
- 1982x8. “Asalariados y campesinos dicen rechazan las medidas”, en 26 de octubre: 8.
- 1982y. “El pueblo rechazó a los irresponsables”, 24 de septiembre: 2.
- 1982y1. “Furgoneta fue incendiada en la Av. 10 de Agosto”, 29 de septiembre: 8.
- 1982y2. “Frasas del mes”, 7 de octubre: 3.
- 1982y3. “Erradas políticas son causantes de la actual situación”, 14 de octubre: 1.
- 1982y4. “Comisión conoce hoy los proyectos de ley”, 18 de octubre: 1.
- 1982y5. “Se decretará emergencia si sigue agitación”, 20 de octubre: 1-12.
- 1982y6. “Se posterga homenaje a Juan Pablo II”, 21 de octubre: 8.
- 1982y7. “Gobierno debe derogar medidas”, 22 de octubre: 2.
- 1982y8. “Denuncian ataque a central cefepista”, 29 de octubre: 3.
- 1982z. “No hubo transporte”, 24 de septiembre: 2.
- 1982z1. “Denuncia agresión de transportistas a miembros del FUT”, 29 de septiembre: 8.
- 1982z2. “Actos de violencia se registraron en Esmeraldas”, 7 de octubre: 9.
- 1982z4. “Hay que precisar si el plenario legislativo puede crear impuestos”, 18 de octubre: 2.
- 1982z5. “Incremento es para pagar deuda”, 20 de octubre: 1.

- 1982z6. “Cardenal llama a la reflexión”, 21 de octubre: 1-11.
 - 1982z7. “La huelga paralizó a la capital ayer”, 22 de octubre: 10.
 - 1982z9. “Que se le reconozca como partido”, 25 de octubre: 2.
 - 1982a4. “León Febres Cordero rechaza la creación de nuevos impuestos”, 14 de octubre: 2.
 - 1982a4. “Resistencia en la Cámara a proyectos del Ejecutivo”, 14 de octubre: 3.
 - 1982b4. “Alzas de gasolina y trigo rigen desde hoy”, 15 de octubre: 1-2.
 - 1982c4. “Intocado el problema del sector externo”, 15 de octubre: 1.
 - 1982d4. “Todos debemos participar en la solución del problema económica que vive el país”, 15 de octubre: 1.
 - 1982e4. “Se formó Unión General de Trabajadores del Ecuador”, 15 de octubre: 2.
 - 1982f4. “El pan se venderá al peso”, 16 de octubre: 1.
 - 1982z3. “6.200 millones producirán nuevos tributos”, 14 de octubre: 1.
 - 1982z4-1. “Entrenador Zarlenga murió en incidente entre trabajadores”, 29 de septiembre: 14.
- El País*. 1984. “Reagan no consigue convencer a los líderes chinos de que se integren en una ‘cooperación estratégica’ frente a la URSS”, 29 de abril.
https://elpais.com/diario/1984/04/30/internacional/452124005_850215.html
- En Marcha. 2011. “Formación de la FESE”. <http://pcmlle.org/EM/spip.php?article4796>
- Escobar, Santiago. 1982. “Entre la distensión y el holocausto”. *Revista Nueva* 93: 60-64.
- Falconí, Juan, Patricio León y Salvador Marconi. 1990. “Ecuador de los años ochenta: entre el ajuste y la crisis”. En *La crisis y el desarrollo social en el Ecuador*. Quito: Editorial El Conejo / UNICEF / Desarrollo y Autogestión.
- Farrel, Gilda. 1982. *Estructura del mercado de trabajo y el movimiento sindical*. Quito: IIE-ILDIS.
- Febres Cordero, León. 1982. “León Febres Cordero al país”. *El Comercio*, 19 de octubre: 2.
- FENOC (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas). 1982. “La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas —FENOC— al campesinado, al pueblo y al gobierno ecuatoriano”. *El Comercio*, 20 de octubre: 2.
- FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador). 2018. “Historia”.
<https://feuenacional2017.wixsite.com/feue/historia>
- Fernández, Iván. 1982. “Estado y clases sociales en la década del setenta”. En *Ecuador: el mito del desarrollo*. Quito: Editorial El Conejo / ILDIS.
- Flores Aguirre, Xavier. 2016. “Las transiciones a la democracia en Ecuador y en Myanmar”. *Xaflag*, 19 de mayo. <https://xaflag.blogspot.com/2016/05/las-transiciones-la-democracia-en.html>
- Foucault, Michel. (1976) 1991. *Las Redes del Poder*. Buenos Aires: Editorial Almagesto.
<https://ezequielsingman.files.wordpress.com/2016/08/las-redes-del-poder-michel-foucault.pdf>

- FUT Pichincha. 1982. "Balance de la Huelga Nacional del 9 de diciembre de 1981". En *El FUT, trayectoria y perspectivas*, editado por Jorge Dávila Loor. Quito: Centro de Desarrollo Social.
- García Linera, Álvaro, Raúl Prada, Luis Tapia y Oscar Vega. 2010. *El Estado. Campo de lucha*. La Paz: CLACSO / Muela El Diablo / Comuna.
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100906123706/ElEstado.pdf>
- Gilly, Adolfo. 2006. *Historia a contrapelo, una constelación*. Ciudad de México: Ediciones Era.
- González Calleja, Eduardo. 2012. "El proceso de la acción colectiva según Charles Tilly". *Ecuador Debate* 87.
- González, Gustavo. 1982. "OEA: 'El último aniversario'". *Revista Nueva* 87: 31-33.
- Gómez, Marcelo. 2009. "La acción colectiva sindical y la recomposición de la respuesta política estatal en la Argentina 2003-2007". En *Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales vol. II*, compilado por Julio César Neffa, Enrique De la Garza Toledo y Leticia Muñoz Terra, 162-205. Buenos Aires: CLACSO.
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160222041449/09.pdf>
- Graebner Norman, Richard Dean Burns y Joseph Siracusa. 2008. *Reagan, Bush, Gorbachev: Revisiting the End of the Cold War*. Connecticut: Greenwood.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán*. Madrid: Ediciones Akal.
- 2022. *La Hegemonía de los excluidos. Materiales para una vida auténtica*. Barcelona: Editorial Biblioteca Nueva.
- Herrar, Gustavo, José Augusto Aguirre, Alfonso Vergara Paz y Raúl Ron Sevilla. 1982. "Los Transportadores Urbanos del país a la ciudadanía". *El Comercio* 20 de octubre: 10.
- Hobsbawm, Eric. 1979. *Trabajadores, Estudios de historia de la clase obrera*. Barcelona: Editorial Crítica / Grijalbo.
- 1987. *El mundo del trabajo, estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera*. Barcelona: Editorial Crítica / Grijalbo.
- Ibáñez Rojo, Enrique. 1991. "Movimientos Sociales y Democracia. Notas sobre la Crisis del Sindicalismo Boliviano". *Revista América Latina Hoy* 1: 39-45.
<https://doi.org/10.14201/alh.2072>
- Ibarra, Hernán. 1983. *El movimiento sindical ecuatoriano en el período 1972-1977. Memorias del Segundo Encuentro de Historia y Realidad Económica y Social del Ecuador*. Quito: ILDIS / Universidad de Cuenca / Banco Central del Ecuador.
- 1983. "Fuerza y debilidad en las Huelgas Nacionales". *Revista Nueva* 94.
- 1984. *La formación del movimiento popular, 1925-1936*. Quito: CEDIME.
- 1989. *La historiografía del movimiento obrero ecuatoriano: un balance en Trabajadores y sindicatos en América Latina. Reflexiones sobre su historia*. Montevideo: CLACSO / CLAEH.
- 1992. *Indios y cholos: Orígenes de la clase trabajadora ecuatoriana*. Quito: Editorial El Conejo.

- 2007. “Los estudios sobre la historia de la clase trabajadora en el Ecuador”. *Revista Ecuador Debate* 72: 61-80.
- Izquierda Democrática. 1982. “La Izquierda Democrática al Pueblo Ecuatoriano”. *El Comercio* 20 de octubre: 11.
- Jaramillo, Santiago. 1982. “La Trampa del Subdesarrollo”. *Revista Nueva* 86: 32-33.
- 1982b. “Crónica de una devaluación anunciada”. *Revista Nueva* 87: 12-17.
- 1982c. “La encrucijada del modelo”. *Revista Nueva* 88: 12-17.
- Jelin, Elizabeth. 1974, *La Protesta Obrera*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Jervis, Santiago. 1982. “Reducción del gasto”. *El Comercio* 20 de octubre: 4.
- Khalife, Eduardo. 1982. “La última derrota de Franco”. *Revista Nueva* 92: 56-58. Quito: Editorial Voluntad.
- Kingman Garcés, Eduardo. 2006. “Apuntes para una historia del gremio de albañiles de Quito. Ciudad y cultura popular”. *Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia*, 24 (2): 221-236.
- Kingman Garcés, Eduardo, y Blanca Muratorio. 2014. *Los trajines callejeros: memoria y vida cotidiana: Quito, siglos XIX-XX*. Quito: FLACSO Ecuador / Instituto Metropolitano de Patrimonio / Fundación Museos de la Ciudad.
- La Nación*. 2014. “Sin la ayuda de Chile, hubiésemos perdido la guerra en Malvinas, admitió un ex oficial inglés”, 7 de julio <https://www.lanacion.com.ar/politica/sin-la-ayuda-de-chile-hubiesemos-perdido-la-guerra-en-malvinas-admitio-un-ex-oficial-ingles-nid1707875/>
- Leiva, Francisco. 1982. “El caso del Congreso”. *El Comercio*, 7 de octubre: 5.
- León, Jorge, y Juan Pablo Pérez Sáinz. 1986. “Crisis y movimiento sindical en Ecuador: Las huelgas nacionales del FUT (1981-1983)”. En *Movimientos Sociales en Ecuador*. Quito: CLACSO / CAAP / CEDIME / IEE / CEPLAES / CIUDAD / ILDIS.
- Levi, James. 1982. “Los artesanos de Quito y la estructura social: 1890-1920”. *Revista Ciencias Sociales* 14.
- Lesser, Missy. 1983. “Pobreza urbana y relaciones de dominación en Quito”. Tesis de maestría, FLACSO Ecuador.
- Linares, Antonio. 1981. “El Desafío Polaco”. *Revista Nueva* 77: 59-61.
- Llambías, Margarita. 1983. “El Movimiento Sindical en el Ecuador, una etapa de su conformación (Las huelgas generales de 1971 y 1975)”. Tesis de maestría, FLACSO Ecuador.
- Llobet Tobolara, Cayetano. 1984. “Apuntes para una historia del movimiento obrero en Bolivia”. En *Historia del movimiento obrero en América Latina*, coordinado por Pablo González Casanova. Ciudad de México: Siglo XXI.
- López Diets, Ana Paola. 2016. “El mundo del trabajo entre el disciplinamiento y la resistencia, Chile, 1973-1981”. *Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia* 44. 75: 101. <https://doi.org/10.29078/rp.v0i44.620>
- López, Alberto. 2020. “Dolores Cacuango, la rebelde líder indígena ecuatoriana que luchó por la educación y la tierra”. *El País*, 26 de octubre. <https://elpais.com/sociedad/2020-10->

- 26/dolores-cacuango-la-rebelde-lider-indigena-ecuatoriana-que-lucho-por-la-educacion-y-la-tierra.html
- Loyola, Joaquín. 1982a. “En las alturas del poder”. *Revista Nueva* 84: 10-11.
- 1982b. “El fin de la tregua”. *Revista Nueva* 85: 6-11.
- 1982c. “Congreso y mensaje presidencial: Las ‘comezones’ del penúltimo año”. *Revista Nueva* 89: 6-9.
- 1982d “Quemando tiempo”. *Revista Nueva* 91: 6-11.
- Loyola, Joaquín, y Santiago Jaramillo. 1982. “La crisis toca fondo”. *Revista Nueva* 90: 6-20.
- Lucero, Carlos. 2014. “Margaret Thatcher agradeció los servicios que durante la guerra prestó Pinochet a Inglaterra”. *El Departamental*, 4 de abril de 2019.
[https://eldepartamental.com/contenido/1313/margaret-thatcher-agradecio-los-servicios-que-durante-la-guerra-presto-pinochet-](https://eldepartamental.com/contenido/1313/margaret-thatcher-agradecio-los-servicios-que-durante-la-guerra-presto-pinochet)
- Luna Tamayo, Milton. 1984. “Orígenes del movimiento obrero: El Centro Obrero Católico: 1906-1938”. Tesis de licenciatura, Universidad Católica del Ecuador.
- 1989. *Historia y conciencia popular, el artesanado en Quito*. Quito: Corporación Editora Nacional / Taller de Estudios Históricos.
- Luxemburgo, Rosa. (1906) 1970. *Huelga de masas, partido y sindicatos*. Córdoba: Ediciones Pasado y Presente.
- Mandel, Ernest. 1974. *Control obrero, consejos obreros, autogestión*. Ciudad de México: Ediciones Era.
- Marshall, Thomas Humphrey. 1997. “Ciudadanía y Clase Social”. *REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 79: 297-346.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=760109>
- Marx, Karl. 2008. *Contribución a la Crítica de la Economía Política*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Melucci, Alberto. 1994. “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”. *Revista Zona Abierta* 69: 153-180.
- Mendoza, Marco. 1982. “¡Una jornada periodística!”. *El Comercio*, 23 de octubre: 8.
- Middleton, Alan. 1982. “Division and Cohesion in the working class: artisans and wage labourers in Ecuador”. *Journal of Latin American Studies* 14 (1).
- Milk, Richard. 1997. *Movimiento Obrero Ecuatoriano: el desafío de la integración*. Quito: Abya-Yala.
- Ministerio de Defensa del Perú. 2016. “Operaciones del Falso Paquisha”.
<https://web.archive.org/web/20160306200426/https://www.mindef.gob.pe/vercontenido.php?archivo=menu%2Fhistoricos%2Fefem-nacional%2Fefem-enero3.htm&retorno=si>
- Miño Aviles, María Isabel. 2013. “Desarticulación del movimiento obrero: caso ruptura de la CEDOC”. Tesis de maestría, FLACSO Ecuador.
- Morawski, Jan. 1982. “La resistencia en Polonia”. *El País*, 8 de septiembre.
https://elpais.com/diario/1982/09/09/internacional/400370403_850215.html

- Muñoz Vicuña, Elías, y Leonidas Vicuña Izquierdo. 1980. *Historia del movimiento obrero del Ecuador*. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
- 1984. “Historia del Movimiento Obrero del Ecuador”. En *Historia del Movimiento Obrero en América Latina*, vol. 3, coordinado por Pablo González Casanova. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Negreiros, Janaina. 2009. “La FENACLE y la organización de los asalariados rurales en la provincia del Guayas (Debate agrario)”. *Ecuador Debate* 78: 125-140.
- Neira, Mariana. 1982. “Descontento social en marco económico crítico”. *El Comercio*, 27 de septiembre: 1-9.
- Núñez, Jorge. 1981. “Los partidos políticos en el Ecuador: Movimiento Popular Democrático (MPD)”. *Revista Nueva* 77: 50- 53.
- Offe, Clauss. y Helmut Wiesenthal. 1992. “Dos lógicas de acción colectiva”. En *La gestión política*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Oleas Montalvo. 2017. “Ecuador 1980-1990: crisis, ajuste y cambio de régimen de desarrollo”. *América Latina en la Historia Económica* 24 (1): 210-242.
<http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/724>
- OMC (Organización Mundial de Comercio). 2002. “Evolución del comercio mundial”.
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep02_chp2_s.pdf
- Oquendo Cepeda, Carlos. 1982. “Hay que decirlo”. *El Comercio*, 20 de octubre: 10.
- Ortiz Crespo, Gonzalo. 1982. “La ‘bolivianización’”. *Diario Hoy*, 27 de octubre.
- Ortiz, Santiago, y Pablo Meriguet. 2019. “Cronología Movimiento Obrero 1963-1983”.
<https://movimientosocialesecuador.com/wp-content/uploads/2019/11/1-Qu%C3%A9-paso-del-1969-al-1983.pdf>
- Oscar, Altimir, y Robert Devlin. 1992. *Moratoria en la deuda en América Latina. Experiencias de los países*. Santiago de Chile: CEPAL.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/33794/S9200542_es.pdf?sequence=1
- Osorio Reyes, Víctor. 2019. “La marcha del hambre de 1982, un olvidado hito clave de la resistencia a la tiranía”. *Crónica Digital*, 6 de septiembre <https://rebellion.org/la-marcha-del-hambre-de-1982-un-olvidado-hito-clave-de-la-resistencia-a-la-tirania/>
- Oviedo, Jorge. 1991. “El Movimiento Obrero Ecuatoriano entre 1960 y 1985”. En *Nueva Historia del Ecuador volumen 11*, editado por Enrique Ayala Mora. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Padilla Guerra, Luis. 1982. “Olor de muerte en la embajada israelí”. *Vistazo* 366: 98-100.
- Páez, Alexei. 1986. *El Anarquismo en el Ecuador*. Quito: INFOC / Corporación Editora Nacional.
- 2017. *Los orígenes de la izquierda ecuatoriana*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Paz y Miño, Juan. 1988. *La CEDOC en la historia del movimiento obrero ecuatoriano*. Quito: CONUEP-IDIS.
- Pérez Sáinz, Juan Pablo. 1985. *Clase Obrera y Democracia en Ecuador*. Quito: Editorial El Conejo.

- 1987. “Crisis, conflictividad y coyunturas sociales Ecuador (1981-1985)”. *Ecuador Debate* 13: 47-73. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/10034>
- 1986. *Entre la fábrica y la ciudad*. Quito: Editorial El Conejo.
- Pineo, Ronn. 1988. “Reinterpreting labor militancy: The collapse of the cacao economy and the general strike of 1922 in Guayaquil, Ecuador”. *Hispanic American Historical Review* 68 (4).
- Plaff, William. 1982. “Argentina recibe una lección inglesa”. *Vistazo* 356: 34-36.
- Plan V. 2015. “Roldós y los Derechos Humanos: La Carta de Conducta”, 25 de mayo de 2015. <https://www.planv.com.ec/historias/politica/roldos-y-derechos-humanos-la-carta-conducta>
- Ponce Iturriaga, Edgar. 1985. “CTE: Participación de la CTE en la vida nacional”. En *Forjando la Unidad, el movimiento popular en Ecuador*, 28-30. Montreal: ALAI.
- Quishpe, Andrés. 2019. “Los maestros, la UNE y su lucha frente al poder”. *Plan V*, 7 de mayo. <https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/maestros-la-une-y-su-lucha-frente-al-poder>
- Ramírez, Ximena, y María Arboleda. 1982. “La confabulación de las ‘buenas costumbres’”. *Revista Nueva* 86: 36-41.
- Redrován Zúñiga, Efraín. 1983. “La formación del Frente Unitario de los Trabajadores (1960-1975) (El papel de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres – CEOSL)”. Tesis de maestría, FLACSO Ecuador.
- Revista Nueva*. 1981. “No a la agresión”, 74: 6.
- 1982. “El desafío polaco”, 83: 58-65.
- 1981. “El ‘paquetazo’ económico y la unidad nacional”, 75: 22-25.
- 1982. “Un año después: Los misterios de la muerte de Roldós ¿Accidente o atentado?”, 86: 8-16.
- 1982. “La crisis del modelo económico”, 86: 20-31.
- 1982. “Conferencia de la OPEP: El mejor ataque, una buena defensa”, 87: 11.
- 1982. “El impacto de la devaluación”, 88: 42.
- 1982. “Informe parlamentario: Muerte de Roldós, el misterio continúa”, 89: 10-11.
- 1982. “Nuevos líderes sindicales ¡La huelga va!””, 89: 12-17.
- 1982. “Nacionalización de la banca mexicana, López Portillo contra los ‘Miami Boys’”, 90: 69-70.
- 1982. “Nos allanaron”, 92 de noviembre: 6-8.
- 1982a. “José Chávez (FUT) El Gobierno desestabiliza la democracia”, 92: 22-25.
- 1982. “Un año de ascenso”, 93: 29-32.
- Rodas, Germán. 2000. *La Izquierda Ecuatoriana en el siglo 20*. Quito: Abya-Yala. https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=abya_yala

- Robalino Bolle, Isabel. 1992. *El Sindicalismo en el Ecuador*. Quito: INEDES / CONUEP / PUCE.
- Roddick, Jacqueline. 1990. *El negocio de la deuda externa. América Latina y los bancos internacionales*. Bogotá: El Áncora Editores.
- Rodríguez León, Tomás. 2017. “Los estudiantes del 29 de mayo de 1969 en Guayaquil”. *La Línea de Fuego*. <https://lalineadefuego.info/2017/06/02/los-estudiantes-del-29-de-mayo-de-1969-en-guayaquil-por-tomas-rodriguez-leon/>
- Rosado Duque, Juan Bernardo. 2005. *El sindicalismo colombiano: actor social en medio de la guerra, y el temor a la libertad en Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Scodeller, Gabriela. 2020. “Una aproximación al universo ideológico de la Central Latinoamericana de Trabajadores a través de su proyecto de formación política (1954-1977)”. *Izquierdas* 49: 493-515.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7706986.pdf>
- Scott, Joan. 1991. “Experiencia”. *La Ventana* 2 (13): 1-32.
<https://doi.org/10.32870/lv.v2i13.551>
- (1986) 2008. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En *Género e historia*. Ciudad de México: FCE / UNAM.
- Soriano, Mauricio, Mario Alberto Salazar y César Anchundia. 1981. “País en pie de guerra”. *Vistazo* 323: 4-7.
- Sindicato Único de Choferes de Pichincha. 1982. “A la ciudadanía”. *El Comercio*, 17 de octubre: 8.
- Sulmont, Denis. 2011. *El sujeto en el corazón de la vida social, Introducción a la sociología de Alain Touraine*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Thompson, Edward. 1979. *Tradición, revuelta, consciencia de clase, Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Barcelona: Grijalbo.
- (1963) 2012. *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Madrid: Capitán Swing.
- Touraine, Alain. 1987. *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*. París: PRELAC.
https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofia_politica/Actores_sociales-Alain_Touraine.pdf
- 1994. *Crítica de la Modernidad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Vacas Gómez, Humberto. “Indisciplina generaliza”. *El Comercio*, 18 de septiembre: 4.
- Valle Marega, Magali del. 2015. “Trabajadores, sindicatos y estado en Ecuador: reconfiguraciones de la relación estado-sindicalismo petrolero público”. Tesis de maestría, FLACSO Ecuador. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/8941>
- Velasco, Marco Vinicio. 1980. “El proletariado industrial en la Provincia de Pichincha, condiciones objetivas, organización sindical y conflicto (Periodo 1972-1978)”. Tesis de maestría. Quito: FLACSO Ecuador.
- 1987. “El movimiento obrero en el Ecuador: Propuestas para el análisis de sus dimensiones objetivas y sus determinaciones subjetivas”. *Ecuador Debate* 13: 25-45.

- Velarde Rosso, Jorge. 2017. "Breve revisión a la historia de la Unión Soviética en el centenario de la Revolución Rusa". *Revista Ciencia y Cultura* 21 (38): 85-120. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232017000100005
- Vistazo. 1981. "Jamás retrocederemos", 323: 19-20.
- 1981. "Los grandes males polacos", 335: 11.
- 1981. "Costos de guerra", 324: 19.
- 1981. "Un deslucido cero a cero", 329: 5.
- 1981. "La caída del 'hombre fuerte' del Gobierno", 337: 14-17.
- 1981. "Crisis nacional y decisiones", 341: 5.
- 1981. "Guerrilla Urbana", 341: 6-7.
- 1981. "Roldós-Bucaram: Un signo trágico", 343: 8-9.
- 1982. "Polonia: La nación crucificada", 344: 37.
- 1982. "Imagen Nacional: ¿Es urgente el consenso?", 345: 6.
- 1982. "Imagen Nacional: Los límites del 'pacifismo' y la 'prudencia'", 346: 6.
- 1982. "Osvaldo Hurtado: De investigador a presidente", 345: 13-17.
- 1982. "Imagen Nacional: El abuso eléctrico", 348: 8.
- 1982. "Jugando con la economía", 352: 6.
- 1982. "Otra devaluación: 'Muy poco, muy tarde'", 352: 6-7.
- 1982. "Golpe mortal para un enfermo moribundo", 356: 10-11.
- 1982. "Imagen Nacional: Las finanzas públicas", 360: 8.
- 1982. "Imagen Nacional: Se quebró el pacto", 360: 10.
- 1982. "Editorial: Gobierno de Parcelas" en *Revista Vistazo* #361, 17 de septiembre de 1982: 5. Guayaquil: ENSA S.A.
- 1982. "Los nuevos ministros", 361: 7.
- 1982. "Done manda capitán no manda marinero", 321: 9.
- 1982. "EL IEES y el FUT", 361: 9.
- 1982. "Huelga del FUT", 362: 9.
- 1982. "Absurda Reincidencia", 364: 5.
- 1982. "Octubre Negro", 364: 12
- 1982. "Misiles MX", 367: 24.
- Vogelmann, Verónica. 2012. "Trabajadores y Reconversión en la Industria Frigorífica. Las experiencias gremiales de los trabajadores de la carne del Gran Rosario", Tesis doctoral, Universidad Nacional de Rosario.
- Vera, Dan. 2013. "Chone: Paro del 15 de marzo de 1982". *El Diario*, 15 de marzo. <https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/256411-chone-paro-del-15-de-marzo-de-1982/>

- Ycaza, Patricio. 1981. “La ‘toma’ de la embajada en Cuba”. *Revista Nueva* 75: 4.
- 1983. *Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano, de su génesis al frente popular*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- 1985. “Respuesta a Felipe Burbano”. *Ecuador Debate* 9: 14-16.
- 1988. *Síntesis Histórica del Movimiento Obrero Ecuatoriano*. Quito: CEDIME.
- 1991. *Historia del Movimiento Obrero, Segunda Parte*. Quito: CIUDAD / CEDIME.
- Yépez, Mauricio. 1992. “La moratoria y las relaciones con los agentes económicos nacionales en”. *Moratoria de la Deuda en América Latina, experiencia de los países*, coordinado por Oscar Altimir y Robert Devlin compiladores, 219-254. Santiago de Chile: CEPAL. <https://repository.eclac.org/handle/11362/33875>
- Wikipedia. 2024. “Elecciones presidenciales de Ecuador de 1978-1979”. Acceso el 18 de marzo de 2024. https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_1978-1979